



HISTORIA
DEL
PARTIDO
COMUNISTA
DE
ESPAÑA

ALBERTO GARCÍA

Historia del Partido Comunista de España

Redactada por una comisión del Comité Central del Partido, formada por la camarada Dolores Ibárruri, que la ha presidido, y por los camaradas Manuel Azcárate, Luis Balaguer, Antonio Cerdón, Irene Falcón y José Sandoval.

Éditions Sociales

París 1960

Historia del Partido Comunista de España
Éditions Sociales | 95-97 Bd. de Sebastopol
París

Il a été tiré de cet ouvrage cinq-cents exemplaires hors-commerce, sur papier alfa mousse des papeteries navarre numérotés de un a cinq-cents.

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous les pays.
Copyright 1960 by Editions Sociales, Paris

Nota: La maquetación actual ha modificado la numeración de las páginas originales, si bien ésta se indica a lo largo del texto por los números consecutivos que van entre corchetes.

Índice

Preliminares,

Capítulo I. El nacimiento del Partido Comunista y su lucha contra la monarquía

Cómo nació el Partido Comunista
Por el Frente Único de la clase obrera
Contra la dictadura primorriverista
Por la unidad ideológica
En vísperas de la crisis revolucionaria
La etapa del gobierno Berenguer
La caída de la Monarquía

Capítulo II. La República

La República de 1931 y sus gobernantes
En defensa de la democracia
La agudización de la crisis
El gran viraje
Frente al peligro fascista
El movimiento de Asturias
El Bloque Popular Antifascista
Por la unidad del proletariado
El VII Congreso de la Internacional Comunista
Hacia la victoria electoral
El desarrollo del Partido
Los Gobiernos republicanos de izquierda
La lucha por evitar la guerra civil

Capítulo III. La guerra nacional revolucionaria

- La victoria inicial del pueblo
- La guerra cambia de carácter
- Entrada del Partido Comunista en el Gobierno de Frente Popular. El 5º Regimiento
- El «milagro» de Madrid
- Una política de guerra
- Forjando la resistencia
- La República Democrática de nuevo tipo
- Período de duras pruebas
- Las consecuencias de Munich en España
- La traición

Capítulo IV. La dictadura franquista

- El terror
- El repliegue
- La política de Unión Nacional
- Una gran esperanza
- Progresos unitarios
- Cambio de táctica
- Nueva etapa
- Un pacto de guerra
- El V Congreso
- Una victoria de la clase obrera
- La política de Reconciliación Nacional
- El XX Congreso del PCUS y la Conferencia de Moscú
- El pleno de agosto
- La Jornada de Reconciliación Nacional
- La Huelga Nacional Pacífica
- El VI Congreso
- La historia continúa

LA presente «Historia del Partido Comunista de España» es el resultado de la investigación y la redacción colectivas de una comisión del Comité Central, presidida por la camarada Dolores Ibárruri. En el estado en que se ofrece al lector debe considerarse como una primera versión, resumida, del trabajo efectuado por la comisión, que deberá ser completado y perfeccionado con nuevas investigaciones y con la ayuda de las observaciones críticas y las sugerencias que hagan los lectores.

Pero ya en el estado en que aquí aparece, el trabajo de la comisión representa una notable aportación al análisis marxista de la trayectoria seguida por el Partido Comunista de España desde su fundación, en abril de 1920, hasta su VI Congreso, en enero de 1960. A lo largo de estos cuarenta años el Partido ha luchado en las condiciones más diversas: bajo la precaria legalidad de que disponían las organizaciones obreras en los últimos años de la monarquía constitucional; reducido a la clandestinidad y perseguido durante los siete años de la dictadura militar de Primo de Rivera; con alternativas de legalidad y persecución en los cinco primeros años de la segunda República, para pasar a ser en sus tres últimos, en los años de la guerra civil, partido de gobierno y columna clave de la resistencia republicana; clandestino de nuevo, ferozmente acosado por un poder terrorista que hizo del exterminio de los comunistas la razón esencial de su existencia, durante los veinte años que dura ya la dictadura fascista de Franco. En resumen, más de treinta, de los cuarenta años que abarca hasta hoy la existencia del Partido, han sido años de duras persecuciones cuando no de terror sin paliativos. Pero también el Partido ha pasado por la experiencia del poder a través de su participación en los Gobiernos de la República de nuevo tipo creada por la revolución popular en el período de 1936-39.

Monarquía, República, revolución popular, guerra civil, contrarrevolución fascista, terror, repliegue, comienzo de un [6] nuevo auge... Paso a paso, a través de situaciones tan diversas, de avances y retrocesos, de éxitos y de errores, de victorias y derrotas, se ha ido forjando

el partido marxista-leninista del proletariado español, pasando de las primeras débiles organizaciones, que en la práctica eran grupos de agitadores con muy poca posibilidad de dirección de las masas, a ser lo que hoy es: el partido político nacional, maduro, firme en los principios y flexible en la táctica, con gran audiencia no sólo en la clase obrera industrial y agrícola y en las masas de campesinos trabajadores –de las que es, indiscutiblemente, su partido– sino en amplios sectores de las capas medias, en la intelectualidad.

La presente obra analiza paso a paso cómo ha tenido lugar ese proceso, cuáles han sido sus causas objetivas, enraizadas en la realidad española contemporánea, y cuáles sus aspectos subjetivos, fruto de la aplicación, cada vez más creadora, del marxismo-leninismo a los problemas de España. El estudio de esta multifacética experiencia ayudará a los militantes y simpatizantes del Partido, y en particular a las fuerzas jóvenes que en los últimos tiempos afluyen en buen número a nuestras filas, a comprender más profundamente la teoría y la política del Partido y a prepararse para aplicarlas con acierto en las nuevas situaciones que nos esperan.

Leyendo estas páginas, los amigos del Partido Comunista, sus aliados, y también aquellos de nuestros enemigos que no estén ofuscados por el fanatismo anticomunista, podrán conocernos mejor, según nuestra historia verdadera, nuestros fines y métodos auténticos, y no según los que durante veinte años nos ha atribuido una propaganda edificada sobre la calumnia y amparada en el monopolio de los medios de información.

De todos los lectores, y en particular de los militantes que hayan participado directamente en episodios y actividades importantes del Partido, así como de los especialistas en ciencias sociales, solicitamos su opinión crítica, sus sugerencias y ayuda, para colmar las lagunas y deficiencias que puedan existir en esta primera versión y preparar la futura, más completa y lograda.

Preliminares

La fundación del Partido Comunista de España ha sido una necesidad histórica de la sociedad española y, en primer término, del movimiento obrero, al alcanzar un determinado grado de su desarrollo.

En este breve análisis del proceso que ha llevado a la constitución del Partido Comunista, es ineludible recordar, aunque sea sucintamente, algunos antecedentes históricos.

Al comenzar el siglo XIX, España era un país económicamente atrasado respecto a otros Estados europeos; las relaciones feudales eran aún predominantes.

Con la guerra de independencia contra Napoleón, en 1808, se abrió en nuestro país el período de las revoluciones burguesas.

Esas revoluciones, que conmovieron a España a lo largo del siglo XIX, tenían como objetivo fundamental el cambio de las relaciones feudales, el establecimiento de la dominación burguesa. Las guerras civiles, los pronunciamientos militares y golpes de Estado, el constante tejer y destejer constituciones y alternar de períodos liberales y reaccionarios, los destronamientos y cambios de dinastía, eran expresiones de esa lucha.

A diferencia de Francia, donde la burguesía combatió contra el feudalismo hasta la destrucción revolucionaria del Poder político feudal, en España la lucha no adquirió un carácter radical y se tradujo en un compromiso. Al lado de una burguesía débil y pusilánime, actuaba una casta feudal que, [10] si históricamente caduca, conservaba suficiente vitalidad para imponer su sello a la vida política, económica y social de nuestro país. Junto a este factor objetivo de la correlación de fuerzas entre la burguesía y la aristocracia feudal, en la conclusión de este compromiso influyó poderosamente la aparición en las barricadas de la Revolución de 1868 y más tarde en la I República de una fuerza nueva: la clase obrera.

Así se llegó a la formación del bloque terrateniente-burgués, base del sistema político y económico en que se apoyó la restauración monár-

quica en 1874, y que duró hasta la proclamación de la República en 1931.

Con las leyes desamortizadoras de 1835, la burguesía asestó un serio golpe al poder feudal de la Iglesia, pero no destruyó la propiedad latifundista de la aristocracia. Sin embargo, la desamortización fue el punto de arranque del capitalismo moderno en España.

En la década del 40 al 50 del siglo XIX, la técnica manufacturera fue dejando su puesto a la máquina; las manufacturas se convertían en fábricas. Este proceso fue particularmente rápido en la industria textil de Cataluña. Al mismo tiempo se levantaron factorías metalúrgicas y algunas empresas de construcción de maquinaria en Barcelona, Valencia, Málaga, Asturias y Santander; se sentaron las bases de la industria siderometalúrgica en el País Vasco; inicióse el desarrollo de la red ferroviaria española; surgieron compañías de seguros y Bancos; el capital bancario comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante.

Esta revolución industrial iniciada en España y la existencia de ricos yacimientos mineros apenas explotados despertaron el interés del capital extranjero, que se concentró fundamentalmente en la industria extractiva y en la construcción de ferrocarriles. Se destacó, a partir de ese momento, como otra de las particularidades del desarrollo capitalista de España, la tendencia de la burguesía española a facilitar la penetración del capital extranjero, con desdén u olvido de los intereses nacionales.

La desamortización puso en venta, al mismo tiempo que las tierras de la Iglesia, tierras comunales y de propios, cuyo usufructo había constituido el principal medio de vida de grandes masas campesinas. La burguesía española, lejos de dar la tierra a los campesinos, les despojó de ella. Con este acto se privaba de un aliado importantísimo para la lucha contra la reacción feudal.

Se comprobaba en España la afirmación marxista de que el camino del desarrollo capitalista pasa, en todas partes, a través del empobrecimiento y de la miseria de los campesinos y de los trabajadores en general.

La desamortización provocó el éxodo de los campesinos hacia las zonas mineras e industriales y fue, por ello, un factor impulsor del aumento numérico del proletariado.

El crecimiento de la clase obrera y su concentración dio origen, en la década del 40 al 50, a un hecho de extraordinaria importancia: el surgimiento de Asociaciones Obreras, que fueron el primer paso hacia el movimiento obrero organizado en España.

La primera de ellas fue la Asociación de Tejedores a Mano, fundada en 1840, en Barcelona, por el obrero tejedor José Munts. En 1854, esta asociación se unificó con otras similares de Cataluña en la primera federación de Sociedades Obreras, que adoptó el título de Unión de Clases.

Los intentos del Gobierno y de la burguesía, tendentes a impedir el desarrollo del movimiento societario obrero, fueron inútiles. A la suspensión de la Unión de Clases, respondió el proletariado de Barcelona, el 2 de julio de 1855, con una huelga general, en la que participaron más de 40.000 obreros, y que fue la primera que registra la historia de nuestro país.

Al mismo tiempo que surgían las primeras sociedades obreras de defensa, empezaron a extenderse por España las ideas del socialismo utópico: en Andalucía y Madrid, las de Fourier; las de Cabet, en Cataluña.

Los primeros difusores de las doctrinas de Fourier fueron Joaquín Abreu, Sixto Cámara y Fernando Garrido, el cual, en 1846, fundó en Madrid una revista, «La Atracción», primera publicación socialista de España. Entre los adeptos más destacados de las doctrinas de Cabet, figuraron [12] Aldón Terradas y Monturiol, quienes en 1847 editaron en Barcelona el semanario socialista «La Fraternidad», en cuyas páginas se publicó la conocida obra de Cabet «Viaje a Icaria».

Sin embargo, las organizaciones obreras constituidas para la defensa de los intereses económicos de los trabajadores no abarcaban más que un aspecto de su lucha y de sus crecientes aspiraciones. En el frente político, la clase obrera y los asalariados en general luchaban bajo una bandera que no era la suya; actuaban bajo la influencia ideológica de la burguesía.

Para intervenir en la lucha política como una clase independiente, el proletariado necesitaba tener una ideología auténticamente revolucionaria que, científicamente, mostrase su misión histórica como enterrador del capitalismo y de toda forma de explotación del hombre por el hombre.

Esta ideología no podía ser la de los socialistas utópicos, los cuales no comprendían las leyes que determinan el desarrollo de la sociedad ni podían, por tanto, indicar el camino de la liberación del proletariado de la esclavitud capitalista. Estos criticaban a la sociedad capitalista, pero se limitaban a ofrecer soluciones ideales, que, si estimables por la intención, eran prácticamente irrealizables.

La aparición en la arena política, coincidiendo con la revolución de 1848, del socialismo científico, cuya esencia fue expuesta en el «Manifiesto del Partido Comunista» de Marx y Engels, dotó a la clase obrera de la ideología que necesitaba para convertirse en una fuerza política decisiva.

El marxismo daba a los trabajadores una concepción del mundo coherente y científica, inconciliable con toda superstición; demostraba que el régimen burgués, como los que le antecedieron en el curso de la historia, es sólo un régimen transitorio, un paso hacia un nuevo sistema social más elevado, el comunismo.

Esta doctrina se abría camino en la conciencia de los trabajadores; se extendía por el mundo, despertando a la lucha a las masas oprimidas y explotadas; se transformaba en una fuerza material indestructible; sentaba las bases de la revolución proletaria. [13]

El «Manifiesto del Partido Comunista» fue traducido al español y publicado en 1872 en el periódico «La Emancipación» de Madrid, dirigido por José Mesa, y encontró amplio eco en los núcleos más avanzados de la clase obrera y de la intelectualidad, desplazando las ideas del socialismo utópico, hasta entonces en boga.

En 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, cuyos estatutos generales se asentaban sobre las teorías marxistas del «Manifiesto del Partido Comunista».

La primera organización española de la Asociación Internacional de los Trabajadores se fundó en Madrid el 21 de diciembre de 1868, después de la visita del diputado italiano José Fanelli, enviado para dar a

conocer en nuestro país los objetivos de la Primera Internacional. Los hombres que integraron el grupo inicial fueron, entre otros, Angel Mora, Anselmo Lorenzo, Francisco Oliva, Manuel Cano, Enrique Simancas y Francisco Mora. Este grupo puede considerarse como el iniciador del movimiento político proletario español. Algo más tarde, se constituía en Barcelona otro grupo de internacionalistas y, en junio de 1870, se celebraba en esta última ciudad el congreso de los partidarios de la Internacional, que fue el primer Congreso Nacional de la clase obrera española. En él se constituyó la Federación Regional Española de la Primera Internacional.

Un nuevo sentimiento se desarrollaba en la conciencia de las masas explotadas: el de la solidaridad proletaria. La clase obrera española ya no se sentía aislada detrás de los Pirineos, sino integrada en el gran movimiento del proletariado internacional.

El desarrollo del movimiento obrero no transcurrió en España llanamente, sino con una intensa lucha interna, que tuvo su expresión principal en el choque entre el socialismo y el anarquismo.

Refutadas todas las teorías socialistas anteriores por la irrefutable lógica marxista que el desarrollo capitalista confirmaba cada día, las viejas ideas pequeño-burguesas del periodo artesanal se resistían a desaparecer. [14]

Apoyándose en esas ideas, el anarquista ruso Miguel Bakunin organizó, en el seno mismo de la Internacional, la lucha contra el marxismo, utilizando para ello una fraseología demagógica en la que destacaba como dogma básico el de la «liquidación social», que debía consistir en un golpe fulminante que destruyera a la vez el capitalismo y el Estado para levantar sobre sus escombros la «anarquía jurídica y política».

Siguiendo las instrucciones de Bakunin, Fanelli, al mismo tiempo que ayudó a constituir las secciones de la Internacional en España, introdujo en ellas la manzana de la discordia, creando en su interior grupos secretos bakuninistas. El primero, fundado en Barcelona a mediados de 1869, se transformó rápidamente en el centro de propaganda anarquista en el país.

Estos grupos realizaron una labor disgregadora y antisocialista en el interior de las organizaciones de la Internacional y sobre ellos recae la

responsabilidad de la división del movimiento obrero, al que causaron desde el primer momento de su actuación graves daños. Abusando de la buena fe de los trabajadores, a los que ocultaban los verdaderos fines de la actividad bakuninista, consiguieron alistar en sus grupos secretos incluso a los hombres más honestos y más fieles a la Internacional y apoderarse de los puestos dirigentes de la Federación Regional Española.

Pero no hay que buscar en estos hechos las causas principales de la influencia del anarquismo entre la clase obrera y los campesinos españoles, ni menos atribuir esa influencia al supuesto «poder de captación» del anarquista italiano Fanelli, o al presunto «individualismo español». Las causas son eminentemente económicas y sociales, y la perpetuación en España de las ideas anarquistas, cuando éstas no ejercían ya influencia en ninguno de los países capitalistas más avanzados, tiene su causa fundamental en el lento desarrollo industrial del país.

En el periodo de desarrollo industrial, cuando las máquinas desplazan la pequeña producción artesanal y el capitalismo desaloja a los campesinos de sus parcelas de tierra, cientos de miles de artesanos y de pequeños propietarios ya [15] no pueden seguir viviendo como antes, se ven obligados a ir a trabajar a la fábrica, a ganar un salario, a convertirse en proletarios. La mentalidad de estos hombres, sin embargo, no es proletaria, es pequeño-burguesa. El desarrollo rápido de la gran industria va modificando esta mentalidad. En cambio, un desarrollo industrial lento y débil, y la multiplicidad de pequeñas fábricas y talleres, como era el caso de España, contribuyen a hacer perdurar ese modo de pensar.

El artesano o el campesino convertido en proletario en estas condiciones, son propensos a aceptar cualquier doctrina que les permita mantener la esperanza de que aún pueden recobrar su antigua posición, restablecer sus antiguos modos de vida, trabajar en su taller artesanal o en su parcela de tierra. Odian la fábrica que les arruinó; odian al Estado que les despojó de las tierras que eran su sustento. Su rebeldía nace de su empobrecimiento. Su origen de clase, su individualismo, es el terreno abonado en el que prende fácilmente la semilla de las ideas pequeño-burguesas anarquistas.

Las teorías anarquistas no arrancan del conocimiento de las leyes objetivas del desarrollo social sino de principios abstractos, como la «libertad», la «igualdad» y la «justicia»: conceptos genéricos y eclécticos, que admiten toda clase de interpretaciones, en dependencia de quiénes son los encargados de aplicarlos. De aquí que en la lucha por esa revolución social a que aspiran, los anarquistas desvíen la energía y la actividad de las masas que siguen sus inspiraciones hacia una lucha estéril, sin perspectivas de victoria, atacando no las causas del régimen injusto que ellos quisieran suprimir, sino los efectos exteriores y visibles de esas causas.

En nuestro país, la vida patentizó la inanidad de estas tesis anarquistas. Con su intervención en el movimiento cantonalista de 1873, los anarquistas dieron un ejemplo insuperable, según la conocida frase de Engels, «de cómo no debe hacerse la revolución».

En el curso de aquellos sucesos, todos los principios anarquistas se vinieron al suelo al choque con la realidad. Los anarquistas infringieron primero el dogma del abstencionismo electoral; luego, el de la abstención en revoluciones que no persiguieran la inmediata emancipación proletaria, [16] puesto que participaron en un movimiento, como el cantonalista, de carácter burgués; seguidamente le tocó el turno al dogma de la abolición del Estado, pues en vez de abolirlo en los cantones donde triunfaron, levantaron en cada uno de ellos un pequeño Estado y participaron incluso en las Juntas gubernamentales de los cantones.

El anarquismo en España –descontando la abnegación y espíritu de sacrificio de las masas obreras y campesinas que creían en él apasionadamente, que le sacrificaban la libertad y la vida–, ha sido una escuela de derrotas. Después de 1911, en que se constituyó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y durante algún tiempo, el movimiento anarcosindicalista recibió en sus filas a lo más combativo de los obreros y campesinos, que, por reacción contra el oportunismo socialdemócrata, se orientaban hacia los anarquistas.

En luchas huelguísticas de envergadura nacional, fracasadas todas a pesar de la combatividad obrera, el anarquismo demostró, repetidas veces, que ni sus principios ni su táctica hacen avanzar un solo paso a las masas trabajadoras en el camino de su emancipación.

Pese a la indudable influencia que el anarquismo alcanzó en España en aquellos momentos iniciales del movimiento obrero organizado, queda en pie un hecho que no puede ser negado por nadie: las primeras asociaciones obreras de tipo internacionalista, independientes de los partidos burgueses, se constituyeron en España, por la propia voluntad y decisión de los trabajadores, inspirándose en los principios del marxismo, en los principios del comunismo, expuestos por Marx y Engels en el «Manifiesto del Partido Comunista».

Estas ideas fueron las que impulsaron la constitución del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la organización sindical obrera, la Unión General de Trabajadores (UGT).

El Partido Socialista fue fundado en mayo de 1879 por un grupo de internacionalistas arbitrariamente expulsados por los bakuninistas de la Federación Española de la Internacional.

Con la fundación del Partido Socialista, como partido [17] independiente de la clase obrera, el proletariado español iniciaba un nuevo camino.

A la iniciativa de los socialistas se debe la creación de la UGT, en agosto de 1888. Su primer secretario fue Antonio García Quejido, más tarde fundador del Partido Comunista de España y uno de sus primeros secretarios generales.

El grupo fundador del Partido Socialista estaba compuesto de obreros en los que desde el primer momento predominó una tendencia economista, sindicalista. A pesar de sus propósitos de constituir una organización política sobre la base de los principios marxistas su escasa formación teórica les llevaba a concentrarse exclusivamente en las reivindicaciones prácticas, inmediatas, y a despreciar aspectos tan fundamentales para un partido marxista como los de la educación socialista de los trabajadores, la orientación de la lucha de la clase obrera hacia el derrocamiento del régimen capitalista, la toma del Poder por el proletariado y el paso al socialismo.

El menosprecio hacia el problema fundamental de toda revolución, la toma del Poder; la tendencia a conciliar los intereses del proletariado con los de la burguesía, constituyeron la fuente del oportunismo del Partido Socialista.

Otra debilidad del Partido Socialista, desde su período inicial hasta nuestros días, ha sido la incomprensión de que los campesinos son una de las fuerzas fundamentales de la revolución democrática española y el aliado esencial de la clase obrera.

El Partido Socialista desconoció el problema nacional, negó el derecho de los pueblos a la autodeterminación y dejó así la dirección del movimiento nacional de Cataluña, Euzkadi y Galicia a merced de la burguesía.

*

En el último tercio del siglo XIX, el capitalismo entró en su etapa imperialista. En la guerra hispano-norteamericana de 1898 –que fue la primera guerra imperialista–, España perdió sus últimas posesiones en el Mar Caribe y en el Pacífico y, con ellas, sus principales mercados exteriores. [18] La guerra puso de relieve la podredumbre y la senilidad del régimen monárquico y agudizó todas las contradicciones de la sociedad española.

La pérdida de las colonias y de los beneficios coloniales llevó a la burguesía y a los terratenientes a intensificar la explotación de la clase obrera y la expoliación de los campesinos en España misma. En Cataluña y Euzkadi se recrudeció el movimiento nacionalista. La burguesía nacional exigía del Gobierno central concesiones que le permitieran resarcirse de la pérdida de los mercados exteriores. La monarquía intentó frenar y desviar la oposición creciente de la burguesía, acentuando su política imperialista en Marruecos; pero las consecuencias desastrosas de estas aventuras coloniales impulsaron la lucha popular antimonárquica.

Con el comienzo del imperialismo, terminaba para el movimiento obrero español la etapa de desarrollo relativamente pacífico iniciada después de la Restauración; se anunciaba un período de grandes luchas, que hacían más necesaria aún la existencia de un partido obrero revolucionario, armado de la ideología marxista. Pero el Partido Socialista, lejos de evolucionar en ese sentido, fue perdiendo su carácter de clase y deslizándose, cada vez más acusadamente, al oportunismo. A ello contribuyó, en no escasa medida, el papel preponderante que un grupo de intelectuales liberales pasó a desempeñar en la dirección del Partido Socialista. Y a medida que se afirmaban estas tendencias reformistas, y como reacción a su abandono de las posiciones de clase,

comenzó a perfilarse en el seno del Partido Socialista Obrero Español un ala revolucionaria, que más tarde habría de ser núcleo constitutivo del Partido Comunista de España.

La primera guerra mundial (1914-1918) fue el estallido de las contradicciones del imperialismo, la expresión violenta de la crisis general del capitalismo. En ella se valoraron los quilates revolucionarios de los partidos socialistas. Con la excepción del Partido Bolchevique, dirigido por Lenin, todos los partidos de la II Internacional, arrastrados por la mayoría de sus dirigentes, se colocaron al servicio de su burguesía, respaldando con su complicidad abierta la terrible [19] matanza en la que el imperialismo sacrificaba millones de vidas humanas.

Por el camino del abandono de las posiciones internacionalistas proletarias marcharon también los líderes reformistas del PSOE, que muy pronto se colocaron al lado de la «Entente» anglo-francesa.

Para España, la primera guerra mundial significó enriquecimiento de un puñado de industriales, de negociantes, de magnates financieros, pero, al mismo tiempo, carestía y privaciones para el pueblo. En las ciudades escaseaban el pan, el carbón, el azúcar, el arroz, el aceite; España no estaba en guerra, pero los precios de los artículos de consumo popular aumentaron más que en Francia.

Esta situación empujó a las masas laboriosas a la lucha. En el verano de 1916 se produjo una huelga ferroviaria que encontró el apoyo de todo el proletariado español; en diciembre, conoció España una huelga general de protesta contra la carestía. La lucha fue adquiriendo un carácter cada vez más político.

En 1917 existía ya en España una situación revolucionaria. El crecimiento de las fuerzas productivas durante los años de guerra y la exacerbación de las contradicciones en el seno de la sociedad española, cuyo desarrollo era frenado por la existencia de supervivencias feudales, ponían sobre el tapete de manera apremiante la realización de la revolución democrático-burguesa.

Las condiciones objetivas para tal revolución habían madurado; pero faltó un partido capaz de dirigir la lucha de las masas y de conducir a éstas a la victoria.

En agosto de 1917, la clase obrera española llevó a cabo una huelga general revolucionaria. En Asturias y Vizcaya ésta tuvo carácter de insurrección armada. A pesar del heroísmo de los trabajadores, el movimiento, que pudo ser decisivo para el desarrollo democrático de España, fracasó por la actitud de los partidos burgueses –que dejaron en la estacada a la clase obrera– y por la incapacidad de la dirección del Partido Socialista, el cual había supeditado la lucha de la clase obrera al juego político de la burguesía liberal y no hizo nada para incorporar a las masas campesinas a esa lucha. [20]

La derrota del movimiento revolucionario de agosto de 1917 mostró a la clase obrera española que el Partido Socialista no era el Partido que podía dirigir su lucha. ¿Qué tipo de partido hacía falta para llevar a la clase obrera a la victoria?

La respuesta llegó con la nueva de la gran Revolución Socialista triunfante en Rusia: en octubre de 1917, bajo la dirección del Partido Bolchevique, los obreros y los campesinos rusos derrocaron el Poder de los capitalistas y de los terratenientes y proclamaron la República Socialista Soviética, inaugurando una nueva era en la Historia.

La Revolución Socialista de Octubre galvanizó las energías revolucionarias del pueblo español, especialmente de la clase obrera y de los campesinos.

La reacción española, que después de haber aplastado sangrientamente el movimiento revolucionario de agosto creía haberse asegurado un largo período de paz, tuvo que enfrentarse de nuevo con un movimiento obrero templado en la lucha y estimulado por el ejemplo ruso, y con unos campesinos que querían marchar por el camino de octubre.

Las fuerzas terratenientes y burguesas, aterradas por la pujanza y la rapidez con que prendían en las masas las ideas de la Revolución de Octubre, buscaban el apoyo de la reacción internacional y se adherían a los planes de ésta, tendentes a aplastar a la joven república proletaria.

En 1918, cuando la reacción imperialista organizó la intervención armada contra el País Soviético, el Gobierno francés recabó la colaboración de España en el bloqueo contra el primer Estado proletario. Al conocerse esta noticia en España, las masas trabajadoras se levantaron en un movimiento impresionante que hizo retroceder al Gobierno. En

Barcelona y Valencia, el pueblo asaltó los consulados franceses y dio fuego a los documentos que encontró en ellos.

Los sindicatos obreros tomaron rápidamente posición en defensa del País Soviético.

El II Congreso de la Confederación Nacional del Trabajo, celebrado en diciembre de 1919, decidió que los obreros de las fábricas de armas y municiones se negasen a fabricar materiales destinados a la lucha contra el Ejército Rojo y asumió [21] la obligación de declarar la huelga general en caso de que el Gobierno tratase de enviar tropas a Rusia.

A su vez, el IV Congreso Nacional de Obreros Agricultores y Similares (Federación Nacional de Agricultores), anarcosindicalista, celebrado en Valencia en diciembre de 1918, acordó, por unanimidad, «felicitar a los campesinos rusos por haber llevado a la práctica nuestro lema: La tierra para los que la trabajan», y aprobó lo siguiente: «los campesinos españoles deben declarar la huelga general si el Gobierno español intenta intervenir en el movimiento revolucionario ruso.»

El sindicato metalúrgico de Vizcaya exigió del Gobierno «levantar el bloqueo a Rusia y restablecer las relaciones comerciales con el País de los Soviets».

En su Conferencia de la primavera de 1919, el PSOE se pronunció contra toda clase de intervenciones en Rusia y por la huelga general en caso de que tal intervención tuviera lugar. El Congreso Agrario de la UGT de Andalucía y Extremadura acordó, en 1920, expresar «su simpatía a la República Rusa de los Soviets y exigir su reconocimiento por el Gobierno español».

Toda la España del trabajo montaba la guardia para defender al joven País Soviético, desarrollando luchas de envergadura nacional, que ataban las manos al Gobierno y le impedían participar en la cruzada imperialista contra el Estado proletario.

Después de la Revolución de Octubre se produjeron en toda España grandes huelgas y manifestaciones de masas, que llegaron a repercutir en los cuarteles, dando lugar a sucesos como la sublevación del Cuartel de Artillería del Carmen, de Zaragoza.

La crisis del régimen se acentuó y la situación de la Monarquía era tan precaria, que en la noche del 21 de mayo de 1918, la llamada «noche trágica», el rey amenazó a los dirigentes de los partidos monárquicos con abandonar el trono si no eran capaces de contener el movimiento revolucionario de las masas.

El centro de gravedad de la política del país, entre 1918 y 1923, se trasladó a Barcelona, donde residían el cuartel [22] general de las Juntas Militares de Defensa, la influyente Federación Patronal y la mayor concentración proletaria de la Península.

En marzo de 1919 estalló la huelga de los obreros y empleados de la compañía extranjera la «Canadiense», con lo que se privaba de fluido eléctrico a muchas fábricas de Cataluña y se paralizaba la vida industrial de la ciudad. Ante la firmeza de los trabajadores, el Gobierno se vio obligado a satisfacer sus demandas; pero la Federación Patronal, apoyada por las Juntas de Defensa, negóse a ello, provocando la réplica inmediata de la clase obrera.

El 24 de marzo se declaró la huelga general, que fue total en Barcelona y otras ciudades catalanas, y se extendió a otras provincias. El 26 de marzo se proclamó el estado de sitio en Barcelona, Valencia y La Coruña. En respuesta a la implantación de la censura militar a las publicaciones obreras, los obreros implantaron su propia censura, aplicándola a los periódicos burgueses y a los documentos oficiales. La huelga terminó con una victoria obrera.

Bajo la presión de los trabajadores, que luchaban en toda España, el 3 de abril de 1919 era promulgada por decreto la jornada de 8 horas.

En agosto de 1919, la burguesía catalana inició una serie de «lock-outs» para impedir la aplicación de la jornada de 8 horas. El 19 de agosto, solamente en Barcelona, quedaban en la calle 15.000 albañiles, 6.000 carpinteros, 30.000 obreros textiles. Una violenta represión se abatió sobre los obreros. Bandas de forajidos, a sueldo de la patronal y de la policía, asesinaban en las calles de Barcelona a los obreros revolucionarios. Los anarcosindicalistas, en lugar de responder al terror policiaco con la movilización de las masas, le opusieron la violencia individual. En esta desigual lucha fueron cayendo centenares de trabajadores.

Para ayudar al movimiento obrero catalán hubiera sido preciso un gran movimiento solidario, que nadie podía encabezar mejor que la UGT, dirigida por los socialistas; pero esto no se produjo, a pesar de que la clase obrera de Madrid y de otras regiones lo exigía. Faltaba coordinación en la lucha. No existía unidad de acción. [23]

Las derrotas de una parte de la clase obrera dirigida por los anarcosindicalistas dejaban impasibles a los dirigentes socialistas de la UGT. Y, a la inversa, la mayor parte de los movimientos y huelgas organizados por la UGT no eran secundados en general más que por la parte más consciente de los trabajadores anarcosindicalistas. La burguesía y el Gobierno podían golpear a unos y a otros por separado. En esta situación, el gran esfuerzo de la clase obrera resultaba estéril.

La creación de un partido de la clase obrera, de nuevo tipo, aparecía cada vez más como una necesidad del propio desarrollo de la lucha.

No era ésta, sin embargo, tarea fácil. La fidelidad de los trabajadores socialistas y anarquistas a los principios y a las organizaciones en que habían despertado a la lucha los mantenía sujetos a concepciones políticas sobrepasadas, por las que habían luchado honrada y abnegadamente.

La creación de la III Internacional, en marzo de 1919, fue una ayuda inapreciable para orientar el movimiento revolucionario en todos los países. La Internacional Comunista venía a soldar los vínculos entre los trabajadores, que habían sido rotos por la política chovinista de los líderes oportunistas de la II Internacional durante la primera guerra mundial. La Internacional Comunista, fundada por Lenin, reunió y unificó en torno a las banderas del marxismo-leninismo a las fuerzas más revolucionarias del movimiento obrero internacional. La creación de la Internacional Comunista fue una victoria del marxismo-leninismo sobre el reformismo y ejerció un gran poder de atracción sobre el proletariado de nuestro país.

En el Partido Socialista y en la Federación de Juventudes Socialistas se produjo un amplio movimiento de adhesión a la Internacional Comunista. En el año 1919 se constituyó en Madrid un Comité Nacional de los Partidarios de la III Internacional en el que participaban personalidades socialistas del más alto prestigio.

Mientras tanto, la CNT decidió en su segundo Congreso, celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, en diciembre de 1919, adherirse a la Internacional Comunista y a la Internacional Sindical Roja, aunque años después, bajo la presión [24] de los grupos específicos anarquistas, abandonase el camino emprendido.

Sin la Revolución Socialista de Octubre de 1917, sin la creación de la III Internacional, la clase obrera y los campesinos españoles habrían continuado aún mucho tiempo su lucha, sin una perspectiva clara y concreta, faltos de horizontes revolucionarios adonde dirigirse.

La adhesión de las masas obreras de la ciudad y del campo a la III Internacional tuvo su más alta expresión en la creación del Partido Comunista de España, en abril de 1920.

La historia del Partido Comunista de España pasa por tres grandes etapas: Lucha por el derrocamiento de la Monarquía, de 1920 a 1931; Revolución democrático-burguesa, de 1931 a 1939, con la guerra nacional revolucionaria, lucha contra la dictadura fascista del general Franco, desde 1939 hasta nuestros días.

Capítulo primero

El nacimiento del Partido Comunista y su lucha contra la Monarquía

Cómo nació el Partido Comunista

El día 15 de abril de 1920 fue fundado el Partido Comunista Español. El impulso creador surgió en nuestro país de la Federación de Juventudes Socialistas.

La mayoría del Partido Socialista, aun respetando profundamente a sus viejos líderes, especialmente a Pablo Iglesias, que aparecía como la personificación del período heroico del movimiento obrero y socialista, no aceptaba la orientación liberal y pequeño-burguesa impuesta por los Besteiro y los Largo Caballero, los Fernando de los Ríos, los Saborit y los Prieto.

En la propia dirección del Partido Socialista Obrero Español se habían delimitado claramente dos tendencias: la revolucionaria y la reformista.

La crisis que se desarrolló en el Partido Socialista hasta que los sectores más revolucionarios y fieles a las tradiciones marxistas del mismo formaron el Partido Comunista, fue laboriosa y prolongada.

De la agudeza de la lucha en el seno del Partido Socialista en ese período, da idea el hecho de que para decidir el [26] camino a seguir se necesitaran tres Congresos extraordinarios.

El primero, celebrado en diciembre de 1919, acordó por 14.000 votos contra 12.500, esperar, antes de pronunciarse definitivamente, a que se celebrase en Ginebra un Congreso de la II Internacional, asistir a él y «procurar que la II Internacional se penetrase del espíritu de la III para conseguir la unión de las fuerzas obreras».

Ante las dilaciones de la Ejecutiva del Partido Socialista y las vacilaciones incluso de los sinceros partidarios de la Internacional Comunista, la Federación de Juventudes Socialistas, que ya durante la guerra mundial había apoyado a los internacionalistas encabezados por Lenin, acordó en su V Congreso, en diciembre de 1919, adherirse a la Tercera Internacional.

Unos meses después, la Federación de Juventudes Socialistas asumió la gloriosa misión de fundar en España el Partido Comunista. El 15 de abril de 1920, en la Casa del Pueblo de Madrid, se reunió en Asamblea Nacional, con un solo punto en el orden del día: Necesidad de transformar la Juventud Socialista en Partido Comunista.

La mayoría aplastante de los delegados aprobó, tras apasionados debates, la histórica decisión de convertirse en el Partido Comunista Español.

«Renovación», el periódico de la Juventud Socialista, se transformó en «El Comunista», primer órgano de prensa del Partido Comunista Español, en el que apareció el Manifiesto fundacional del Partido.

«Los cuatro años de guerra y la revolución rusa –decía el Manifiesto– han modificado profundamente la ideología, el punto de vista, la táctica y los fines del proletariado en la lucha social. La II Internacional ha fracasado.

... Los socialistas rusos, acérrimos enemigos de la guerra imperialista y ardientes marxistas, han roto en la teoría y en la práctica con los socialistas europeos traidores y enterradores de la II Internacional y han fundado la Internacional Comunista. [27]

... Durante la guerra, el Partido Socialista español se colocó abiertamente al lado de los aliados, a quienes suponía defensores de la democracia, de la libertad y de la justicia. Este profundo error doctrinal, de tanto bulto por tratarse de una guerra imperialista tan descarada y manifiesta, patentiza en seguida la ideología de pequeña burguesía de sus líderes...

... Hemos llegado a un momento en que seríamos cómplices de tal estado de cosas si titubeásemos en dar el paso que hoy damos.»

El Manifiesto de constitución del Partido Comunista Español subrayaba la necesidad de la lucha contra el reformismo y del reconocimiento de la dictadura del proletariado como único medio para la realización del socialismo.

En las filas del Partido Comunista Español formaron desde los primeros momentos jóvenes trabajadores y estudiantes; obreros, campesinos e intelectuales de vanguardia. Entre los fundadores del Partido Comunista estaba Dolores Ibárruri, que se integró en sus filas con la Agrupación Socialista de Somorrostro.

El Partido Comunista envió una delegación al II Congreso de la I.C. reunido en Moscú a finales de julio de 1920. Fue reconocido como sección española de la III Internacional y se le concedió un puesto en

el Comité Ejecutivo. Merino Gracia, delegado español, fue recibido por Lenin, quien se interesó vivamente por los problemas de España y principalmente por la situación de los campesinos.

El Primer Congreso del Partido Comunista Español celebrado en marzo de 1921, eligió un Comité Central integrado por A. Buendía, Vicente Arroyo, Rafael Millá, Merino Gracia {(1) Merino Gracia abandonó más tarde las filas del Partido y del movimiento obrero.} y otros.

La creación del Partido Comunista significó el comienzo de un nuevo período en el desarrollo del movimiento obrero español. [28]

A partir de entonces, éste contaría con un Partido marxista de nuevo tipo, que desde el primer día se revelaba como una fuerza política dotada de un claro contenido proletario; como un partido inspirado en los métodos y principios leninistas de organización; como un combatiente de vanguardia por la transformación de la España semifeudal y monárquica en una España democrática y abierta al progreso social; como un defensor insobornable de los obreros, de los campesinos y de las masas laboriosas en general; como un partidario ardiente del internacionalismo proletario y un amigo fiel del primer Estado de los obreros y de los campesinos, del primer Estado Socialista.

Su constitución no fue obra del azar. En la situación concreta de nuestro país, la creación de un partido de la clase obrera, levantado sobre una nueva base revolucionaria para la lucha por el Poder, se imponía como algo inaplazable. Sólo un partido así podía fundir en un único torrente revolucionario el movimiento de la clase obrera por el socialismo, la lucha por la tierra de los campesinos y de los jornaleros, la lucha de las nacionalidades hispanas por la autodeterminación y el movimiento popular por la democracia.

Pero hubiera sido un sueño ingenuo suponer que con la constitución del Partido Comunista, el anarquismo y el oportunismo socialdemócrata quedarían desplazados automáticamente, anulados por la propia fuerza de las nuevas ideas, de las nuevas formas de organización, de los nuevos métodos de lucha.

La Historia es más compleja; y, cuando ya ha surgido lo nuevo y existen condiciones para su desarrollo, lo viejo continúa tirando hacia atrás y empeñándose en sobrevivir. Lo nuevo no se impone de golpe

por la fuerza de la necesidad, sino que se abre paso a través de una lucha larga y difícil contra lo viejo.

La constitución del Partido Comunista Español aceleró el deslindamiento de las diferentes tendencias que luchaban en el seno del Partido Socialista Obrero Español.

En el segundo Congreso extraordinario del PSOE, reunido en julio de 1920, la mayoría aplastante de los delegados se pronunció por el ingreso en la III Internacional y por el [29] envió a Moscú de dos delegados, al objeto de entrevistarse con el Comité Ejecutivo de la I.C. Pero los líderes reformistas supieron desvirtuar la resolución del Congreso, condicionándola con tres cláusulas que, de hecho, anulaban su valor.

Los dirigentes de la Internacional Comunista, y Lenin personalmente, dedicaron muchas horas a los delegados socialistas españoles, Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos, esforzándose en esclarecerles todos los problemas que éstos suscitaron. El Comité Ejecutivo de la I.C. rechazó las 3 condiciones del P.S.O.E., proponiéndole en cambio la aceptación de las 21 condiciones aprobadas en el II Congreso de la III Internacional. Estas condiciones eran necesarias en aquellas circunstancias para ayudar a la formación y desarrollo de los partidos comunistas y también para impedir la penetración en la I.C. de elementos derechistas y centristas que pugnaban por transformarla en otra edición de la II Internacional.

De vuelta a España, y al informar ante el III Congreso extraordinario del Partido Socialista, Fernando de los Ríos puso de manifiesto su mentalidad liberal burguesa, que le impedía comprender el significado y la grandeza de la revolución socialista y las difíciles condiciones en que el pueblo soviético se veía obligado a luchar por defenderla y consolidarla. En definitiva, se pronunció contra las 21 condiciones y propuso la adhesión del Partido Socialista a la llamada Internacional Segunda y Media, que aparecía como la heredera de la Internacional Socialista enterrada vergonzosamente, por la traición al socialismo de sus dirigentes, en los campos de batalla de la primera guerra imperialista.

El camarada Anguiano, en cambio, abogó por el ingreso en la Internacional Comunista, por la aceptación de las 21 condiciones. En el mismo sentido se manifestaron muchas agrupaciones socialistas, sobre

todo las de los centros industriales más importantes del país, tales como Asturias, el País Vasco, Río Tinto y otros. Y si la moción reformista obtuvo mayoría –8.858 contra 6.094–, ello se debió a los amaños y habilidades en que eran duchos los líderes derechistas.

Al conocerse los resultados de la votación, Antonio García Quejido, miembro de la Comisión Ejecutiva, [30] fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, y uno de los líderes más prestigiosos del movimiento obrero, declaró que los vocales de la Ejecutiva partidarios de la III Internacional se separaban del Partido Socialista para constituir el Partido Comunista Obrero. La declaración de los delegados partidarios de la Internacional Comunista, leída ante el Congreso, decía:

«La terminación del debate acerca de la adhesión a la Internacional Comunista nos exige imperiosamente la manifestación pública de nuestra incompatibilidad con los elementos que se han pronunciado en favor de las tesis sostenidas por la Comunidad del Trabajo de Viena. No podemos ni debemos colaborar con ellos ni aun pasivamente asistir a su obra, que consideramos contrarrevolucionaria y antisocialista.

... Hay un divorcio evidente o irreductible entre la doctrina de Viena y la doctrina de Moscú; entre los métodos fácticos de la Internacional Comunista y los de la Comunidad del Trabajo de Viena; entre la manera de entender y aplicar una y otra la utilidad de la Democracia, la aplicación y desarrollo de la dictadura del proletariado y las condiciones precisas de la Revolución social.

Y nosotros seríamos traidores a nuestras más íntimas convicciones, si por rendir culto al falso ídolo de una falsa unidad de partido, unidad que los reconstructores estaban resueltos a romper desde el momento en que los aludidos líderes afirmaron su propósito de abandonar el Partido; unidad que, si no está en los corazones y en las conciencias, es inútil que se simule con vituperable farsa en las apariencias, sacrificáramos el deber en que estamos de anteponer a todo género de consideraciones la causa del Comunismo revolucionario.

Con la serenidad de quienes cumplen un deber de conciencia, nos retiramos de este Congreso en el que ya nada tenemos que

hacer.

Queremos incorporarnos de hecho, espiritualmente ya lo estamos, a la Internacional Comunista, que –inseparable [31] de la Revolución rusa, a pesar de todas las sutilezas y argucias dialécticas que intentan distinguir entre ésta y aquella– trata de acelerar el derrumbamiento de la sociedad capitalista. No queremos permanecer más en las perezosas y cansadas legiones que parecen esperar del tiempo la consumación de una obra para la que no se sienten capaces. Queremos estar en la Internacional de la acción, que no mide la magnitud de los peligros ni la dureza de los sacrificios al emprender el camino de la Revolución social.

Recabamos, pues, nuestra íntegra libertad de movimiento. Quedan rotos los vínculos que, sólo materialmente, nos mantenían aún junto a los que habéis rechazado la adhesión a la Internacional Comunista.

Entre vosotros y nosotros ha cesado de existir la comunidad de pensamiento. No puede continuar la comunidad de esfuerzos. Unos y otros vamos a comparecer ante la clase trabajadora. Ella nos juzgará. Desde ahora decimos que nuestro anhelo es Hermanarla en la acción, unificar sus esfuerzos para la lucha decisiva, formar con ella el bloque revolucionario único. Y nosotros creemos, con fe inquebrantable, que el proletariado español no irá con vosotros por los plácidos caminos que parten de Viena, sino por la senda áspera, pero senda de salvación, que se llama Internacional Comunista, bajo cuya bandera nos acogemos desde ahora.»

Firmaban esta declaración, fechada el 13 de abril de 1921, Oscar Pérez Solís y Facundo Perezagua, delegados de Bilbao, Eibar e Irún; Isidoro Acevedo y Lázaro García, de la Federación Socialista Asturiana; Virginia González, de Begijar, San Julián de Musques y Puebla de Cazalla; Pedro García, de Alcira y Villanueva de Castellón; Mariano García Cortés, de Sestao, Torres, Herrera, Vitoria, Jodar y Novelda; Eduardo Torralva Beci, de Buñol, Valmaseda, Motril (Sociedad de agricultores y Agrupación), Gallarta, Marsella (Federación de Grupos españoles) y Pontevedra; Exoristo Salmerón, de Deusto; José L. Darriba, de Ribadeo; José L. Martínez Ponce, de Motril (Sociedad de

agricultores y Agrupación); Luis Mancebo, de Santiesteban del Puerto; Lorenzo Luzuriaga, de Begoña; [32] José. López y López, de Ortuella, Baracaldo y Villacarrillo; Gonzalo Morenas de Tejada, de Burgo de Osma; Roberto Alvarez, de Santander y Camargo; Severino Chacón, de La Coruña; Manuel Pedroso, de Crevillente, Puertollano y Mataró; Antonio Fernández de Velasco, Carlos Carbonell y Marcelino Pascua, de la Escuela Nueva; Manuel Martín, de Chamartín de la Rosa; Evaristo Gil, de Herrera y Puente de Vallecas; Feliciano López y Luis Hernández, de Nerva; Eduardo Vicente, de Palma de Mallorca; Francisco Villar, de Torredonjimeno; Angel Bartol, de Vicálvaro; Vicente Calasa, de Lancey, y José Rojas, de la Federación de Juventudes Socialistas.

Los delegados de izquierda abandonaron el Congreso y se trasladaron a los locales de la «Escuela Nueva», declarando constituido el Partido Comunista Obrero Español. Nació por consiguiente el segundo Partido Comunista de España, adherido a la III Internacional. El Comité nacional, designado allí mismo, quedó integrado por García Quejido, Núñez de Arenas, Anguiano, Virginia González y Perezagua.

Fundadores del nuevo Partido Comunista fueron, por lo tanto, prestigiosos dirigentes socialistas, entre los que destacaban, al lado de Antonio García Quejido, Facundo Perezagua, uno de los primeros propagandistas del socialismo en el País Vasco; Isidoro Acevedo, corrector de imprenta y veterano propagandista de la causa obrera en Asturias; Virginia González, guarnicionera, dirigente de la UGT y del Partido Socialista; Nuñez de Arenas, profesor de Historia; Torralva Beci, periodista, y tantos otros, hombres y mujeres que habían colocado las primeras piedras del Partido Socialista Obrero Español.

La incorporación al comunismo de estos hombres significaba la continuidad de las mejores tradiciones del movimiento obrero y socialista español, de las tradiciones de la Internacional de Marx y Engels y del primer período de la II Internacional.

A pesar de la mayoría obtenida por los reformistas, la simpatía de las masas socialistas hacia la Revolución de Octubre era tan grande y tan patente su disgusto por el resultado del Congreso, que el Partido Socialista se vio [33] obligado a publicar un manifiesto firmado por Pablo Iglesias y todos los componentes de la nueva Ejecutiva, que decía lo siguiente:

«No estamos conformes con las condiciones que impone la Tercera Internacional de Moscú; pero afirmamos hoy, como lo hicimos desde el primer día de la revolución rusa, que estamos, sí, plenamente identificados con aquella revolución; con ella principia la era del desmoronamiento capitalista y la de las realizaciones socialistas; por ella, por su esfuerzo y gracias a su sacrificio, los demás pueblos recogerán beneficios que se han de traducir en una renovación de sus instituciones sociales; con la revolución rusa estamos y a nuestro Partido le decimos, como siempre, que nos consideramos obligados a su defensa.»

De la irresistible atracción que las ideas comunistas ejercían sobre las masas socialistas españolas es testimonio el hecho de que la nueva Federación Nacional de Juventudes Socialistas, creada después que la anterior se transformara en Partido Comunista Español, decidiese en abril de 1921 convertirse en Federación de Juventudes Comunistas adherida a la III Internacional. ¡Por segunda vez la juventud socialista se incorporaba al movimiento comunista!

La existencia de dos partidos comunistas creaba una situación confusa y peligrosa para el propio desarrollo del movimiento comunista y mantenía a la clase obrera en actitud expectante; de ambas cosas sólo podían beneficiarse el reformismo, que con la creación del Partido Comunista había sufrido un rudo golpe, y la burguesía, que desde la aparición del Partido volcó sobre él la furia de la represión.

Los consejos de la Internacional Comunista contribuyeron a vencer esta situación anómala y a unificar los dos partidos.

Del 7 al 14 de noviembre de 1921 se celebró en Madrid la Conferencia de fusión de los dos Partidos Comunistas. Desde aquella fecha existe un solo Partido Comunista, el *Partido Comunista de España*.

Se acordó editar, como órgano central del Partido, «La Antorcha», [34] mientras continuaban editándose «Aurora Roja» en Asturias, «Bandera Roja» en el País Vasco, «El Comunista Balear» en Palma de Mallorca, «Nueva Aurora» en Pontevedra y otros periódicos.

Al mismo tiempo que el Partido, se fusionaron las dos Juventudes Comunistas, quedando constituida la Federación de Juventudes Comunistas de España. Su órgano de prensa era «El Joven Comunista».

Por el Frente Único de la clase obrera

Desde el momento de su nacimiento, el Partido Comunista de España llevaba en su bandera inscrita la idea de la unidad de la clase obrera y de las masas trabajadoras. La división constituía una tragedia para la clase obrera de nuestro país, de la que se derivaron muchas de las derrotas que fueron jalonando el historial heroico y combativo de los trabajadores españoles.

El Partido Comunista venía a superar esa división, comprendiendo que la unidad era un problema crucial para los destinos de la revolución española. Para el Partido, la unidad obrera no era un concepto sentimental, sino una necesidad de la acción revolucionaria.

García Quejido y sus camaradas, al integrarse en el movimiento comunista, declararon que su anhelo era hermanar a la clase obrera en la acción, unificar sus esfuerzos para la lucha, formar el bloque revolucionario único. Esta idea presidió las actividades del Partido Comunista desde sus comienzos y ocupó un puesto central en las preocupaciones de su primer Congreso, reunido en Madrid, el 15 de marzo de 1922.

A pesar de la resistencia que ofrecieron algunos delegados, en los que las tendencias sectarias eran muy vivas, el Congreso aprobó la política de Frente Único con los trabajadores ugetistas y anarquistas. Se adoptaron algunas decisiones importantes sobre el reforzamiento del trabajo sindical y la lucha por la fusión de las dos grandes centrales sindicales UGT y CNT. Se hizo un llamamiento a los obreros [35] agrícolas y a los campesinos, invitándoles a estrechar las relaciones con los obreros de la ciudad y a luchar junto a éstos.

En el momento del Primer Congreso, el Partido Comunista de España contaba con unas ochenta agrupaciones.

En Vizcaya y Asturias, los dos centros de mayor influencia comunista, funcionaban Federaciones Regionales del Partido.

Tenía el Partido cincuenta concejales y tres diputados provinciales.

Los comunistas dirigían el Sindicato Minero de Vizcaya y, con ello, las Casas del Pueblo de Bilbao, las de Gallarta, Somorrostro, Ortuella, Galdames; tenían fuerte posición en el Sindicato Metalúrgico de Vizcaya y en varios sindicatos locales.

En Asturias, los comunistas dirigían el Sindicato Unico de Mineros; en San Sebastián, la Casa del Pueblo; en Pontevedra tenían la dirección de la Federación de Sociedades Obreras. En Madrid, Levante, Andalucía, Toledo, los comunistas dirigían secciones sindicales.

En el primer Congreso del Partido fueron elegidos para el Comité Central Antonio García Quejido (Secretario General); Ramón Lamonedada (Secretario del Interior); Virginia González (Secretaria Femenina); Antonio Malillos (Secretario Sindical); Exoristo Salmerón, Manuel Nuñez de Arenas, Evaristo Gil, Ignacio Ojalvo y otros camaradas.

Para la burguesía y los terratenientes españoles los años de guerra mundial habían sido años de «vacas gordas», durante los cuales se enriquecieron fabulosamente; pero terminada aquélla, las potencias europeas fueron desalojando a los exportadores españoles del mercado mundial. De nuevo apareció al desnudo la debilidad económica de España, la pobreza de su mercado interior, el atraso de su industria. La crisis que alcanzó a ésta desde el final de la guerra se acentuó en 1921, al coincidir con una crisis mundial de sobreproducción. Y, como siempre, la burguesía intentó resolver sus dificultades a costa de las masas laboriosas; se sucedían los cierres de las fábricas, aumentaba la jornada de trabajo, crecía el paro y disminuían los salarios. [36]

Con el Frente Unico por divisa, los comunistas encabezaron poderosos movimientos huelguísticos en los años 1922 y 23, sobre todo en Asturias y en el País Vasco, contra la ofensiva de las compañías mineras y metalúrgicas. Frente a la resignación reformista del «repartamos la miseria», los comunistas defendían la consigna de: «Ni un minuto más de jornada, ni un céntimo menos de jornal.» Los metalúrgicos vascos sostuvieron una huelga que duró casi tres meses. En ella el Partido desplegó gran actividad, manteniendo la resistencia de los obreros.

En el verano de 1922 la dirección de nuestro Partido se dirigió en carta abierta al Partido Socialista Obrero Español, a la UGT, a la CNT y a la Federación de grupos anarquistas proponiendo la formación del Frente Unico sobre la base de un programa que propugnaba la lucha contra la rebaja de salarios y contra la prolongación de la jornada de trabajo, la destitución de Martínez Anido y Arlegui en Barcelona y de

Regueral en Bilbao, la amnistía a todos los presos políticos, la supresión de la pena de muerte y el fin de la guerra en Marruecos.

Las direcciones nacionales del PSOE y UGT se opusieron a toda idea de conjugar los esfuerzos de los trabajadores y cursaron a sus secciones la orden de no participar en mítines con los comunistas.

En noviembre de 1922, en el XV Congreso de la UGT fueron expulsados veintinueve sindicatos dirigidos por comunistas. Los líderes socialistas necesitaban alejar a los comunistas de las masas de la UGT, aislarlos, impedir la extensión de su influencia entre los obreros. El paso dado por los dirigentes de la UGT fue un rudo golpe asestado al movimiento obrero; ahondaba la división de sus filas y lo debilitaba en momentos de ofensiva de la reacción contra los trabajadores.

Al mismo tiempo que luchaba por la unidad, defendiendo los intereses de las masas laboriosas, el Partido intervenía activamente en los grandes problemas políticos planteados ante el país. Uno de los más agudos era el de la guerra de Marruecos. En el verano de 1921, después del desastre de Annual que conmovería a España entera, el Partido Comunista de España [37] lanzó un llamamiento a la huelga general exigiendo el cese de la guerra. Este llamamiento encontró amplio eco en el País Vasco, donde los obreros salieron a la calle para impedir el embarque de tropas con destino a tierras africanas.

La policía detuvo por este motivo a las direcciones de los dos Partidos Comunistas (todavía no se había realizado la unificación) y a los dirigentes de la Juventud Comunista. La prensa del Partido fue suspendida, los locales clausurados. Pero el Partido prosiguió sin desmayo la lucha contra la política colonialista y aventurera de la Monarquía; tuvo en todo momento una posición firme en la cuestión marroquí, pronunciándose contra la continuación de la guerra y por la independencia de Marruecos. Esta posición era la única que respondía a los intereses del pueblo marroquí y a los de España; y no sólo porque permitiría poner fin a la matanza en Africa, sino también acabar con la política colonialista de la reacción hispana que varias veces ha utilizado a las fuerzas legionarias y marroquíes para reprimir la lucha revolucionaria de los obreros y campesinos de nuestro país.

Las hondas repercusiones del desastre de Annual y la ofensiva económica patronal contra los trabajadores aumentaron la indignación de las masas. La ola huelguística volvió a cobrar vigor a comienzos de

1923, con la participación activa de los comunistas, que mantenían en alto la bandera del Frente Unico.

En la primavera de 1923 se declararon en huelga los mineros de Puertollano, alcanzando el paro a unos dos mil obreros. Tres mil mineros de Serón (Almería), dirigidos por los partidarios de la Internacional Sindical Roja, mantuvieron la huelga cerca de tres meses.

En Asturias, gracias a la lucha del Sindicato Unico obtuvieron los mineros un aumento de jornal.

Los mineros vizcaínos fueron a una importante huelga dirigida por el Sindicato Minero, orientado por los comunistas. Participaron en ella unos seis mil obreros. El paro duró más de tres meses, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera.

Rebrotó la lucha reivindicativa en Madrid, y en Barcelona [38] el movimiento huelguístico abarcó a decenas de millares de trabajadores.

Incapaz de impedir las acciones obreras, la burguesía española (sobre todo la de Cataluña), se lanzó, siguiendo su ya conocida tradición, en brazos de la autocracia terrateniente, a fin de imponer un «gobierno de mano dura» que redujese al silencio a la clase obrera.

Contra la Dictadura primorriverista

A mediados de 1923 el peligro de una dictadura militar ya había adquirido en España contornos amenazadores.

En Italia y Bulgaria se habían instaurado regímenes fascistas; en Hungría, Polonia y otros Estados entronizábanse dictaduras reaccionarias. En casi todos los países capitalistas de Europa el movimiento obrero se replegaba, extinguiéndose la potente ola revolucionaria que sucedió a la guerra imperialista y a la Revolución Socialista de 1917.

En su IV Congreso, la Internacional Comunista analizó estos cambios operados en la situación internacional, llamando a los trabajadores de todos los países a unirse.

Nuestro Partido, reunido en su Segundo Congreso, en Madrid, el 8 de julio de 1923, advirtió a los trabajadores españoles del peligro reaccionario, reiterando sus apelaciones a la unidad. El Congreso denunció la táctica del terror individual, que nada tiene que ver con la lucha

revolucionaria. Exhortó a los comunistas a defender firmemente la unidad en los sindicatos.

En el Congreso se subrayó que el Frente Unico del proletariado era una necesidad imperiosa del momento; una clase obrera dividida no podría conjurar la amenaza fascista que se cernía sobre España. Estas fueron las ideas que presidieron las deliberaciones del Segundo Congreso. La lucha por la creación del Frente Unico fue la tarea central que se planteó ante todo el Partido.

Pero, una vez más, los llamamientos del Partido en pro del Frente Unico chocaron con la resistencia de los dirigentes socialistas. [39]

El 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio en Barcelona un golpe de Estado, exponente del fracaso de la Monarquía para gobernar el país según las normas constitucionales que ella misma se diera en 1876.

Desde el punto de vista de su naturaleza de clase, el Directorio Militar representaba la dictadura de la aristocracia terrateniente y de la oligarquía financiera, las fuerzas más violentamente contrarrevolucionarias de la sociedad española, que intentaban detener el desarrollo democrático de nuestro país recurriendo a métodos y formas inspiradas en el fascismo italiano.

El bloque terrateniente burgués, apoyándose en la podrida Monarquía que garantizaba su dominación, pretendía salvar su situación mediante un Poder dictatorial, conjugando el mantenimiento de la gran propiedad terrateniente, de origen feudal, con las exigencias del desarrollo capitalista. La dictadura prolongaba artificialmente el predominio político de la aristocracia terrateniente, lo que explica la agudización violenta de las contradicciones dentro del régimen primorriverista, contradicciones que, al fin y a la postre, llevaron al derrumbamiento no sólo de la dictadura, sino de la Monarquía misma.

La oligarquía financiera, sirviéndose de Primo de Rivera, aceleró la concentración de la industria y la creación de monopolios, recurriendo al capitalismo monopolista de Estado; estimuló igualmente la penetración del capital extranjero.

Económicamente, las consecuencias de la dictadura fueron el empobrecimiento de las masas trabajadoras y el enriquecimiento de los grandes terratenientes, de la gran industria y de la Banca.

Desde el primer momento, el Partido Comunista tuvo una visión certera y una actitud clara ante la instauración de la dictadura primorriverista.

El día 13 de septiembre, al conocerse el golpe de Estado, el Partido reiteró sus llamamientos a formar el Frente Unico para la lucha contra la dictadura militar. Aquella misma tarde se reunían en Madrid delegados del Partido Comunista con representantes de la Federación Madrileña de la CNT y de [40] los grupos anarquistas, quedando constituido un Comité de Acción contra la Guerra y la Dictadura, que dio a la publicidad el siguiente manifiesto:

«Los representantes de la Federación Madrileña de los Sindicatos Unicos, de la Federación de grupos anarquistas y del Partido Comunista de España, se han reunido ayer tarde para examinar los últimos acontecimientos políticos y la situación que han creado a la clase obrera. Todos están de acuerdo para declarar que la instauración de la dictadura militar prepara el reforzamiento de la campaña de Marruecos y constituye una terrible amenaza para la vanguardia del proletariado español y para la vida misma de los sindicatos obreros. La reacción se prepara a perseguir a todas las organizaciones del movimiento proletario.

Estas deben prepararse a defender su existencia. Con este fin, los representantes de dichas organizaciones se constituyen en un «comité de acción contra la guerra y la dictadura». Este comité se plantea como tarea emprender los trabajos indispensables para la realización de la unidad en la acción que incumbe a la clase obrera emprender urgentemente.

Los representantes de las organizaciones obreras arriba mencionadas, consideran que la necesidad de la defensa obliga a los obreros a olvidar temporalmente las diferencias ideológicas o tácticas que les separan. Por consiguiente, van a dirigirse a los Comités Nacionales de la UGT y del PSOE, llamándoles a organizar en común la lucha por la defensa de los derechos respetados inclusive en los períodos de más brutal represión. En esta hora, cuando se afirma la cobardía general, y cuando el poder civil abandona sin lucha su puesto al poder militar, la clase obrera debe hacer sentir su presencia y no dejarse piso-

tear por hombres que quieren transgredir todas las formas del derecho actual, de los privilegios adquiridos en el curso de largas y encarnizadas luchas.» [41]

Las direcciones del PSOE y de la UGT, no sólo respondieron a este llamamiento con una negativa rotunda a la unidad de acción de la clase obrera, sino que se lanzaron por la vía de la colaboración con la dictadura.

Los dirigentes reformistas de la UGT colaboraron en la persecución de los sindicatos revolucionarios dirigidos por comunistas, y en más de una ocasión, como en el caso del Sindicato de Mineros de Vizcaya, recibieron de manos de la policía las llaves de los locales de estos sindicatos clausurados. Los dirigentes socialistas ayudaron a la dictadura a crear los Comités Paritarios, que implicaban la aplicación del arbitraje obligatorio en los conflictos obreros y la ilegalidad de las huelgas. Dirigentes socialistas ocuparon puestos en el Consejo de Estado, Consejo de Trabajo, Consejo Interventor de Cuentas del Estado, Comisión Interina de Corporaciones, Consejo Técnico de la Industria Hullera, Tribunal de Cuentas y otros organismos.

Los dirigentes reformistas se negaron sistemáticamente a participar en ninguna de las frecuentes acciones iniciadas por grupos de la oposición contra la dictadura. Y no movieron un dedo para derribarla, ni salieron de su obediente pasividad hasta el momento en que ya no era posible permanecer sordos a las demandas de las fuerzas dispuestas a derribar la Monarquía. Primo de Rivera gustaba de elogiar «la lealtad» de los dirigentes socialistas y la premiaba con ventajosos enchufes y sinecuras.

Que la colaboración de los dirigentes reformistas con la dictadura no respondía a la voluntad de los obreros socialistas y ni aun siquiera a la de dirigentes muy destacados, lo demuestra la actitud hostil de Prieto y otros, y el hecho de que en algunos lugares, como Pontevedra, los socialistas crearon con los comunistas un Comité de Acción contra la Guerra y la Dictadura. En Vizcaya, por iniciativa de los comunistas, se realizó una huelga general de protesta de 24 horas contra el golpe militar, en la que participaron los obreros socialistas.

Entre tanto, la violencia represiva del Directorio contra los trabajadores revolucionarios se acentuaba día a día, sobre todo a partir de octubre de 1923. Los líderes anarquistas no [42] resistieron la presión y,

bajo su influjo, la CNT suspendió su actividad, clausuró sus locales y suprimió su prensa. Este acto de «autodisolución» constituyó una derrota ante el enemigo, pues privaba a los trabajadores confederales de sus organizaciones de defensa cuando mayor era su menester.

Tres de los sindicatos cenetistas más importantes de Barcelona –metalúrgico, transporte y textil– protestaron contra esta decisión de renunciar a la lucha, que dejaba las manos libres al dictador. En Sevilla, importantes sindicatos de la CNT se negaron a disolverse; continuaron luchando de una forma autónoma. Sus principales dirigentes –entre ellos José Díaz–, ardientes defensores de la Revolución Socialista Rusa, se fueron acercando cada vez más al Partido Comunista, en cuyas filas ingresaron años más tarde.

En noviembre de 1923 fueron detenidos varios camaradas del Comité Central del Partido y de las Juventudes Comunistas. En diciembre, Primo de Rivera montó una provocación policíaca de grandes vuelos contra el Partido. Un comunicado de la Dirección General de Seguridad decía que había sido descubierto un complot que debía estallar el día 28 de aquel mes en España y Portugal simultáneamente. Con tan falaz pretexto, se practicaron detenciones en masa de comunistas en Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, San Sebastián, Bilbao y Asturias. La policía asaltó los locales del Partido, que fueron saqueados y clausurados.

En 1924, se recrudeció la represión; se juzgaba a los militantes del Partido en consejo de guerra; especialmente en Bilbao y Asturias, la represión era brutal.

Afirmaba por un lado la reacción, coreada por los reformistas, que el Partido Comunista era un grupo insignificante sin influencia en el país. Pero su obsesión por la actividad de nuestro Partido era tal que el dictador declaraba en 1923: «Yo vengo a luchar contra el comunismo.» Y en 1925, Primo de Rivera y Alfonso XIII decían jactanciosamente a la prensa francesa: «El comunismo es un peligro que el Directorio ha sabido conjurar deteniendo a los principales militantes revolucionarios». Lo de las detenciones de comunistas era rigurosamente cierto y se llevaba a cabo con tal saña que en un breve espacio de tiempo, nuestro Partido viose obligado a [43] renovar cinco veces el Comité Central por ser detenidos sus componentes. Pero el Partido tenía reservas inagotables en la clase obrera. Nuevos grupos de lucha-

dores surgían ininterrumpidamente para ocupar el puesto de los que caían en prisión. Con el apoyo y la adhesión abnegada de los mejores hijos de la clase obrera y de las masas laboriosas, el Partido pudo hacer frente al terror y a las persecuciones, a pesar de su juventud y de su escasa experiencia. Si de verdad hubiera sido, como afirmaban la reacción y los dirigentes reformistas, «un cuerpo extraño en la sociedad española», es evidente que no hubiera resistido la prueba, y que habría desaparecido de la escena política sin dejar rastro. Pero el Partido Comunista de España no pudo ser destruido ni entonces ni después, porque para ello hubiera sido preciso destruir a la clase obrera.

Por la unidad ideológica

El Partido Comunista quedó integrado, después de la unificación, por hombres provenientes de la Federación de Juventudes Socialistas y del ala izquierda del Partido Socialista. Estos hombres no pudieron desprenderse automáticamente de sus concepciones, socialdemócratas, unos, de tendencias extremistas y sectarias, otros, ni corregir de la noche a la mañana su insuficiente conocimiento de los principios y de la táctica comunistas. A ello se añadía el confusionismo de grupos o individuos aislados que venían al Partido con una formación pequeño-burguesa y anarquizante, que se resistían al centralismo democrático y a la disciplina comunista, que no comprendían la necesidad de la unidad ideológica del Partido y, por lo tanto, la incompatibilidad de éste con la existencia de fracciones o grupos.

En esta situación, el joven Partido Comunista de España fue lanzado a la ilegalidad. Tal circunstancia haría más larga y laboriosa la obligada etapa de unificación ideológica y de consolidación del Partido como un auténtico Partido marxista de nuevo tipo. [44]

En cuanto inició sus primeros pasos y necesitó fijar su línea política, el Partido tuvo que enfrentarse con las tendencias izquierdistas que tan gráficamente calificara Lenin de «enfermedad infantil del comunismo».

En aquel período, el izquierdismo infantil, el sectarismo, era un serio peligro, ya que, en el esfuerzo por deslindarse del oportunismo socialdemócrata, era fácil caer en un extremismo vacuo, que podía aislar al Partido de las masas.

En los primeros tiempos, las manifestaciones más destacadas del sectarismo en el Partido Comunista de España podían resumirse así:

Los extremistas negaban la necesidad de permanecer en la UGT, so pretexto de que ésta se hallaba bajo la dirección de los reformistas, y se pronunciaban por el boicot a los sindicatos. En esencia, metían en el mismo saco a los líderes reformistas y a los trabajadores de la UGT, declarando que «no había nada que hacer con ellos». De esta suerte, renunciaban a la educación política de los trabajadores, aún engañados por sus dirigentes oportunistas, y distanciaban al Partido de las grandes masas no comunistas.

Los extremistas propugnaban el abstencionismo electoral y el boicot al Parlamento, frente a quienes defendían la posición leninista de utilizar las elecciones y el Parlamento para denunciar a la reacción, dar a conocer ampliamente el Programa y las soluciones del Partido Comunista y combatir no sólo «desde abajo», sino también «desde arriba», es decir, desde los órganos legislativos, por los intereses del proletariado y del pueblo en general, por la democracia y el socialismo.

Finalmente, los extremistas se oponían a la política de Frente Unico que preconizaba la Internacional Comunista.

Estas tendencias extremistas, sectarias, fueron combatidas por el Partido en el Primero y Segundo de sus Congresos, en los cuales se aprobaron decisiones de gran importancia, como la de reforzar la labor sindical en el seno de la UGT y la CNT; la de luchar por la fusión de estas dos grandes centrales sindicales para dotar a los trabajadores de una Central Sindica Unica; la de participar en las elecciones, y, en fin, la de aplicar la política del Frente Unico. [45]

El breve espacio de tiempo que separó al Primer Congreso del Segundo, fue rico en enseñanzas para los comunistas. Al aplicar la táctica de unidad de acción en las luchas obreras, ésta apareció como la única justa y eficaz.

Los resultados alentadores de la política del Frente Unico contribuyeron a que muchos de los camaradas que en el Primer Congreso se resistieron a la unidad de acción con los trabajadores socialistas, modificaran su opinión. Sin embargo, hubo un grupo aferrado a posiciones sectarias, que se lanzó a la lucha fraccional, y fue, por ello, excluido del Partido en el Segundo Congreso. Algunos de sus componentes

rectificaron, más tarde, su posición errónea y se reincorporaron a las filas comunistas.

La brutal represión de la dictadura creó serias dificultades al Partido. Este, en su conjunto, siguió en la brecha, dando ejemplo de firmeza revolucionaria; pero no todos los que en los primeros momentos se alistaron bajo sus banderas fueron capaces de mantenerse en él ni de resistir la dura prueba.

La lucha contra las tendencias sectarias permitió al Partido vincularse a las masas socialistas y anarquistas, y encabezar grandes acciones reivindicativas y políticas. Sin embargo, en el curso de la lucha por corregir las tendencias sectarias se incrementó la influencia en la dirección del Partido de algunos hombres, procedentes del PSOE, que no habían logrado desprenderse del lastre oportunista. En la dirección elegida por el Segundo Congreso figuraban César R. González, Secretario General, Ramón Lamonedá y otros, quienes, ante las duras persecuciones primorriveristas, trataban de imponer al Partido una política oportunista de renuncia a la lucha.

En apoyo de su postura argüían que «había que conservar las fuerzas para el momento decisivo» y «esperar tiempos mejores». Es verdad que el Partido tiene que saber replegarse cuando las condiciones lo exigen. Pero el repliegue no es la espera pasiva de tiempos mejores, sino la continuación de la lucha con nuevas formas. En esa labor oscura y anónima, pero heroica, es cuando se pone a prueba el temple y la constancia revolucionaria de los comunistas. Y sin ese trabajo paciente para infundir a la clase obrera confianza en sus [46] fuerzas y prepararla a través de luchas y acciones parciales, el proletariado y el Partido no estarían en condiciones de cumplir con su misión de vanguardia cuando llegase el «momento decisivo».

Ante la justa crítica a la pasividad de la dirección elegida en el Segundo Congreso, la reacción de algunos de sus integrantes, como César R. González, Ramón Lamonedá, Rodríguez Vega y otros, fue dimitir sus cargos. Más tarde se reintegraron al regazo, sin duda más cómodo, del Partido Socialista.

En aquel período se produjo una crisis de dirección en el joven Partido Comunista de España. Las bajas causadas por la represión eran numerosas. Los mejores cuadros del Partido estaban en la cárcel. A ello se agregaban pérdidas tan dolorosas para el Partido y el movimiento

obrero, como la muerte de Virginia González, en 1923, y de Antonio García Quejido, en 1927.

La incorporación de Maurín y de un grupo de sindicalistas de Barcelona, que podía haber supuesto el robustecimiento del Partido con fuerzas nuevas, vinculadas al proletariado catalán, contribuyó, bien al contrario, a multiplicar las dificultades. Maurín resultó ser un arribista político y no un militante revolucionario. En sus planes entraba tomar la dirección del Partido en sus manos para convertirlo en una organización nacionalista, pequeño-burguesa, al servicio de turbias causas.

La inestabilidad de la dirección del Partido en aquel tiempo contribuyó a debilitar la normal relación de los órganos directivos con las organizaciones locales, que fueron aislándose y encerrándose en sí mismas. Todo ello, sumado a la deserción de aquellos dirigentes que no supieron desprenderse del lastre oportunista ni arrostrar los sacrificios que comportaba la lucha en las filas comunistas, facilitó por reacción el triunfo de las tendencias sectarias.

Con la llegada a la dirección del Partido, en el año 1925, de José Bujlejos y otros jóvenes militantes, que arrastraban consigo una carga considerable de izquierdismo, se inició una etapa de predominio de las tendencias sectarias, que sólo pudo ser remontada en 1932, después del IV Congreso Nacional, [47] con la formación de una nueva dirección del Partido encabezada por José Díaz, Dolores Ibárruri y otros camaradas.

A través de estas crisis de crecimiento; en la compleja lucha por la unidad ideológica interna, en la lucha cotidiana por las reivindicaciones de los trabajadores, en la resistencia a las persecuciones policíacas, en las cárceles y en el trabajo clandestino, fueron formándose comunistas fieles al marxismo, intransigentes frente al reformismo, indoblegables en las torturas y ante los tribunales, cimiento y base sobre los que se levantó el Partido Comunista de España.

En vísperas de la crisis revolucionaria

La acción de las contradicciones internas que corroían a la dictadura empezó a agrietar la base sobre la que se levantaba.

La más seria debilidad de Primo de Rivera era que no contaba con una base de masas en qué apoyarse. Sus intentos de transformar la «Unión Patriótica» en un Partido fascista de masas fracasaron rotundamente.

Se produjeron varios «complots» militares y civiles. Pero la lucha fundamental por el derrocamiento de la dictadura y de la Monarquía la libraban la clase obrera y los campesinos con huelgas y acciones poderosas.

En 1927 volvía a iniciarse un ascenso del movimiento obrero. A partir de entonces y hasta la caída de la dictadura, se sucedieron importantes huelgas económicas y políticas en Asturias, el País Vasco, Cataluña y Andalucía. En el campo andaluz, en donde la influencia comunista empezaba a extenderse, surgieron comités de braceros; los obreros agrícolas y campesinos pobres llegaron en su lucha hasta la ocupación de algunos cortijos.

Se reorganizaron los sindicatos, los obreros prescindían de los comités paritarios y luchaban directamente por sus reivindicaciones y contra el odiado régimen.

En el año 1929, la oposición contra la dictadura fue tomando mayor amplitud y vigor. Se levantaba por todo el [48] país una oleada popular incontenible, antidictatorial y antimonárquica.

En esa situación, en agosto de 1929, se reunió el III Congreso del Partido Comunista de España. Debido a represión de la dictadura, el Congreso tuvo que celebrarse en París.

Todos los hechos de la vida nacional demostraban que España estaba en vísperas de una revolución. Pero, ¿cuál sería su carácter? ¿Qué papel correspondía desempeñar en ella a la clase obrera y al Partido Comunista? Tales eran las grandes cuestiones con las que se enfrentaba el Partido en el momento de su III Congreso.

Este definió acertadamente el carácter de la revolución que se gestaba en España como una revolución democrático-burguesa. Y reafirmó la tesis leninista de que

«Sólo el proletariado podía conducir consecuentemente a las restantes capas trabajadoras hasta la victoria definitiva de la revolución democrático-burguesa.»

Se basaba esta posición en una apreciación acertada de la realidad económica, social y política de España, y en la aplicación a esa realidad de los principios marxistas leninistas.

El Partido Comunista consideraba que España sólo podría llegar al socialismo a través de la etapa de la revolución democrático-burguesa,

la cual, en esencia, se presentaba como una revolución agraria anti-feudal en lo económico y antimonárquica en lo político.

La etapa de la revolución democrático-burguesa era insoslayable y sólo a través de ella podía forjarse una alianza de la clase obrera, los campesinos y otras capas populares, capaz de derrotar al sector más reaccionario de la sociedad española –la aristocracia latifundista–, destruir los fundamentos de su poderío económico –la gran propiedad territorial–, y privarle de su instrumento de dominación –el Estado monárquico–.

Las fuerzas motrices de la revolución democrático-burguesa [49] eran la clase obrera y los campesinos, clases interesadas en romper resueltamente con el viejo régimen, en arrebatar el Poder político a las clases caducas y en tomarlo ellas en sus manos, para asegurar la victoria definitiva de la revolución.

Lenin, partiendo de las ideas de Carlos Marx sobre «la revolución ininterrumpida» y sobre la necesidad de fundir la revolución proletaria con la revolución campesina, había llegado a la conclusión –confirmada por el triunfo de la revolución en Rusia– de que en aquellos países capitalistas donde subsisten restos semif feudales y en los que está aún pendiente la revolución burguesa, la dirección de esta revolución corresponde, no a la burguesía, sino al proletariado.

En esa gran enseñanza leninista se basaba la resolución política del III Congreso del Partido Comunista. Este destacaba, como eje de toda su estrategia política, la necesidad de asegurar el papel dirigente del proletariado en la revolución democrático-burguesa.

Si la clase obrera actuaba como fuerza dirigente, el triunfo de la revolución democrática daría el Poder, no a la burguesía, sino a los obreros y a los campesinos. El Partido Comunista lanzó la consigna de un Gobierno Obrero y Campesino, cuya misión sería llevar hasta el fin las tareas de la revolución democrática, y despejar así el camino para el avance hacia el socialismo.

El III Congreso acordó que, en aquellos momentos de grandes responsabilidades para el Partido, era urgente robustecerlo política y orgánicamente, reforzar la disciplina en sus filas, restablecer el régimen de democracia interior, ampliar los órganos dirigentes, impulsar la actividad política de todo el Partido. Se decidió prestar una atención espe-

cial a las regiones industriales, para enraizar el Partido en los centros proletarios fundamentales del país.

Los acuerdos adoptados en el III Congreso sólo fueron aplicados muy parcialmente. La persecución policíaca creaba condiciones muy difíciles para el desarrollo del trabajo del Partido. Y el predominio del sectarismo en su dirección constituía un freno para el crecimiento del Partido, para su ligazón con las masas trabajadoras. [50]

La etapa del Gobierno Berenguer

El 28 de enero de 1930 cayó Primo de Rivera bajo el peso de la lucha antidictatorial en la que participaban las principales fuerzas del país. Frente al dictador se establecía una coincidencia nacional en las batallas de la clase obrera y de los campesinos, en las protestas de amplios sectores burgueses, en las acciones de los estudiantes y de intelectuales como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, los hermanos Ortega y Gasset, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y otros más. Volvieron la espalda a Primo de Rivera hasta los capitanes generales que siete años antes le elevaron al cargo de dictador.

Las clases dominantes españolas trataron de evitar que la crisis política del régimen desembocara en una situación revolucionaria. Creyeron salir del paso con un cambio de fachada que dejara intacto el edificio de la Monarquía.

El gobierno Berenguer, que sucedió a Primo de Rivera, restableció parcialmente las libertades públicas, autorizó el retorno de los emigrados políticos, devolvió a la labor docente a los catedráticos sancionados por la dictadura, amnistió a los presos políticos y anunció su propósito de convocar elecciones legislativas, retornando a las normas constitucionales. Pero estas medidas no habían de zanjar la crisis política que se desarrollaba en España. Esta alcanzaba de lleno a la Monarquía.

Ante la inminencia de un cambio revolucionario, todas las clases iban definiéndose y creando los partidos que pudieran ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Las clases que constituían el soporte político y social de la Monarquía se encontraron sin sus instrumentos tradicionales de acción política: la dictadura había suprimido a los «partidos turnan-

tes». La burguesía liberal desertaba en masa del campo alfonsino. Se aceleraba la formación de nuevos partidos de la burguesía. La pequeña burguesía se incorporaba a los partidos republicanos de izquierda.

Berenguer toleró la actividad de los partidos republicanos, de las centrales sindicales y del Partido Socialista, pero [51] mantuvo todo el rigor prohibitivo contra el Partido Comunista de España. La policía secuestraba las ediciones de la prensa del Partido, prohibía sus reuniones y actos y nuevamente llenaba las cárceles de comunistas.

A principios de marzo de 1930, el Partido celebró clandestinamente, en Bilbao, una Conferencia Nacional, que fue denominada, por razones de conspiración, «Conferencia de Pamplona».

En ella se reafirmó la acertada orientación del III Congreso sobre el papel dirigente del proletariado en la revolución democrática y se subrayó que la tarea esencial del Partido, después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, era proseguir la lucha contra el gobierno de Berenguer y por el derrocamiento de la Monarquía.

La Conferencia dedicó especial atención al problema sindical; se pronunció por la creación de una sola central sindical que abriese sus puertas a todos los trabajadores, fuesen cuales fueren las ideas políticas que profesaran; una central única, regida democráticamente y ligada por lazos solidarios al movimiento sindical revolucionario de todo el mundo.

Teniendo en cuenta la pasividad de la UGT y la colaboración de sus líderes con la dictadura, el Partido consideraba que este objetivo podía lograrse reconstruyendo la CNT sobre una nueva base.

Al propio tiempo, proponía la creación de comités obreros en los lugares de trabajo, a fin de facilitar un movimiento de Frente Único entre las masas.

La Conferencia acordó incorporar al Comité Central a la camarada Dolores Ibárruri, que ya participaba en la dirección del Partido en el País Vasco.

Sin embargo, en el Comité Ejecutivo predominaban Bullejos y Trilla, quienes dirigían aplicando métodos autoritarios e incurrían en serios errores. Negaban la etapa burguesa de la revolución e identificaban la crisis del régimen monárquico con la crisis del sistema capitalista. De ahí su política sectaria que alejaba al Partido de las masas.

Esta orientación sectaria no pudo, pese a todo, impedir que, después de la Conferencia de Pamplona, se reavivase la actividad del Partido, principalmente en las organizaciones de [52] Sevilla y del País Vasco. En el curso de 1930 los obreros sevillanos dieron pruebas de combatividad y de espíritu revolucionario y estimularon con su ejemplo al proletariado industrial y agrícola de toda Andalucía. En el mes de abril, los portuarios sevillanos, dirigidos por los comunistas, se declararon en huelga y obligaron a la patronal a aceptar sus reivindicaciones. Esta fue la primera victoria importante de la lucha reivindicativa de los trabajadores después de la caída de la dictadura. La organización sevillana del Partido experimentó un rápido crecimiento.

Gracias a la actividad de un núcleo de dirigentes de gran prestigio en los medios obreros, del que formaban parte José Díaz, Antonio Mije, Manuel Delicado, Saturnino Barneto y otros trabajadores andaluces, el Partido había logrado importantes posiciones sindicales.

La organización del País Vasco hizo en aquel período un gran esfuerzo para encabezar el movimiento reivindicativo de la clase obrera y dirigió manifestaciones contra el paro y huelgas económicas y políticas. Al frente de la organización se hallaban Leandro Carro, Dolores Ibárruri, Aurelio Aranaga, Jesús Larrañaga, Bueno y otros camaradas.

La necesidad de disponer de un órgano de prensa, del que entonces carecía el Partido, era apremiante. El 23 de agosto vio la luz el primer número del semanario «Mundo Obrero» nuevo órgano del Partido, que un año después –el 14 de noviembre de 1931– se convirtió en el diario central del Partido Comunista de España.

La intensificación de la actividad del Partido provocó una nueva ola de persecuciones. En el verano de 1930 se hallaba en la cárcel la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité Central del Partido.

El general Mola, Director General de Seguridad del Gobierno Berenguer, creó un organismo especializado en la labor de provocación y persecución contra el Partido Comunista, la llamada «Sección de Investigación Comunista», ligada con los servicios policíacos anticomunistas de otros países.

Esta ofensiva policiaca conjugóse con el ataque desatado por los trotskistas contra la unidad del Partido. Trotski, expulsado de la Unión

Soviética en 1929 por su labor [53] contrarrevolucionaria, que tendía a restablecer el capitalismo, trasladó la lucha a la palestra internacional, intentando crear una plataforma común para todos los renegados y abrir un cisma en la Internacional Comunista. En España los trotskistas abrieron fuego contra la política del Partido en todos los problemas fundamentales de la revolución, tratando de apoderarse de la dirección del Partido para la realización de sus fines contrarrevolucionarios.

Los intentos trotskistas de dividir el Partido Comunista de España resultaron fallidos. El Partido se mantuvo unido y fiel a la Internacional Comunista.

Sin embargo, en Cataluña, Maurín consiguió con malas artes arrastrar a una parte de la Federación Comunista Catalano-Balear. Esta desgarradura tuvo consecuencias dolorosas para el desarrollo del Partido en Cataluña, si bien, a pesar del revés temporal, un núcleo de firmes militantes reorganizó las filas del Partido.

A mediados de 1930 se sentían ya en España las consecuencias de la crisis económica mundial. Los sectores más afectados eran la agricultura y la industria extractiva, que trabajaban, en gran medida, para la exportación. Al mismo tiempo se agravaba la situación de las finanzas del país, desfondadas ya por la dictadura. La baja de la peseta adquiría caracteres alarmantes. La economía española, ya de suyo precaria, se vio atenazada por el comienzo de una triple crisis: agrícola, industrial y monetaria. La situación de la población laboriosa empeoró. Aumentó el paro, se acentuó la carestía. La crisis lanzó de lleno a la lucha a la clase obrera.

El movimiento obrero pasó a la ofensiva; las consignas económicas dominantes al principio, fueron cediendo el paso a las consignas políticas antimonárquicas.

Con el incremento de la actividad de la clase obrera, la crisis política del régimen desembocó en una situación revolucionaria. La lucha obrera contagió a las demás clases populares. Cobró de nuevo intensidad la acción protestataria de los estudiantes, quienes, ya en la primavera habían sostenido acciones como la de la Facultad de San Carlos. El Ateneo madrileño, presidido por Azaña, era uno de los más caracterizados centros de la actividad antimonárquica. [54]

Las raíces de esta situación revolucionaria se hallaban en las contradicciones irreconciliables del sistema económico, social y político del país; además, las repercusiones en España de la crisis económica mundial habían agravado estos males y actuado, en cierta forma, de acelerador de la revolución.

La contradicción que en aquel tiempo aparecía en primer plano, el eje en torno al cual giraba la lucha política, era la contradicción entre la aristocracia latifundista, estrechamente entroncada a la oligarquía financiera –y cuya dominación encarnaba la Monarquía–, y el pueblo español en su conjunto. Esta contradicción, que ya había provocado la situación revolucionaria de los años 1917-1920, fue también la causa generadora de la iniciada en 1930. Por los problemas planteados ante el país y por las clases que ponía en movimiento, la situación revolucionaria de 1930 era, como señalaba el Partido Comunista, el anuncio de la revolución democrático-burguesa.

Las fuerzas que estaban objetivamente interesadas en esta revolución abarcaban una gama muy amplia: el proletariado y los campesinos, la pequeña burguesía urbana y la intelectualidad progresiva, el movimiento nacional de Cataluña, Euzkadi y Galicia y también la burguesía no monopolista en general.

¿Qué clase iba a desempeñar el papel dirigente en la revolución democrática?

El Partido Comunista había subrayado que sólo bajo la dirección de la clase obrera, aliada a los campesinos y a otras capas populares, podría la revolución democrática triunfar plenamente. Pero el Partido no había conquistado la suficiente base de masas para hacer triunfar su punto de vista.

La clase obrera estaba en su mayoría bajo la influencia de los dirigentes socialistas y anarcosindicalistas, que ni siquiera se plantearon disputarle las riendas del movimiento a la burguesía.

Esto explica que los partidos republicanos burgueses logran apoderarse de la dirección del movimiento revolucionario en 1930; y mientras las fuerzas obreras permanecían divididas, la burguesía se apresuró a agruparse en torno a una plataforma común. [55]

El 17 de agosto tuvo lugar en la capital guipuzcoana una reunión de los jefes del movimiento republicano burgués, en la que se firmó el

célebre Pacto de San Sebastián y se creó un denominado «Comité Revolucionario».

El Pacto de San Sebastián era un hecho político muy importante, por cuanto creaba una amplia coalición de fuerzas para la lucha contra la Monarquía. Pero, de otro lado, tenía una cara negativa: ratificaba el hecho de que la dirección del movimiento antimonárquico quedaba en manos de los partidos burgueses, por la incomprensión y política seguidista del Partido Socialista y del anarcosindicalismo.

En el seno del PSOE se libraba una fuerte pugna en torno a la cuestión de participar o no en el movimiento contra la Monarquía. El grupo acaudillado por Besteiro, Trifón Gómez y Saborit se oponía resueltamente a esa participación. La corriente encabezada por Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos abogaba, en cambio, por la colaboración con los partidos del Pacto de San Sebastián. Su línea se impuso en definitiva en el PSOE y estos tres líderes entraron a formar parte del «Comité Revolucionario». Los dirigentes socialistas en su conjunto, a pesar de sus divergencias, se atuvieron a la vieja concepción oportunista de que en la revolución democrático-burguesa incumbía a la burguesía la dirección del movimiento. Y mientras el Partido Comunista llamaba la atención de las masas sobre los grandes problemas de la revolución democrática, el Partido Socialista los daba de lado, centrando el fuego exclusivamente, al igual que los partidos republicanos burgueses, en el desplazamiento del rey.

Los líderes anarcosindicalistas sostenían una posición parecida. Angel Pestaña, que por aquellas fechas dirigía la organización cenetista, escribía en «Acción» que convenía que fuesen «los hombres de orden, que por su posición social y notoriedad gozan de cierta impunidad, los que combatan por ahora al régimen».

La política del PSOE y del anarcosindicalismo colocó, pues, a la clase obrera a remolque de los partidos burgueses. Y esto lo hacían los dirigentes socialistas y cenetistas precisamente cuando aquella demostraba ser, por la amplitud y el [56] vigor de las huelgas y acciones que llevaba a cabo, la fuerza más combativa y dinámica del país.

En septiembre de 1930 tuvieron lugar huelgas generales, en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid. En octubre estalló otra vez en Bilbao una huelga general de abierta factura política, mientras una ola de huelgas recorría Galicia. En Sevilla, Málaga y Huelva, Valencia, Mur-

cia, Vitoria, Logroño, Barcelona y Badalona, se producían movimientos de marcado matiz revolucionario.

Si de febrero a abril de 1930, el número de huelguistas había sido de 50.000, en septiembre ascendió ya a 200.000, en octubre, a 250.000, en noviembre, a 600.000.

La tensión política era ya en este último mes extraordinaria. En Madrid, el asesinato de varios trabajadores que formaban en el cortejo fúnebre de los obreros víctimas del hundimiento de un inmueble en la calle de Alonso Cano, dio lugar a una huelga general que paralizó la ciudad. En solidaridad, fueron a la huelga los obreros de Alicante, Sevilla, Córdoba, Granada y otras ciudades. Particularmente intensa fue la huelga en Barcelona que se prolongó una semana. En España se manifestaba ya abiertamente la presencia de una crisis revolucionaria.

El filósofo burgués Ortega y Gasset escribía en aquellos días en un diario madrileño su famoso artículo «¡Delenda est monarchia!».

La Monarquía se tambaleaba, en efecto, bajo los poderosos golpes de la clase obrera. Pero los líderes socialistas y anarcosindicalistas no preparaban a ésta para dirigir el movimiento democrático general. Frenaban la acción revolucionaria de las masas populares y propiciaban la táctica del complot militar. Tal actitud exteriorizaba las concepciones oportunistas pequeño-burguesas de los dirigentes socialistas y anarcosindicalistas.

La caída de la Monarquía

Ante el temor de verse desbordado por las masas, el «Comité Revolucionario», salido del Pacto de San Sebastián, [57] decidió señalar la fecha de un golpe militar. Pero esta fecha iba sufriendo, por unas u otras razones, múltiples aplazamientos, lo que hacía desconfiar de la sinceridad revolucionaria del citado Comité.

El 12 de diciembre, en la pequeña guarnición de Jaca, se alzaron en armas dos heroicos capitanes, Fermín Galán y Angel García Hernández, proclamaron la República y marcharon con sus soldados y un puñado de paisanos hacia Zaragoza, donde debían sumárseles otras unidades comprometidas. Pero las esperadas asistencias no aparecieron. Para evitar inútiles derramamientos de sangre, los dos capitanes

se rindieron. Cuarenta y ocho horas después eran fusilados. Alfonso XIII agregaba un nuevo crimen a su historia.

El «Comité Revolucionario» fijó, por fin, la fecha definitiva del golpe militar para el día 15 de diciembre, que había de coincidir con la declaración de la huelga general por parte del PSOE y de la UGT. Cuando amaneció ese día un grupo de aviadores, entre los que figuraba Ignacio Hidalgo de Cisneros, logró adueñarse por breves horas del aeródromo de Cuatro Vientos y volar sobre Madrid, lanzando proclamas republicanas. A las doce de la mañana, cercados por tropas del Campamento de Carabanchel, se vieron obligados a levantar bandera blanca porque, contra lo acordado, ni el 15 ni el 16 los dirigentes socialistas dieron la orden de huelga general a las organizaciones obreras que, impacientemente, esperaban instrucciones de sus dirigentes. Entre los dirigentes socialistas que habían colaborado con la dictadura existían dos corrientes muy acusadas. La de los que creían en la posibilidad de la revolución y la de los que no creían en ella y llegaban incluso a sabotear toda medida preparatoria. La orden de huelga no llegó porque, como se declaró en el XIII Congreso del PSOE, celebrado en 1932, esta orden fue sabotada por los dirigentes socialistas Trifón Gómez, Saborit, Muiño y otros.

A pesar del sabotaje de esos líderes socialistas, en muchas ciudades hubo huelga. En Santander, los obreros lograron apoderarse de algunas armas y sostuvieron luchas en la calle. El movimiento adquirió un carácter enérgico en Euzkadi y Andalucía, donde mayor era la influencia del [58] Partido Comunista. En Bilbao estalló una huelga general. En San Sebastián, los obreros asaltaron el Gobierno Civil. Sobre Sevilla, el Gobierno volcó literalmente todas las fuerzas represivas de la región para aplastar la anunciada huelga. En varios pueblos andaluces, los campesinos proclamaron la República. El Gobernador mandó contra ellos parte de las fuerzas que ocupaban la capital. El Comité Regional del Partido Comunista dio la orden de huelga general en Sevilla a fin de impedir el desplazamiento de las fuerzas represivas, encargadas de sofocar los movimientos campesinos.

El Partido Comunista hizo pública una declaración política en la que analizaba las causas del fracaso del movimiento revolucionario de diciembre. En ella señalaba que la intención de los jefes republicanos y socialistas era impedir las grandes luchas revolucionarias de las ma-

sas, en las cuales el proletariado había de desempeñar un papel decisivo.

«Los jefes republicanos –decía la declaración– sólo querían la abdicación del rey por medio de la intimidación y la presión de los militares... »

«Las dificultades para utilizar las luchas obreras, cada día más combativas, sin dejarlas adquirir un carácter de clase –agregaba– explican las vacilaciones en los medios republicanos, que anunciaban y aplazaban constantemente el movimiento».

El Partido Comunista declaraba que la revolución no podía hacerse con minorías activas, sino con las grandes masas populares, incorporadas a la lucha con consignas claras y encauzadas en el curso de los acontecimientos hacia objetivos revolucionarios. Consideraba, además, que en el Ejército faltó la labor de esclarecimiento político y de organización entre los soldados. Faltó, finalmente, la propia organización de las masas obreras y campesinas en Consejos o Comités de Lucha. Todo esto impidió que el movimiento de diciembre expresara el nivel real de radicalización de las masas y se convirtiera en una ola revolucionaria capaz de barrer a la Monarquía. [59]

Durante los acontecimientos de diciembre, los comunistas dirigieron huelgas y movimientos revolucionarios en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid y en otros lugares. Pero la política sectaria del grupo que encabezaban Bullejos y Trilla impidió al Partido Comunista aparecer ante las masas como una fuerza dirigente nacional.

Esforzándose por diferenciarse de los líderes socialistas, que convertían a la clase obrera en fuerza auxiliar de la burguesía, el Comité Ejecutivo pretendió salvaguardar la independencia política del proletariado con la consigna: «El proletariado debe luchar para sí mismo.» Esta era una consigna izquierdista, errónea, pues para dirigir la revolución democrático-burguesa el proletariado no puede limitarse a luchar «para sí mismo». Debe, por el contrario, formular y defender, de la manera más resuelta, las aspiraciones y los intereses de todas las clases populares; sólo en este caso admitirán éstas su dirección política.

No obstante el fracaso del movimiento de diciembre, los días de la Monarquía estaban contados. Al fusilar a Galán y García Hernández,

Alfonso XIII había fusilado también las últimas ilusiones que pudiera albergar el pueblo en sus pretendidos propósitos de enmienda y deseos de concordia. La Monarquía concitó contra sí el odio de todo el país. Su aparente victoria sobre el movimiento de diciembre era tan solo el preludio de su derrota definitiva.

Para salir del atolladero, el gobierno Berenguer promulgó un decreto convocando elecciones legislativas para el 19 de marzo. Se trataba de un último intento de apuntalar y reforzar la Monarquía con un respaldo parlamentario y constitucional.

Pero el ambiente del país era tal que todas las fuerzas políticas, incluso los viejos políticos conservadores y liberales, rechazaron esa maniobra. La Monarquía quedó totalmente aislada. Berenguer tuvo que presentar su dimisión.

El 18 de febrero formaba Gobierno el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales. El Partido Comunista decidió acudir a las urnas a fin de conquistar una tribuna legal, exponer las aspiraciones democráticas de las masas y explicar al pueblo su política. El Partido combatió las tendencias [60] abstencionistas que se manifestaban entre los republicanos.

Al mismo tiempo publicó un programa electoral, en el que definía su posición ante las tareas fundamentales de la revolución democrática e indicaba los objetivos por los que habría de luchar más tarde, en el período republicano.

Pero el Comité Ejecutivo del Partido Comunista, siguiendo la política errónea que le imprimía el grupo de Bullejos y Trilla, lanzó la consigna de «¡Ningún compromiso!». Esta consigna era una reacción crítica a la táctica de los socialistas, que habían concertado con los partidos republicanos compromisos sin principio, en interés exclusivo de la burguesía. Pero el marxismo revolucionario se diferencia del oportunismo, no por una actitud nihilista hacia todo compromiso, sino por el carácter de los compromisos que contrae con las demás fuerzas, sin exceptuar a los partidos burgueses. La cuestión reside en establecer compromisos que no enajenen la independencia política del Partido ni rebajen la energía y la combatividad revolucionaria de las masas. El proletariado sólo puede obtener la victoria sobre un enemigo poderoso utilizando las menores posibilidades de establecer pactos

con otras fuerzas, a fin de obtener aliados de masas, aunque sean temporales e inestables.

Algunos Comités Regionales del Partido Comunista –entre ellos los de Euzkadi y Andalucía– estaban en desacuerdo con la táctica del Comité Ejecutivo. En Sevilla, Málaga y otros lugares, los comunistas llegaron a establecer pactos electorales con otras fuerzas.

Estos hechos demostraban que en el Partido se desarrollaban corrientes favorables a una táctica más flexible, más en consonancia con las enseñanzas leninistas y con la situación, frente a la postura de aislamiento del Comité Ejecutivo. Semejante aislamiento impidió al Partido recoger la adhesión de miles de trabajadores, que aun simpatizando abiertamente con los comunistas, votaron en fin de cuentas a republicanos y socialistas, para «no debilitar el bloque antidinástico».

La campaña electoral adquirió una gran amplitud y reveló la magnitud de la impopularidad de la Monarquía entre las masas populares. [61]

En la noche del 12 de abril llegaron las primeras noticias que anunciaban un clamoroso triunfo republicano. El día 13, la derrota de la Monarquía era ya evidente. El desconcierto se apoderó de las alturas, mientras el pueblo manifestaba ruidosamente su júbilo. El gobierno Aznar dimitió. El «Comité Revolucionario» publicó un manifiesto en el que exigía la abdicación del rey y su salida de España. Pero esto lo exigía, sobre todo, el pueblo, que se había adueñado de la calle. El día 13, en Eibar, se proclamaba la República. El 14, al mediodía, Maciá levantaba en Barcelona la bandera de la República Catalana. A las tres de la tarde del mismo día, una bandera tricolor ondeaba en lo alto del Palacio de Comunicaciones de Madrid. En el transcurso de unas horas, las masas habían proclamado la República a lo largo y a lo ancho del país. Todo el viejo aparato de opresión de la Monarquía estaba descompuesto y paralizado, las fuerzas armadas se sumaron al júbilo popular o se mantuvieron en una posición expectante, de no beligerancia.

Al atardecer, el «Comité Revolucionario» se erigía en Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

La intensa lucha de la clase obrera y de las masas populares, sus sacrificios y su abnegación habían sido fructuosos.

Un régimen antipopular, con una larga cuenta de violencias y de felonías, era barrido de la escena histórica.

Comenzaba una nueva etapa.

Capítulo Segundo

LA REPÚBLICA

La República de 1931 y sus gobernantes

La forma relativamente fácil en que se produjo el paso de la Monarquía a la República sorprendió a casi todos los políticos españoles, incapaces de pulsar el estado de ánimo de las masas y de valorar la madurez revolucionaria de la situación.

Los propios partidos republicanos y el socialista no habían mostrado gran confianza en el resultado de las elecciones. Y los dirigentes de esos partidos, que de la noche a la mañana se encontraron con el Poder en las manos, luego atribuyeron al sufragio ciudadano las propiedades de un talismán mágico, capaz de provocar automáticamente el desplome de un régimen secular.

Al emitir tales juicios, estos dirigentes olvidaban la lucha del pueblo. La Monarquía no se había derrumbado al simple influjo del sufragio. La piqueta demoledora fue la acción huelguística de los obreros y de los campesinos, las revueltas estudiantiles, la protesta de los intelectuales, la insubordinación de los militares demócratas, la oposición de la burguesía de las ciudades y, en no poca medida, la crisis general del capitalismo que repercutía de nuevo en España. [64]

Las propias elecciones del 12 de abril fueron una forma concreta de esa lucha revolucionaria de las masas. Las elecciones no fueron una consulta electoral de tipo corriente: el pueblo las aprovechó para expresar su aversión a la Monarquía no sólo en las urnas, sino en la calle, donde proclamó espontáneamente la República sin esperar las decisiones de las alturas.

Al desarrollo incruento de la revolución del 14 de abril de 1931 contribuyó la actitud adoptada por algunos representantes de las clases conservadoras, quienes aconsejaron al rey abandonar el país. Cierta que en aquella situación ésta era, prácticamente, la única alternativa: el recurso a la fuerza armada, en el que confiaban el rey y alguno de sus ministros, tropezó con la resistencia pasiva del Ejército y de la Guardia Civil. Estas fuerzas retiraron su apoyo a la Corona ante el espectáculo de un pueblo dispuesto a imponer su libertad. Era tal la exaltación popular y tal el grado de descomposición del Estado monárquico, que no había otra salida para las clases conservadoras que aceptar el cambio institucional, en evitación de un estallido revo-

lucionario que hubiera dado en tierra no sólo con la Corona, sino con sus propios privilegios de clase.

La experiencia del 14 de abril de 1931 tiene un valor permanente para la burguesía y para las masas populares de España. Si las clases dirigentes no provocan la violencia, el pueblo prefiere el camino pacífico para resolver los problemas que el desarrollo social plantea. Y, a su vez, esa vía pacífica, sin violencias destructoras y sin guerra civil, es posible sólo cuando se logra realizar la unidad del pueblo, cuando a través de una lucha diaria y constante van debilitándose y desarticulándose los instrumentos coercitivos de las clases dominantes. Los milagros no existen ni en la vida ni en la Historia.

La proclamación de la República fue un acto progresivo que abría la posibilidad de destruir los obstáculos que entorpecían el avance social y político y retrasaban el florecer económico de España. Pero bien pronto se dejaron sentir las consecuencias del oportunismo del Partido Socialista; de la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera pasó a [65] desempeñar en los gobiernos republicanos el papel de auxiliar de los partidos burgueses dejando la dirección del Estado en manos de la burguesía, de una burguesía que demostró en seguida su falta de voluntad para llevar a cabo las transformaciones democráticas que el pueblo exigía y España precisaba.

Con la proclamación de la República, el bloque de la aristocracia latifundista y de la alta burguesía, que bajo la hegemonía política de la primera había gobernado el país desde la restauración monárquica de 1874, fue desplazado del Poder y sustituido por un bloque de fuerzas que representaba al conjunto de la burguesía, a excepción de algunos sectores del capital monopolista.

Para la burguesía, la participación del Partido Socialista en el Gobierno provisional, constituido el 14 de abril, no tenía otro objeto que asegurarse un apoyo social de masas.

En los primeros gobiernos republicanos, quienes desempeñaban un papel determinante eran los representantes de la alta burguesía: Alcalá Zamora, Presidente del Consejo; Miguel Maura, ministro de la Gobernación, y el aventurero político Alejandro Lerroux, ministro de Estado. Dichos gobiernos, burlando la voluntad y las aspiraciones de las masas, realizaron una política de tolerancia para con las castas a las que el pueblo había desplazado del Poder. Su resistencia a poner fin

rápida­mente a la herencia de injusticias y privilegios legada por la Monarquía, facilitó el reagrupamiento de la contrarrevolución e hizo inevitable la agudización de las contradicciones de clase.

La presión de las masas se reflejó en la eliminación consecutiva de las dos fracciones políticas más derechistas: la conservadora de Miguel Maura y Alcalá Zamora y la radical de Lerroux.

A partir de diciembre de 1931, y con la salida del Partido Radical, la dirección del Gobierno pasó a manos de la pequeña burguesía, que haría su ensayo de Poder asistida también por el Partido Socialista.

No era la primera vez que la pequeña burguesía gobernaba el país. El precedente estaba en la República del 73. Y tanto la Primera como la Segunda República confirmaron la [66] incapacidad de la pequeña burguesía para llevar la revolución democrática hasta el fin.

Intercalada social y políticamente entre un proletariado y unas masas de campesinos pobres fuertemente radicalizados, de un lado, y una aristocracia y una burguesía contrarrevolucionarias, de otro, la pequeña burguesía realizaría forzosamente una política contradictoria y vacilante. Y lo que es más grave, dentro de ese curso oscilatorio prevalecería en la obra de los gobiernos Azaña la inclinación claudicante a granjearse la benevolencia de los de arriba y a reprimir, en cambio, brutalmente los impulsos de justicia social de los de abajo, olvidando que eran los obreros y campesinos, las masas trabajadoras en general, quienes constituían el primer sostén de una auténtica democracia republicana, frente a las fuerzas tradicionales de la reacción española.

Con semejante conducta su fracaso político era inevitable; pues en España, y en aquella situación histórica concreta, se trataba de efectuar y dirigir transformaciones democráticas de hondo contenido social, cuya realización no era posible sin arremeter con denuedo contra los privilegios de las clases superiores y singularmente contra los de la nobleza absentista. Mas, por desdicha, cuando en el país subía la marejada popular en demanda de urgentes reformas, en las Cortes Constituyentes la nave republicana encallaba en el escollo religioso, dejando pendientes los problemas fundamentales de la revolución democrática: Problema agrario, estatutos autonómicos, legislación obrera, democratización del aparato del Estado...

Al Partido Socialista le incumbió una gran responsabilidad en la trayectoria antipopular de los gobiernos pequeño-burgueses. Sus líderes explicaban entonces desde las columnas de «El Socialista» en qué consistía la esencia y la médula de su colaboración gubernamental, de la forma siguiente:

«La colaboración leal de nuestros ministros en el gobierno republicano burgués, implica un sacrificio de todas las horas de cada uno de nuestros principios y de muchas de las conveniencias de los proletarios. Los ministros socialistas ponen su inteligencia y su actividad en estos momentos al servicio de la causa burguesa...» («El Socialista», 27-3-1932). [67]

La postura adoptada por el PSOE no era hija de un error táctico, sino resultado de una trayectoria en el curso de la cual los líderes socialistas, si bien acertaron a conservar una masa fundamentalmente obrera y sinceramente revolucionaria, habían pasado cada vez más abiertamente a una política de colaboración de clases.

La contradicción interna entre esas masas obreras revolucionarias y aquellos líderes oportunistas explica muchos episodios de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Pues si en los partidos socialdemócratas de los países capitalistas desarrollados del Occidente europeo, el oportunismo encontraba una base social en la aristocracia obrera, en España se daban rasgos diferentes. El atraso industrial de España y la falta de colonias altamente rentables impedían a la burguesía española comprar y corromper a una capa del proletariado y convertirla, en la misma proporción que en esos países, en la llamada aristocracia obrera.

De ahí la resistencia que el oportunismo ha encontrado en la base del PSOE. Sin embargo, también en España la burguesía aplicaba el método de comprar y corromper a una parte de los funcionarios obreros mediante cargos oficiales retribuidos en Ayuntamientos, Comités Paritarios, Jurados Mixtos y Ministerios.

La política de los partidos republicanos pequeño-burgueses y del Partido Socialista Obrero Español no sirvió para consolidar la República, sino para defraudar las esperanzas de las masas y dar a la reacción la posibilidad de rehacer sus posiciones.

En defensa de la democracia

El Partido Comunista había combatido en las primeras filas de los luchadores republicanos contra la Monarquía, como uno de los destacamentos más heroicos de la democracia española; pero al proclamarse la República fue objeto de un trato discriminatorio y se vio forzado a sostener una lucha tesonera para conquistar su derecho a la existencia legal.

El Partido salía de once años de clandestinidad o [68] semiclandestinidad seriamente quebrantado: apenas contaba con 800 militantes. Esta debilidad numérica debíase en gran parte a las persecuciones de que se le hizo objeto: ningún partido había sido blanco de tan crueles represalias. A su debilitamiento habían contribuido también, en no pequeña medida, las posiciones sectarias, las consignas estrechas, que no respondían a la situación real de nuestro país.

Bajo la presión de las masas y con la valiosa ayuda ideológica de la Internacional Comunista, el Partido inició la revisión de su política, adaptándola a la situación real y a lo que eran principios normativos comunistas en la revolución democrático-burguesa.

El Partido sostuvo una lucha enérgica en defensa de los intereses de los trabajadores. En sus documentos y en su prensa formuló las tareas históricas de la revolución democrática y las soluciones que correspondían a aquel período histórico.

El Partido advertía contra el peligro de que se intentara ahogar la revolución «en una oleada de debates parlamentarios», actuaba contra el narcótico de las ilusiones parlamentarias y declaraba que la solución de los problemas planteados sólo podría venir de la acción revolucionaria de las masas.

¿Cuáles eran las tareas de la revolución democrática española y cómo las enfocaba el Partido?

El Partido Comunista de España llamaba la atención del país sobre la triste herencia que la República recibía. España figuraba entre los países atrasados de Europa en punto a su desarrollo económico y político. La herencia feudal de la Monarquía era particularmente gravosa en el campo. El latifundismo constituía un freno al desarrollo económico del país y engendraba violentos antagonismos, su peso era agobiador en Andalucía, Extremadura y parte de Castilla. En el resto del campo

español la herencia feudal se manifestaba en sistemas de arriendo y en cargas de origen medieval; así ocurría con los foros en Galicia, Asturias y parte de León, Valladolid, Palencia y Zamora; así con el condominio en las provincias vascongadas, con la «rabassa morta» en Cataluña y con otras variantes de aparcería y arriendo en éstas y otras regiones de España. [69]

La cuestión de la tierra era el problema de los problemas de la revolución española, el nudo gordiano que sólo podía cortar una profunda reforma agraria como la que proponía el Partido Comunista.

El Partido Comunista consideraba que la revolución española se iniciaba en una época en la que el proletariado constituía una clase fundamental de la sociedad, circunstancia que la diferenciaba de las grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII e incluso del XIX, imprimiéndole mayor hondura social. De aquí que no pudiera postergar las aspiraciones económicas y sociales del proletariado y que debiera garantizarle el pleno disfrute de sus derechos políticos y sociales y la elevación de su nivel de vida.

La revolución democrática española no podía soslayar el problema nacional. El derecho de las nacionalidades a la autodeterminación e incluso a la separación halló en el Partido Comunista su más firme defensor, por considerar que la unidad del Estado español sólo puede ser sólida y estable sobre la base de la libre determinación y nunca sobre la fuerza y la violencia. Asimismo consideraba el Partido inexcusable la retirada de las tropas españolas del territorio marroquí y la concesión a aquel pueblo, sometido a un régimen de ocupación colonial, de la plena independencia nacional.

La revolución democrático-burguesa española debía resolver también con espíritu constructivo el problema de las relaciones con la Iglesia, estableciéndolas sobre los principios democráticos de la libertad de creencias y cultos y de la separación de la Iglesia y del Estado. El Partido era contrario a las estridencias anticlericales y ademanes demagógicos de ciertos líderes republicanos que herían los sentimientos de las masas católicas y eran utilizados por la reacción para levantar la bandera de la persecución religiosa y escindir al pueblo.

La consolidación de un régimen de libertades democráticas en España demandaba, en fin, la reorganización y democratización del aparato estatal, y en particular del cuadro de mandos del Ejército. Después del

desastre de Cuba y cuando el Ejército español no tenía empresa exterior alguna en la que ser empleado, contaba con 499 generales, 578 coroneles y más de 23.000 oficiales para unas tropas que no excedían de [70] 80.000 hombres. Estos cuadros se llevaban en sueldos, gratificaciones y cruces pensionadas el 60 por 100 del presupuesto de guerra, dedicándose 80 millones para sueldos, 45 para la tropa y 13 para material. {(1) Eduardo Aunós. *Itinerario Histórico de la España contemporánea.*}

Esta situación empeoró aún como resultado de la guerra de Marruecos.

La reforma del Ejército era muy necesaria teniendo en cuenta, sobre todo, la hostilidad al nuevo régimen de la camarilla militar africanista, que constituía la cúspide del cuadro de mandos de las fuerzas armadas. Una de dos: o la República arrebatava las armas de manos de esa camarilla reaccionaria, o ésta las emplearía más tarde o más temprano para dar muerte a la República.

Tal era la posición del Partido Comunista sobre las tareas históricas de la revolución democrática española. La experiencia ha demostrado que era el único camino para resolverlas y para evitar a España la sangrienta prueba que más tarde hubo de sufrir.

Así, pues, la salida del Partido de la clandestinidad no sólo puso de relieve sus lados débiles; destacó sobre todo sus lados fuertes, sus grandes virtudes revolucionarias. El Partido aparecía como el auténtico depositario y continuador de las gloriosas tradiciones revolucionarias del proletariado español, como el portador del pensamiento político más avanzado, como el destacamento más combativo y revolucionario de la clase obrera española, como el más consecuente defensor de la democracia.

Al luchar por sus postulados, el Partido Comunista no pretendió en ningún momento que los líderes republicanos y socialistas se convirtiesen a la fe comunista; aspiraba tan sólo a que no se estancasen a mitad del camino de la revolución democrático-burguesa y tuviesen presentes las palabras del jacobino Saint Just, uno de los dirigentes de la revolución francesa: «Quien hace una revolución a medias, cava su propia tumba».

La agudización de la crisis

La resistencia de los gobiernos republicanos a satisfacer las aspiraciones acuciantes de las masas obreras y campesinas fue una de las causas de la intensidad que adquirió en nuestro país la lucha de clases después del 14 de abril; pero a impulsar esa lucha contribuyó además la agudización de la crisis económica mundial que, iniciada en 1929, alcanzó en España su máxima profundidad en 1932 y 1933.

Dos circunstancias vinieron a agravar la crisis y a imprimirla mayor duración:

La primera era el sabotaje de los grandes capitalistas y terratenientes, quienes, a fin de crear dificultades a la República y de golpear al movimiento revolucionario de los trabajadores, sacaban de España sus capitales, cerraban las fábricas y dejaban yermos los campos, arrojando a miles de obreros a la calle.

La segunda era la resistencia del Gobierno republicano a establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética, impidiendo con ello que las transacciones con el país del socialismo proporcionasen trabajo a decenas de millares de obreros y mejorasen la situación económica de España.

Con la agudización de la crisis económica, la lucha huelguística cobró gran amplitud. Tuvo especial importancia la huelga general de Sevilla.

En la huelga de Sevilla de julio de 1931 se realizó el Frente Único de comunistas y anarquistas. Durante cuatro días sostuvieron los trabajadores una lucha heroica que tendría ecos solidarios en Dos Hermanas, Utrera, Coria del Río, La Campana, Morón de la Frontera y otras localidades de la provincia. Y, a despecho de las medidas represivas de las autoridades republicanas, que tuvieron su expresión más brutal en el cañoneo de la Casa de Cornelio, en donde se reunían los comunistas, y en la aplicación de la «ley de fugas» a cuatro comunistas en el Parque de María Luisa, la huelga de Sevilla fue el punto de arranque de una poderosa ola de luchas populares, que alcanzó su máxima altura en la huelga general del 25 y 26 de enero de 1932 contra el peligro reaccionario y en las de febrero del mismo año contra las deportaciones de [72] obreros revolucionarios a Guinea. Al cabo de pocos meses, a partir de la segunda mitad de 1932, se iniciaba una nueva oleada de luchas, que fue ganando velocidad y altura de mes en mes y

cuyos jalones más importantes fueron la huelga general de Granada, las tres huelgas de los mineros asturianos, las metalúrgicas de Valencia y La Felguera, la huelga general de Sevilla y la de Salamanca, que abarcó a doscientos pueblos de la provincia.

El campo comenzó a agitarse desde el otoño de 1931. Labradores de Corral de Almaguer se apoderaban del pueblo decididos a repartirse las tierras de los absentistas; un amplio movimiento de los arrendatarios contra la «rabassa morta» tenía por escenario las tierras catalanas; labriegos y jornaleros parcelaban fincas en Sagunto, Ojén y otros lugares, izaban la bandera roja en Almerche, se repartían tierras en los pueblos de Cáceres, se amotinaban en Villa de Don Fadrique, en Sarpagudo y Villanueva de Córdoba, en Dos Hermanas y Parla, en el Pedroso y Granja de Torrehermosa; se manifestaban en Gabia Grande o iban a la huelga en Badajoz, Toledo, Andújar, Doña Mencía, Gilena y otros muchos lugares.

A fines de 1932 y comienzos de 1933 el movimiento campesino desembocaba ya en una revolución agraria que impresionaba por su magnitud. Las provincias extremeñas y andaluzas fueron el centro de un movimiento de toma de tierras que golpeaba a la vieja estructura semi-feudal de la propiedad rústica: Sólo de enero a marzo de 1933 se registraron 311 casos de ocupación de fincas.

El periódico católico «El Debate» comparaba con alarma la situación de España a comienzos de 1933 con la de Italia en 1919, indicando que en nuestro país los campesinos habían ocupado en un solo mes casi tantas fincas como los de Italia en cuatro años, es decir, de 1919 a 1922.

Las acciones campesinas eran el fruto de la radicalización de las masas rurales bajo la influencia del movimiento huelguístico del proletariado industrial y, a su vez, repercutían en éste, influyéndose mutuamente, forjando sobre la marcha la alianza de los obreros y de los campesinos.

A la lucha de las masas trabajadoras por el pan y la tierra respondió el Gobierno republicano-socialista con la [73] llamada Ley de Defensa de la República, a la que se acogerían los enemigos más encarnizados de ésta para reprimir violentamente las aspiraciones de la clase obrera y de las masas campesinas. La tragedia de Castilblanco y las tremendas matanzas de Arnedo y Casas Viejas fueron los frutos sangrientos

de la política antipopular del Gobierno de conjunción, incapaz de comprender que la defensa de la República era inseparable de la defensa de las masas laboriosas frente a los ataques de la reacción capitalista-terrateniente.

Los acontecimientos enfrentaron nuevamente las posiciones de nuestro Partido y las posiciones reformistas. El Partido Socialista, de acuerdo con su concepto de que su misión en aquel momento era «servir a la causa burguesa», se dedicó a sabotear y reprimir desde el Gobierno la lucha de las masas so pretexto de que «perjudicaba a la República». El Partido Comunista, por el contrario, consideraba que el deber de un partido obrero era servir a los trabajadores y no a la burguesía; que la lucha de las masas, lejos de perjudicar a la República, la consolidaba; que esa lucha organizada y consciente era un apoyo indispensable para un partido dispuesto a hacer una obra verdaderamente revolucionaria desde el Parlamento o el Gobierno.

Nuestro Partido combatió asimismo la vieja teoría oportunista, según la cual «en un período de depresión económica y de crisis de trabajo, no se deben realizar huelgas». Erigida esta afirmación en dogma, fue llevada hasta sus conclusiones lógicas: los líderes socialistas proclamaron la necesidad de pactar una «tregua social» entre el capital y el trabajo mientras la crisis persistiera.

La clase obrera española, con su lucha, se encargó de dar la mejor réplica a semejantes teorías.

«El proletariado español —escribía por entonces la revista «La Internacional Comunista»— ha ocupado uno de los primeros puestos del mundo en los combates contra la burguesía. Es difícil hallar algo semejante a la energía huelguística que desarrollan los obreros españoles».

Cierto que no todas las huelgas se ganaban: pero la causa principal de que esto sucediera, era, justamente, que los [74] líderes del PSOE y de la UGT se dedicaban a romper y sabotear una serie de acciones reivindicativas de los trabajadores.

Al mismo tiempo que luchaba contra esta postura de los líderes socialistas, el Partido combatía las tácticas anarquistas de huelgas y de «putschs» sin pies ni cabeza, que desorganizaban el movimiento obrero.

El primer «putch» anarquista tuvo lugar en enero de 1932, en el Valle del Llobregat, en donde los trabajadores confederales, que fueron lanzados por sus dirigentes a una empresa descabellada, dieron pruebas de heroísmo. Un año después –el 8 de enero de 1933– los anarquistas provocaron el segundo «putch». De acuerdo con sus recetas para «hacer» la revolución, en Barcelona, Lérida, Madrid y otras ciudades, grupos específicos de la FAI emprendieron una serie de agresiones contra policías y centinelas de varios cuarteles. Las masas obreras permanecieron al margen, por regla general, de esta aventura, cuyos pormenores eran conocidos por la policía de antemano; en cambio, en algunos pueblos, los labradores se amotinaron al anuncio de que iba a empezar «la revolución social»: los sucesos de mayor gravedad, en este orden, fueron los ya recordados de Casas Viejas, en donde 14 obreros agrícolas fueron asesinados por las fuerzas represivas en circunstancias dramáticas.

Tanto en 1932 como en 1933, los «putchs» de la FAI se produjeron en momentos de apogeo de la lucha de las masas trabajadoras, mas no para llevar mayor claridad de objetivos y más unidad y organización al movimiento, sino para introducir el desconcierto, la discordia y la desorganización en sus filas.

Cuando la España popular tenía ante sí la misión de dar cima a la revolución democrático-burguesa, los anarquistas desviaban la energía de las masas hacia intentos de implantar un quimérico «comunismo libertario» que nadie, comenzando por ellos, sabía qué era.

Para alcanzar tan confusos objetivos, los anarquistas pretendían sustituir la acción de las grandes masas por la de unos cuantos grupos específicos, sin comprender que ningún individuo ni élite alguna, por mucho heroísmo que derrochasen, podrían reemplazar el grandioso despliegue de [75] iniciativa y de heroísmo colectivo de las grandes masas. En el fondo, la inclinación de los jefes faístas por la acción de una élite reflejaba su incapacidad para la labor metódica, paciente, pero extraordinariamente difícil, de preparación y organización políticas de las vastas masas obreras y campesinas, que constituyen el grueso del auténtico ejército de la revolución.

Los anarquistas pretendían, además, sustituir las formas de la lucha de clases consciente del proletariado –lucha económica, política e ideológica– contra las clases reaccionarias, por la violencia física apli-

cada a éste o aquel representante de la autoridad. No reparaban en que la táctica del terror individual, tras ser completamente ineficaz, causa enorme daño al movimiento obrero, ya que suministra a la reacción un pretexto cómodo para golpearlo y desorganizarlo.

De tal suerte, la acción, anarquista en aquellos años de la República, tanto por sus objetivos como por sus métodos no favorecía a los trabajadores, sino que les perjudicaba; no golpeaba a la contrarrevolución, sino que facilitaba sus maniobras, independientemente de los propósitos de sus autores y del heroísmo de las masas confederales.

En resumen, los dirigentes anarquistas y los socialistas, con procedimientos distintos, pero igualmente erróneos, obtenían el mismo resultado: llevar a los trabajadores a frecuentes derrotas.

Para colmo de males, los líderes ugetistas y cenetistas hacían de sus centrales un baluarte en lucha por la hegemonía del movimiento sindical, encendiendo una pugna fratricida entre los obreros de la CNT y de la UGT y entre los de ambas centrales y los simpatizantes de la Internacional Sindical Roja.

En esta situación, el Partido desplegó una lucha ardiente por el Frente Único, a pesar de las continuas negativas con que los líderes socialistas y anarquistas respondían a sus propuestas unitarias.

El Partido Comunista centró sus esfuerzos, ante todo, en estimular el Frente Único por la base, en los lugares de trabajo, mediante la creación de comités de fábrica en los que estaban representados los obreros de todas las tendencias.

En el fuego de esa lucha por la unidad, en el caso de las grandes huelgas y acciones de las masas obreras y campesinas [76] por la tierra y el pan, en el Partido Comunista se habían ido desarrollando las fuerzas capaces de transformarlo en un Partido de acción revolucionaria viva y de corregir sus debilidades e insuficiencias.

Los sectores más radicalizados de la clase obrera y de las masas campesinas comenzaron a conocer al Partido y a prestar oído atento a su voz, sobre todo en algunas regiones. A pesar de ello, el número de militantes del Partido no correspondía a su influencia real entre las masas.

El obstáculo principal para su crecimiento eran las tendencias sectarias del grupo de dirección. Contra él se pronunciaban las fuerzas que

en el Partido pugnaban por corregir la situación y orientar su actividad por caminos leninistas. La contradicción que existía en el Partido entre los viejos métodos sectarios y las nuevas exigencias que la situación planteaba, había adquirido particular agudeza.

El gran viraje

La solución positiva de esta contradicción fue preparada por el IV Congreso del Partido Comunista de España, inaugurado el 17 de marzo de 1932, en Sevilla.

El IV Congreso se reunía en una situación distinta a la que existía al celebrarse el III Congreso. Si entonces el objetivo central del Partido era movilizar a las masas contra la dictadura primorriverista y por el derrocamiento de la Monarquía, ahora se trataba de desarrollar hasta el fin la revolución democrático-burguesa iniciada el 14 de abril.

Ello exigía imprimir un viraje a toda la actividad del Partido a fin de terminar con los métodos sectarios y convertirlo en un gran partido comunista de masas. Esta fue la tarea central del Congreso.

Era evidente que el Partido sólo podría dirigir el movimiento revolucionario e influir de manera determinante sobre la marcha de los acontecimientos a condición de ser él mismo un partido de masas, capaz de llegar con su programa, con sus soluciones, con sus métodos de lucha a las más profundas capas de la población trabajadora. [77]

La circunstancia que daba mayor apremio a la lucha del Partido por la conquista de las masas era que el reformismo y el anarquismo, las dos corrientes que impedían al proletariado español convertirse en la fuerza dirigente de la revolución democrática y continuaban ejerciendo una influencia poderosa en la mayoría de los trabajadores.

La cuestión se planteaba así: o el Partido lograba liberar a las masas de esa influencia nociva, dándoles una verdadera conciencia socialista, o la clase obrera seguiría siendo un mero auxiliar de la pequeña burguesía, en cuyas manos desfallecía la revolución.

Los debates y resoluciones del IV Congreso asestaron un fuerte golpe a las tendencias sectarias que frenaban el desarrollo del Partido y su proceso de consolidación. Con el Congreso, el Partido dio un gran paso en el camino de su transformación en un partido de masas, destacando de su seno al núcleo dirigente capaz de realizar el viraje que la

situación exigía. Entre los miembros del nuevo Comité Central figuraban José Díaz, Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, Antonio Mije, Manuel Delicado, Pedro Checa, Trifón Medrano, Jesús Larrañaga, Cristóbal Valenzuela, Eustasio Garrote, Hilario Arlandis, José Silva, Rafael Millá, Daniel Ortega, Luis Zapirain, y otros dirigentes comunistas que habían dado pruebas de su capacidad y de su firmeza revolucionaria.

El Congreso no desplazó del Buró Político a Bullejos, Adame y Trilla, confiando en que éstos rectificarían sus errores. Sin embargo, los pacientes esfuerzos del Partido para ayudarles fracasaron y el 21 de octubre tuvieron que ser excluidos de las filas del Partido Comunista de España. Su expulsión en aquel período fue una necesidad vital para el fortalecimiento ideológico, político y orgánico del Partido.

En la discusión abierta en el Partido se analizaron los errores del grupo y sus raíces sociales.

¿Cuáles eran estos errores?

El grupo no había comprendido el carácter de la revolución democrático-burguesa antes del 14 de abril. Su error partía de una falsa apreciación del carácter del Poder bajo la Monarquía; cerraba los ojos a los vestigios feudales existentes en el país y al peso político que conservaba la aristocracia [78] latifundista, considerando que, dentro del bloque gobernante, llevaba la dirección la burguesía y no la aristocracia terrateniente. De aquí la concepción del grupo, de que la revolución debía ser dirigida contra la burguesía, y su consigna extemporánea del 14 de abril: «¡Abajo la República burguesa!».

Este desenfoque impidió al grupo comprender la importancia de la revolución agraria, nervio central de la revolución democrática española, y la formidable carga revolucionaria que llevaba en su seno el movimiento campesino.

El grupo mantenía también en la cuestión nacional una posición errónea. La justa consigna del Partido «Derecho de autodeterminación e incluso separación para Cataluña, Euzkadi y Galicia», era interpretada como una consigna de separación inmediata y obligatoria de dichas nacionalidades, lo que constituía una burda deformación del pensamiento del Partido, ferviente partidario de la unión voluntaria y no de la separación de los pueblos hispanos.

Después del 14 de abril, el grupo rectificó algunos de sus errores, pero de manera harto formal. Hablaba de la revolución agraria y la cuestión nacional, pero sin realizar esfuerzos serios para organizar y dirigir la lucha de los campesinos por la tierra y la acción de las nacionalidades oprimidas por sus derechos.

Ello reflejaba, en el fondo, la incompreensión del grupo sobre el papel movilizador, organizador y orientador del Partido, y éste era, precisamente, su error más grave. En su concepto, el Partido era una secta cerrada de doctrinarios y no un combatiente avanzado, ligado por mil vínculos a las masas populares. Imbuidos de una mentalidad pequeño-burguesa de jefes insustituibles, los componentes del grupo rechazaban el método de la dirección colectiva, frenaban la promoción de nuevos cuadros, pretendían mandar en vez de dirigir.

Los pacientes esfuerzos de la Internacional Comunista para ayudarles a vencer sus incompreensiones fueron rechazados, lo que era tanto como no aceptar la ayuda del movimiento comunista mundial, su experiencia revolucionaria. El grupo abandonaba el internacionalismo proletario y caía en un chovinismo provinciano y pequeño-burgués. [79]

Analizando todo este sistema de conceptos erróneos, el Partido lo definió como una desviación sectario-oportunista. El sectarismo y el oportunismo marchan casi siempre unidos; suelen ser el anverso y el reverso de una misma moneda. La falta de madurez teórica y de firmeza ideológica hacía al grupo particularmente vulnerable al impacto de posiciones extrañas al marxismo; sustancialmente, sus concepciones eran la resultante de la presión de la pequeña burguesía sobre las filas del proletariado. El sectarismo del grupo reflejaba la mentalidad de la pequeña burguesía radicalizada, impregnada de verbalismo revolucionario, pero ajena a la mentalidad del proletariado y a sus métodos de lucha, cuya clave reside en la acción consciente de las grandes masas, en el espíritu de organización y de disciplina, en la constancia revolucionaria.

La expulsión del grupo vino a completar la obra iniciada por el IV Congreso, a cerrar esta etapa de la lucha contra el sectarismo. Pero no eliminó definitivamente esta enfermedad en el Partido. Las particularidades de la lucha política y del movimiento obrero en nuestro país eran terreno abonado para un renovado brote de sectarismo; el Partido

podría extirparlo, ante todo, multiplicando sus lazos con las masas, participando en sus luchas diarias y sosteniendo una lucha ideológica permanente tanto contra el oportunismo socialdemócrata como contra el anarquismo.

En la historia de nuestro Partido, 1932 es el año del gran viraje, cuando a la dirección de éste fueron José Díaz, Dolores Ibárruri y otros camaradas, que tan importante papel han desempeñado en el desarrollo y fortalecimiento del Partido; cuando se corrigió la orientación estrecha y dogmática que frenaba el desarrollo del Partido y, en cierta medida, le apartaba de las masas. A partir de entonces se produjo el proceso de consolidación y reafirmación del Partido Comunista de España como vanguardia dirigente de la clase obrera. El Partido penetró ampliamente en las filas de la clase obrera y entre las masas campesinas. Su consecuente posición leninista sobre los problemas fundamentales de la revolución democrática le granjearon la simpatía y la adhesión de hombres de diferentes sectores sociales que comenzaron a ver en [80] el Partido Comunista una fuerza política seria, con la cual había que contar.

En el esfuerzo por impulsar la actividad y organización del movimiento comunista, realizado a partir de entonces, tuvo importancia histórica la creación del Partido Comunista de Cataluña. En Cataluña, no sólo se concentraba el 45 % del proletariado de toda España; además existía un fuerte movimiento campesino y un poderoso movimiento nacional. Los líderes socialistas habían dejado el movimiento obrero catalán a merced del anarquismo, y el movimiento campesino y nacional en manos de la pequeña burguesía. La creación del Partido Comunista de Cataluña venía, en cierta forma, a enmendar aquel error histórico del socialismo español. Con su fundación, se daba un paso decisivo para dotar al proletariado y al pueblo catalán de su partido nacional marxista-leninista, creándose la premisa fundamental para iniciar la gran obra de liberar el movimiento revolucionario y democrático de Cataluña de la influencia anarquista y pequeño-burguesa y de unificar políticamente a la clase obrera de España.

Frente al peligro fascista

Al mismo tiempo que nuestro Partido criticaba la política antipopular de los gobiernos republicanos, luchaba contra el peligro de la reacción y del fascismo que amenazaban al régimen republicano.

El primer pilar de la contrarrevolución era entonces la aristocracia terrateniente, la clase parasitaria de los señores de la tierra.

La otra columna de la contrarrevolución era la gran burguesía financiera e industrial, fundida por intereses económicos y de clase a la nobleza terrateniente. El brazo armado de ambas eran los generales africanistas y monárquicos, los Franco, los Sanjurjo, los Goded y tantos otros.

Al día siguiente de instaurarse la República, la contrarrevolución comenzó a reorganizar sus huestes, decidida a impedir el desarrollo pacífico de la revolución democrática. El 10 de mayo de 1931, los monárquicos organizaban ya una [81] provocación que desató contra ellos la primera borrasca popular que conoció la República.

El Partido advertía que la conducta del Gobierno republicano-socialista creaba en España un clima propicio a los ataques de la contrarrevolución.

Las advertencias del Partido Comunista no tardaron en verse confirmadas. El 10 de agosto de 1932 se producía el golpe militar de Sanjurjo, que era un intento de la oligarquía terrateniente-financiera de restablecer el viejo régimen y que fue aplastado por la resuelta actitud de las masas. En la lucha contra la sanjurjada y en la defensa de la República, el Partido Comunista de España desempeñó un destacado papel. En Sevilla, punto neurálgico de la subversión, gracias a la actividad de la organización comunista, se logró la acción unida de las masas y la derrota de Sanjurjo. Esta sublevación era ya un sintomático exponente del espíritu de guerra civil latente en las clases reaccionarias españolas.

Desgraciadamente, el Gobierno republicano-socialista no supo extraer tampoco las necesarias lecciones de la sublevación del 10 de agosto. Las posiciones económicas, políticas y militares de la contrarrevolución, que había sufrido una derrota en la calle, no fueron desmanteladas y la amenaza de nuevas agresiones por su parte siguió pendiendo sobre la cabeza de la democracia española. En esta atmósfera de im-

punidad, la contrarrevolución continuó su obra de sabotaje económico y político y de reagrupamiento de fuerzas para destruir la República.

En 1933 el peligro fascista ya había adquirido en España contornos amenazadores, con el estímulo que le prestaba el triunfo del fascismo alemán. La reacción fascista se agrupó entonces en tres corrientes principales. La primera, filial del fascismo italo-germano, estaba integrada por diversos grupos que constituyeron la Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Carente de asistencia y de calor popular, Falange reclutó sus escuadras de pistoleros entre elementos desclasados y señoritos ociosos, que aportaban al clima político de nuestro país la «dialéctica de las pistolas» y un odio ciego hacia las ideas de la democracia y del progreso. [82]

El segundo grupo era el de los monárquicos, acaudillados por el abogado de los grandes capitalistas, Antonio Goicoechea, que en aquel período se inclinaba también hacia soluciones dictatoriales y fascistas.

El tercer grupo estaba integrado por las derechas católicas, agrupadas en Acción Popular, cuya jefatura había pasado a José María Gil Robles, abogado de los grandes terratenientes castellanos y de los jesuitas. Acción Popular fue la espina dorsal de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que en 1933 se convirtió en el partido fundamental de la contrarrevolución.

Las divergencias entre las fuerzas señaladas eran esencialmente tácticas. El partido clerical-fascista de Gil Robles se orientaba a implantar el fascismo en España por la vía legal. Los falangistas y monárquicos, por el contrario, se pronunciaban por el golpe de Estado y la cuartelada militar, para aplastar el avance de la democracia en España.

La sucursal de las fuerzas reaccionarias en el campo republicano eran los radicales de Alejandro Lerroux. Desde que, a fines de 1931, fue eliminado del Gobierno, Lerroux se había colocado abiertamente en el campo de las derechas, en la constelación de los partidos contrarrevolucionarios; personificación de la corrupción política, Lerroux y sus secuaces estaban ligados a lo más turbio de las finanzas, y, particularmente, a Juan March, a quien nuestro malogrado escritor, Manuel Benavides, caracterizara, certero, de «último pirata del Mediterráneo». Si la CEDA era el centro aglutinante de la reacción fascista, el Partido Radical era su caballo de Troya: la demagogia lerrouxista, que lograba

cierto crédito en algunos sectores de la opinión republicana, abría el camino del Poder a las fuerzas reaccionarias.

La aparición de la amenaza fascista introdujo cambios esenciales en la situación política y en la correlación de fuerzas en España y en el mundo. La subida de Hitler al poder en Alemania en 1933 y los acontecimientos de Austria en los primeros meses de 1934 mostraron, con su crudo dramatismo, que allí donde no existía unidad de las fuerzas obreras y populares, el fascismo lograba abrirse paso, instaurar su dictadura terrorista y desatar una bestial ola de persecuciones y crímenes [83] no sólo contra el Partido Comunista, sino contra todo el movimiento obrero y democrático. Ya a comienzos de 1933, frente a quienes en España tomaban a broma el peligro fascista, afirmando con notoria ligereza que se trataba de un fantasma inventado por los comunistas, el Partido Comunista levantó la bandera de la unidad y de la lucha antifascista.

En un mensaje dirigido el 16 de marzo de 1933 al Partido Socialista, a la Unión General de Trabajadores, a la Federación Anarquista Ibérica y a la Confederación Nacional del Trabajo, el Partido Comunista de España decía:

«Todos los trabajadores, sin distinción de tendencias, deben unirse en un gran frente común para la lucha antifascista. Todos los trabajadores tienen el mismo interés vital en aniquilar en sus mismos gérmenes el peligro reaccionario, sus provocaciones funestas y sus preparativos de golpe de Estado. El ejemplo de Alemania debe servir de advertencia imperiosa para todos. Una dictadura fascista en España, si llegara a establecerse a causa de la insuficiente vigilancia y de la falta de unidad de los trabajadores, al desencadenar su terror sangriento no haría ninguna distinción entre los obreros socialistas, anarquistas o comunistas».

El Partido propugnó y propició la creación del Frente Antifascista, concebido como un amplio movimiento de masas para agrupar a cuantos estuvieran dispuestos a cerrar el paso a la reacción. Inicialmente, el Frente Antifascista estuvo integrado por el Partido Comunista, la Juventud Comunista, la Confederación General del Trabajo Unitaria, la Federación Tabaquera, el Partido Federal, la Izquierda Radical Socialista y diputados de diversas tendencias.

También fue el Partido el animador en 1933 del nacimiento de una organización femenina de carácter político muy amplio, para la lucha contra la guerra y el fascismo. En breve tiempo, esta organización se extendió por toda España, constituyéndose Comités de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en las ciudades y pueblos más importantes. En esta organización participaban, no sólo como afiliadas, sino como [84] dirigentes, junto a las mujeres comunistas que realizaban una gran actividad entre las mujeres de las diversas clases sociales, otras, pertenecientes a la pequeña burguesía, sin partido muchas de ellas, militando en los partidos republicanos la mayoría, que trabajaban, defendiendo las ideas democráticas, con verdadero entusiasmo y abnegación.

La política de Frente Antifascista fue refrendada en el Pleno ampliado del Comité Central reunido en Madrid el 7 de abril de 1933. En el Frente Antifascista estaba ya en embrión la idea del Frente Popular, que iría desarrollándose a través de un proceso crítico y autocrítico, tanto para vencer la resistencia de las demás fuerzas democráticas, como para eliminar los restos de sectarismo que aún frenaban en nuestras filas la audaz aplicación de esa política.

Y allí donde fueron vencidos una y otros se cosecharon frutos prometedores, como en Málaga en noviembre de 1933, donde se creó el primer Frente Popular con el pacto entre comunistas, socialistas y republicanos, gracias al cual la candidatura antifascista triunfó sobre la reaccionaria, saliendo entre los elegidos el primer diputado comunista de España: el doctor Cayetano Bolívar.

Las elecciones parlamentarias de noviembre de 1933 mostraron el crecimiento de la influencia del Partido entre las masas. Si en las de julio de 1931 nuestros candidatos habían obtenido 60.000 votos, esta vez reunieron ya 400.000, a despecho de los fraudes electorales de las derechas y de la ley mayoritaria que favorecía exclusivamente a los grandes bloques electorales.

En las elecciones salió triunfante la reacción como consecuencia de la desunión de las izquierdas, de la táctica anarquista de abstención que restó muchos votos a las fuerzas democráticas y ayudó al bloque reaccionario. Pero ante todo, como consecuencia de la política de vacilaciones y renunciamientos practicada durante más de dos años desde el Gobierno por el bloque republicano-socialista, política que sembró la

desconfianza en ciertos sectores populares y, muy especialmente, en una parte de los campesinos que vieron defraudadas las esperanzas de que la República les diese la tierra. [85]

Afortunadamente la lección no cayó en saco roto. Los trabajadores socialistas vieron por fin que la táctica de su Partido no les había llevado hacia el socialismo que les prometieran sus líderes, sino hacia la reacción y el fascismo. Era ya inocultable que la línea general del Partido Comunista de España había sido la única justa y revolucionaria en todas las cuestiones decisivas de la revolución española.

La experiencia fracasada del gobierno conjuncionista, la rebelión de las masas del PSOE contra el oportunismo de sus dirigentes, el desplazamiento de muchos trabajadores socialistas hacia las posiciones del Partido Comunista fueron las causas de una honda crisis del PSOE, donde afloraron tres corrientes claramente definidas, que ya con anterioridad existían latentes en el Partido Socialista:

1) La derechista-reformista, dirigida por Besteiro, Saborit, y Trifón Gómez, que repudiaba abiertamente los métodos revolucionarios y cualquier contacto con los comunistas. Aparecía como la «protegida» de las derechas, la partidaria acérrima de una política de colaboración de clases.

2) La centrista, encabezada por Prieto y Fernando de los Ríos, cuyo fin era, sin enfrentarse directamente con la base socialista, impedir la radicalización del Partido Socialista y la colaboración de éste con el Partido Comunista. Los centristas querían volver a una situación semejante a la de 1931, o sea a una conjunción republicano-socialista basada en que la clase obrera actuase a remolque de la burguesía.

3) La izquierda, representada sobre todo por Largo Caballero, cuya actitud reflejaba la radicalización de las masas socialistas, el deseo vehemente de éstas de llegar a la unidad con el Partido Comunista. Muy pronto se convirtió en la corriente dominante.

Francisco Largo Caballero, que había sido en 1920 y años posteriores, junto a Besteiro, uno de los clásicos representantes de la tendencia derechista-oportunista en las filas del Partido Socialista y de la UGT, pasó de la experiencia colaboracionista con la dictadura y con los gobiernos republicanos, a posiciones izquierdistas extremistas, que si políticamente no eran consecuentes ni correctas, representaban, de una

manera general, un gran paso hacia la transformación del Partido [86] Socialista en un partido obrero clasista y preparaban el terreno para el entendimiento entre los dos partidos obreros: el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ello explica por qué el Partido Comunista saludó este cambio y se esforzó en establecer con el Partido Socialista un acuerdo como base de la realización de la unidad de la clase obrera, sin lo cual no era posible oponer una resistencia seria a la amenaza fascista ni asegurar la consolidación de la República y de la democracia.

El movimiento de Asturias

El 16 de diciembre de 1933, de acuerdo con lo pactado entre los radicales y la CEDA, que de momento quedaba en la sombra, formó Gobierno Alejandro Lerroux. Comenzaba el período de ofensiva de la reacción conocido con el nombre de Bienio Negro y en el transcurso del cual la oligarquía latifundista y financiera orientaría su actividad a destruir cuanto había sido conquistado por el pueblo en una lucha tenaz y a establecer un régimen fascista, apoyándose en las propias instituciones y leyes de la República.

Pero los planes de la reacción estaban llamados a estrellarse contra la voluntad de las masas trabajadoras; bien pronto quedaría en evidencia que las elecciones de noviembre no eran el síntoma precursor de un repliegue de la lucha de las masas; antes bien, el movimiento revolucionario se desplegó después de aquéllas en toda su grandeza, confundándose en el torrente general de la lucha contra la reacción fascista el movimiento político y reivindicativo de la clase obrera, el movimiento campesino y el movimiento nacional-democrático.

El año de 1934 ocupa un lugar destacado en la historia de la lucha de nuestro pueblo contra el fascismo y no sólo por su heroico levantamiento armado, sino porque en él se inició el camino de la clase obrera hacia la unidad de acción.

En este auge combativo y unitario desempeñó un papel importante el Partido Comunista de España, animador de poderosas acciones en las que fue templándose el espíritu combativo de las masas, afianzándose la fe en sus propias fuerzas y solidificándose su unidad de acción. [87]

1934 fue el año de la huelga del 19 de febrero en solidaridad con los trabajadores austríacos, de la huelga del 17 de abril contra el terror fascista, de la protesta popular contra los pactos militares propuestos por el Gobierno francés, de la poderosa réplica del proletariado madrileño a la concentración fascista de El Escorial, de la huelga campesina de junio, primer movimiento huelguístico en escala nacional de los obreros agrícolas españoles; de la huelga de 200.000 obreros madrileños el 8 de septiembre en apoyo de los «rabassaires» y contra los terratenientes catalanes, que habían llegado a la capital a solicitar del Gobierno central la anulación de la Ley de Contratos y de Cultivos aprobada por el Parlamento catalán: fue el año del mitin del Estadio para defender a las Juventudes Socialistas y Comunistas, amenazadas por el Gobierno Samper; de los impresionantes actos de protesta contra el asesinato por los pistoleros fascistas de la joven socialista Juana Rico y del joven comunista Joaquín de Grado, de la primera gran manifestación de mujeres contra los planes del Gobierno de movilización de reservistas, de la enérgica acción del proletariado astur para evitar la concentración fascista de Covadonga y de tantas otras grandes luchas políticas de las masas populares de nuestro país.

Las grandes campañas populares de resonancia nacional por la libertad de Thaelman, de Dimitrov, de Prestes, en solidaridad con los valientes insurrectos de Viena, eran la expresión de la lucha infatigable del Partido Comunista de España por desarrollar en la conciencia de las masas el sentimiento del internacionalismo proletario y, en primer lugar, de la solidaridad de todos los trabajadores con la Unión Soviética, el país del socialismo victorioso.

En el fuego de estas acciones, a través de grandes huelgas económicas y políticas y de impresionantes concentraciones antifascistas en las que actuaban hombro con hombro comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos, fue forjándose la unidad.

Era difícil al Partido Socialista pasar de la colaboración ministerial a la unidad de acción y a la lucha revolucionaria con el Partido Comunista y con la clase obrera que no militaba bajo sus banderas. [88]

Pero en el Partido Socialista Obrero Español, al que un tiempo calificó el viejo Vandervelde de Partido Socialista de tercera categoría, por la crítica que en él se hizo a los dirigentes reformistas de la II Internacional, había siempre, a pesar de sus debilidades y de sus errores, una

base obrera cuya voluntad e intereses no podían ser postergados constantemente sin riesgo para la unidad y la existencia del propio Partido Socialista.

Y fue esta base clasista, en la que hallaba una gran simpatía la política unitaria del Partido Comunista, la que obligó al Partido Socialista, cuyo representante más caracterizado era Largo Caballero, a modificar su política y a aceptar, bien que con reservas y contraproposiciones que restringían su importancia, un acuerdo con el Partido Comunista para la acción conjunta contra el peligro fascista.

La Juventud Socialista, dirigida por jóvenes con gran sentido revolucionario, fue un factor determinante en la radicalización del Partido Socialista, que hizo posible el entendimiento con el Partido Comunista de España.

El 12 de junio de 1934, el Pleno del Comité Central de nuestro Partido reiteró sus llamamientos a la Ejecutiva del PSOE a fin de llegar al Frente Único. El Comité Central proponía a los socialistas pactar una tregua política, suspendiendo los ataques mutuos para confrontar fraternalmente proposiciones y contraproposiciones que facilitaran el acuerdo.

Frente a las proposiciones de Frente Único presentadas por el Partido Comunista al Partido Socialista, éste respondió con la contraproposición de las Alianzas Obreras, que si bien eran un paso en el camino hacia la unidad, llevaban en su propia esencia una contradicción que anulaba su eficacia: la ausencia en esas Alianzas de los campesinos; la negativa, en el fondo, a reconocer a los campesinos como a una de las fuerzas motrices de la revolución española.

A pesar de estas insuficiencias, el Partido Comunista, con gran sentido de responsabilidad nacional, aceptó participar en las Alianzas Obreras. Este acuerdo fue adoptado en la reunión plenaria del Comité Central celebrada los días 11 y 12 de septiembre de 1934 y constituyó un viraje táctico audaz, que si de un lado hablaba de la madurez y flexibilidad del Partido, de [89] otro demostraba a las masas que, para los comunistas, la lucha por la unidad no era una «maniobra», sino una de sus más caras y fervientes aspiraciones.

Al ingresar en las Alianzas, el Partido se proponía establecer una corriente de unidad y de contactos permanentes con los trabajadores

socialistas y ugetistas y laborar por convertir esas Alianzas –que hasta entonces habían sido una combinación por arriba– en órganos actuantes de Frente Único, vinculados a las masas obreras por abajo, es decir, en los lugares de trabajo; aspiraba, además, a transformarlas en Alianzas Obreras y Campesinas, para unir las dos fuerzas fundamentales de la revolución democrática española, como condición indispensable de su victoria. En la vida de nuestro Partido, el Pleno de septiembre de 1934 es un jalón histórico: la comprensión y transigencia de que dio pruebas el Partido, su flexibilidad y su disposición a hacer sacrificios por lograr la unidad de la clase obrera, aunque fuese todavía de una forma insuficiente, permitieron allanar muchas dificultades.

Con el Partido puede decirse que entró en las Alianzas un chorro de savia vivificadora, que les imprimió un carácter más combativo y dinámico; las Alianzas comenzaron a intervenir activamente en la lucha cotidiana de las masas y a extenderse de un lugar a otro. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron antes de que estos organismos unitarios adquiriesen la solidez y la amplitud necesarias. La contrarrevolución no quería esperar a que ese proceso unitario progresara y decidió dar la batalla. El Gobierno Samper dimitió y el 4 de octubre de 1934 se anunció la constitución de un Gobierno en el que por primera vez participaban representantes de la CEDA, cuyas tendencias fascizantes eran públicas. La reacción creía llegada la hora de lanzar un reto abierto a las masas populares.

Contra la entrada de la CEDA en el Gobierno se pronunciaron, además del Partido Comunista y del Socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Izquierda Radical Socialista, Partido Republicano Federal, Partido Republicano Conservador y los nacionalistas catalanes y vascos.

El Partido Comunista propuso, al dimitir Samper, la declaración inmediata de la huelga general en toda España como medio de impedir la entrada de la CEDA en el Gobierno; pero [90] el Partido Socialista rechazó esta proposición; había anunciado a los cuatro vientos que la entrada de la CEDA en el Gobierno sería la señal para la insurrección y había instruido a todas sus secciones en este sentido.

Nuestro Partido consideraba esa actitud profundamente errónea, ya que con ella se entregaba la iniciativa a los reaccionarios, dándoles la

posibilidad de ser ellos, y no las fuerzas obreras, quienes determinaran el comienzo de la huelga revolucionaria y de escoger a tal fin el momento más favorable para la reacción. Estimaba, de otro lado, que la preparación política y técnica del movimiento era a todas luces insuficiente para una lucha de aquella envergadura. El marxismo enseña que no se puede jugar a la insurrección, que para que ésta triunfe son imprescindibles una serie de premisas que en aquel momento aún no habían sazonado en nuestro país. Mas, con todo, los factores negativos tendían a desaparecer rápidamente gracias a la actividad de nuestro Partido y al espíritu combativo y unitario de las masas; y los comunistas, pese a las discrepancias abiertas en torno a los métodos aplicados por el Partido Socialista, no pensaron ni un momento en quedarse al margen de la lucha, sino que se entregaron a ella con verdadero fervor, dedicándole todas sus fuerzas, su entusiasmo y su experiencia, sin reparar en riesgos ni escatimar sacrificios.

El mismo día 4 de octubre «Mundo Obrero» escribía:

«Ha llegado la hora de la decisión. La responsabilidad de quienes den un paso atrás o comiencen a vacilar dando al enemigo la posibilidad de ganar posiciones es incalculable. Exigimos audacia, decisión, cuidado y rapidez, energía y firmeza... Cuando comience la lucha, las Alianzas concentrarán en sus manos la dirección, ellas son el organismo fundamental de la lucha por el Poder».

La huelga declarada el 4 de octubre se extendió el día 5 a casi toda España; en Madrid y Cataluña, Euzkadí y León estallaban luchas armadas, y en Asturias se producía una insurrección popular.

Cataluña, donde la pequeña burguesía nacionalista representada por la Esquerra, tenía en sus manos el gobierno de [91] la Generalidad, Podía haber sido uno de los puntos decisivos del movimiento. Pero la Esquerra, en lugar de apoyarse en las masas obreras y campesinas, de dar al pueblo las armas de que disponía para cerrar el paso al fascismo, capituló cuando el combate no hacía más que empezar. Esta conducta demostró la incapacidad de la pequeña burguesía catalana para dirigir el movimiento nacional; así lo comprendieron muchos obreros y campesinos que en el período ulterior evolucionaron hacia las posiciones marxistas.

En la rápida derrota del movimiento en Cataluña incumbió una gran responsabilidad a los líderes anarquistas, los cuales no sólo se negaron a declarar la huelga general, sino que se dirigieron desde Radio Barcelona a todos los trabajadores exhortándoles a abandonar la lucha.

En Asturias es donde existía mejor preparación y más unidad. El día 5 ya estaba en poder de los obreros casi toda la cuenca minera y el 6 la mayor parte de Oviedo. Aquel mismo día los obreros de Trubia se apoderaban de la Fábrica de Armas. Sólo después de dos semanas de combates pudo ser sofocada la insurrección popular por un ejército pertrechado con toda clase de armamento.

El general Franco, consejero a la sazón del ministro de la Guerra y a quien cierto periodista calificó aquellos días de «dictador invisible de España», fue el responsable máximo de los crímenes y desmanes perpetrados en Asturias por las tropas legionarias traídas de África.

En el curso de la lucha, los trabajadores asturianos confiaron muchos de los puestos de mayor responsabilidad y peligro a los comunistas, que hicieron prodigios de energía y de heroísmo. Centenares de comunistas dieron su sangre generosa en la lucha contra el avance del fascismo y millares de ellos, al lado de sus camaradas socialistas y anarquistas, continuaron la batalla hasta el último instante. Ejemplo de valor y abnegación fue la joven comunista Aida Lafuente, que dio su vida para proteger la retirada de un destacamento minero.

La lección de Asturias fue, ante todo, una lección de unidad. Mientras en el resto del país la CNT se había opuesto a la entrada en las Alianzas, los anarquistas asturianos ingresaron en ellas a pesar de la oposición de sus jefes; y los lazos [92] de unidad anudados en la lucha común antes de Octubre se apretaron aún más al estallar la insurrección. Cuando el Comité Nacional de la CNT ordenaba desde Barcelona a sus organizaciones mantenerse al margen de la lucha, los trabajadores confederales de Asturias se batían heroicamente al lado de los comunistas y socialistas.

La unidad sellada en las Alianzas Obreras, que en el transcurso de la lucha se habían convertido en algunos lugares en Alianzas Obreras y Campesinas, como preconizaba el Partido Comunista, fue la clave de la gloriosa lucha de los obreros asturianos, que durante quince días tuvieron en sus manos el Poder.

Entre las causas de la derrota del movimiento de Octubre, además de la actitud ya señalada de los líderes anarquistas y de la capitulación de la Esquerra, hay que subrayar las deficiencias de la dirección del Partido Socialista. Los líderes del PSOE lanzaron a las masas al combate armado sin la debida preparación en el plano político y en el técnico. En realidad, en su cálculo, lo esencial no era preparar la acción revolucionaria de los trabajadores, sino agitar la amenaza de una insurrección popular para obligar al Presidente de la República a llamar a los socialistas a formar Gobierno.

Por otra parte, en el movimiento se reflejaron las consecuencias de la derrota de la huelga campesina de junio. A pesar de las propuestas del Partido Comunista, los líderes socialistas se habían negado entonces a respaldar la lucha de los jornaleros agrícolas con huelgas del proletariado industrial. Derrotados después de quince días de pelea, desorganizadas sus filas, los campesinos no pudieron prestar la debida ayuda a la clase obrera en las jornadas de Octubre.

A pesar de sus fallos, la insurrección de Octubre de 1934 fue la primera respuesta nacional de las fuerzas democráticas a los intentos de la reacción fascista de establecer en España su dominación.

Y aunque en esta primera batalla seria contra el fascismo que se daba en escala nacional, pero con profundas repercusiones internacionales, el proletariado sufrió un revés, la reacción no pudo realizar plenamente sus designios.

El pueblo derrotado era más fuerte que los vencedores.

El bloque popular antifascista

Después de Octubre, el Partido Comunista, pese a la ilegalidad a que se vio reducido, no interrumpió ni un solo día su labor. Supo organizar el repliegue sin pánico, combatiendo, salvando a millares de luchadores obreros, infundiendo ánimos a los trabajadores y reagrupando las fuerzas para nuevos combates. Proclamó, desde el primer momento, que si la clase obrera se unía, podría impedir que la reacción se consolidase en el Poder y promover un vasto movimiento popular capaz de restablecer en España una situación democrática.

La política del Partido Comunista en el período que va desde la represión de octubre de 1934 hasta febrero de 1936 se desarrollaba en tres

direcciones fundamentales: lucha por la amnistía y contra la pena de muerte, por la unidad de la clase obrera, por la creación de un Bloque Popular Antifascista.

A raíz del movimiento revolucionario, cuando el Partido Socialista renegaba de Octubre y los republicanos se replegaban desordenadamente, impresionados por la violencia de la represión, el Partido Comunista elevó su voz llamando a la clase obrera y al pueblo a movilizarse y a luchar para salvar a los presos revolucionarios. Cuando las cárceles de Asturias rebosaban de trabajadores y las fuerzas de la Legión, establecidas en el corazón de la zona minera, sembraban la desolación y la muerte; cuando los consejos de guerra condenaban a la última pena a decenas de obreros, el Partido gritó a España y a las fuerzas democráticas de todos los países: «¡Ayudadnos a salvar a los héroes de Asturias! ¡Ni una ejecución más!». Los delegados del C.C. del Partido Comunista llegaban a Asturias y lograban ponerse en relación con las familias de los asesinados y de los encarcelados, lograban visitar a los presos de la Cárcel de Oviedo y penetrar en la Cárcel de Mieres para informar a los camaradas del estado de ánimo de las masas y de la política del Partido.

Prohibida por las autoridades la actividad de la organización de mujeres contra la guerra y el fascismo, ésta se transformó en una asociación de solidaridad para con las mujeres y los hijos de los mineros asturianos caídos en la [94] lucha o encarcelados, bajo el nombre de «Comité Pro Infancia Obrera», el cual logró sacar de Asturias a centenares de hijos de mineros, colocándoles en familias que los prohijaron hasta que cambió la situación política.

Los comunistas editaron y repartieron por toda España centenares de miles de octavillas –dedicadas sobre todo a la lucha por la amnistía. Jamás el Partido había conseguido dar a su propaganda una amplitud tan grande. Nadie podía ahogar la ardiente protesta del pueblo contra la sangrienta política del Gobierno. Los intelectuales de mayor prestigio elevaron su voz contra las atrocidades cometidas en Asturias por las fuerzas represivas. La protesta popular impuso la destitución del comandante Doval, uno de los responsables de la represión, que se había destacado por su salvajismo.

En el mes de marzo de 1935, y como resultado de los esfuerzos del Partido Comunista de España, fue constituido un Comité Nacional de

Ayuda a los Presos, con la participación del Partido Comunista, PSOE, Juventudes Socialistas y Comunistas, Juventudes Republicanas, Radicales Socialistas, Socorro Rojo, Federación Tabaquera y otros grupos.

A finales de marzo, el Partido Comunista de España organizó un poderoso movimiento de masas para salvar a los condenados a muerte, entre los que figuraban el camarada Juan José Manso y el dirigente socialista González Peña. El Partido, con el apoyo de las Alianzas Obreras de diversas provincias, inició los preparativos de una huelga general con ese objetivo. El Gobierno tuvo que retroceder; la mayoría de los ministros votaron el indulto de 20 condenados a muerte, y los representantes de la CEDA salieron del Gobierno provocando una crisis; era la primera gran batalla que la clase obrera, y el pueblo en general, ganaban a la reacción después de Octubre.

Estos hechos demostraban que, en lo fundamental, la fase de repliegue había terminado. Comenzaba un nuevo auge del movimiento obrero y democrático, que desembocaría en el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.

Las fuerzas reaccionarias realizaron nuevos esfuerzos por consolidar sus posiciones en el Poder. El 8 de mayo de 1935, la CEDA volvió al Gobierno. Gil Robles se encargó del [95] Ministerio de la Guerra. Bajo sus auspicios llegaba a los puestos clave del Ejército un grupo de generales africanistas, comprometidos en anteriores conspiraciones antirrepublicanas de la reacción fascista. Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central; Fanjul, Subsecretario; Goded, Director de Aeronáutica; Mola, Jefe del Ejército de Marruecos.

Al conocerse la formación del nuevo Gobierno, el Partido Comunista —que sin descanso venía preconizando una amplia concentración de todas las fuerzas opuestas al fascismo— se dirigió a todos los partidos y organizaciones obreras y democráticas, subrayando la agravación del peligro fascista y tomando la iniciativa de constituir un Bloque Popular Antifascista.

Este bloque debería englobar a la clase obrera, a los campesinos, a los empleados y funcionarios, a los intelectuales y a la burguesía pequeña y media, a todas las clases y capas de la población golpeadas o amenazadas por las fuerzas reaccionarias que representaban los intereses de la oligarquía financiera-terrateniente.

El Programa que el Partido Comunista de España presentaba a las organizaciones y partidos democráticos como base para la constitución del Bloque Popular constaba de los siguientes puntos:

Dimisión del Gobierno Lerroux-Gil Robles y disolución de las Cortes.
Convocatoria de elecciones con garantías de libertad de propaganda para los partidos de izquierda.

Liberación de los presos políticos, amnistía, abolición de la pena de muerte.

Restablecimiento pleno de las libertades democráticas.

Confiscación de las tierras de los grandes latifundistas y su distribución gratuita entre los obreros agrícolas y los campesinos.

Restablecimiento del Estatuto de Cataluña y derecho de autodeterminación para Cataluña, Euzkadí y Galicia. Liberación de Marruecos.

Rebaja de los impuestos a los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes e industriales. [96]

Mejora de las condiciones de vida de los obreros. Subsidio de paro.

Depuración del Ejército y expulsión de sus filas de los elementos fascistas que conspiraban contra la República. Disolución de las organizaciones fascistas.

Ni el Partido Socialista, ni Izquierda Republicana aceptaron la propuesta del Partido Comunista de España de crear el Bloque Popular. Pero otros partidos republicanos dieron una respuesta favorable. Y con ellos, el Partido Comunista de España, a comienzos del verano de 1935, creó el primer organismo nacional de Frente Popular, integrado por el Partido Comunista, la Juventud Comunista, el Partido Republicano Federal, la Izquierda Radical Socialista, la Juventud de Izquierda Republicana, la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), que agrupaba a los sindicatos dirigidos por los comunistas, la Federación Tabaquera, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, el Sindicato de Empleados del Estado, pertenecientes a la UGT, y otras organizaciones.

En el plano provincial y local, el Partido Comunista de España estableció relaciones con los partidos de izquierda y creó comités provinciales y locales del Bloque Popular, cuya composición variaba según los casos.

El peligro fascista se acentuaba. La CEDA estaba en el Gobierno y su política tendía a instaurar por vías «legales» un régimen clerical fascista. La labor de los generales protegidos de Gil Robles desde el Ministerio de la Guerra delataba que existía, además, la amenaza de un golpe militar para establecer una dictadura fascista abierta.

En el semanario «La Correspondencia Internacional» del 15 de junio de 1935, el Partido Comunista denunciaba este doble peligro del fascismo, concretando nombres:

«La fascistización empieza por los puestos de mando. Se acaba de colocar a la cabeza del Estado Mayor Central al general Franco, el mismo que ha dirigido desde el Ministerio de la Guerra las crueles operaciones militares... en Asturias, el hombre que ha participado en estos últimos tiempos en todas las conspiraciones destinadas a preparar la dictadura militar fascista». [97]

En el curso del año 1935, a medida que aumentaba la fuerza del movimiento popular, se intensificaban los preparativos de un golpe militar. Pero mientras el PCE se esforzaba por hacer penetrar la idea del riesgo que corrían el pueblo y la República, los dirigentes socialistas y republicanos consideraban las denuncias del Partido como especulaciones fantásticas, y las calificaban de «invenciones de Moscú».

El Partido Comunista no sólo tuvo razón en sus denuncias. Lo esencial es que su gran labor de esclarecimiento en torno a los peligros de una sublevación militar fascista fueron preparando a las masas para hacer frente a dicha eventualidad.

El Partido no se limitaba a denunciar los planes fascistas de violencia armada y a preparar al pueblo para oponerse a ellos. Al elaborar y defender la política de Frente Popular demostraba su disposición a utilizar vías pacíficas, electorales, para restablecer el orden democrático en España con el apoyo de un vasto movimiento de masas y realizaba un intento claro, de hondura nacional y patriótica, de abrir cauces pacíficos y parlamentarios al ulterior desarrollo de la revolución democrática en España.

Mientras tanto, los mismos que acusaban a los comunistas de recurrir a la violencia, las llamadas «gentes de orden», las fuerzas conservadoras, se preparaban ya entonces a lanzarse a la lucha armada, no para

defender su existencia que no estaba amenazada, sino para impedir el funcionamiento normal y pacífico de las instituciones democráticas y la aplicación de las leyes republicanas.

La presencia de la CEDA en el Gobierno no consiguió consolidarlo. Era incapaz de frenar el impetuoso auge del movimiento popular que se manifestaba en toda España de las más diversas formas. Como consecuencia de la creciente presión de las masas, presión que a su vez acentuaba las divergencias y la descomposición reinantes en las altas esferas del Estado, las medidas represivas fueron mellándose y las fuerzas de izquierda pudieron arrancar ciertas concesiones. Se autorizó, por ejemplo, la celebración de mítines, si bien la prensa obrera seguía prohibida.

El Partido Comunista celebró el primer mitin público, después de Octubre, el 2 de junio de 1935, en el Cine [98] Monumental de Madrid. En ese mitin, José Díaz hizo una exposición completa de la política de Frente Popular, algunos de cuyos postulados estratégicos han conservado su validez esencial en la trayectoria de la política del Partido hasta nuestros días.

En aquel mitin, que revistió gran importancia política por el momento en que se celebraba y por las cuestiones en él planteadas, los trabajadores madrileños expresaron su adhesión a la política y a la conducta del Partido.

Al hacer el balance de los acontecimientos de Octubre, José Díaz, como secretario general del Partido Comunista de España, asumió para éste la responsabilidad de dicho movimiento.

El Partido hizo esta declaración pública ante la actitud de los dirigentes socialistas, y, en particular, la mantenida por Largo Caballero en el transcurso del proceso incoado por los acontecimientos de Octubre de 1934. Quienes tanto habían hablado de revolución, y habían lanzado a las masas a la lucha, una vez más sin la debida preparación ni coordinación, a la hora de enfrentarse con las responsabilidades derivadas de aquellos sucesos, rechazaron éstas, a pesar de las reiteradas gestiones realizadas por el Partido Comunista para convencerles de la necesidad de aceptarlas pública y conjuntamente.

Los comunistas, que –como queda dicho– habían hecho muy serias objeciones a los propósitos «revolucionarios» de Largo Caballero en

vísperas de Octubre, por las incomprendiones de éste respecto a lo que es una lucha insurreccional, en el transcurso de ésta sellaron con su sangre la voluntad de marchar hombro con hombro con sus hermanos socialistas y, después de la lucha, recabaron para sí la responsabilidad propia y la de otros.

La idea del Frente Popular propugnada por el PCE encontró una acogida calurosa. Los trabajadores de todas las tendencias, el pueblo en general, anhelaban la unidad porque sabían que sólo con ella se haría retroceder a la reacción y se abrirían las puertas de las cárceles ante los 30.000 presos políticos en ellas reclusos.

Pero esos anhelos unitarios de las masas podían dar pie a diversas fórmulas políticas: los dirigentes republicanos, y parte de los socialistas, querían volver a una conjunción del [99] tipo de la de 1931; la izquierda socialista, por su parte, preconizaba la unidad exclusiva de las fuerzas obreras: era la continuación de su persistente menosprecio hacia los campesinos, actitud particularmente peligrosa en un momento en que la CEDA hacía grandes esfuerzos por crearse una base de masas entre dicho sector de la población.

El Partido Comunista, a través de una gran lucha política que duró casi todo el año 1935, consiguió que prevaleciese la política de Frente Popular y que incluso muchos dirigentes, remisos al principio a aceptarla, se sumasen por fin a ella. Esto fue posible, fundamentalmente, por la ayuda de las masas. El Partido explicó de manera paciente y tenaz el contenido y alcance del Frente Popular en todos los sitios, a través de toda España, hasta lograr que el pueblo comprendiese que ésa era la política que de verdad respondía a sus intereses y aspiraciones.

El Partido supo combinar la labor de explicación política con la defensa diaria y permanente de las reivindicaciones y de los intereses concretos de los trabajadores. La experiencia viva demostraba así a las masas que, aplicando la política de Frente Unico y de Frente Popular, se podía hacer retroceder a los fascistas y obtener ventajas para la clase obrera y para el pueblo. Y de hecho fue la voluntad y la presión de las masas, que hicieron suya la política de Frente Popular, las que determinaron que ésta fuese aceptada por el conjunto de los partidos de izquierda.

El PCE dio pruebas en todo ese proceso de flexibilidad política. Sin renunciar a la crítica constructiva de las posiciones erróneas de los dirigentes socialistas, anarquistas y republicanos, utilizaba todos los resquicios, todas las formas viables para promover la acción conjunta contra la reacción y el fascismo.

Ejemplo de ello fue su actitud ante los mítines organizados por Azaña; aunque discrepaba de muchas de las posiciones defendidas por el dirigente republicano, el Partido invitó a las masas, y en primer lugar a los militantes comunistas, a asistir a dichos mítines a fin de transformarlos en grandes manifestaciones de unidad antifascista. Y, en verdad, los mítines de Azaña, independientemente, incluso, de la [100] voluntad del orador, contribuyeron al desarrollo de la unidad

Por la unidad del proletariado

Hasta 1935, todas las alianzas políticas entre fuerzas obreras y burguesas en España, se habían basado siempre en que la clase obrera quedase supeditada a la dirección de la burguesía.

La política de Frente Popular representaba en este orden un viraje completo. En el período de intensas luchas de 1931 a 1935, las masas trabajadoras habían sufrido una profunda transformación de su conciencia. Después de la experiencia decepcionante de la colaboración socialista con los gobiernos republicanos, se habían liberado de las ilusiones pequeñoburguesas del 14 de abril. Por otro lado, los reiterados fracasos anarquistas habían restado mucho crédito a las esperanzas puestas en un milagroso advenimiento del «comunismo libertario». En cambio, Asturias había demostrado que la unidad era el arma decisiva para la lucha de la clase obrera. Esos factores, y sobre todo la influencia cada vez mayor adquirida por el Partido Comunista, crearon la posibilidad de forjar una alianza de todas las fuerzas opuestas al fascismo en la cual la clase obrera desempeñase el papel dirigente. A crear una alianza de ese género tendía, precisamente, la política de Frente Popular.

Mas ese puesto dirigente, el proletariado no lo podría ocupar de un modo, por así decir, automático. Tenía que ganarlo y consolidarlo dando el ejemplo y mostrando el camino a las otras fuerzas democráticas, convenciéndolas de que debían unirse a la clase obrera en la

lucha común contra el fascismo. Y mal podría el proletariado cumplir ese papel si no estaba unido, si no había, por lo menos, unidad de acción entre socialistas y comunistas. Uno de los objetivos esenciales de la política del Partido Comunista después del movimiento de Octubre fue lograr esta unidad con el Partido Socialista.

Las condiciones para progresar en la vía de la unidad con el PSOE, habían mejorado considerablemente después de Octubre. La corriente besteirista se había desprestigiado de [101] forma definitiva ante las masas; el Gobierno reaccionario protegía a los reformistas y les permitió incluso publicar un periódico, «Democracia», cuando la prensa obrera y democrática estaba prohibida. Los centristas no podían dejar de tener en cuenta la presión de la base en pro de la unidad. La corriente izquierdista era la más fuerte, sus posiciones eran las más cercanas al sentir de la masa obrera socialista, que de los acontecimientos de Octubre había sacado una enseñanza clara: la necesidad de la unidad obrera, de la unión del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero Español.

La izquierda socialista no era homogénea, ni política ni ideológicamente. Y menos aún después de la experiencia de Octubre. La parte más organizada y activa de la izquierda socialista era la juventud, dirigida por Santiago Carrillo, José Cazorla, Federico Melchor y otros camaradas. En el seno de la Juventud Socialista se había iniciado, sobre todo después de Octubre, un profundo proceso de revisión de concepciones políticas e ideológicas. El rasgo más importante de los documentos publicados por la Juventud Socialista en aquel período era que, pese a las confusiones que aún contenían, proclamaban su ruptura completa, moral y política, con la II Internacional y con la Internacional Juvenil Socialista. La Juventud Socialista daba su aprobación, en lo fundamental, al Programa de la Internacional Comunista, y declaraba que su objetivo era luchar por la dictadura del proletariado en España y en el plano internacional.

Esta toma de posición demostraba que el núcleo dirigente de la Juventud Socialista había recorrido ya entonces, en 1935, un buen trecho en el camino que debía conducirle a la identificación completa con el Partido Comunista. Por tercera vez en la historia del movimiento obrero español, la Juventud Socialista rompía sus ataduras con un partido que ya no encarnaba el gran ideal del socialismo. La Juventud

Socialista encaminaba su marcha hacia el movimiento comunista, llevando consigo un rico caudal de capacidad política y organizativa, de abnegación y de combatividad revolucionarias.

La repetición de ese fenómeno en épocas y circunstancias tan diferentes, demuestra que no era casual. Los jóvenes [102] revolucionarios que quieren luchar por el socialismo, que quieren servir a la causa de la clase obrera, sólo pueden encontrar satisfacción a sus anhelos en las filas de nuestro Partido.

En 1935, la Juventud Socialista, desde el punto de vista de sus concepciones políticas e ideológicas, estaba ya más cerca del Partido Comunista que del Partido Socialista; pero durante algún tiempo abrigó aún la esperanza de transformar a este último «desde dentro». Por eso su posición era luchar por la «bolchevización» del Partido Socialista Obrero Español. Cuando comprobó prácticamente que el PSOE no se «bolchevizaba», y estuvo en condiciones de comparar a uno y otro partido, sobre todo durante la guerra contra el fascismo, el proceso iniciado después de Octubre de 1934 llegó a su conclusión lógica: el ingreso en el Partido Comunista del núcleo dirigente de la Juventud Socialista y de un gran número de sus afiliados, fundidos ya entonces con los jóvenes comunistas en la Juventud Socialista Unificada.

Al lado de la actitud sinceramente revolucionaria de la JS, y de otros camaradas socialistas, una serie de dirigentes del PSOE tomaban posiciones izquierdistas con fines muy diferentes: trataban, sobre todo, de evitar que la masa obrera socialista, entre la cual los sentimientos unitarios eran muy fuertes, abandonase las filas del PSOE y pasara al Partido Comunista. Por eso resaltaba en la conducta de ciertos dirigentes socialistas, y singularmente de Largo Caballero, la contradicción entre las palabras, favorables a la unidad, y los hechos, que entorpecían no pocas veces esa unidad.

Esto se reflejó en el Comité Nacional de Enlace, creado en el mes de diciembre de 1934, a propuesta del Partido y del que formaban parte el PCE, el PSOE, la UGT y la CGTU. Durante varios meses ese Comité permaneció casi pasivo: el PSOE rechazaba sistemáticamente todas las propuestas del PCE y se negaba incluso a firmar ningún manifiesto o declaración conjunta de los dos Partidos.

Esta conducta equívoca se manifestaba negativamente en el desarrollo de las Alianzas Obreras y Campesinas. Existían a comienzos de 1935

trece comités provinciales y 150 comités locales de Alianza. El PCE propuso crear un Comité Nacional de las Alianzas y que, en los lugares de [103] trabajo, los comités de éstas fuesen elegidos directamente por los obreros. El PSOE rechazó ambas propuestas y se esforzó por frenar la actividad de estos organismos de unidad.

A despecho de estos obstáculos, el Partido Comunista intensificó sus esfuerzos por dar formas concretas a la unidad de acción de comunistas y socialistas en todos los terrenos: lucha por la amnistía, movimientos reivindicativos, sindicatos, Alianzas, propaganda, juventud, preparación de eventuales elecciones, &c. El Partido realizaba estos esfuerzos tanto en el plano nacional, provincial y local como en los lugares de trabajo, y siempre de una forma pública, de cara a las masas, a fin de conseguir que las fuerzas partidarias de la unidad, dentro del PSOE, ejerciesen sobre los dirigentes una presión cada día mayor, en pro de la acción conjunta con los comunistas.

Pero la política de unidad no podía quedar limitada a ese aspecto. Paralelamente, el PCE llevaba a cabo una intensa lucha de principios contra las posiciones erróneas defendidas por los socialistas; exponía y desarrollaba las ideas revolucionarias del marxismo-leninismo, considerando que la lucha ideológica era consustancial con una política sana de unidad de acción.

1935 fue un año de profundas polémicas ideológicas en la calle, en las fábricas, en la prensa y sobre todo en las cárceles, donde se hallaban, después de Octubre, muchos dirigentes y cuadros socialistas, comunistas y anarquistas. Firmes en los principios, los comunistas se esforzaban por imprimir a sus discusiones con los socialistas un tono cordial, de camaradas.

Esta lucha ideológica afianzó las posiciones del marxismo-leninismo en el movimiento obrero español; facilitó la unidad de acción con el PSOE; templó ideológicamente a los propios militantes del Partido Comunista y contribuyó poderosamente al proceso de acercamiento al Partido de los sectores más revolucionarios del Partido Socialista y del movimiento de Frente Popular.

El VII Congreso de la Internacional Comunista

En el verano de 1935 se reunió el VII Congreso de la Internacional Comunista, que tuvo una gran repercusión internacional y ejerció gran influencia en el fortalecimiento de nuestro Partido, así como en la lucha de las masas obreras y populares de España contra el fascismo.

En el momento de celebrarse el VII Congreso de la I.C., había en el mundo una situación en muchos aspectos nueva. El fascismo, sobre todo desde su instauración en Alemania, era un peligro directo para todos los pueblos de Europa. Y no sólo de Europa.

¿Cómo hacer frente al fascismo? Tal era la gran cuestión colocada por la realidad misma ante el VII Congreso de la I.C.

El movimiento comunista contaba a la sazón con ricas experiencias. En Francia, el Partido Comunista había conseguido establecer un pacto de unidad de acción con el Partido Socialista y un acuerdo de Frente Popular entre las fuerzas obreras y democráticas para la lucha común contra el fascismo.

El Partido Comunista de España, en condiciones muy diferentes a las de Francia, a través de la lucha armada de Octubre y de los progresos de su política unitaria, mostraba también de una forma práctica cómo se podía combatir y hacer retroceder al fascismo.

El VII Congreso de la I.C. generalizó las experiencias unitarias de Frente Único y de Frente Popular, que estaban ya en curso en Francia, España y otros países, y les dio una firme base de principio asentada sobre la teoría del marxismo-leninismo.

El camarada Dimitrov, en su histórico informe, subrayó que la instauración del fascismo no era el simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino el paso de la democracia burguesa a una dictadura terrorista abierta.

Para hacer frente a los nuevos problemas planteados por la realidad, hacía falta modificar la táctica, y en algunos aspectos también la estrategia, del movimiento comunista.

Frente al fascismo, que esclavizaba salvajemente a la clase obrera, dañaba a la pequeña burguesía y a importantes sectores de la burguesía, y hacía tabla rasa de todas las [105] libertades, era imprescindible que los comunistas, aplicando principios claramente establecidos por Lenin, estableciesen un sistema flexible de alianzas, coincidencias

y neutralizaciones que aislase al fascismo y diese a la lucha antifascista la mayor amplitud y eficacia posibles.

El VII Congreso de la I.C. tuvo una actitud audazmente crítica y autocrítica respecto a ciertos errores sectarios cometidos en períodos anteriores. Ayudó de un modo decisivo a los comunistas a desechar posiciones y consignas falsas y sectarias –como la de aplicar a los socialistas en general el calificativo de socialfascistas– que había dificultado sus relaciones con una parte de los trabajadores, y con capas no proletarias, pero susceptibles de marchar al lado de la clase obrera en la lucha por la defensa y el desarrollo de la democracia.

Después del VII Congreso de la I.C., los partidos comunistas colocaron como eje de toda su actividad la lucha por el Frente Único Proletario y por el Frente Popular Antifascista; tomaron más firme y audazmente en sus manos la bandera de la lucha por la democracia y por los intereses nacionales de sus países.

En España, las repercusiones del VII Congreso fueron considerables e inmediatas. El VII Congreso daba una respuesta tan concreta, tan directa, tan acertada, a los problemas que entonces preocupaban a los obreros y a los antifascistas todos de nuestro país, que suscitó en España una profunda conmoción política. La mayor parte de los periódicos de izquierda, socialistas y republicanos, comentaron favorablemente los debates del histórico Congreso.

Los acuerdos del VII Congreso de la I.C. influyeron favorablemente en las relaciones entre el PCE y el PSOE. En una carta fechada en octubre de 1935, dirigida al periódico «Claridad», nuestro Partido hizo a la izquierda socialista las siguientes propuestas: 1) realizar la unidad sindical mediante el ingreso de la CGTU en la UGT; 2) desarrollar las Alianzas; 3) crear el Bloque Popular Antifascista, cuya fuerza dirigente tenía que ser la clase obrera unida; 4) marchar hacia la unidad orgánica de los dos partidos, tomando como base de discusión las resoluciones del VII Congreso.

Amplios sectores socialistas acogieron favorablemente esas propuestas. [106]

La Juventud Socialista, después del VI Congreso de la Internacional Juvenil Comunista, puso rumbo a la fusión con la Juventud Comunista

para crear la organización única de la juventud trabajadora, sobre la base de los principios del marxismo-leninismo.

La presión unitaria se hacía cada vez más fuerte en el seno del PSOE y se reflejaba en la actitud de Largo Caballero que, habiendo salido de la cárcel, estaba al frente del PSOE y de la UGT.

La primera realización unitaria concreta fue la unidad sindical, con el ingreso de los sindicatos de influencia comunista –Confederación General del Trabajo Unitaria– en los sindicatos de influencia socialista –UGT–, en diciembre de 1935. Era la coronación de largos y tenaces esfuerzos del Partido Comunista en pro de la unidad sindical y una nueva prueba de la disposición de los comunistas a hacer concesiones para lograr la unidad de los trabajadores.

Hacia la victoria electoral

En el otoño de 1935, hizo crisis el proceso de quebrantamiento y descomposición del bloque gobernante CEDA-Partido Radical, bloque carcomido por agudas contradicciones internas.

En octubre fueron puestos al descubierto una serie de escándalos, como el «estraperlo» y otros, que tuvieron serias repercusiones políticas, porque constituían pruebas tangibles e inocultables de la podredumbre en que estaban enfangados los principales personajes del gobierno. El Partido Radical, pieza clave de la mayoría gubernamental, entró en una fase de rápida disgregación. El desprestigio del Gobierno y de las Cortes llegó a su apogeo. El Presidente de la República, bajo la presión del movimiento de masas que se levantaba en todo el país, disolvió las Cortes y convocó a nuevas elecciones para febrero de 1936.

Se confirmaban así las previsiones del PCE. Las masas, con su unidad y su movilización, habían impedido que la reacción se consolidase en el Poder. Habían impuesto la [107] celebración de nuevas elecciones. Se abría la posibilidad de restablecer una situación democrática por vía pacífica y electoral.

Gracias a los progresos de la unidad socialista-comunista y de la unidad sindical, al fortalecimiento de las Alianzas, a la creación de muchos Comités locales del Frente Popular, la unidad de las masas obre-

ras y populares tomaba cada vez mayor consistencia, se plasmaba incluso en formas orgánicas.

Sin embargo, el movimiento de masas carecía aún, sobre todo en el plano nacional, de una dirección coordinada. En él confluían las actividades de los partidos republicanos, del PSOE y de nuestro Partido, pero no se había podido crear un Frente o Bloque Popular de todos los partidos antifascistas, pese a los esfuerzos desplegados por el Partido Comunista en ese sentido.

La perspectiva de la celebración de elecciones aceleró las cosas. La propia ley electoral, de carácter mayoritario, aconsejaba las coaliciones.

Los partidos republicanos consideraban necesario aliarse con el Partido Socialista y no podían desconocer la fuerza del Partido Comunista de España. Había pasado mucha agua bajo los puentes, y el Partido Comunista de 1936 no era el de 1931: representaba una fuerza política de primer rango, a la que no era posible ignorar.

En el PSOE la presión unitaria de la base era fortísima; la izquierda tenía buenas relaciones con el Partido Comunista e incluso los centristas eran favorables a la entrada de los comunistas en una amplia coalición electoral.

Después de largas negociaciones, entorpecidas por los dirigentes conservadores del republicanismo, se llegó a la elaboración de un Pacto, firmado a mediados de enero de 1936. El hecho de que se le diese el nombre de «Pacto del Bloque Popular» era un reconocimiento explícito de la influencia arrolladora que había adquirido la política del Partido Comunista.

Puntos esenciales del Pacto eran: la amnistía para los 30.000 presos políticos que seguían encarcelados, la exigencia de responsabilidades por los crímenes reaccionarios cometidos en Asturias, asentamientos y otras medidas en pro de los campesinos, restablecimiento de las libertades democráticas [108] y de las normas constitucionales, rebaja de impuestos y tributo en favor de los pequeños y medios comerciantes e industriales, aumento de los salarios, &c.

Pero el programa tenía importantes lagunas; la principal era que no planteaba claramente el problema de la reforma agraria.

No obstante, el Partido decidió firmar el Pacto del Bloque Popular, junto con el PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, y otras fuerzas de menor significación.

El PCE consideraba que, por importante que fuese el texto del programa, más importante aún era crear un frente común de lucha contra el fascismo y abrir así ancho cauce a la acción unida de las masas para la batalla electoral y para las etapas posteriores.

El Partido Comunista hizo asimismo otras concesiones importantes para facilitar la conclusión del Pacto del Bloque Popular. Por ejemplo, el porcentaje de candidatos comunistas a diputados era considerablemente inferior a la fuerza real del Partido.

En opinión de los dirigentes republicanos y, en parte, de los socialistas, el Bloque Popular no era ni más ni menos que una coalición electoral y, sin duda, las motivaciones y necesidades electorales desempeñaron un papel no despreciable en la conclusión concreta del Pacto. Pero eso no era más que un aspecto superficial de la cuestión. En realidad, no era posible separar el Pacto del Bloque Popular de los tenaces esfuerzos del Partido Comunista, durante casi un año, en pro de la creación de un gran movimiento unitario para la lucha contra el fascismo. Las masas veían con razón en el Pacto del Bloque Popular la culminación de ese gran proceso de agrupamiento y de movilización de las fuerzas populares, que se había desarrollado a lo largo de 1935. Nadie podía negar que el alma de todo ese movimiento había sido el P.C.E.

Independientemente de la voluntad de tales o cuales de sus firmantes, el Pacto del Bloque Popular era más que una coalición electoral; era un instrumento de unidad de las fuerzas obreras y democráticas para la lucha –electoral y poselectoral– contra el fascismo y por la democracia.

La campaña electoral se desarrolló en un ambiente muy [109] tenso. Las de febrero de 1936 no eran unas elecciones «corrientes». Eran una gran batalla política con la que se trataba de cerrar el paso al fascismo y de asegurar el desarrollo de la democracia en nuestro país. En el curso de la preparación de las elecciones se multiplicaron por toda España los Comités del Bloque Popular.

La política de Frente Popular tuvo grandes repercusiones entre los obreros de la CNT. Comprobaban éstos prácticamente que, mediante la lucha política, mediante la participación en las elecciones, podían contribuir a la liberación de los presos de Octubre, a la eliminación del Poder de las fuerzas reaccionarias.

El principio anarquista del «apoliticismo» y del «abstencionismo electoral» entraba en conflicto abierto con los sentimientos revolucionarios de los obreros cenetistas, con su voluntad de luchar contra el fascismo por la defensa de sus intereses de clase. Los dirigentes anarquistas que propugnaron hasta el fin el principio abstencionista quedaron aislados. Otros dirigentes tomaron una actitud más flexible y realista. Y la gran masa de los obreros cenetistas participó en las elecciones dando su voto al Bloque Popular.

Este paso tenía un profundo significado. La diferencia con lo ocurrido en 1933 era patente: entonces, los socialistas y los comunistas habían ido divididos a la contienda, y los primeros aparecían incuestionablemente como la principal fuerza obrera que participaba en las elecciones. En 1936, las cosas eran muy otras: socialistas y comunistas marchaban juntos. La influencia del Partido Comunista era ya considerable. La política de Frente Popular estaba impregnada de un espíritu nuevo en el que se combinaba la defensa de la democracia con la promoción de la clase obrera a un lugar cada vez más destacado en la vida nacional. Los hechos demostraron que esta política –y no la reformista– llevaba a los obreros anarquistas a comprender la necesidad de abandonar los dogmas «apolíticos» y «abstencionistas».

La participación conjunta de los obreros socialistas, comunistas y anarquistas en la batalla electoral de 1936, aunque no se firmó ningún acuerdo entre las organizaciones, fue un gran paso unitario. [110]

Las elecciones dieron la victoria al Frente Popular, que obtuvo 268 diputados (158 republicanos, 88 socialistas, 17 comunistas), contra 205 de la derecha y del centro.

Una ola de entusiasmo recorrió el país de punta a punta. Las elecciones no eran sólo la victoria de una coalición. Eran la victoria de una política, de la política de Frente Popular. Las masas, que desde 1931 habían sufrido fracaso tras fracaso, comprobaban ahora prácticamente que el camino de la unidad era el de la victoria. Ello significó un cam-

bio en la conciencia política de la clase obrera y de extensas capas populares.

El triunfo del Frente Popular en España tuvo una enorme repercusión en el mundo entero. Vino a confirmar y acentuar un proceso que se venía gestando desde la subida de Hitler al Poder y, sobre todo, a partir de la insurrección de Asturias en Octubre de 1934: el desplazamiento hacia España del frente fundamental de la lucha contra el fascismo en los países capitalistas de Europa. En España, a consecuencia sobre todo de las supervivencias feudales, se habían agudizado considerablemente las contradicciones de clase; se desarrollaban con ímpetu el movimiento campesino y los movimientos nacionales de Cataluña, Euzkadi y Galicia; existía un proletariado industrial y agrícola numeroso, dotado de una formidable energía revolucionaria, templado en experiencias tan valiosas como el movimiento de octubre de 1934 y el triunfo del Frente Popular. Estos factores imprimieron a la lucha antifascista en España una extraordinaria amplitud, situándola en un puesto de singular importancia en el conjunto de la lucha mundial entre la democracia y el fascismo

El desarrollo del partido

Después del triunfo del Frente Popular creció el prestigio y la fuerza del partido. Este hizo progresos notables en el desarrollo de su organización, fruto del acierto de su política, confirmada por los hechos, y del esfuerzo abnegado de los comunistas por consolidar y ampliar las filas del Partido. A finales de 1934, en un período de gran represión, el Partido había lanzado la consigna: «¡Organizar, organizar y organizar! [111] ¡Esa es nuestra tarea de hoy! ¡Ni una fábrica, ni una mina, ni un cortijo o hacienda sin su comité!»

La organización del Partido se extendió y desarrolló. En los lugares de trabajo, en las barriadas, en las aldeas, los comunistas se preocupaban de plantear y defender las reivindicaciones concretas de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de las amplias masas populares.

En el mes de junio de 1935 se celebró el Congreso constitutivo del Partido Comunista de Euzkadi, parte integrante del Partido Comunista de España. Se trataba de facilitar el fortalecimiento del Partido en Euzkadi y de ayudar a la clase obrera a ponerse al frente del movi-

miento nacional vasco. El Congreso reflejó serios progresos del Partido Comunista de Euzkadi, que estaba firmemente enraizado en la clase obrera; el 55 % de sus efectivos estaba en las empresas.

En 1935 el Partido intensificó su propaganda, combinando las ediciones clandestinas con la publicación de periódicos legales que, sin aparecer como órganos comunistas, reflejaban su política. En el verano de 1935, publicaba 9 periódicos legales y 15 ilegales. Había además 18 periódicos de empresa, editados por organizaciones del Partido. La tirada del órgano ilegal del Comité Central, «Bandera Roja», pasó de 5.000 ejemplares a finales de 1934 a 17.000 en el verano de 1935.

A medida que la presión del movimiento de masas conseguía arrancar ciertas libertades, que el Partido podía celebrar mítines y hablar directamente a las masas, sus efectivos y su influencia fueron creciendo a ritmo acelerado.

Después del 16 de febrero de 1936, el Partido Comunista dio un gran salto adelante: de febrero a marzo de 1936 sus efectivos pasaron de unos 30.000 a unos 50.000 militantes. En abril contaba ya con 60.000 militantes. En junio, con 84.000. Y en vísperas de la sublevación fascista del 18 de julio, tenía en sus filas a 100.000 militantes.

El Partido se había convertido en una de las principales fuerzas políticas de España, e, indiscutiblemente, en el partido más importante del campo republicano; en la fuerza orientadora del movimiento democrático de nuestro país.

En el seno del PSOE, las divergencias se habían enconado. A finales de 1935, Caballero había dimitido de la presidencia [112] del Partido Socialista y la Ejecutiva había quedado en manos de los centristas. En el grupo parlamentario, Caballero tenía la mayoría. El pleito estaba pendiente de dirimirse ante un Congreso, el cual no se celebró jamás.

Los esfuerzos del PCE por llegar a una unidad más estrecha con el PSOE y por marchar hacia el Partido único del proletariado, tenían mucha resonancia entre las masas obreras del PSOE.

Una prueba de la fuerza de los sentimientos unitarios en el seno del PSOE es que, tanto los caballeristas como la Ejecutiva centrista, mantenían relaciones con el Partido Comunista y se pronunciaban por la unidad de acción entre ambos partidos obreros.

La izquierda, y concretamente Largo Caballero, defendía una posición unitaria más resuelta, y su influencia era cada vez mayor. Sin embargo, se resistía a dar pasos concretos en pro de la unidad. Su apoyo a la unidad, lo mismo que su izquierdismo, era principalmente verbal.

La resistencia de los dirigentes socialistas no pudo impedir que, en ese período, se llevasen a cabo dos realizaciones unitarias de trascendencia histórica:

La primera fue la unificación de la Juventud Socialista y de la Juventud Comunista en una sola organización, acto que tuvo lugar el primero de abril de 1936 y del que nació la Juventud Socialista Unificada.

La nueva entidad juvenil encabezada por Santiago Carrillo (Secretario General), Trifón Medrano, Fernando Claudín y otros camaradas, proclamó que su objetivo era organizar y educar a la joven generación «en el espíritu de los principios del «marxismo-leninismo».

La segunda realización unitaria fue la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), que tuvo lugar el 23 de julio de 1936, como resultado de la fusión de cuatro partidos obreros: el Partido Comunista de Cataluña, la Sección Catalana del PSOE, la Unión Socialista y el Partido Proletario. Al constituirse, el PSUC dio su adhesión a la Internacional Comunista.

El Partido Comunista de España contribuyó con todas sus fuerzas a la creación de la JSU y del PSUC. La aparición [113] de ambas organizaciones en la escena política representaba una gran victoria de la política de unidad obrera que, desde su fundación, venía propugnando nuestro Partido.

En ningún país la política trazada por el VII Congreso de la Internacional Comunista se había plasmado en realizaciones unitarias tan decisivas como la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña y de la Juventud Socialista Unificada. Ello demostraba, no sólo el largo camino recorrido por el Partido en la superación de antiguos defectos sectarios, sino la elevación de la conciencia de las masas, y su radicalización.

Los gobiernos republicanos de izquierda

El principal significado político-histórico del 16 de febrero es que había abierto una posibilidad de desarrollo pacífico, constitucional y parlamentario de la revolución democrática en España.

Por eso había luchado el Partido Comunista. Eso es lo que querían las fuerzas obreras y democráticas y lo que quería el pueblo español.

Pero las elecciones, el triunfo electoral del Bloque Popular, no eran una meta en sí. Eran un punto de partida.

Seguían planteados los mismos problemas. El «Bienio Negro» no había resuelto nada. Al contrario, había agravado considerablemente la situación de las masas de la ciudad y del campo.

La amnistía, la cuestión agraria, la cuestión nacional, el problema del paro y de los salarios de hambre, continuaban reclamando una inaplazable solución.

Las masas, con grandes manifestaciones en las calles, impusieron la inmediata liberación de los presos políticos; la amnistía fue legalizada «a posteriori».

Las masas impusieron también la inmediata dimisión del Gobierno Portela Valladares. Azaña formó un Gobierno republicano de izquierda, que contaba con el apoyo del conjunto de las fuerzas integrantes del Frente Popular.

¿Qué causa determinó el hecho, sin duda lamentable, de que la clase obrera no participase ni en el Gobierno Azaña ni en el que se formó más tarde bajo la presidencia de Casares [114] Quiroga, al ser Azaña elegido Presidente de la República? La causa debe buscarse en la actitud adoptada tanto por los partidos republicanos como por el socialista.

Los primeros alegaban que la fórmula «Gobierno republicano puro» les permitiría «aplacar» o «amansar» a la reacción.

En el Partido Socialista los centristas consideraban que correspondía a la burguesía republicana dirigir el Gobierno de la República; y si pensaban en colaboraciones ministeriales, era al estilo de 1931, o sea liquidando lo nuevo que el Frente Popular había aportado a la política española, y haciendo una vez más del Partido Socialista el servidor de los intereses de la burguesía.

Los «caballeristas» rechazaban la colaboración con los partidos republicanos en nombre de un obrerismo ultraizquierdista. Pero, en el fondo, su concepción se parecía a la de los centristas: creían que después de una etapa de Gobiernos republicanos, el Partido Socialista sería llamado a gobernar, lo que representaba el principal objetivo de Largo Caballero. No comprendían que la política de Frente Popular, la unidad de acción entre el PCE y el PSOE, creaban la posibilidad de una nueva forma de colaboración de los partidos obreros y de los partidos republicanos, colaboración en la cual la fuerza dirigente no fuese ya la burguesía, sino la clase obrera.

El Partido Comunista formuló en diversas ocasiones la idea de un Gobierno popular en el que estuviesen representadas las diversas fuerzas sociales que componían el Bloque Popular. Pero la posición de los otros partidos imposibilitó que tal idea pudiese cuajar en aquel momento.

Ante los Gobiernos Azaña y Casares Quiroga, el Partido Comunista adoptó una política basada en la fidelidad al Pacto del Bloque Popular, en la lucha por conseguir la aplicación del Programa definido en dicho Pacto.

En marzo de 1936, se celebró en Madrid un Pleno ampliado del Comité Central del Partido, con la participación de delegaciones de las provincias y de los Partidos de Cataluña, Euzkadi y Marruecos. La resolución del Pleno ponía de relieve el crecimiento de la actividad política de la clase obrera, de los [115] y las capas medias que el triunfo del Frente Popular había provocado. Al mismo tiempo, comprobaba la gravedad de la situación que se estaba creando en España como consecuencia de las maniobras conspirativas y provocadoras de las fuerzas reaccionarias y fascistas.

Dichas fuerzas se entregaron afanosamente a ultimar la preparación de la sublevación militar –que ya venían proyectando con anterioridad– desde el momento mismo de ser conocido el triunfo electoral de las izquierdas.

El primer intento tuvo lugar a raíz del 16 de febrero; el plan era aprovechar el «interregno» constitucional de un mes entre las elecciones y la reunión del nuevo Parlamento para declarar el «estado de guerra» y dar un golpe de Estado. El general Franco era uno de los comprometidos en el complot.

Pero las masas desbarataron ese plan. El Partido Comunista les había prevenido del peligro. En cuanto se conoció el resultado electoral, una verdadera marejada humana invadió la calle. El pueblo impuso la formación inmediata de un gobierno de izquierdas.

La experiencia de 1931, de 1932 y del período 1934-36, había demostrado a las fuerzas fascistas y reaccionarias que solas, en un plano puramente nacional, no tenían fuerza suficiente para derrotar a la democracia. En el plano español, la democracia era incuestionablemente más fuerte que la reacción y el fascismo.

Y esas fuerzas, que pretenden monopolizar para sí el título de patriotas, recurrieron entonces a la ayuda extranjera para luchar contra el pueblo español. Se pusieron de acuerdo con los Gobiernos de Roma y Berlín para garantizar que la sublevación fascista en España y en Marruecos fuese respaldada por una ayuda y una intervención militar de Alemania e Italia contra la República española.

En España, la preparación de la sublevación se llevaba a cabo aceleradamente, de todas las formas posibles. Los preparativos específicamente militares corrían a cargo de los generales de la casta africanista (Sanjurjo, Franco, Mola, Goded, &c.), muchos de los cuales conservaban mandos importantes. [116]

Al mismo tiempo, los fascistas y reaccionarios realizaban provocaciones de todo género: se cerraban fábricas, se despedía a los obreros, dejándoles sin trabajo; se aceleraba la fuga de capitales; se prolongaban las huelgas, rechazándose las más mínimas demandas de los obreros; los grandes terratenientes paralizaban las faenas agrícolas, agravando la miseria de las masas campesinas.

Pistoleros a sueldo multiplicaban los asesinatos y atentados contra dirigentes obreros y personas democráticas. Por todos los medios imaginables, los fascistas intentaban sembrar el desorden, hacer imposible el normal desenvolvimiento de una vida democrática en España.

Esta situación exigía imperativamente la adopción de medidas radicales para ahogar la conspiración fascista y asegurar la aplicación, con decisión y audacia, del Programa de Frente Popular. La política del Partido Comunista, ratificada por el Comité Central en su reunión de marzo de 1935, tendía precisamente a lograr esos dos objetivos que,

además, en los hechos, aparecían estrechamente entrelazados el uno con el otro.

El Partido Comunista prestaba su apoyo leal al Gobierno para aplicar el Programa del Frente Popular. El Partido sostenía al Gobierno, en la calle y en el Parlamento, frente a los ataques de la reacción y del fascismo.

Pero ese apoyo no podía ser incondicional. Al concluir el Pacto del Frente Popular, el Partido no había hipotecado en modo alguno su independencia política. Es una cuestión de principio: un partido de la clase obrera, un partido marxista-leninista, al establecer compromisos con otras fuerzas, no puede, en ningún caso, sin caer en el oportunismo, abandonar su independencia, renunciar a elaborar y a defender ante las masas su propia política.

A la vez que apoyaba al Gobierno republicano, el Partido Comunista criticaba las cosas que no iban bien, presentaba al pueblo sus propias soluciones a los grandes problemas nacionales, movilizaba a las masas para que éstas presionasen sobre el Gobierno para exigir la aplicación del Programa del Frente Popular.

El Partido Comunista no olvidaba que la reacción, si bien había sufrido un serio golpe en las elecciones, conservaba su [117] poder económico y posiciones claves en el aparato estatal, principalmente en el Ejército.

La política propugnada por el Partido tendía esencialmente a privar a la reacción fascista de su base material y de la posibilidad de recurrir a la violencia contra el pueblo, a la guerra civil contra la República.

Eso sólo se podía hacer abordando de cara la solución de los problemas de la revolución democrática.

El PCE insistía particularmente en la necesidad de impedir la acción antirrepublicana de los grandes terratenientes que dejaban sistemáticamente sus tierras sin cultivar y decían a los campesinos: «Que os dé trabajo el Frente Popular». El Partido pedía que se emprendiese una verdadera reforma agraria, y lanzó la consigna: «Ni tierras sin cultivar ni campesinos con hambre», movilizándolo a las masas para aplicarla.

El Partido Comunista pedía medidas en favor de los parados, de los trabajadores en general. Luchaba para que se diese satisfacción a los

anhelos populares, sobre la base de ejecutar el Programa del Bloque Popular.

El Partido realizaba una gran acción política independiente, entre las masas, acción que no debilitaba la unidad antifascista, sino que la fortalecía.

A pesar de que el Partido Comunista había conquistado una fuerza numérica considerable y gozaba de gran ascendiente entre las masas, ni un solo momento se apartó de lo que había constituido la base de la formación del Frente Popular, ni pretendió valerse de su influencia política para imponer condiciones al resto de los partidos republicanos y democráticos.

Consciente de que, en las condiciones de España y en la situación internacional compleja que entonces existía, la única política justa era el mantenimiento de la unidad de las fuerzas democráticas, el Partido dedicó a esta tarea sus mejores esfuerzos. Y más de una vez se vio obligado a pronunciarse contra voces aisladas, irresponsables, que en el campo republicano expresaban deseos larvados de romper la unidad que había dado la primera victoria a los partidos del Frente [118] Popular, con el pretexto de una independencia política que nadie mermaba ni restringía.

En ese período, un hecho nuevo en la historia del Parlamento español fue la presencia en su seno de una minoría comunista. Los diputados comunistas llevaron a las Cortes un espíritu nuevo, un estilo auténticamente popular; demostraron prácticamente cómo la acción parlamentaria puede ser una contribución eficaz al desarrollo de la democracia, a la movilización de las masas.

La minoría comunista contaba con 17 diputados, de los cuales cuatro han sido asesinados más tarde por los franquistas: Bautista Garcés (diputado por Córdoba), Cayetano Bolívar (diputado por Málaga), Daniel Ortega (diputado por Cádiz), Suárez Cabrales (diputado por Canarias). La reacción temía las constantes denuncias que de su criminal labor antirrepublicana hacían los comunistas en las Cortes. Los grupos de izquierda expresaban su respeto, y muchas veces su aprobación, cuando hablaron los diputados comunistas, en particular José Díaz y Dolores Ibarruri. Las intervenciones de los parlamentarios del Partido, ampliamente difundidas entre las masas, eran eficaces instrumentos para la orientación del pueblo.

La política de Frente Popular implicaba básicamente la intervención de las masas en la vida política en un grado muy superior a lo que se había conocido en cualquier período anterior. Los dirigentes republicanos desconocían por completo esta realidad. Su idea, y también la de no pocos dirigentes socialistas, era que el Frente Popular debía disolverse una vez pasadas las elecciones. O subsistir, a lo sumo, en el plano de la actividad parlamentaria.

El Partido Comunista consideraba, por el contrario, que era decisivo conservar, extender y consolidar el Frente Popular después de las elecciones, como un amplio movimiento organizado de las masas para la lucha contra el peligro fascista y para garantizar la aplicación del Programa del Frente Popular.

El Partido Comunista lanzó la consigna: «Ni una aldea sin Frente Popular». Esta consigna fue comprendida y hecha suya por las masas, y también por numerosos comités y [119] cuadros locales de los partidos de izquierda. Lejos de disolverse, el Frente Popular se fortaleció después de las elecciones, y fueron constituidos Comités de Frente Popular hasta en los pueblos más pequeños.

Se llevaron a cabo grandiosas manifestaciones de masas, como la que tuvo lugar en Madrid el 1 de marzo, en la que participaron 600.000 personas y el impresionante desfile del 1º de Mayo. Ningún Gobierno había contado en España con un apoyo de masas comparable al que tuvieron los dirigentes republicanos en ese período. Disponían de todos los elementos para haber podido desarraigar del suelo de España, si hubiesen actuado al estilo jacobino, las plantas venenosas del fascismo, asegurando así el desarrollo pacífico de la democracia. Pero no lo hicieron.

Y cuando, frente a los febriles preparativos de la reacción, era imperativo actuar con ritmo rápido y con pulso enérgico, los dirigentes republicanos aplicaban una política de blanduras y vacilaciones con respecto a la reacción; con pretextos legalistas demoraban, o realizaban sólo con cuentagotas, el Programa del Frente Popular, demostrando que nada habían aprendido de la triste experiencia del período de 1931 a 1935, en el curso del cual se habían dejado arrebatar la República.

La lucha por evitar la guerra civil

Frente a los deseos de las fuerzas obreras y democráticas –y en primer lugar del Partido Comunista– de hacer que la democracia se consolidase y se desarrollase en España por vías pacíficas, se alzó la voluntad de las fuerzas reaccionarias y fascistas, de la oligarquía financiera latifundista, de su instrumento armado –la casta de generales africanistas, de recurrir a la violencia, sumiendo a España en una sangrienta guerra para impedir el progreso democrático, para conservar sus odiosos privilegios.

No había más que un camino para evitar la guerra civil: maniatar a los que preparaban la sublevación militar. Había, pues, un aspecto concreto del Programa del Frente Popular cuyo cumplimiento era inaplazable: la depuración del Ejército [120] de los elementos fascistas, en particular de los que habían demostrado ya su odio al pueblo en la brutal represión contra los trabajadores asturianos. La lucha por privar a la reacción fascista de su base material, por eliminar del Ejército a los generales fascistas, por poner coto a las provocaciones reaccionarias, presidió toda la actividad política del Partido Comunista, hasta el día mismo en que estalló la sublevación.

En vísperas de las elecciones del 16 de febrero, en su discurso en el teatro de la Zarzuela, José Díaz advirtió que si, una vez establecido un Gobierno de izquierda, «se deja que el Ejército esté dirigido por generales fascistas y monárquicos... el triunfo del Bloque Popular no será más que relativo, y nos va a durar el tiempo que tarde en reponerse la reacción».

El Partido Comunista designaba personalmente, con sus nombres, a los generales que estaban preparando un golpe para instaurar en España una dictadura fascista. El título de primera página de «Mundo Obrero» del 27 de febrero decía: «En los altos mandos del Ejército español están los Goded, Franco, Fanjul, Martínez Anido y numerosos jefes y oficiales fascistas. ¡Exigimos su separación inmediata y la democratización del Ejército!».

En discurso ante las Cortes, el 15 de abril, el camarada José Díaz decía:

«No queremos que puedan estar dentro del Ejército elementos de destacada tendencia reaccionaria como Franco, Goded y otros de la misma calaña».

En la crisis del 12 de mayo –provocada por la elección de Azaña a la presidencia de la República– la nota oficial del Partido Comunista subrayaba que éste colocaba en un primer plano de las tareas que debía asumir el nuevo Gobierno la depuración del Ejército de los elementos fascistas que estaban conspirando contra la República.

A la vez que desplegaba esta campaña pública, en la calle y en el Parlamento, para alertar y preparar a las masas, para pedir al Gobierno medidas drásticas, el PCE realizaba gestiones directas, personales, cerca de los ministros [121] responsables, les daba pruebas de los preparativos del levantamiento y exigía medidas radicales.

Un mes antes de estallar la sublevación, dirigentes del Partido Comunista visitaron a Casares Quiroga para denunciar los preparativos militares de los carlistas en Navarra. El jefe del Gobierno respondió despectivamente que los comunistas «veían sublevaciones hasta en la sopa»...

Si el Gobierno hubiese aplicado las medidas que el Partido Comunista reclamaba día tras día contra los generales y otros elementos fascistas que conspiraban contra la República, la sublevación militar del 18 de julio hubiese sido ahogada antes de estallar.

Las denuncias del PCE no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno republicano. Este no tomó las medidas que eran imprescindibles para la defensa de la República. Pese a las pruebas concretas que demostraban sus actividades conspirativas, nombró a Franco Capitán General de Canarias; a Goded, Capitán General de Baleares, y envió a Mola a Navarra.

Pero las denuncias del Partido Comunista no fueron inútiles. Si el Gobierno no hizo caso de ellas, en cambio el pueblo sí las tuvo en cuenta. La intensa labor de explicación política llevada a cabo por los comunistas para hacer sentir al pueblo el peligro de la sublevación fascista, puso en tensión a las más amplias masas de todas las tendencias obreras y republicanas. Gracias a esa gran acción política y organizativa del Partido entre las diversas capas de la población, el pueblo español era cada vez más consciente de las amenazas que le acechaban, y se fortalecía cada vez más su inquebrantable decisión de oponerse por todos los medios a cualquier intento del fascismo de derribar la democracia recién reconquistada. En esa conciencia del pueblo, fruto sobre

todo del trabajo del Partido Comunista, está el secreto de lo que sucedió el 18 de julio.

Mientras tanto, con su actitud de vacilaciones y de ceguera ante los preparativos de la sublevación fascista, el Gobierno republicano dejaba de hecho las manos libres a quienes se disponían a lanzar a España al abismo de la guerra. [122]

Esas vacilaciones, esa ceguera, ese «empacho de legalismo» con el que se pretendía justificar el retraso en la aplicación del Programa del Bloque Popular, no eran hechos casuales. Tenían una raíz de clase. Demostraban que la pequeña y mediana burguesía, por miedo a la clase obrera, no estaban dispuestas a liquidar la base material de la reacción, no estaban dispuestas a llevar adelante la revolución democrática en España.

Y en su negativa de marchar hacia adelante, llegaban al extremo de dejar a la República casi indefensa ante sus más encarnizados enemigos.

No se escuchó al Partido Comunista en aquellos momentos tan decisivos para España. Y porque no se escuchó al Partido Comunista, la sublevación fascista pudo estallar.

La reacción fascista y monárquica se entregaba a toda suerte de provocaciones para preparar la sublevación. Desde la tribuna parlamentaria y desde la prensa, realizaba una campaña desenfadada de excitaciones a la violencia armada contra el pueblo y contra la República. La Falange y otros grupos reaccionarios multiplicaban los atentados contra personalidades republicanas, civiles y militares, causando la muerte de numerosos demócratas, lo que no podía dejar de provocar la respuesta indignada de las izquierdas. Un clima de guerra civil se extendía por España.

A comienzos de julio, la agresividad de las fuerzas reaccionarias que preparaban el levantamiento llegó a su punto culminante. Los chispazos del complot fascista iluminaban trágicamente la vida política y social de España. La muerte violenta del dirigente político monárquico, Calvo Sotelo, en la que, contrariamente a lo que ha reiterado la propaganda fascista, el Partido Comunista no tuvo ni arte ni parte, ni de cerca ni de lejos, fue el pretexto para desencadenar la sublevación.

Capítulo tercero

La guerra nacional revolucionaria

La victoria inicial del pueblo

El 18 de julio de 1936 España despertaba sobresaltada. Empezaba una sangrienta guerra civil que, rápidamente, iba a convertirse en guerra nacional revolucionaria de trascendencia internacional. Fuerzas del Ejército, en Marruecos y en la Península, apoyadas por la reacción terrateniente-burguesa y en estrecha connivencia con la Italia de Mussolini y la Alemania hitleriana, se sublevaron contra la República.

Dirigentes republicanos de alta responsabilidad trataron de pactar con los sublevados. Tal fue el significado del intento de Martínez Barrio de formar un nuevo Gobierno el 19 de julio, después de la dimisión de Casares Quiroga.

Pero ni la disposición capituladora de estos dirigentes ni el factor sorpresa con que contaban los sublevados influyeron, en la forma decisiva que éstos suponían en sus planes, en el desarrollo de los acontecimientos. Frente a unos y otros estaba el pueblo, estaban las masas trabajadoras. Estas no fueron totalmente sorprendidas por la sublevación a pesar de la perfidia con que algunos de los generales participantes en aquella enmascararon su traición a la República, negando sus intenciones subversivas hasta el momento mismo del [124] alzamiento y haciendo declaraciones y protestas de lealtad al régimen.

Modelo de doblez fue la carta que el general Franco dirigió al ministro de la Guerra el 23 de junio de 1936, cuando ya la preparación del complot militar estaba en pleno apogeo. Aseguraba en ella Franco al ministro:

«Faltan a la verdad los que lo presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones...»

La constante actuación antifascista del Partido Comunista, sus reiteradas denuncias de las actividades subversivas de la reacción y los hechos criminales que realizaban a diario los fascistas, habían mantenido vigilantes a las masas, prestas a dar la respuesta a la agresión. Los trabajadores que habían derrotado a la reacción en las elecciones de febrero hicieron acto de presencia en la calle, orientados fundamentalmente por el Partido Comunista, para exigir de los dirigentes republicanos y del Presidente de la República que el pueblo fuera ar-

mado, que se constituyera un Gobierno dispuesto a defender la República, y que se organizara esta defensa. La movilización de las masas determinó que las fuerzas republicanas tomaran posición en pro de la unidad y de la lucha en defensa de la República y de las libertades populares. Quedó constituido un nuevo Gobierno, presidido por el dirigente de Izquierda Republicana, José Giral. Dicho Gobierno, formado por representantes de los partidos republicanos, facilitó el armamento del pueblo. Tal acto demostraba que una gran parte de la pequeña burguesía y sectores importantes de la burguesía media, ante el ataque brutal del fascismo y bajo la presión de las masas, se colocaban al lado de la clase obrera para defender la democracia. El Partido Comunista no puso ningún obstáculo a ese Gobierno y le prestó sin reservas su apoyo en la labor de organizar la lucha del pueblo contra el fascismo.

El 19 de julio la contienda estaba entablada en toda España. El pueblo español había hecho suya, frente a los rebeldes, la decisión que ese mismo día había expresado el Partido en su llamamiento a la resistencia: *No pasarán*.

La lucha en Madrid, sobre el cual se concentraron las miradas del mundo entero, se decidió en el Cuartel de la Montaña. Los militares leales habían hecho abortar la sublevación de los Regimientos de Infantería nº 6 y de Carros de Combate del Pacífico, apoderándose de sus cuarteles y del mando de las fuerzas. La audaz iniciativa de los dirigentes comunistas de entrar en el cuartel del Regimiento de Infantería nº 1 y hablar a los soldados decidió a éstos a ponerse al lado de la República. Las fuerzas de Aviación permanecieron leales al régimen y, con el apoyo de los Guardias de Asalto, de destacamentos de la Guardia Civil, que no se sublevó, y de algunos elementos populares, dominaron, tras breve lucha, a los sublevados del Regimiento de Artillería de Carabanchel. La labor que durante años había realizado el Partido entre los militares contribuyó en gran medida a la realización, en aquellos momentos, de las citadas acciones en defensa de la República. En algunas de esas luchas, y frente a los muros del Cuartel de la Montaña, cayeron los primeros héroes anónimos de la larga y heroica lucha que comenzaba con la agresión fascista. El combate por el Cuartel de la Montaña fue una expresión del heroísmo y de la decisión de las masas de defender la República y, con ella, sus derechos y

libertades democráticos conquistados a costa de tantos sacrificios. Madrid había ganado la primera batalla a los asaltantes fascistas.

La derrota de la sublevación en la capital reafirmó ea las masas populares la confianza en sus propias fuerzas y su optimismo respecto al resultado final de la contienda. Pero el Partido Comunista previno inmediatamente a las masas contra la exageración de ese sentimiento; les hizo ver que ni la guerra estaba ganada con aquellas primeras acciones ni había desaparecido el peligro que se cernía sobre la capital. La mayoría de los militantes del Partido marchó a cerrar los caminos de acceso a Madrid a las fuerzas de los sublevados; el Partido realizó un ímprobo trabajo para incorporar a la lucha, encuadrándolos en los primeros batallones de milicias, a millares de valerosos combatientes antifascistas. [126]

Organizar y dirigir la acción; fortalecer a las milicias populares; unificar a los mandos políticos y militares: tal era la orientación que destacaba el llamamiento del Comité Provincial de Madrid al pueblo madrileño cuando aún resonaban los ecos de la lucha en el recinto de la capital.

Al igual que en Madrid, la clase obrera y fuerzas populares de Barcelona se lanzaron heroicamente contra los militares y fascistas que, en las primeras horas del día 19 de julio, se sublevaron en diferentes cuarteles y ocuparon las plazas y edificios principales de la ciudad.

La Guardia Civil, los Guardias de Asalto y los militares leales apoyaron al pueblo. En la mañana del día 20, después de sangrientos combates, los rebeldes habían perdido sus principales posiciones. A las seis de la tarde fue izada en la Capitanía General, donde el jefe de la sublevación, general Goded, había establecido su Estado Mayor, la bandera blanca. La derrota de la guarnición de Barcelona hizo abortar la sublevación en las otras guarniciones de Cataluña. Esta lucha aceleró la fusión de los cuatro partidos obreros que unos días después constituyeron el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).

En Asturias, el Coronel Aranda recurrió al engaño y a la felonía para asegurar el triunfo de la subversión. Pero los obreros y mineros de Asturias respondieron enérgicamente al ataque de los sublevados. Después de un mes de sangrienta lucha, Asturias, excepto Oviedo que quedó cercado por las fuerzas populares, permaneció en manos del pueblo.

En toda la zona industrial del País Vasco, en Guipúzcoa y Vizcaya, fue aplastada la sublevación y siguió ondeando victoriosa la bandera republicana.

Durante varios días pesó sobre Valencia la amenaza de la insurrección militar. La movilización de millares de obreros y de huertanos que se concentraron en la capital influyó en la actitud de muchos soldados y clases, que se pusieron a favor del pueblo. Los cuarteles quedaron, casi sin resistencia, en poder de las fuerzas populares. Todo Levante quedó en manos de la República.

Galicia fue dominada por las fuerzas militares de los generales sublevados. Pero no sin que el pueblo [127] gallego escribiese aquellos días páginas inmarcesibles de heroísmo, al resistir a los rebeldes en La Coruña, Vigo, El Ferrol y otros lugares. En la zona republicana, compuestas en parte por evadidos de Galicia, se crearon las Milicias Gallegas y el Batallón Galicia en Asturias, que participaron activamente en la guerra.

La resistencia popular en Sevilla, Cádiz, Granada y en numerosos pueblos andaluces se prolongó durante varios días, y sólo pudo ser vencida merced a los refuerzos de legionarios y tropas marroquíes enviados por Franco desde África. Esto no obstante, las fuerzas obreras y campesinas pasaron a la ofensiva y llegaron a las inmediaciones de Córdoba y Granada. Los mineros de Linares y de La Carolina conservaron en su poder las minas en las que trabajaban, lo mismo que hicieron los mineros de Río Tinto hasta finales de agosto de 1936. Formaron, además, columnas que ocuparon numerosos pueblos y extensas zonas de Andalucía. Málaga, Jaén y Almería siguieron en manos republicanas.

También quedaron en poder del pueblo Badajoz y gran parte de Extremadura. Este territorio formaba una cuña que dividía las zonas dominadas por los facciosos al Norte y al Sur de España.

Fueron muchos los militares, mandos del Ejército, de los Guardias de Asalto y de la Guardia Civil, que no se sublevaron, y se pusieron luego al lado del pueblo. Todos los que en los lugares donde la sublevación triunfó se negaron sencillamente a participar en ella, fueron fusilados o asesinados por los facciosos. Así murieron, con otros muchos jefes y oficiales, los generales Villabril, Núñez de Prado, Batet, Caridad Pita, Salcedo y Romerales.

La mayor parte de la pequeña aviación española se mantuvo fiel al Gobierno de la República.

La mayoría de las tripulaciones de los barcos de la Flota de Guerra que estaba navegando al estallar la sublevación fascista se alzaron contra los mandos, los cuales, salvo honrosas excepciones, estaban comprometidos en el complot; las tripulaciones hicieron prisioneros a algunos de los mandos y se apoderaron de los buques. [128]

La clase obrera y el pueblo habían respondido a la agresión con contragolpes tan potentes que, en su conjunto, constituyeron una gran victoria inicial sobre los facciosos.

En esa lucha, que se desarrollaba de un extremo a otro, del país, ocuparon desde el primer momento puestos de vanguardia los dirigentes comunistas que desde el primer día estuvieron ligados con los frentes. Allí estaban José Díaz, Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, Pedro Checa y Antonio Mije. Junto a los comunistas, rivalizando en heroísmo, combatieron los dirigentes de la JSU: Santiago Carrillo, Medrano, Claudín, Cazorla, Melchor, Gallego, Andrés Martín y Lina Odena. Los dos últimos cayeron en esos primeros combates contra los enemigos del pueblo.

Durante el resto del mes de julio y los primeros días de agosto los combatientes populares obtuvieron nuevos triunfos. Era evidente que si la guerra se hubiera desarrollado dentro de los límites de lo que es una guerra civil habría sido pronto ganada por el pueblo. En aquellos primeros días, de las 32 respuestas que los cónsules de Inglaterra en España dieron a la consulta que les hizo su Gobierno respecto a las perspectivas de la lucha, 30 expresaban la seguridad en el triunfo de la República. En un telegrama dirigido a su Gobierno, decía, con fecha 25 de julio de 1936, el embajador de Alemania en Madrid:

«A menos de que ocurra algo imprevisto, es difícil esperar, en vista de la situación militar, que la rebelión pueda triunfar».

La gran victoria sobre los rebeldes había sido lograda fundamentalmente por la unidad combativa antifascista de los elementos que en aquellos momentos históricos constituían el pueblo: la clase obrera, los campesinos, la inmensa mayoría de la pequeña burguesía urbana, los intelectuales progresivos y algunos sectores de la burguesía media.

Esa amplia unidad, si bien expresaba la unánime voluntad de las masas de resistir a la agresión, no se había realizado casual ni espontáneamente. La lucha tenaz por la unidad de la clase obrera y de las fuerzas democráticas, sostenida sin [129] descanso por el Partido Comunista durante los años que precedieron a la guerra, había influido decisivamente en la realización de dicha unidad.

La formación del Frente Popular y la ampliación del mismo; la creación de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC): las Alianzas Obreras y Campesinas; los progresos de la unidad de acción de los Partidos Socialista Comunista; la unidad sindical entre la UGT y la CGTU; la constitución de la JSU y de un partido único marxista-leninista del proletariado de Cataluña (el Partido Socialista Unificado), hechos todos en los que la actividad y la propaganda del Partido habían sido determinantes, constituyeron la base de la unidad obrera y popular que había actuado victoriosamente contra los militares facciosos como la más potente de las armas del pueblo.

La guerra cambia de carácter

A evitar la derrota de los sublevados acudieron Hitler y Mussolini, los cuales no vacilaron en convertir la «ayuda» inicial que habían prestado ya a los facciosos, en una intervención armada, cada vez más intensa, contra la República. Los Estados fascistas alemán e italiano estaban interesados, por motivos políticos, económicos y estratégicos, en el triunfo de la sedición que habría de establecer en España una dictadura fascista, aliada y supeditada a ellos.

En el orden político, el aplastamiento del Frente Popular español tenía gran importancia para el fascismo germanoitaliano. Dicho Frente, que era en aquel período la representación más combativa, en la Europa capitalista, de la unidad de la clase obrera y las fuerzas democráticas, impulsaba con su ejemplo la lucha antifascista en otros países.

En el aspecto estratégico, la rebelión de los generales españoles podría facilitar la integración de España en los planes de guerra del imperialismo alemán e italiano contra Inglaterra y Francia. Tal integración daría a Alemania la posibilidad de introducirse con sus fuerzas armadas en el campo de sus adversarios europeos, al disponer de una base [130] de extraordinario valor estratégico, como lo tiene el territorio de

España. La posesión de esa base permitiría al hitlerismo la realización del viejo anhelo del militarismo alemán: la constitución de una tenaza estratégica destinada a triturar a Francia. El fascismo italiano, por su parte, tendía a asentar su planta en las Baleares, paso importante en la realización del plan de Mussolini de convertir el Mediterráneo en un lago italiano.

En el propósito de los dirigentes hitlerianos, la ayuda de Alemania a la dictadura fascista española habría de traducirse también en facilidades que ésta debería dar al capital alemán –el cual las obtuvo amplísimas, efectivamente, durante la guerra– para penetrar impetuosamente en la economía española, y especialmente en la rama de la minería: la explotación de la gran riqueza del subsuelo español en minerales estratégicos para alimentar la industria de guerra alemana constituyó uno de los objetivos fundamentales de la «ayuda, alemana a los facciosos».

Los hechos y los documentos publicados, principalmente después de la guerra mundial, demuestran que la llamada «ayuda» de las potencias fascistas a la rebelión consistió, en verdad, en la brutal intromisión de la Alemania y la Italia fascistas en España, tanto en el aspecto político como en el económico y el militar, para convertirla en un país vasallo, utilizando como vehículo a la reacción indígena. Esta hizo patente, una vez más en la historia española, que anteponeía sus intereses de clase a los intereses nacionales y que no dudaba, para satisfacer aquéllos, en abrir las puertas del país a la intervención armada extranjera ni en hipotecar la independencia nacional.

Ya en los primeros días de la guerra, Alemania e Italia, con sus aviones y sus barcos, hicieron posible el traslado rápido a la Península de las fuerzas extranjeras y de las legionarias y marroquíes que, al decir del general García Valiño (en su artículo «La obra de Franco» publicado en «Ya»), eran «la mejor de las piezas que Franco había de jugar en el tablero de la guerra». A los sublevados llegaba, en cantidad creciente por días, el material de guerra más moderno alemán e italiano, y, más tarde, unidades militares de Alemania e [131] Italia, escuadri-llas de bombardeo y caza, millares de fusiles y ametralladoras, centenares de cañones y tanques, especialistas de todas las armas, ingenieros industriales, técnicos de Economía, agentes de la Gestapo y de la OVRA.

Una parte importante de las escuadras alemana e italiana de superficie, así como varios submarinos, actuaron desde los primeros momentos de la guerra en apoyo de los sublevados, atacando a los barcos que se dirigían a la zona republicana y bombardeando diversos puntos de ésta.

Entre los agresores de la República española figuró también la dictadura fascista de Salazar, que puso los puertos, los aeródromos de Portugal, sus comunicaciones, dos fábricas de armamento ligero, sus consulados y hasta la policía portuguesa a disposición de los sublevados, y que envió 15.000 hombres armados a reforzar el Ejército de Franco.

Así, el pueblo español se vio obligado a hacer frente, no sólo a los militares rebeldes y a los fascistas españoles alzados contra la República, sino, también, a las fuerzas armadas de dos Estados tan poderosos como Alemania e Italia.

La situación se agravó aún más para los defensores de la República al ponerse en marcha la tristemente célebre política de No-Intervención, engendro del imperialismo inglés, que apadrinó el Gobierno francés presidido por el dirigente socialista León Blum.

El acuerdo de No-Intervención establecía teóricamente la prohibición de vender y proporcionar armamento a cualquiera de los dos bandos contendientes: el Gobierno legítimo de un pueblo soberano, de una parte, y un grupo de generales sublevados contra ese Gobierno legítimo, de otra parte.

En el aspecto jurídico internacional, el convenio era ya una monstruosidad. Pero, además, era una farsa. Mientras los Estados fascistas alemán, italiano y portugués violaban el acuerdo, del que hicieron caso omiso desde los primeros momentos, y enviaban constantemente a los rebeldes armas y unidades militares que iban a ser una ayuda decisiva para ellos –y todo esto a ciencia y paciencia de los otros Gobiernos capitalistas europeos– éstos aplicaban el acuerdo de No-Intervención de una manera unilateral al Gobierno español, y de este modo establecían un verdadero cerco de la República. [132]

A completar el asedio contribuyeron también los Estados Unidos con su política de «neutralismo», variante yanqui de la No-Intervención. Una y otra significaban dejar las manos libres a Alemania e Italia para

hacer la guerra a España, al ayudarlas a que invadieran, destrozaran y esclavizaran al país.

Caracterizando tal política escribió el entonces embajador de los EE.UU. en España, Bowers:

«El Comité de No-Intervención y nuestro embargo representan una poderosa contribución al triunfo del Eje sobre la democracia española».

El embajador se olvidó de consignar otra contribución de los EE.UU. al triunfo del fascismo en España, más importante aún que el embargo: el haber abastecido a los rebeldes, desde el primero hasta el último momento de la guerra y en cantidad ilimitada, de la gasolina que vitalmente necesitaban sus ejércitos y su retaguardia. Como ha hecho constar en un libro el que fue ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Serrano Suñer,

«residía en Burgos un representante de la Standard Oil que aprovisionaba sin límites de carburante al Ejército Nacional».

La política de No-Intervención y «neutralismo» era la aplicación al caso de España de la política de contemporización con el fascismo alemán y con el italiano, la política que venían practicando los círculos más rapaces del capital monopolista internacional y los gobiernos burgueses o socialistas que servían a los intereses de tales círculos.

Las clases dominantes de Inglaterra y Francia, acostumbradas a tratar a España como a un país de segunda categoría, temían que el pueblo español saliera vencedor en aquella lucha armada, y se fortaleciera así el Frente Popular; para evitarlo, ayudaban con una política antidemocrática a la victoria del fascismo.

El imperialismo anglo-francés veía en el fascismo alemán el «puño de hierro» llamado a descargar, en su día, un golpe demoledor sobre el baluarte de la paz y del progreso, la Unión Soviética. Por esa razón abrieron a Hitler las puertas de Austria; por la misma razón tramaron la vileza de Munich, en septiembre de 1938, donde se pusieron de acuerdo plenamente con Alemania e Italia para entregar Checoslovaquia al fascismo alemán, y por ello también actuaron como cómplices del fascismo italo-alemán en su agresión contra la España democrática.

La intervención fascista, de una parte, la No-Intervención y el «neutralismo» de los gobiernos imperialistas llamados democráticos, de otra, actuaron durante toda la contienda española como un binomio de términos inseparables y de acción permanente y decisiva para impedir el triunfo del Gobierno constitucional español. Cada victoria republicana se aducía en un refuerzo de la intervención armada del fascismo extranjero. A cada revés sufrido por Franco correspondía, igualmente, un aumento de los esfuerzos del Gobierno inglés, secundado por los otros Gobiernos partidarios de la No-Intervención, por cubrir a los agresores y favorecer de hecho al franquismo.

En contraste con la política de No-Intervención y el «neutralismo» aparece aún más clara, generosa y ejemplar la posición respecto a España, a su pueblo y a su Gobierno legítimo, de la Unión Soviética, de los hombres y mujeres del país del socialismo, que hacían suyas las inolvidables palabras del telegrama que el camarada Stalin dirigió al Partido Comunista de España:

«Los trabajadores de la Unión Soviética, al ayudar en lo posible a las masas revolucionarias de España no hacen más que cumplir con su deber. Se dan cuenta de que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresiva».

Toda la población de la Unión Soviética participó en ayuda material y moral a la España republicana. Desde el principio hasta el fin de la guerra la voz potente de la Unión Soviética se alzó, en todas las sesiones del Comité de [134] No-Intervención, en las de la Sociedad de las Naciones y en todas las reuniones internacionales, para defender a España, a su pueblo y a su Gobierno legítimo, para llamar a los representantes de los países democráticos a que respetaran el derecho internacional en relación con España, para desenmascarar la hipocresía de los sostenedores de la política de No-Intervención. Y cuando se hizo evidente que la No-Intervención sólo servía para cubrir la ayuda exterior al franquismo, la U.R.S.S. declaró solemnemente que recababa su pleno derecho a prestar ayuda al Gobierno republicano. En la retaguardia y en los frentes, nuestro pueblo halló las pruebas concretas de esa ayuda que en todos los aspectos le prestó la Unión Soviética en aquellos momentos. Su importancia la proclamaron repetidas veces

los representantes de todas las fuerzas que constituían el Frente Popular, desde la derecha republicana a los comunistas. El Presidente de las Cortes de la República, Diego Martínez Barrio, expresó en 1937 el sentir de todo el pueblo español en lucha contra el fascismo, en esta frase:

«Sin la ayuda de la Unión Soviética nuestra República hace tiempo que hubiera dejado de existir».

Y al cumplirse el primer año de guerra escribía el Presidente Negrín:

«A la URSS y a sus grandes gobernantes deberá España, y con España el mundo entero, perenne gratitud».

En la gran ayuda moral y material del país del socialismo a nuestro pueblo destaca con inmarcesible y emocionante recuerdo la de los heroicos voluntarios soviéticos que llegaron a España para enseñar a nuestros soldados y a los jóvenes comandantes del Ejército Popular el manejo del moderno material de guerra y el arte militar contemporáneo. Derrochando modestia y valor, ellos mostraron cómo se debía combatir en el aire, desde los tanques modernos y contra ellos. Los voluntarios soviéticos merecen ocupar un puesto de honor en la historia de nuestra guerra.

La conducta de la Unión Soviética en relación con la guerra de España fue una prueba de lo que para los pueblos [135] que luchan por su independencia y su libertad, por el progreso social, significaba y significa la existencia del País Soviético.

La lucha del pueblo español despertó la solidaridad del proletariado internacional y de los pueblos del mundo. Ningún otro acontecimiento de la lucha social y política en los diferentes países, de los ocurridos hasta entonces después de la gran Revolución Socialista de Octubre, conmovió tan profundamente a las masas obreras y populares del mundo, como la lucha del pueblo español. Desde todos los continentes, de las mismas Alemania e Italia dominadas por las dictaduras fascistas, llegaban al pueblo español la ayuda y el aliento de millones y millones de seres que comprendían que la causa de nuestro pueblo era también suya.

«La causa por la que Vds. luchan –escribía a los españoles el gran dirigente del Partido Comunista Chino, Mao Tse-tung– es también nuestra causa...»

Los Partidos Comunistas encabezaron la movilización de las amplias masas trabajadoras y las fuerzas democráticas de sus países respectivos, llamándolas a la acción unida en defensa de la República española. El 29 de julio de 1936, a los diez días de haber empezado la guerra, en el llamamiento que Dolores Ibárruri dirigió aquel día, por radio, a la opinión mundial, en nombre del Comité Central, se decía de manera profética:

«¡Ayudadnos a defender la democracia! Si la democracia española fuese destruida la consecuencia sería el estallido de la guerra que todos queremos evitar».

La solidaridad de los trabajadores y demócratas de todos los países con la República española tuvo encarnación heroica en los «Voluntarios de la Libertad» que formaron las gloriosas Brigadas Internacionales, representantes de más de medio centenar de países; había en ellas comunistas, socialistas, hombres pertenecientes a diferentes partidos burgueses democráticos, o que no pertenecían a ningún partido; hombres de los más diversos oficios y profesiones; obreros, campesinos, intelectuales. [136]

Las Brigadas Internacionales fueron la expresión del internacionalismo proletario, del sentimiento antifascista de los pueblos, del verdadero patriotismo. Eran las continuadoras de las mejores tradiciones de los voluntarios que participaron en épocas anteriores en luchas por la independencia y la libertad de otros países. Frente a los 300.000 soldados regulares y asalariados italianos, alemanes, marroquíes y legionarios que ayudaron decisivamente a Franco en el aspecto militar propiamente dicho, los 35.000 auténticos voluntarios internacionales, incluidos los soviéticos, representaban una fuerza numéricamente pequeña, pero de altísimo significado moral, político y humano, que constituyó una aportación valiosísima a la lucha del pueblo español. El heroísmo sin límites derrochado por los voluntarios internacionales en numerosos combates, acreditado para siempre en la Historia con los 5.000 muertos frente al enemigo que tuvieron las Brigadas, servía de acicate y ejemplo al heroísmo de los combatientes españoles; el ejemplo de unidad y disciplina que daban los «Voluntarios de la Libertad» tenía reflejos muy positivos en el frente y en la retaguardia. Las mil veces heroicas Brigadas Internacionales ganaron para siempre el derecho a ocupar en la historia universal un lugar de honor entre los

combatientes de la libertad, el progreso y la paz, y la imperecedera gratitud de todos los demócratas españoles.

Las Brigadas Internacionales nos han legado su ejemplo, luminoso y su recuerdo inolvidable, que en la España de mañana serán lección viva y permanente de solidaridad proletaria, en su expresión más sublime, para las jóvenes generaciones.

Los poetas españoles cantaron a las Brigadas Internacionales. Rafael Alberti les dedicó este poema ya en los primeros días de la defensa de Madrid:

*Venís desde muy lejos... Mas esa lejanía,
¿qué es para vuestra sangre, que canta sin fronteras?
La necesaria muerte os nombra cada día,
no importa en qué ciudades, campos o carreteras.
De este país, del otro, del grande, del pequeño
del que apenas si al mapa da un color desvaído, [137]
son las mismas raíces que tiene un mismo sueño
sencillamente anónimos y hablando habéis venido.
No conocéis siquiera ni el color de los muros
que vuestro infranqueable compromiso amuralla.
La tierra que os entierra la defendéis, seguros,
a tiros con la muerte vestida de batalla.
Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos,
las mínimas partículas de la luz que reanima
un solo sentimiento que el mar sacude. ¡Hermanos!
Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.*

La responsabilidad de que el importante movimiento de solidaridad internacional hacia el pueblo español no consiguiese poner fin a la política de No-Intervención recayó, en primer lugar, sobre los dirigentes de la Segunda Internacional. Ellos se opusieron a las reiteradas propuestas en favor de España, de realizar la unidad de acción de la clase obrera contra la política de No-Intervención, que les fueron hechas por la Internacional Comunista. Dichos dirigentes arrastraron a la mayoría de los partidos de la Segunda Internacional a seguir, en relación con España, la misma política que practicaba la burguesía reaccionaria de Francia y de Inglaterra.

Hechos históricamente establecidos son: que fue un socialista, León Blum, Presidente del Gobierno francés, el que apadrinó la farsa de la

No-Intervención; que fue otro socialista, Spaak, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno belga, el primero que planteó la conveniencia de reconocer a Franco; que fueron los Gobiernos de los países escandinavos, en los que actuaban dirigentes de la Segunda Internacional, los que se apresuraron a enviar a «sus representantes económicos» a Burgos en los momentos difíciles de la lucha del pueblo español, y que fueron también los primeros, luego, en reconocer al Gobierno franquista; que el Pacto de Munich fue aprobado y aclamado por la mayoría de los jefes de la socialdemocracia internacional. Todo ello, a pesar de la repulsa y la repugnancia de millares de obreros y trabajadores socialistas, que sentían fervorosa simpatía por la democracia combatiente española. [138]

La intervención armada extranjera y la No-Intervención imperialista no sólo cambiaron rápidamente la relación de las fuerzas militares, muy acusadamente en favor de los facciosos, sino también el carácter de la guerra. El Partido Comunista exponía, ya a mediados de agosto de 1936, que la lucha que se desarrollaba en España no podía considerarse dentro del marco de una contienda civil entre españoles; había rebasado los límites de la guerra civil para convertirse, fundamentalmente, en una guerra nacional revolucionaria.

El carácter revolucionario de la guerra estaba determinado por el hecho de que el pueblo, al luchar contra la agresión de la reacción fascista, luchaba por destruir sus bases materiales, por democratizar la vida económica, política y social de España. Y reforzaba ese carácter el hecho de que la guerra era la primera gran batalla en Europa de la democracia contra el fascismo. En esa contienda, como lo proclamaba el Partido el 17 de agosto de 1936, los combatientes de la República, con plena conciencia de ello, asumían en aquel momento el papel de «vanguardia mundial de la lucha antifascista».

El carácter nacional de la lucha del pueblo se derivaba del grave peligro que amenazaba a la independencia nacional. La guerra que el pueblo español se veía obligado a hacer, en respuesta a la agresión fascista, era una guerra en defensa de dos valores y derechos esenciales de la patria: la independencia y la libertad. Los grupos oligárquicos que, remedando a sus valedores hitlerianos, se titulaban «nacionales» y defensores de la patria, negaban el patriotismo de los que ellos llamaban «rojos», en general, y de los comunistas en particular. Pero la

patria no es un concepto vacío de contenido político y social, sino un concepto históricamente concreto, que engloba un medio material, la tierra donde viven y trabajan los hombres, y un medio político, social y cultural históricamente determinado. Defender a la patria, en la situación concreta creada por la agresión del fascismo extranjero e indígena, era en 1936 defender la tierra y las riquezas españolas, para evitar que manos extranjeras se posesionaran de ellas con la complicidad de la oligarquía española, y era, simultáneamente, defender a la República, la democracia conquistada por el pueblo laborioso. [139]

En la guerra que el pueblo hacía al fascismo, en defensa de la independencia y la libertad de los españoles, el patriotismo adquiría su verdadero sentido.

En la España partida en dos por el hacha del fascismo tenía plena comprobación esta doble verdad del marxismo-leninismo:

«La defensa de la patria es una mentira en la guerra imperialista, pero no es en modo alguno una mentira en la guerra democrática y revolucionaria». (*Lenin.*)

Ante el nuevo carácter que había tomado la guerra, el Partido destacaba la necesidad de organizarla «con la perspectiva de una lucha larga», para lo que había que crear e intensificar los servicios bélicos y, en primer lugar, el ejército capaz de hacer frente y derrotar a las poderosas fuerzas enemigas.

Entrada del Partido Comunista en el gobierno de Frente Popular. El Quinto regimiento

La continuación de la guerra agravaba la situación en la zona republicana. Los gobernantes de la República se sentían en cierta manera desbordados por los acontecimientos.

Encargado de formar gobierno, el dirigente socialista Largo Caballero exigió la colaboración de los comunistas, sin lo cual el jefe socialista declaraba no estar dispuesto a asumir las responsabilidades gubernamentales.

Con lealtad y sinceridad había prestado el Partido Comunista apoyo y respaldo al Gobierno Giral, y estaba dispuesto a seguirlos prestando en la misma forma a cualquier otro gobierno republicano que estu-

viere decidido a oponerse a la agresión fascista y a defender la República.

Pero en las graves circunstancias en que se había planteado la crisis y ante la insistencia de Largo Caballero acerca de la participación comunista en el Gobierno, el Partido accedió a entrar en él y compartir de un modo directo con los socialistas y los republicanos las responsabilidades del [140] ejercicio del Poder, y nombró como representantes suyos en el Gobierno a Vicente Uribe y Jesús Hernández. {(1) Jesús Hernández fue expulsado del Partido en 1944 por su actividad contrarrevolucionaria.}

La aceptación de compartir la responsabilidad del Gobierno no entrañaba renunciar a la independencia política del Partido. En una asamblea pública celebrada en Madrid, el PCE expuso los puntos esenciales del programa político que se proponía defender dentro del Gobierno. Eran, en resumen, éstos: ganar la guerra, resolver los problemas de la revolución democrática y robustecer la unidad de todas las fuerzas populares.

¿Pretendía el Partido entonces establecer el comunismo en España? La actividad del Partido y su programa contestan a esa pregunta con una rotunda negativa.

Jamás ha ocultado el Partido que su objetivo es el establecimiento del socialismo, como primera etapa de la sociedad comunista.

Pero, en las condiciones de la guerra contra la agresión fascista a la República, cuando todas las fuerzas democráticas luchaban unidas para detener el avance del fascismo, en ningún momento entró en los cálculos del Partido forzar la situación y cambiar el carácter de la guerra, como trataron de hacerlo los trotskistas y fascistas.

El Partido Comunista es un partido de revolucionarios y por ello es consecuente en sus compromisos y fiel a sus aliados. Por otra parte, la situación para el establecimiento del comunismo no se crea a voluntad de los comunistas. Y el período de la guerra contra el fascismo, en el que era tan necesaria la unidad de todas las fuerzas democráticas, no era el más a propósito para plantearse el establecimiento del comunismo. Si así lo hubiera hecho el Partido, el Frente Popular se habría roto automáticamente y la continuación de la resistencia a la agresión militar fascista hubiera sido imposible.

Por ello, y a pesar de que a disposición de las unidades militares mandadas por comunistas, al igual que a disposición de las otras unidades del Ejército Popular, había cañones, [141] tanques, aviones, decenas de millares de soldados, nuestro Partido permaneció fiel a sus compromisos y fue el más abnegado defensor de la República democrática.

La constitución del Gobierno Largo Caballero con la participación en él de los comunistas fue un hecho de extraordinaria importancia en la vida de la República.

El nuevo Gobierno, que no era un Gobierno socialista ni comunista ni anarquista, sino el Gobierno del Frente Popular, en su expresión más amplia, con la participación en él, junto a la clase obrera, de los partidos republicanos y nacionalistas burgueses vascos y catalanes, significaba que el proletariado pasaba a asumir un papel más importante en la dirección de la revolución democrático-burguesa.

Hasta la constitución del Gobierno Largo Caballero, los anteriores habían sido Gobiernos de los partidos republicanos apoyados por el Frente Popular. Desde la formación del Gobierno de Largo Caballero, los que se sucedieron hasta el final de la guerra fueron Gobiernos del Frente Popular propiamente dicho.

La entrada del Partido en el Gobierno republicano, era una experiencia nueva y valiosa en la historia de los Partidos Comunistas.

En el Gobierno, como desde fuera de él, nuestro Partido defendió los intereses populares y mostró su capacidad para organizar y orientar la lucha.

La República quedó sin Ejército. El Partido Comunista no se limitó a propugnar la necesidad de crear uno nuevo, sino que empezó a crearlo prácticamente apenas iniciada la guerra con las formaciones que constituyeron el 5º Regimiento de Milicias Populares.

El pueblo cantaba a la actividad del Partido:

*El Partido Comunista,
que es en la lucha el primero,
para defender a España
formó el 5º Regimiento. [142]*

Esta organización famosa, orgullo legítimo del Partido y del pueblo, llegó a contar con 70.000 combatientes, voluntarios todos ellos.

No era el 5° Regimiento una «milicia de comunistas», sino una gran milicia popular antifascista. Con su ejemplo contribuía prácticamente a realizar la unificación de las milicias de partido o sindicato en una milicia única que sirviera de base al Ejército Popular.

El 5° Regimiento fue el embrión del Ejército del Pueblo, de tipo regular, por la creación y desarrollo del cual luchó con tenacidad incansable el Partido Comunista, y él echó en realidad los cimientos de los más importantes servicios que constituían la armazón de la nueva organización militar: Estado Mayor, Transporte, Enlaces, Intendencia y Sanidad.

En el 5° Regimiento empezó a aplicar el Partido Comunista su política orientada a resolver eficazmente uno de los más difíciles problemas planteados en el terreno militar: el de dotar de cuadros de mando al naciente Ejército del Pueblo.

Los postulados esenciales de esa política que, aunque con retardos y cortapisas, se impuso a todos por su acierto y su realismo, fueron los siguientes: la utilización de los mandos que iban surgiendo del pueblo en los puestos a los que eran elevados por los propios combatientes; el desarrollo de un amplio trabajo de preparación y educación militar de nuevos cuadros, surgidos también del pueblo; la utilización simultánea en el nuevo Ejército de todos los antiguos militares fieles a la República; el nombramiento de comisarios políticos en todas las unidades de las fuerzas armadas.

No escasearon los dirigentes anarquistas y socialistas de derecha y de izquierda que, con las más inconsistentes y contradictorias razones, pública o solapadamente, combatían esa política propugnada y practicada por el Partido; unos afirmaban que el Partido Comunista quería «reproducir el viejo Ejército por odio a la ideología de las milicias» y aducían, demagógicamente: «España es el país de las guerrillas y para nada necesita militares de profesión y ejércitos regulares»; otros consideraban, por el contrario, que el Ejército debía ser mandado exclusivamente por militares de carrera. [143]

130 años antes, durante la guerra y la revolución de 1808, el pueblo español había creado sus inmortales guerrillas; efectivamente, de ellas surgieron numerosos mandos populares que se convirtieron en jefes del Ejército de la Guerra de la Independencia. La política del Partido

respecto a la cuestión de los cuadros militares seguía, pues, una tradición nacional gloriosa.

Entre los cientos y cientos de combatientes populares que durante el curso de la guerra mostraron su capacidad militar para el mando de batallones, brigadas, divisiones, cuerpos de ejército y ejércitos figuraron muchos miembros del Partido como Santiago Aguado, Guillermo Ascanio, Bautista, José Bobadilla Candón, Cristóbal Errandonea, Valentín Fernández, Eduardo García, Enrique García, Enrique Líster, Manolín, Pedro Mateu Merino, Rafael Menchaca, Juan Modesto, Antonio Ortiz, Pando, Vicente Pertegaz, Polanco, Puig, Recalde, Joaquín Rodríguez, Francisco Romero Marín, Alberto Sánchez, José Sánchez, Eugenio R. Sierra, Ramón Soliva, Etelvino Vega, Agustín Vilella, Vitorero, Matías Yagüe y tantos otros. Ellos demostraban que no se había extinguido en la entraña nacional el venero de militares del pueblo, del que habían surgido en lo pasado el Empecinado y los Mina, el Marquesito y el Estudiante que fueron, después de ser guerrilleros, generales, jefes y oficiales del Ejército Español de la Independencia.

Al lado de tales mandos, muchos de ellos ya en las filas del 5º Regimiento y otros en diferentes puestos de la Flota, la Aviación y el Ejército de Tierra, lucharon muchos militares profesionales, leales a su pueblo. En la acertada política de cuadros del Partido Comunista, como en la de toda su política de guerra en general, está la razón de la simpatía que mostraba hacia el Partido un número, por días creciente, de esos militares, y la de que no pocos de ellos, los más conscientes políticamente, ingresaran en el Partido para convertirse en su seno en cuadros y dirigentes del mismo, como Luis Barceló, Bueno, Francisco Ciutat, Antonio Córdón, José María Galán, Rodrigo Gil, Ignacio Hidalgo de Cisneros, Manuel Márquez, Matz, Pedro Prado y otros. [144]

El empleo de los oficiales del antiguo Ejército en puestos de mando y responsabilidad de las Fuerzas Armadas se ajustaba a las enseñanzas del marxismo-leninismo. Lenin había demostrado la necesidad de utilizar a los cuadros profesionales del antiguo ejército, no ya para constituir uno nuevo de carácter democrático y popular, como era el caso en España en 1936, sino para formar el ejército de un Estado socialista. Decenas de miles de antiguos oficiales, jefes y generales del

Ejército zarista sirvieron en el Ejército Soviético y desempeñaron cargos y mandos de la mayor responsabilidad.

El 5º Regimiento, con sus escuelas, cursillos, publicaciones y enseñanzas de toda clase, de tipo militar, contribuyó a dar realidad al lema del Partido: «Lograr que las masas adquieran los indispensables conocimientos militares».

La existencia de Comisarios Políticos en el Ejército era una necesidad impuesta por el propio carácter nacional-revolucionario de la guerra, y por la naturaleza misma del Ejército, eminentemente popular y democrático.

A juicio del Partido, los comisarios debían ser los representantes en el Ejército del Gobierno del Frente Popular, y no de los partidos políticos; los educadores políticos de los combatientes, llamados a elevar su moral y espíritu de sacrificio, más que con la prédica, con el ejemplo propio, y a reforzar la autoridad del mando militar.

Las unidades del 5º Regimiento y las otras organizadas por el Partido en diversos lugares de España, y por el Partido Socialista Unificado en Cataluña, tuvieron desde los primeros momentos sus comisarios políticos. El ejemplo permanente de heroísmo, sacrificio, preparación y eficacia política de los comisarios del 5º Regimiento y otros comisarios comunistas como Santiago Álvarez, Francisco Antón, Barcia, Conesa, Luis Delage, José del Campo, José Fusimaña, García Guerrero, Jaime Girabau, Máximo Huete, Joaquín Hernández, Jesús Larrañaga, Virgilio Llanos, Matas, José Miret, Benito Montagut, Francisco Ortega, José Sevil y muchos más fue un factor decisivo para vencer la resistencia que a la creación del Comisariado oponía Largo Caballero inicialmente, y para combatir después la oposición sistemática que mostraba Indalecio Prieto hacia dicho organismo. [145]

La acción y la actividad del 5º Regimiento se extendieron fuera de la esfera exclusivamente militar. El 5º Regimiento desarrolló una intensísima labor social, política y cultural. Supo establecer y mantener la ligazón político-moral entre el frente y la retaguardia, y se hizo querer, no sólo de los combatientes que figuraban en sus filas, sino de todo el pueblo trabajador.

El 5º Regimiento impulsó el desarrollo de la educación y la cultura con su lucha contra el analfabetismo, con sus y bibliotecas fijas y cir-

culantes, con sus famosos carteles y sus periódicos murales, con el teatro que el Regimiento llevó a las calles y a las trincheras por medio de las «guerrillas teatrales».

En las filas del 5º Regimiento, o ligados a él, figuraron numerosos comunistas poetas, escritores, artistas, médicos, ingenieros, arquitectos, &c., de gran valía y que gozaban de renombre nacional e internacional: Rafael Alberti, César Arconada, Pedro Garfias, Miguel Hernández, José Herrera Petere, Luis Lacasa, María Teresa León, Juan Planelles, Manuel Recatero, Juan Rejano, José Renau, Wenceslao Roces, Manuel Sánchez Arcas, Alberto Sánchez y otros.

El 5º Regimiento salvó de la destrucción el tesoro artístico que existía en bibliotecas, museos y palacios de Madrid.

Cuando los fascistas estrecharon el cerco de la capital y multiplicaron los bombardeos de la aviación y la artillería contra ella, el 5º Regimiento organizó la evacuación a Valencia, y la vida en la capital levantina, de numerosos intelectuales de prestigio que residían en Madrid.

Entre ellos figuraron Antonio Machado, Victorio Macho, Menéndez Pidal, Pío de Río Hortega, Manuel Márquez, Enrique Moles, José Bergamín, Solana, Gómez Moreno, Orueta, Ángel Llorca y otras muchas personalidades, testigos directos del cielo del 5º Regimiento en defensa de la cultura y de sus representantes.

El 5º Regimiento prestó en fin al pueblo español el mayor de sus servicios con el ejemplo que dio de su autodisolución en aras de la constitución del Ejército Regular, la creación del cual propugnaba el Partido. [146]

Cuando el 10 de octubre de 1936, el Gobierno publicó el decreto de creación del Ejército Popular, de los seis jefes nombrados por Largo Caballero para organizar las primeras seis brigadas del mismo, cuatro eran comunistas y pertenecían al 5º Regimiento, incluido el Jefe del mismo, Enrique Lister, que fue designado para formar la Primera Brigada. Esta, como las cinco restantes, fueron constituidas con fuerzas pertenecientes en su totalidad al 5º Regimiento. A fines de diciembre de 1936 se habían incorporado ya a las filas del Ejército Popular más del 70 % de las fuerzas del Regimiento, y el resto continuó haciéndolo paulatinamente. Los combatientes del 5º Regimiento llevaban al Ejér-

cito Popular la semilla del heroísmo y la disciplina, que ya habían demostrado poseer al escribir con la sangre de muchos de ellos las más gloriosas páginas de la corta historia de esta gran unidad en la defensa de Madrid

El «milagro» de Madrid

Desde julio de 1936 hasta la batalla de Guadalajara, Madrid fue el objetivo estratégico fundamental de la ofensiva de los facciosos. Hitler y Mussolini alentaban a Franco a atacar y tomar la capital con la promesa de reconocer a su gobierno tan pronto como hubiera realizado la conquista de Madrid. Ya el 7 de agosto de 1936, el general Mola anunció jactanciosamente que Madrid sería ocupado el día 15 de ese mes por las cuatro columnas que avanzaban hacia la capital y con la cooperación de los elementos fascistas y reaccionarios armados que existían en su interior, al conjunto de los cuales bautizó el general con el nombre de «Quinta Columna».

Los facciosos, extraordinariamente reforzados por el material de guerra que recibían de Italia y Alemania, por las fuerzas marroquíes y legionarias, apoyados por los tanques y la aviación italo-germanos y por la caballería mora, avanzaron con bastante rapidez sobre la capital. El 27 de septiembre los franquistas tomaron Toledo, con la Quinta Bandera de la Legión Extranjera, y un Tabor de Regulares Marroquíes, apoyados por tanques, aviones y cañones italianos y alemanes. [147] Estas fuerzas, por ironía de la Historia, se llamaban «nacionales».

La toma de Toledo acentuó la corriente de pesimismo que ya existía en el seno del Gobierno respecto a las posibilidades de defender a Madrid.

El Partido Comunista se alzó desde el primer momento contra ese espíritu derrotista y proclamó la posibilidad de defender la ciudad. Nuestro Partido tenía fe en la capacidad y el heroísmo de la clase obrera y del pueblo para realizar esa defensa, a condición de ser convenientemente dirigidos. Y, consciente de su responsabilidad histórica, asumió con energía y entusiasmo ese papel dirigente, dispuesto a realizar todos los sacrificios necesarios.

Toda la actividad práctica del Partido se concentró en la realización de un gigantesco y multifacético esfuerzo para organizar la lucha de todo el pueblo en la desigual batalla contra un enemigo poderoso, armado ya de un material de guerra modernísimo y con efectivos que ascendían (según comunicado del Cuartel General fascista de 7 de octubre de 1936) a 150.000 soldados.

«Defender a Madrid es defender a toda España», decía al pueblo el Partido Comunista. Y en la calle y cerca del Gobierno, exigía la adopción de medidas efectivas de guerra en Madrid:

«Militarización de toda la población civil, trabajo obligatorio, racionamiento, disciplina, castigo de los saboteadores».

El Partido intensificó la campaña pro fortificación de la capital. El 26 de septiembre de 1936, el 5º Regimiento proclamaba:

«Transformar cada casa, cada barriada, en fortalezas contra las que se estrellen los intentos del enemigo».

Y las fortificaciones empezaron a construirse gracias al tesón y la actividad del Partido, que supo vencer todas las dificultades que se oponían a la realización de esa labor, desde [148] la falta de medios materiales hasta las incomprendiones de Largo Caballero.

Pese a que algunas de las líneas proyectadas no se construyeron y a que otras lo fueron tardíamente, sólo en parte y con defectos, el colosal trabajo, en el que muchos días tomaron parte los dirigentes del Partido, se tradujo en realidades muy positivas: en el aspecto puramente militar dio solidez a la defensa; en el orden político y moral, el intensísimo trabajo de agitación del Partido en torno a la tarea de fortificación, en la que participó gran parte de la población, tanto masculina como femenina, de Madrid, contribuyó vigorosamente a elevar su espíritu combativo y a prepararla y movilizarla para la defensa.

Cientos de agitadores del Partido, algunos de los cuales no habían hablado antes en público ni una sola vez, daban diariamente mítines relámpago en los cuarteles, las fábricas, en los cines, en las esquinas de las calles, en los patios de las casas de vecindad.

El enemigo había llegado a los alrededores de la capital. Sus emisoras de radio anunciaron la toma inminente de Madrid, y hasta hubo algún periódico fascista que publicó el discurso de Franco celebrando, por

anticipado, la imaginaria conquista. Pero ante las fuerzas del fascismo se alzaban las de un pueblo dispuesto a rechazar el ataque.

El día 6 de noviembre se trasladó el Gobierno a Valencia. De la ingente misión de defender a Madrid quedó encargada la Junta de Defensa, constituida por representantes de todos los Partidos políticos y organizaciones sindicales del Frente Popular, de la Juventud Socialista Unificada y de las Juventudes Libertarias. Los dos puestos de mayor en aquellos momentos cruciales, los de las Consejerías de Guerra y Orden Público, fueron ocupados por los comunistas: Antonio Mije, miembro del Buró Político, y Santiago Carrillo, Secretario General de la Juventud Socialista Unificada, respectivamente. A partir de entonces la resistencia se hizo más efectiva. El 9 de noviembre, las unidades fascistas llegaban a las proximidades de la Ciudad Universitaria y penetraban en la Casa de Campo. Madrid se irguió como una muralla infranqueable y apareció ante el mundo entero animado de una [149] magnífica serenidad y de una fe profunda en su victoria sobre el fascismo. 30.000 combatientes del 5º Regimiento ocupaban los puestos de mayor peligro en la línea de un frente de combate al que ya era posible trasladarse desde el centro de la capital en tranvía o en el Metro. Y con «los del Quinto», a su lado, se batían también en primera línea más de 30.000 militantes de los 35.000 con que contaba entonces en Madrid la JSU y otros muchos miles de obreros y ciudadanos. Ese mismo día 9, dos columnas de defensores de la República desfilaban por Madrid en dirección al frente. La primera estaba constituida por los combatientes extranjeros de la Primera Brigada Internacional. El número de sus componentes era de 2.000; pero aquel puñado de valientes antifascistas encarnaba la solidaridad internacional, y su presencia en las trincheras contribuyó a elevar aún más la ya muy alta moral de los luchadores españoles. La segunda columna, organizada por el Partido Socialista Unificado de Cataluña, encarnaba la solidaridad de Cataluña con Madrid. Al frente de algunas fuerzas anarquistas, que se incorporaron también a la lucha en el frente de Madrid, el 15 de noviembre, figuraba el anarquista Buenaventura Durruti, valiente luchador proletario, que había de caer una semana después en el frente madrileño. DiIrruti, partidario de la unidad de acción obrera, encarnaba ese espíritu unitario y el heroísmo de que dieron muestras tantos obreros anarquistas.

Aunque los combates por Madrid continuaron con gran intensidad durante todo el resto del mes de noviembre, y se reprodujeron luego en sucesivas ofensivas, Madrid había ganado ya, en la primera decena de noviembre, la gran batalla defensiva. Hasta el fin de la guerra la capital permaneció en manos de los defensores de la República.

Como predecía José Díaz al cumplirse un mes de la resistencia heroica, la defensa de Madrid fue un hecho tan glorioso que ha quedado escrito en la historia con letras de fuego.

Miles de comunistas cayeron en la defensa al lado de otros miles de valientes antifascistas. Cayó Peña en el frente de la Sierra, Félix Bárcena al frente del Batallón Thaelman, Heredia a las puertas de Madrid, Evaristo Gil en Somosierra; como estos miembros del Comité Provincial, cubriéndose de gloria, ofrendaron su vida en defensa del pueblo cientos y cientos de [150] cuadros comunistas. Eran muchas y muy dolorosas las bajas del Partido, pero cada día acudían a engrosar sus filas cientos de otros obreros, campesinos e intelectuales. Crecía el número de miembros del Partido en toda España, se duplicaba, se triplicaba, llegó a cuadruplicarse en Madrid. Y no por el famoso «proselitismo» que, dando al vocablo un falso significado de habilidad y deslealtad hacia sus aliados, adjudicaban al Partido algunos dirigentes de otras fuerzas políticas, sino porque las masas veían en el Partido Comunista al más heroico defensor de los intereses del pueblo y de la patria, y en su política, la única política realista y justa para lograr la victoria.

La defensa de Madrid fue posible, en primer lugar, por la magnífica potencia combativa de nuestro pueblo. Pero el impulsor y organizador de esa potencia fue el Partido Comunista; su heroísmo y su capacidad de organización de las masas constituyeron los factores decisivos para que se realizara lo que fue calificado por muchos de «milagro» de la resistencia de Madrid.

La defensa de Madrid conmovió no sólo a España, sino al mundo entero. El Madrid sañudamente bombardeado por los «Saboyas», los «Junkers» y los cañones del fascismo extranjero; el Madrid atacado furiosamente por moros y legionarios: el Madrid de las casas rotas y el corazón entero, que cantó uno de los poetas del Partido, se alzaba sereno y altivo sobre su pedestal de escombros, como un escudo de la libertad y de la paz mundial.

«Los heroicos defensores de Madrid –decía la Internacional Comunista en su llamamiento con motivo del XIX aniversario de la gran Revolución Socialista de Octubre– defienden con sus pechos de la agresión fascista a toda la democracia europea, defienden de una nueva guerra mundial a toda la humanidad».

Una política de guerra

Desde los comienzos de la contienda, el Partido Comunista había afirmado que la guerra sería larga y dura, una lucha que exigía al pueblo poner en tensión todas sus energías. La [151] batalla en el frente de Madrid lo confirmaba: para cerrar el paso al fascismo y vencerlo, no bastaba el heroísmo.

A mediados de diciembre de 1936, el Comité Central del Partido Comunista, al examinar el estado del país después de cinco meses de guerra, llegó a la conclusión de que era necesario cambiar radicalmente la situación, si se quería continuar aquélla con probabilidad de victoria. A este propósito, el Comité Central publicó un documento en el que establecía las que, a su juicio, eran exigencias insoslayables del momento, sin cuyo cumplimiento era difícil proseguir la contienda.

En ese documento, conocido con el título de «Las ocho condiciones de la victoria», el Partido exponía que, a su entender, las medidas urgentes a aplicar consistían en:

Concentración de todo el Poder en manos del Gobierno del Frente Popular, cuyas decisiones deberían ser acatadas y respetadas por todos.

Servicio militar obligatorio, como único medio de llegar rápidamente a la creación de un gran Ejército Popular, con reservas abundantes e instruidas y con un mando único competente y que gozase de la confianza del pueblo.

Disciplina de guerra en la retaguardia: poner fin a las actuaciones anárquicas de los «incontrolados» y a la idea cantonalista de que la guerra sólo concernía a los territorios donde se peleaba y no al pueblo entero y a todas las regiones del país.

Nacionalización y reorganización de las industrias básicas y creación de una potente industria de guerra.

Creación de un Consejo Coordinador de la Industria y la Economía en el que debían estar representados todos los técnicos y especialistas del Frente Popular, para dirigir y orientar toda la producción.

Control obrero sobre la producción, que actuase de acuerdo con el plan trazado por el Consejo Coordinador y para apoyarlo.

Fomento de la producción agrícola, de acuerdo con los representantes de las organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, de manera que se respetara el producto del trabajo, tanto individual como colectivo, y se garantizaran precios remuneradores para los [152] productos del campo en los mercados nacionales e internacionales.

Coordinación de la producción agrícola y la industria a fin de que toda ella tendiese al logro rápido del objetivo fundamental de la lucha popular en aquellos momentos históricos: ganar la guerra.

El Partido insistía, una vez más, en que la unidad de todas las fuerzas proletarias y antifascistas en torno al Frente Popular y al Gobierno de la República era la premisa indispensable para salvar la independencia y la libertad de España amenazadas gravemente.

Los esfuerzos del Partido para que el Gobierno adoptase las ocho condiciones como programa propio, chocaban con la oposición del Jefe del Gobierno, Largo Caballero. Este seguía sin comprender el verdadero carácter de la guerra, no valoraba la capacidad y la iniciativa de las masas y, por ello, aunque oficialmente la había decretado, seguía frenando en la práctica la creación del Ejército Popular de tipo regular y se oponía a la adopción de otras indispensables medidas de guerra.

Consecuencia de ello fue el duro golpe que sufrió la República el 8 de febrero de 1937 con la caída de Málaga; las fuerzas regulares italianas que tomaron la ciudad, sus aviones y los barcos alemanes con sus fuegos habían perseguido, ametrallado impunemente a la población civil que huía hacia Almería. Estos hechos levantaron una ola de indignación en toda la zona republicana y pusieron de relieve ante el pueblo la equivocada política de Largo Caballero y la necesidad apremiante de corregirla. El desastre de Málaga planteaba la imperiosa necesidad de realizar una política de guerra firme, de establecer, en primer lugar, como pedía el Partido, el servicio militar obligatorio y una disciplina férrea en la retaguardia.

El Partido encontró el apoyo fervoroso de las masas. Expresión de ello fue la imponente manifestación que el día 14 de febrero recorrió las calles de Valencia, sede del Gobierno, para demandar que se realizara sin dilaciones la voluntad de los combatientes y del pueblo en general. [153]

Presionado así por las masas, Largo Caballero adoptó algunas medidas, pero no realizó el cambio radical de su política que la situación y el pueblo exigían.

En ese período empezó el acercamiento entre Largo Caballero y los dirigentes anarquistas, aproximación que tendía, según afirmaban al unísono los órganos de prensa caballeristas y anarquistas, a preparar la liquidación del Gobierno de Frente Popular y su sustitución por un llamado «Gobierno sindical». Con ese plan pretendían sus autores eliminar del Gobierno al Partido Comunista, a una parte considerable del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y a los partidos republicanos; se trataba de romper y dividir el Frente Popular en el que se asentaba la unidad del pueblo en la guerra contra el fascismo. La ejecución de semejante plan hubiera significado romper la resistencia, llevar a la esfera gubernamental y extender a todo el territorio de la zona republicana los experimentos aventureros y contrarrevolucionarios que los fascistas realizaban en Aragón y otras zonas dominadas por ellos.

Ante el Gobierno republicano se abrían, en cierto modo dos caminos de actuación: uno era el de desarrollo de una verdadera política de guerra, basada en la consolidación del Frente Popular. La defensa de Madrid había demostrado que ésa era la vía que podía conducir a la victoria. El otro camino era el de los llamados «experimentos revolucionarios» de los anarquistas que tenía como consecuencia la desorganización e indisciplina del Ejército, el desorden en la retaguardia, el rompimiento del Frente Popular.

Cegado por el anticomunismo, Largo Caballero manifestaba una inclinación mayor cada día a avanzar por esta segunda ruta que llevaba inevitablemente a la derrota del pueblo.

En esta situación, el Comité Central del Partido celebró su primer Pleno de guerra del 5 al 8 de marzo de 1937.

Fue un Pleno ampliado en sustitución del V Congreso que por las condiciones de la guerra, no se pudo celebrar. El Pleno renovó y amplió la Dirección del Partido.

Uno de los problemas fundamentales estudiados por el Pleno fue el problema de la unidad. [154]

El Partido Comunista declaraba que seguiría defendiendo al Frente Popular, por encima de todas las dificultades, y al Gobierno del Frente Popular.

«Nuestro lema –decía José Díaz en nombre del Partido– es: Unidos ahora para ganar la guerra y unidos después para cosechar los frutos de la victoria».

Las tareas políticas más urgentes que las resoluciones del Pleno destacaban, eran: la realización rápida de la unidad del proletariado y la fusión de los Partidos Socialista y Comunista; la unidad de acción entre las dos grandes centrales sindicales. Propugnaban, además, estrechar las relaciones con los anarquistas y hacer que la unión de las fuerzas proletarias con las republicanas, con las fuerzas de la pequeña burguesía, se reforzase cada vez más sobre una base política y económica sólida y que se consolidasen las relaciones con las fuerzas representativas de Cataluña, Euzkadi y Galicia.

El Comité Central exigía la aplicación, sin más dilaciones, de todas aquellas medidas de guerra que el pueblo había demandado imperiosamente al Gobierno en la manifestación de Valencia.

Una gran atención dedicó el Pleno a todos los problemas relacionados con el desarrollo, la vida política y las tareas del Partido.

En los siete meses y medio de guerra, el Partido había triplicado el número de sus miembros. Las razones de tan rápido crecimiento numérico y del de su prestigio e influencia en el pueblo, las destacaban las resoluciones del Pleno. Esas razones eran la justa política del Partido, su firme y disciplinada organización, su unidad interna y el ejemplo de heroísmo y abnegación que daban los miembros del Partido: una gran mayoría de éstos combatían en las trincheras, más de la mitad del Ejército se hallaba formada por comunistas y miembros de la JSU, y las más duras batallas de la guerra habían sido ya pagadas – como habrían de serlo las restantes hasta el final de la contienda– con la sangre de miles de miembros del Partido. [155]

La resolución del Pleno estimaba que, ante la magnitud de las tareas que se planteaban a la clase obrera y al pueblo, era necesario acrecentar y consolidar cada vez más las fuerzas del Partido y que, sin restringir el ingreso en sus filas de los combatientes, los obreros agrícolas, los campesinos y los intelectuales, el trabajo de reclutamiento debería proseguirse de un modo más acentuado y metódico, sobre todo entre la clase obrera y entre las mujeres.

El Pleno tomó posición con toda energía contra el descabellado propósito de formación del Gobierno sindical. En ese mismo sentido se manifestaron abiertamente el 28 de marzo todos los Partidos del Frente Popular. La inmensa mayoría de los miembros de la UGT rechazaban también ese plan, y la propia Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, en una circular del 29 de marzo dirigida a los Comités de las Federaciones, calificaba de «error» que era preciso atajar,

«el atribuir a los sindicatos, como un nuevo Saturno revolucionario, la misión de disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos».

El creciente aislamiento de Largo Caballero y las coincidencias que se apuntaban entre la Ejecutiva del Partido Socialista y el Partido Comunista eran la expresión de los cambios que se habían producido durante la guerra en el seno del Partido Socialista.

Desde el año 1934 las masas obreras socialistas habían visto en Largo Caballero al más destacado partidario de la unidad dentro del PSOE. Esa había sido la causa fundamental de su prestigio. Pero durante los meses de guerra, Largo Caballero fue manifestando una actitud, cada vez más anticomunista y antiunitaria. Este cambio demostraba que Largo Caballero no había comprendido nunca el verdadero sentido de la unidad obrera y popular. Convencido de que era el jefe insustituible del Gobierno y del Partido Socialista, anteponía sus criterios personales a los intereses supremos de las masas que sólo podían defenderse laborando por la unidad y no atentando contra ella. La crítica cordial, constructiva que el [156] Partido Comunista hacía de su desacertada política de guerra, era recibida con hostilidad e irritación y considerada como un ataque personal. Lanzado por el camino anticomunista y antiunitario, Largo Caballero fue aislándose de las masas y perdiendo

de día en día su popularidad e influencia en el propio Partido Socialista.

Mientras tanto, la guerra había acrecentado la voluntad unitaria de la inmensa mayoría de los trabajadores socialistas, el sentimiento de fraternidad hacia sus hermanos comunistas al lado de los que vertían su sangre en las trincheras, la conciencia de que la unidad de los dos Partidos era esencial para ganar la guerra. Todo ello se traducía en una acentuación de la tendencia unitaria en la Comisión Ejecutiva y en otros escalones directivos del Partido Socialista.

A fines de marzo, nuestro Partido propuso a la Comisión Ejecutiva Socialista discutir y adoptar medidas conducentes a la unidad de acción, primero, y a la fusión, después, de ambos partidos en el gran Partido Único de la clase obrera. El 16 de abril de 1937 apareció una carta conjunta de la Comisión Ejecutiva del PSOE y del Comité Central del PCE haciendo público el acuerdo de formar organismos de enlace. Una semana después apareció el documento firmado por ambas Direcciones acerca de la constitución del Comité Nacional de Enlace. Este, que debía reunirse dos veces por semana, proponía la inmediata constitución de Comités de Enlace en todas las provincias y localidades donde ello fuera posible.

Por todas partes se establecieron Comités de Enlace entre los Partidos Socialista y Comunista, y se multiplicaban los casos de dirigentes socialistas, provinciales y nacionales, antes caballeristas, que condenaban ahora la orientación anticomunista de Largo Caballero y se pronunciaban por la unidad con el Partido Comunista. Tal fue el caso de Álvarez del Vayo, ministro de Estado en el Gobierno Largo Caballero, y el de los componentes del grupo constituido alrededor de «Claridad», que fue substrayendo, gradualmente, a este periódico de la influencia que antes ejercía en él, de un modo absoluto, el sector caballerista.

En el seno del Partido Socialista se establecía una nueva correlación de fuerzas; de un lado, el núcleo de Largo [157] Caballero y sus incondicionales, a los que va no se podía calificar de «ala izquierda», obstinados en una posición antiunitaria; de otro, la gran mayoría del Partido Socialista, favorable a la unidad.

En el mes de marzo las fuerzas republicanas, que habían detenido a los fascistas en el Jarama, después de una sangrienta y larga batalla,

infligieron una completa derrota al Cuerpo expedicionario italiano, que mandaba el general Bergonzoli, en la batalla de Guadalajara, uno de los más importantes hechos de armas de la guerra. Y a ese señalado triunfo siguieron otros logrados por los soldados de la República en el Frente Sur, en el sector de Pozoblanco.

Esas victorias, especialmente la de Guadalajara, demostraban la potencia y eficacia que ya había alcanzado el Ejército Popular, sobre todo en el Centro, donde había sido cimentado sólidamente sobre los principios de organización, de disciplina y mando único por los que tan tesoneramente abogaba el Partido Comunista.

Las victorias republicanas provocaron alarma en el campo enemigo. El fascismo italo-alemán acudió, una vez más, en socorro de Franco. Ciano escribía en su diario, a raíz de la victoria de Guadalajara:

«Se trata de conseguir un triunfo militar que borre el recuerdo de la derrota. Con ese objetivo, enviamos a España oficiales, armas, material y aviones, así como cuatro submarinos».

Las consecuencias de este refuerzo de la intervención armada italo-alemana habrían de sentirse muy pronto en los frentes de guerra del Norte donde, después de sangrientos combates, los fascistas rompieron las líneas republicanas iniciando su avance sobre Bilbao.

Todo exigía la movilización de las fuerzas recursos de la República para la guerra y la eliminación de los focos de desorden de Aragón y Cataluña, donde los ensayos anarquistas restaban ingentes energías a los frentes de combate y amenazaban la unidad del pueblo. Esta situación se prolongaba, sustancialmente, por la tolerancia de Largo Caballero, deseoso [158] de granjearse, con esta actitud, el apoyo de los anarquistas para la lucha contra el Partido Comunista y contra la Ejecutiva del Partido Socialista.

Como en 1873, los anarquistas crearon verdaderos «cantones independientes» en todas las zonas y lugares donde, en el primer período de la guerra, pudieron ejercer decisiva influencia: Puigcerdá, Tarrasa, Seo de Urgel, Mora, en la Zona de los Pirineos, en los pueblos de la costa catalana, en la provincia de Cuenca, en Aragón, &c.

El objetivo de la lucha que había comenzado en julio de 1936 lo definieron entonces los anarquistas así: establecer un nuevo régimen social, el «comunismo libertario». Para los dirigentes anarquistas, salvo

raras excepciones, lo principal no era ganar la guerra sino realizar inmediatamente una «revolución social». Las primeras medidas de ésta debían ser la abolición de la propiedad privada, del Estado, del Ejército, del principio del Poder y de las clases y, aparejado a ello, el establecimiento por todas partes de «la comuna libertaria».

Los anarquistas se oponían al Gobierno del Frente Popular y a la República democrática. El 2 de agosto de 1936 apareció en el diario anarquista «Solidaridad Obrera» un artículo firmado por la CNT-FAI y las Juventudes Libertarias, con este título que por sí solo era todo un programa de ayuda al enemigo: «Hay que organizar la indisciplina».

Los grupos específicos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y algunas columnas, que pronto abandonaron los frentes y se hicieron famosos por sus desmanes en la retaguardia –como la «Columna Maroto», la «Columna de Hierro», y alguna otra–, impusieron en no pocos lugares la «dictadura anarquista», el «comunismo libertario».

El ejemplo más destacado de «dictadura anarquista» lo dio cumplidamente el «Consejo de Aragón». Fue creado por la FAI, a mediados de octubre de 1936, y su establecimiento fue sancionado por el Gobierno de Largo Caballero el 17 de diciembre de 1936, contra la voluntad del Partido Comunista. Presidía el Gobierno anarquista o «Consejo de Aragón» el anarquista Ascaso. El Consejo funcionó hasta agosto de 1937 en que fue disuelto. [159]

Su actuación lamentable y vergonzosa sólo sirvió a los enemigos de la República. Bajo la dictadura del Consejo de Aragón fue colectivizado casi todo lo existente. Los campesinos medios eran despojados de sus tierras y de sus productos. El Consejo de Aragón se incautó del dinero de los campesinos, estableció el sistema de vales e incluso una nueva moneda. Los que protestaban eran maltratados. Allí estaba prohibido toda actividad política excepto la anarquista. Los campesinos y la población, en general, vivieron, bajo el Consejo de Aragón, un período de despojo sistemático, expropiaciones forzosas, brutales imposiciones, que creaban en la retaguardia republicana un ambiente sumamente peligroso. El Partido trabajó tenazmente por terminar con aquella situación que frenaba el desarrollo de la lucha en Aragón, que levantaba a los campesinos contra la República, que creaba una base para el trabajo del enemigo en el propio campo republicano. El Gobierno Negrín se vio obligado, posteriormente, a poner fin a tal estado

de cosas, restableciendo en Aragón el orden republicano y acabando con la dictadura anarquista. A facilitar la obra del Gobierno contribuyó principalmente la actuación en Aragón de unidades militares mandadas por comunistas en las que los campesinos aragoneses encontraron ayuda, respaldo y apoyo contra los desmanes y las expropiaciones de los anarquistas.

En el orden específicamente militar, en Cataluña y Aragón aún no había sido creado el Ejército Popular de tipo regular. Los anarquistas habían desarrollado una lucha, abierta primero y soterrada más tarde, contra la formación de tal Ejército. Aunque en marzo de 1937 declararon, al fin, su disposición a formarlo, el Ejército no empezó a constituirse en Aragón y Cataluña hasta agosto de ese año. Ello explica la pasividad e inactividad del Frente aragonés durante meses que fueron decisivos y que el enemigo aprovechó para consolidar sus posiciones, mientras del lado republicano, dominado por los anarquistas, no se había emprendido ninguna acción ofensiva ni se habían creado las condiciones para la resistencia, a pesar de disponer de toda clase de armas y pertrechos militares y de millares de hombres capaces de combatir, que [160] bien dirigidos y organizados hubieran podido ser una ayuda seria para la República.

El Partido respaldó decisivamente al Partido Socialista Unificado de Cataluña en la gran labor que éste realizó para enderezar la situación en su faceta militar, fundamental, y para crear en Cataluña el Ejército Popular regular.

Los comunistas lucharon enérgicamente, desde los primeros momentos, contra la existencia y actividades de los «incontrolados», las bandas faístas-trotskistas y las «patrullas de control», contra los cantones y por el establecimiento del Poder único del Gobierno del Frente Popular, por el desarme efectivo de la retaguardia.

Pero siempre, hasta en los momentos más agudos de esta lucha en defensa de los verdaderos intereses del pueblo, el Partido proclamó, y demostró con su conducta, que él no identificaba a los incontrolados con los obreros anarquistas y cenetistas a los que llamaba a luchar contra la nefasta actividad de esos grupos.

Constantemente se esforzó el Partido por establecer la unión combativa con las masas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y con los hombres más conscientes políticamente de su Dirección para

interesarlos en la realización de una política verdaderamente revolucionaria.

El Partido Comunista fue partidario de la colaboración de los anarquistas en el Gobierno e hizo cuanto pudo por que se realizara esa colaboración a la que eran opuestos tanto los republicanos como la Dirección del Partido Socialista.

En su libro «Mis recuerdos», Largo Caballero, cuyo testimonio es de valor en el caso, declara:

«Los comunistas pidieron que se hiciera todo lo posible para que en el Gobierno estuviera representada la Confederación Nacional del Trabajo y así lo prometí».

La actitud del Partido y las duras lecciones de la tierra, fueron factores que influyeron en la evolución positiva de una parte de las masas y de algunos de los dirigentes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que, como su Secretario General Mariano Vázquez –muerto en un accidente en [161] París después de la guerra– gozaban de gran autoridad entre los trabajadores cenetistas.

Ya en el otoño de 1936, las masas encuadradas en la CNT y, sobre todo, las que combatían en las columnas milicianas, comenzaron a comprender –y a esto ayudó no poco la actividad del Partido– que la realización de los postulados del anarquismo (destrucción del Estado, del Ejército, descentralización de la economía, &c.) era incompatible con el logro de la victoria del pueblo en la lucha contra el fascismo. La presión de esas masas apremiaba a los dirigentes anarquistas a revisar la política seguida hasta entonces. Impulsaba a tales dirigentes, además, el temor de que su actitud, contra la que se levantaban todas las fuerzas populares, les aislase completamente, debilitando sus posiciones y su influencia, ya que el Gobierno estaba dispuesto, con ellos o sin ellos, a continuar la lucha y la defensa de la República.

Esto determinó el que en no pocos dirigentes anarquistas comenzase un proceso de abandono progresivo de los conceptos teóricos que durante muchos años habían defendido. Admitieron, primero, la participación de los anarquistas en la política del Estado, aunque apoyándola, todavía, sólo «desde fuera», para llegar rápidamente a la participación en el Gobierno y en todas sus instituciones. En septiembre de 1936 entraron a formar parte del Gobierno catalán, con la pretensión

de constituir lo que llamaban «Consejo Nacional de Defensa» (UGT-CNT), que era la primera variante de un Gobierno sindical. Fallido ese intento, al que se opuso el Partido, entraron los anarquistas a formar parte del Gobierno presidido por Largo Caballero, en noviembre de 1936. También participaron en el «Consejo Soberano de Asturias» y en otros organismos estatales. Los dirigentes anarquistas se pronunciaron, al fin, por la creación del Ejército regular que habían combatido antes tan sañudamente y participaron en él de una manera absoluta, aceptando la disciplina militar, los uniformes, los mandos y grados, &c. También se pronunciaron por la centralización de la dirección de la guerra, &c. La Federación Anarquista Ibérica (FAI) acabó por transformarse, con excepción del nombre, en un verdadero partido político. [162]

La guerra y la revolución, la realidad, en una palabra, era la que, aún más completamente que en 1873, derrumbaba los conceptos idealistas del anarquismo clásico.

El Partido Comunista saludó y alentó cuanto pudo ese cambio en la orientación del anarquismo por considerar que favorecía la realización de la unidad obrera.

Una parte de las masas anarquistas y algunos dirigentes de la CNT marcharon por el camino justo. Otros, la mayoría de los miembros de la FAI, siguieron la otra vía con grave daño para la causa de la libertad del pueblo.

Los perjuicios que ocasionaba la política de Largo Caballero, de tolerancia con la indisciplina, se hicieron evidentes con el estallido en Cataluña del «putch» contrarrevolucionario de mayo de 1937.

Provocadores y organizadores del movimiento fueron los elementos trotskistas, aventureros y tráfugas de la clase obrera, que figuraban en la Dirección del llamado POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y los «grupos específicos de la FAI» que con su demagogia habían logrado confundir y arrastrar al motín a algunos trabajadores. Los trotskistas habían hecho todo lo posible para sembrar el derrotismo y la desmoralización en la zona republicana, para desacreditar al Frente Popular y romperlo.

Los objetivos de los amotinados eran encender una nueva guerra civil en la zona republicana, destruir el Frente Popular y establecer el poder

absoluto de la FAI y del POUM, liquidar el Ejército regular, romper la unidad popular, desorganizar por completo la producción.

Los agentes franquistas en Cataluña desempeñaron un papel importante en la preparación del «putch».

Entre los documentos oficiales alemanes, recogidos y publicados después de la guerra mundial, figura un despacho del embajador alemán a su Gobierno, del que son estas frases:

«En cuanto a los desórdenes de Barcelona, Franco me ha informado que los combates de calle habían sido iniciados por sus agentes. Como Nicolás Franco me dijo después, en total ellos tenían 13 agentes en Barcelona. Uno de éstos había informado mucho antes que la tensión entre [164] comunistas y anarquistas era tan grande en Barcelona que podría garantizar el hacer estallar el combate entre ellos. El Generalísimo me dijo que primero no había prestado confianza a estos informes de su agente, pero que luego los había confrontado con otros que los confirmaban. Intentó primero no hacer uso de esa posibilidad hasta que hubiese empezado una operación en Cataluña... pero había juzgado propicio el actual momento para iniciar los desórdenes en Barcelona...»

El PSUC, los miembros de la UGT y los jóvenes encuadrados en la JSU en Barcelona hicieron frente a los amotinados sin ninguna vacilación, en defensa de la legalidad republicana. Muchos comunistas fueron muertos o heridos en la lucha y durante los sucesos fue asesinado el camarada Antonio Sesé, Secretario de la UGT de Cataluña. La actuación del Partido Socialista Unificado fue decisiva en la derrota del levantamiento trotskista y faísta en Barcelona que se inició ya en la tarde del día 3 de mayo.

Después de esta sangrienta aventura, que en tan grave peligro había puesto a la República, el Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado exigían la disolución del POUM. Interpretando el sentir de los trabajadores socialistas, decía el Secretario General del Partido Socialista, Lamonedá:

«El pueblo deseaba y exigía un Gobierno con autoridad en los frentes y en la retaguardia y, ante todo, el correspondiente y rápido castigo de los revoltosos».

Largo Caballero, apoyado por los dirigentes de la CNT, se negaba a adoptar ninguna clase de medidas contra el POUM en el que, en el fondo, veía un posible aliado en la lucha contra el Partido Comunista.

Forjando la resistencia

El «putch» y la falta de energía del Jefe del Gobierno para reprimirlo, confirmaban la razón que asistía al Partido para exigir un cambio de política especialmente en lo referente al [164] orden interno. Pero ese cambio era necesario realizarlo sin romper la unidad. Para ello el Partido confiaba, sobre todo, en la conciencia y presión de las masas y apeló a ellas convocando mítines y manifestaciones en toda la zona republicana para explicar al pueblo su posición en todos los problemas relativos a la guerra y a la reconstrucción del país.

«Queremos que seáis vosotros, el pueblo, ante la situación por la que atraviesa España, el que juzgue, el que determine sobre la justeza de la línea política de nuestro Partido... queremos también que seáis los que juzguéis los actos de los demás»,

dijo José Díaz en el gran mitin celebrado en Valencia el 9 de mayo de 1937.

Claramente expuso José Díaz ante las masas la verdad de la situación del país y condenó la política y la actividad de la fracción antiunitaria del Partido Socialista que detentaba en aquel momento la dirección del Gobierno.

Seis días después, al no aceptar Largo Caballero la reiterada propuesta del Partido de cambios en la política gubernamental, los ministros comunistas presentaron la dimisión y se retiraron de la reunión del Consejo de Ministros. Su ejemplo, seguido por la mayoría de los ministros, obligó a Largo Caballero a declarar en crisis al Gobierno y a presentar su dimisión, no sin haber intentado antes la constitución de otro sobre una base sindical.

En su comunicado acerca de la crisis, el PCE reclamaba la formación de un Gobierno del Frente Popular que acelerase el cumplimiento de las condiciones de la victoria y que de un modo inmediato cumpliera las siguientes: El ejercicio de la dirección democrática de la vida del país por medio de la resolución colectiva de todos los problemas importantes en el Consejo de Ministros; el normal funcionamiento del

Consejo Superior de Guerra; la reorganización del Estado Mayor Central y del Comisariado. El Partido no se oponía a que Largo Caballero estuviera al frente del nuevo Gobierno, pero pedía que dedicase su atención exclusivamente a los problemas de la dirección general del país y era opuesto a [165] que continuase desempeñando la cartera de Defensa, pues ello supondría la continuación de su política. El Partido consideraba, además, que los hombres designados para los cargos de ministros de Defensa y Gobernación deberían gozar de la confianza de todos los partidos representados en el Gobierno. La actitud del Partido ante la crisis atestiguaba que su preocupación fundamental era el mantenimiento de la unidad antifascista en aras de la defensa de la República.

Largo Caballero quiso formar un nuevo Gobierno... sin comunistas. La unidad de acción establecida entre los Partidos Socialista y Comunista actuó en sentido de rechazar ese intento.

La Dirección del Partido Socialista declaró «la imposibilidad de dirigir el país sin el Partido Comunista o contra él» y que, por ello, tampoco los socialistas participarían en el Gobierno si los comunistas no lo hacían. Largo Caballero tuvo que declinar el encargo de formarlo, y el 18 de mayo Negrín constituyó un Gobierno que tenía la siguiente composición: 3 socialistas, 2 comunistas, 2 republicanos, 1 nacionalista catalán y 1 nacionalista vasco.

La formación de ese Gobierno era una victoria de la política de Frente Popular.

Caballeristas y anarquistas negaron todo apoyo al Gobierno, pero su negativa actividad antiunitaria y anticomunista sólo servía para hacerles perder con rapidez su prestigio y autoridad ante las masas obreras.

La creación del Gobierno Negrín fue un nuevo golpe a la política disgregadora de los caballeristas y abrió nuevas perspectivas al fortalecimiento de la unidad obrera. El Pleno del Comité Nacional de la UGT que, a petición de la mayoría de las Federaciones, se reunió a fines del mes de mayo, condenó la actitud de la Comisión Ejecutiva que durante la crisis había apoyado las maniobras de Largo Caballero.

El Comité Nacional tomó una serie de resoluciones que implicaban la desautorización de la política antiunitaria de Largo Caballero y el

apoyo de las masas ugetistas a la política de unidad de los partidos obreros. El Pleno condenó terminantemente el «putch» de mayo, se pronunció por la completa ayuda de la UGT al Gobierno Negrín y «por el mantenimiento [166] de las tradicionales relaciones con el PSOE y el establecimiento de lazos fraternales con el Partido Comunista de España».

Parte de las masas proletarias de la CNT, sobre todo las que combatían en los frentes, mostraba cada vez más claramente su desacuerdo con la política antiunitaria de sus dirigentes. La presión de esas masas, el fracaso del intento de oponerse por la violencia al Gobierno de la República y la labor del Partido en pro de un acercamiento con la CNT propiciaron una evolución de ésta.

El Pleno del Comité Nacional de la CNT, del 1 de junio de 1937, se manifestó partidario de la colaboración con el Gobierno Negrín que se vio de este modo reforzado con el apoyo de ambas centrales sindicales.

La flexible y tenaz labor del Partido a favor de la unidad obrera también cosechó éxitos con la formación de nuevos Comités de Enlace. Los anhelos unitarios de los trabajadores socialistas y comunistas eran tan fuertes que en muchos lugares comenzó un movimiento de fusión de los dos partidos en escala local. Recogiendo este ambiente nuestro Partido propuso a la Comisión Ejecutiva del PSOE pasar a formas de unidad más elevadas.

La tarea fundamental del segundo Pleno de guerra del Comité Central del Partido, celebrado en Valencia, del 18 al 20 de junio de 1937, fue precisamente sentar las bases para la formación del Partido Único, del Proletariado. Por imperativo del desarrollo mismo de la situación – decía el informe que presentó al Pleno Dolores Ibárruri:

«se ha llegado a un momento en que es necesario dejar de hablar ya de fusión para llegar rápidamente a realizarla».

La unidad política del proletariado en un solo Partido constituiría la base firme de la unidad de todo el pueblo español. El Partido Único, resaltaba el informe, debería defender, no sólo los intereses corporativos o gremiales de tal o cual organización, sino los intereses de la clase obrera de las masas campesinas, de la pequeña burguesía urbana, de las clases populares. [167]

Dolores Ibárruri destacó las bases programáticas para asentar el Partido Único, que debía inspirarse en la teoría marxista-leninista.

Nuestro Partido consideraba que la tendencia anarquista unitaria y opuesta al apoliticismo también tenía su puesto en el Partido Único. El informe decía textualmente:

«Este Partido Único podrá así continuar la tradición del Partido Socialista Obrero Español, la corriente revolucionaria del anarquismo y la tradición del Partido Comunista, forjado en la teoría y la práctica del marxismo».

El Pleno tomó la resolución de encargar al Buró Político que se pusiera en relación inmediata con la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, a fin de examinar en común la base programática y táctica y las modalidades prácticas para la realización más rápida posible de la fusión de los dos partidos obreros.

Millares de obreros socialistas saludaron con entusiasmo las resoluciones del Pleno, que fueron refrendadas en numerosos actos públicos. Los dirigentes socialistas hicieron en ellos encendidas declaraciones unitarias. El 27 de junio, en Madrid, Ramón Lamonedá, Secretario del PSOE, dijo en nombre de la Ejecutiva de su Partido:

«En el deseo ferviente de unidad nos acompaña el ciento por ciento de los socialistas españoles... ayer y hoy y siempre, el Partido Socialista marchará de acuerdo con la Dirección del Partido Comunista en la defensa tesonera de un concepto político de la dirección del proletariado».

No obstante sus afirmaciones en pro de la unidad, la Ejecutiva del Partido Socialista se opuso tenazmente a marchar hacia la creación del Partido Único del Proletariado. Pero no podía enfrentarse abiertamente con la voluntad de las masas, que abogaban por tal creación porque comprendían que ella centuplicaría las energías de la clase obrera y el Frente Popular e impulsaría la lucha antifascista en general. La Dirección del Partido Socialista hablaba de «unificación [168] futura» porque, como con bastante claridad expuso Lamonedá, en la reunión que aquélla celebró en julio de 1937, ésa era la única forma de contener el paso de las masas del PSOE al PCE. Algunos de estos dirigentes comprendían, también, que sin la acción unida de ambos partidos no sería posible obtener la victoria.

La lucha del Partido por la formación del Partido Único del Proletariado que, en verdad, no cesó hasta el final de la contienda, tuvo su expresión práctica más saliente en la adopción, el 17 de agosto de 1937, del Programa de acción conjunta de los Partidos Socialista y Comunista. Comprendía el Programa los siguientes puntos: I) Reforzamiento de la unidad combativa del Ejército de la República. II) Potente industria de guerra. III) Concurso activo para la organización de los trabajos de fortificación y la construcción de refugios para los combatientes y para la población civil. IV) Contribuir activamente a la organización y funcionamiento rápido de los transportes al servicio de los frentes y del Ejército, mediante una política consecuente de obras públicas, sobre la base de construcción de nuevas carreteras y ferrocarriles, estratégicos, de reparación de carreteras deterioradas y reposición de material. V) Coordinación y planificación de la economía por medio de la creación de un Consejo Nacional de Economía. VI) Política práctica de mejoramiento sistemático y serio de la situación material de las condiciones de trabajo, de existencia y culturales de la clase obrera rural y urbana, VII) Política agraria de intensificación de la producción agrícola y de reforzamiento de la unidad del proletariado urbano y rural, de los campesinos trabajadores, no solamente en todo el período de guerra, sino también después de la victoria. VIII) Política de guerra y avituallamiento que asegurase el de los combatientes y el de la población civil. IX) Reconocimiento y respeto de la personalidad jurídica e histórica de Cataluña, Galicia y Euzkadi, que asegure en esta forma la unión estrecha y fraternal de todos los pueblos de España contra el enemigo común: el fascismo español e internacional. X) Política tendente a hermanar las buenas relaciones de ayuda con la pequeña-burguesía industrial y comercial. XI) Orden público riguroso en todo el territorio de la República. XII) [169] Fortalecimiento del Frente Popular. XIII) Unidad sindical. XIV) Unidad juvenil. XV) Unidad internacional. Lucha conjunta de los Partidos Socialista y Comunista en pro de la acción común de la II y III Internacionales y de la Federación Sindical Internacional para cortar los manejos criminales del fascismo. XVI) La defensa de la Unión Soviética.

En las «instrucciones finales» del Programa, el Comité Nacional de Enlace exponía que sobre la base de estos puntos cada Comité debía establecer otro programa de acción conjunta acerca de los problemas de carácter local y provincial. Las minorías de ambos Partidos en el

Parlamento, en los Consejos Provinciales y locales, los grupos sindicales y las fracciones en los lugares de trabajo debían establecer la más estrecha relación para realizar el Programa, para resolver, en su espíritu, los problemas que se presentaran. La Prensa de los dos Partidos y los militantes que interviniesen en actos públicos deberían explicar y defender el Programa. El importante documento lo firmaban por el Partido Socialista Ramón González Peña, Juan Simeón Vidarte, Ramón Lamonedá y Manuel Cordero; y por el Partido Comunista José Díaz, Dolores Ibárruri, Pedro Checa y Luis Cabo Giorla.

El Gobierno Negrín acometió rápidamente el cumplimiento de aquellas medidas que el pueblo y el Partido habían venido reclamando: responsabilidades por los sucesos de mayo, desarme de los elementos incontrolados, establecimiento de un Poder único en todo el territorio republicano y de un mando único del Ejército Popular.

La labor del Gobierno facilitó la realización de una serie de operaciones del Ejército Popular en ayuda del frente Norte donde la situación era grave. La primera de esas operaciones fue la ofensiva de las fuerzas republicanas en el frente del Centro a comienzos de julio. El enemigo no tardó en responder con potentísimos contraataques. La batalla, que se prolongó durante más de veinte días, adquirió proporciones e intensidad extraordinarias. Se la conoce con el nombre de «Batalla de Brunete», pues la conquista de este pueblo por las fuerzas republicanas y los encarnizados combates que luego tuvieron lugar alrededor del mismo, fueron lo más saliente de la operación. [170]

El contingente principal de las fuerzas que habían realizado la ofensiva en el Norte y la ocupación de Bilbao, y otras destinadas a operar en los frentes del Sur, fueron atraídas por la acción republicana al frente del Centro. La ofensiva en el Norte fue detenida y de este modo quedó cumplido el fundamental objetivo de las fuerzas de la República. Sin embargo la operación no tuvo todos los resultados esperados a causa de ciertos errores en la concepción de la misma y de que no se supo aprovechar la ruptura del frente enemigo por Brunete e introducir por esa brecha otras fuerzas que explotaran el éxito inicial.

Los franquistas incrementaron de nuevo sus efectivos en el Norte y, no mucho después, reanudaron sus ataques en ese frente.

El avance en Aragón, a primeros de septiembre de 1937, de las fuerzas republicanas, que tomaron Quinto, Belchite y otros pueblos e hicieron

numerosos prisioneros al enemigo, no pudo aligerar, otra vez, la presión franquista en el Norte. La ofensiva de Aragón no alcanzó ese objetivo, entre otras causas porque la falta de reservas operativas de las fuerzas de la República impidió alimentar el ataque y desarrollarlo lo suficiente.

Las unidades fascistas continuaron su avance y coronaron la ocupación de toda la zona industrial del Norte con su entrada en Gijón el 20 de octubre de 1937.

La República sufrió un rudo golpe con la pérdida de aquella base económica y militar.

La lucha del pueblo vasco había proporcionado una experiencia nueva: la participación conjunta en un Gobierno de católicos y comunistas, la lucha común en las trincheras de miles de comunistas y católicos en defensa de la democracia y de la libertad de Euzkadi y de España entera. Este hecho bastaba para echar por tierra las patrañas franquistas que querían presentar la agresión fascista como una «cruzada en defensa de la religión católica», supuestamente amenazada por el comunismo.

En su Tercer Pleno de guerra, celebrado en Valencia, entre los días 13 y 15 de noviembre, el Comité Central del Partido examinó las causas de la pérdida del Norte. Las [171] raíces de la pérdida del Norte arrancaban de la errónea política de guerra de Largo Caballero con su consecuencia de enorme retraso en resolver problemas de tan vital importancia como el de formación de un Ejército Regular, y el de creación de una industria de guerra; y, unido a esto, la actuación negativa y desligada del Gobierno Central, del Gobierno Vasco dirigido por los nacionalistas. A pesar de la potencia del ataque enemigo, el Norte podía haber sido defendido y salvado como Madrid en noviembre de 1936. En Euzkadi existía la base siderometalúrgica más importante de España; existían las principales fábricas de armas de precisión y fábricas de explosivos que, bien organizadas y dirigidas, hubieran podido constituir una potente industria de guerra para toda la República. Y nada se organizó, esperando siempre que Madrid proporcionase armas, justificando lenidades y la falta de actividad militar ofensiva con la carencia de medios. Factor decisivo en la defensa de Madrid fue la acción enérgica de las masas movilizadas por todos los partidos y organizaciones y, en primer término, por el Partido Comunista.

En Madrid, el inmenso trabajo político realizado en el Ejército y en toda la población, se tradujo en la creación rapidísima de un Ejército de tipo regular; en Madrid habían actuado, con heroísmo admirable y, extraordinaria eficacia, los comisarios políticos. La política de guerra aplicada por los dirigentes nacionalistas vascos, representantes de los grandes industriales, de los grandes capitalistas, separados, en realidad, del verdadero pueblo de Euzkadi que había luchado con heroísmo, era la opuesta a la política aplicada en Madrid. Los dirigentes vascos tenían miedo a una verdadera movilización revolucionaria de todo el pueblo. No había sido introducida modificación alguna en la situación de las masas. Los problemas de la tierra, de los salarios, de incorporación de la mujer a la industria, seguían sin resolver. Ellos consideraban «proselitismo» el trabajo para transformar en Ejército las milicias, no querían que una defensa tenaz pudiera causar desperfectos a sus fábricas; en Bilbao y Santander se prohibían los mítines, en el Norte eran reclutados los comisarios, se amordazaba a la prensa. En la pérdida [172] del Norte, resumía el Partido, había influido decisivamente la política de los jefes nacionalistas vascos.

El Comité Central ratificó en su Pleno la propuesta que el Partido había ya hecho al Partido Socialista y a algunos dirigentes republicanos, acerca de la realización de una consulta al pueblo.

El Partido opinaba que la grave situación por la que atravesaba el país, exigía reforzar la democracia y elevar la participación de las masas en la vida política, haciendo que tanto el Parlamento como los otros organismos representativos, provinciales y locales, reflejasen con mayor exactitud la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Opinaba el Partido que esa consulta, en la situación que vivía España, reforzaría el heroísmo de los combatientes de la República y la moral de su retaguardia, tendría gran repercusión en el campo internacional, pues demostraría palpablemente que la República al luchar contra la sublevación fascista cumplía la voluntad del pueblo.

La propuesta del Partido reflejaba el contenido profundamente democrático de su política, su fe en las masas y en su capacidad creadora. La propuesta no fue aceptada por las otras fuerzas políticas.

La caída del Norte hizo pensar a los franquistas que podían terminar rápidamente la guerra a su favor. Pero la República dio pronto otra

prueba de su capacidad combativa con la liberación de Teruel por las fuerzas populares, el 21 de diciembre de 1937.

El triunfo de Teruel tuvo gran repercusión nacional e internacional.

Esa victoria, declaraba José Díaz en nombre del Partido en «Mundo Obrero», no era una victoria de éste o el otro partido, sino de todo el pueblo, de toda la España republicana. Había sido conseguida porque supimos organizar un Ejército fuerte, fortalecer nuestra retaguardia y luchar con éxito por la unidad.

El año 1937 se cierra con la conquista de Teruel. El año 1937 constituye en los anales de España y en los de su Partido Comunista, un momento histórico de gran importancia: durante él se reveló plenamente la capacidad del pueblo español para [173] asumir con honor un puesto de combatiente de vanguardia en la democracia mundial contra el fascismo.

La lucha consecuente y el trabajo político del Partido Comunista por crear y desarrollar las condiciones de la victoria popular, se tradujeron en realidades positivas.

En el orden específicamente militar, fue constituido ya en toda la España republicana el Ejército de tipo regular por el que desde los primeros momentos de la guerra había abogado el Partido. Para proporcionar a ese Ejército y a su retaguardia lo necesario se había dado un impulso importante (aunque sin el ritmo que exigían las circunstancias) a la organización de una economía de guerra; fueron estableciéndose y reforzándose un orden y una disciplina más firmes en la retaguardia de la República. El Ejército Popular, disciplinado, animado de sentimientos democráticos y con un mando único logró ya alcanzar victorias importantes en muchos frentes de combate: en los campos de batalla del Jarama, Guadalajara, Pozoblanco, Brunete, Belchite y Teruel. Todos esos grandes hechos de armas, en los que el pueblo y la República se cubrieron de gloria frente a las fuerzas hitlerianas y camisas negras de Mussolini, quedaron en la Historia ligados a nombres de comunistas.

En el aspecto, tan importante, de la unidad, fueron consignados ya los grandes y fructíferos éxitos logrados por el Partido.

Por último, también en ese período, merced sobre todo a la lucha, al trabajo y a las orientaciones del Partido Comunista, fueron realizadas

o coronadas en la zona republicana transformaciones económico-sociales, políticas y culturales profundas, encuadradas en el marco de la revolución democrática que, por desdicha para España, no habían sido acometidas en 1931 por los Gobiernos republicanos-socialistas.

Esas transformaciones constituían la base y el contenido del nuevo régimen que, en el fragor de la lucha, había nacido y se desarrollaba en España: un régimen que abría a la sociedad española una amplia vía de prosperidad y de florecimiento, de paz y democracia. [174]

La República Democrática de nuevo tipo

Ese régimen, por el establecimiento y desarrollo del cual luchó el Partido Comunista era la República Democrática que en el transcurso de la guerra fue convirtiéndose, en virtud de las transformaciones realizadas, en una República de nuevo tipo: no era la del 14 de abril, pero no era tampoco una República Socialista. Era un Estado que nacía y se consolidaba dentro del marco de la revolución que se estaba desarrollando en España, es decir, de la revolución democrática, pero en las condiciones especiales de la guerra contra la agresión armada de la reacción y el fascismo.

Promotora y dirigente de la sublevación fascista era la oligarquía financiera terrateniente; en ella se hallaban prácticamente fundidos la aristocracia terrateniente y el capital monopolista, si bien la preponderancia de éste crecía de continuo. La lucha contra el fascismo estaba pues dirigida no sólo contra las castas que encarnaban y mantenían en España vestigios de feudalismo, sino también, simultáneamente, contra los grandes monopolios capitalistas. Ello determinaba el carácter democrático y socialmente avanzado de la República.

El hecho de que los obreros, los campesinos y las otras capas populares luchaban con las armas en la mano garantizaba la realización de las transformaciones económicas y sociales.

La influencia mayor en la dirección de la revolución democrática y de la guerra nacional revolucionaria la ejercía el proletariado, aunque la unidad lograda en su seno distaba aún de ser suficiente para asegurar su hegemonía consecuente.

A la luz de los hechos históricos posteriores, aquella República parece, en cierto modo, la precursora de las modernas democracias po-

pulares de Europa en la primera fase del desarrollo de estos Estados, con las diferencias derivadas, claro está, de las circunstancias sociales e históricas tan distintas en que una y otras surgieron a la vida.

Los anarquistas y otros «izquierdistas» criticaban ásperamente al Partido su defensa de la República Democrática. Le acusaban de «sacrificar los intereses de la revolución en aras [175] de ganar la guerra», de «desviarse –según ellos– del camino del marxismo revolucionario». De manera clara, concreta y precisa, el Partido Comunista mostraba cómo el afianzamiento de las conquistas revolucionarias de las masas estaba indisolublemente unido a la victoria sobre el fascismo; que sin ganar la guerra no había posibilidad de revolución. Al defender la República Democrática y al desarrollarla, el Partido se ajustaba a las enseñanzas del marxismo-leninismo y las aplicaba en las condiciones concretas de un país en guerra, víctima de una agresión criminal de la reacción interna e invadido por fuerzas fascistas extranjeras que, en la práctica, eran ejércitos de ocupación.

Al mismo tiempo que combatía los conceptos y actividades «izquierdistas», el Partido luchaba también contra la resistencia de ciertos dirigentes republicanos que, en el seno del Gobierno y fuera de él, se oponían a las transformaciones sociales de la República Democrática.

El trabajo del Partido y su acción gubernamental fueron factores determinantes en la realización de esas transformaciones democráticas y en la orientación y solución positivas de los grandes problemas nacionales de la República del Frente Popular.

Fue el Partido el que, por vez primera en la historia del país, planteó y puso en marcha la verdadera solución del problema de la tierra.

Apenas transcurrida una semana de la entrada del Partido en el Gobierno de Largo Caballero, el ministro de Agricultura, Vicente Uribe, en nombre del Partido, presentó al Consejo de Ministros un proyecto de Reforma Agraria que preveía la entrega gratuita y en propiedad a los campesinos y jornaleros de la tierra confiscada a los terratenientes comprometidos en la sublevación fascista.

Después de larga discusión, el Partido hubo de aceptar la modificación introducida en el proyecto inicial por los socialistas, en virtud de la cual se decretaba la confiscación en favor del Estado, o sea, la nacionalización de la tierra.

Con la oposición de los republicanos, que votaron en contra en el Gobierno, el 7 de octubre de 1936 apareció el decreto que establecía la expropiación sin indemnización, en [176] favor del Estado, de todas las propiedades rurales pertenecientes a personas físicas o jurídicas que hubiesen tomado parte en la insurrección fascista. En la práctica ello significaba privar de sus tierras a los grandes terratenientes. El hecho inauguraba una nueva era histórica en el agro español, en la vida de los campesinos de España, cuyos afanes seculares se veían al fin satisfechos. La tierra confiscada en la zona republicana fue entregada a los obreros agrícolas y campesinos para que la trabajasen individual o colectivamente, como ellos mismos decidieran. Al mismo tiempo fueron abiertos créditos a los labradores y les fueron concedidas una moratoria total en los pagos de rentas, facilidades para obtener semillas y abonos y otra serie de ventajas que, en conjunto, hacían efectivo el lema del Partido: Ni hambre de pan ni hambre de tierra en el campo.

En la aplicación de su política agraria, el Partido tuvo que oponerse a las posturas y actividades extremistas de los anarquistas y caballeristas; éstos, apoyándose en la potente «Federación de Trabajadores de la Tierra» (FTT), defendieron y practicaron, al principio, «la colectivización forzosa de la tierra». Un documento de la FTT del 30 de agosto de 1936 decía:

«En ningún caso se puede autorizar la distribución de la tierra, el ganado y otros bienes, pues tenemos el propósito de colectivizar todas las tierras incautadas».

Tal propósito trató la FTT de realizarlo al aplicar la Reforma Agraria apelando, en bastantes casos, al empleo de amenazas y coacciones contra los campesinos.

La política agraria de los anarquistas se tradujo en las zonas donde dominaban en la «libre experiencia de las colectivizaciones». Todo, según ellos, debía ser objeto de la colectivización: las fábricas, talleres, casas, campos y medios de producción. Esa colectivización forzosa era dirigida por unos comités, de los que formaban parte algunos dirigentes locales anarquistas junto con elementos incontrolados.

Esa «política» agraria de tipo anarquista tuvo en Cataluña como consecuencia un progresivo descenso de la [177] producción agrícola y el abandono del campo por una parte no pequeña de los campesinos. La

catástrofe en el aspecto del abastecimiento fue evitada por la energía del Partido Comunista de España y del PSU en atajar los desmanes, a los que prácticamente lograron poner fin al aplastar el movimiento de mayo de 1937.

El Partido se alzó decididamente y desde los primeros momentos contra esas colectivizaciones impuestas, que equivalían a un verdadero saqueo, y se esforzó en explicar a sus aliados en la lucha, a los socialistas y anarquistas, que de continuar la política de violencias con los campesinos, que ellos habían realizado, no podría afianzarse en España la alianza obrera y campesina, indispensable para alcanzar la victoria del pueblo.

El Partido fue en todo momento un amigo leal y un defensor ardiente de las masas trabajadoras campesinas. Partidario convencido de la colectivización, sin la cual no hay posibilidad de socialismo, consideraba, sin embargo, que el trabajo colectivo no podía imponerse en modo alguno, que para persuadir a los campesinos de sus ventajas era preciso desarrollar una paciente labor previa de educación y de convencimiento.

El Partido fue el alma de la revolución agraria democrática que se realizó en la zona republicana. La acertada política del Partido en el campo contribuyó poderosamente a la incorporación a la lucha armada, de un modo consciente y entusiasta, de millares de campesinos y obreros agrícolas.

El Partido afirmó y extendió con su política agraria las bases de la alianza obrera y campesina bajo la hegemonía del proletariado.

Consagró también el Partido no pocos desvelos y trabajos a la creación y desarrollo de la industria y, en primer lugar, a la industria de guerra, completamente desorganizada por la sublevación fascista. La atención del Partido a este problema se hizo aún más intensa a partir de la pérdida del Norte. En el último período el PCE destacó continuamente la necesidad de creación de un Ministerio de Industrias de Guerra.

La política del Partido en el dominio industrial perseguía los objetivos de movilizar los recursos industriales del país [178] a fin de proporcionar a los frentes y a la retaguardia todo lo necesario en armamento y artículos de toda suerte, reforzar el papel de la clase obrera en la

economía nacional, mejorar la situación de los trabajadores industriales y fortalecer la alianza de la clase obrera con la pequeña burguesía urbana.

En el área de la industria, el Partido tuvo que luchar con criterios y actividades negativos. Gravísimo daño causó, sobre todo, la política anarquista que, en Cataluña, llevó a la colectivización obligatoria de todas las empresas industriales y comerciales de Cataluña que empleasen a más de 100 obreros e incluso de otras menores, si las tres cuartas partes de los obreros que trabajaban en ellas lo pedían. Con estas medidas de colectivización los anarquistas trataron de desplazar al Estado y de poner la industria en manos de los sindicatos.

Pero ese sistema anarquista de dirección de la industria fracasó rotundamente. El resultado fue que la industria catalana, que hubiera podido satisfacer, en gran parte, las necesidades del Ejército en vestuario, municiones, armamento ligero, e incluso, parcialmente, en cañones, camiones y tanques no lo hizo, pues trabajaba mal, utilizando sólo el 50% de los motores y máquinas, con un rendimiento muy inferior al normal.

El Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado de Cataluña lucharon por acabar con la anarquía en la industria y realizaron una labor muy efectiva para conseguir que fuera respetada la propiedad de los pequeños industriales y comerciantes. Los comunistas combatieron la «demagogia obrerista» de los anarquistas que pedían la disminución de la jornada de trabajo y otras reivindicaciones, inadecuadas, en tiempo de guerra.

Las organizaciones del Partido en las fábricas fueron logrando paulatinamente que los obreros de otras tendencias comprendiesen y aceptasen la política que preconizaban los comunistas. Se repetían los casos como el de los mineros de Linares, que rechazaron la propuesta socialista y anarquista de disminuir la jornada de trabajo a seis horas y que aceptaron la de los obreros comunistas de prolongarla hasta nueve horas; como el de los obreros de las fábricas «Ford», «General Motors», «Maquinista Valenciana» y otras que, después de la caída de Málaga, tomaron el acuerdo de trabajar sin límite [179] de horas y sin compensación por las horas extraordinarias. < >

La JSU trabajó abnegadamente en las numerosas brigadas de choque que tanto ella como el PCE y el PSU organizaron en fábricas y talle-

res, y en muchos sitios surgieron émulos del obrero tornero Urbano Ramos, verdadero héroe del trabajo, que aumentó el número de proyectiles torneados en un día de 205 a 790.

Luchó el Partido Comunista en pro de una amplia y verdadera democracia sindical, por que el control obrero lo realizaran los verdaderamente elegidos por las masas, contra el salario igualitario, por el mejoramiento, dentro de las circunstancias de la guerra, de las condiciones de vida y de trabajo de todos los obreros.

El Partido Comunista fue el principal orientador de la gran labor constructiva que realizó la República Democrática en las esferas cultural y social. En el primer aspecto, el Partido impulsó, desde el Gobierno, el desarrollo de la cultura popular: fueron abiertas millares de escuelas, mejorados los sueldos de los maestros, creadas brigadas volantes contra el analfabetismo, abiertos al pueblo los centros de enseñanza superior, fundados los Institutos Obreros, en los que la juventud trabajadora —que mereció siempre la máxima atención del Partido, del Partido de la juventud— recibía la enseñanza y los libros necesarios conservando los mismos salarios que esos jóvenes obreros percibían en la producción.

En el aspecto social, la República creó decenas de casas de reposo y sanatorios para los niños y elevó la personalidad de la mujer en todos los aspectos de la vida social y política del país.

El Partido Comunista fue el orientador de la incorporación en masa de las mujeres españolas a la producción. Millares de mujeres dieron realidad a la proposición que, en nombre del Partido, expuso públicamente Dolores Ibárruri:

«Los hombres útiles, al frente de la lucha; las mujeres, al frente de la producción».

Numerosísimas mujeres españolas agrupadas en la gran Asociación de Mujeres Antifascistas, podían haber escrito palabras parecidas a éstas que las campesinas de Toledo enviaron al Jefe del Gobierno en enero de 1939: [180]

«En los trabajos de verano, en la comarca de Villa de Don Fadrique, han trabajado 3.500 mujeres; en la vendimia, 6.100; en los trabajos de bodega, 197; arando, 57; en la saca de patatas, 2.700. Así creemos que ayudamos a fortalecer nuestra eco-

nomía nacional y mitigamos en gran parte los sufrimientos del Ejército y retaguardia. Prometemos trabajar mucho más para intensificar nuestra producción y para emular a nuestros heroicos soldados que resisten en los frentes, luchando por la libertad de nuestra patria».

El Partido Comunista, que había proclamado siempre el derecho de los pueblos catalán, vasco y gallego a disponer libremente de sus destinos y que había luchado por que fueran satisfechas sus reivindicaciones autonomistas, trató de fortalecer durante la guerra la colaboración y compenetración entre el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Autónomo de Euzkadi, de una parte, y el Gobierno de la República, de otra.

El Partido se opuso a la aplicación de viejos métodos administrativos centralistas que conculcaban los derechos y herían los sentimientos nacionales de catalanes y vascos. En esto incurrieron algunos miembros del Gobierno de la República, incluido Negrín en el período en que ocupó la Presidencia del Consejo. Simultáneamente luchó el Partido contra aquellos elementos nacionalistas de Cataluña y de Euzkadi que, olvidando que sólo el triunfo de la República Democrática era la garantía de la existencia de sus regímenes estatutarios, y que sólo la lucha unida de todos los pueblos de España podía lograr ese triunfo, se oponían a la unidad y creaban no pocos problemas a lo largo de la guerra.

La cuestión nacional había adquirido a través de la contienda un aspecto nuevo. El problema de la libertad nacional no se planteaba separadamente para una u otra región, sino para toda España. Tratar de separar a Cataluña o al País Vasco de la República o debilitar en cualquier forma los lazos entre ellos, significaba ayudar a los enemigos fascistas de Cataluña, Euzkadi y España.

Tales fueron las grandes líneas de la obra constructiva del PCE durante los años de la guerra en el dominio de la [181] política económica y social, que venía a completar su tenaz esfuerzo en el aspecto de la defensa para dotar al país de un potente Ejército de tipo democrático.

Periodo de duras pruebas

En el Gobierno Negrín, que sucedió al de Largo Caballero la dirección de la guerra recayó sobre Indalecio Prieto.

Su actuación como ministro de Defensa fue la expresión más aguda y negativa de su falta de fe en el triunfo, de su desconfianza en el Ejército democrático y en los mandos populares. Para reducir lo más posible el número de mandos del Ejército, miembros del Partido Comunista, Prieto puso en práctica su teoría de la «proporcionalidad» para designar a aquéllos, lo que tuvo como natural consecuencia elevar a puestos de mando de importancia a militares poco competentes o carentes de entusiasmo en la defensa de una causa que no sentían. El ministro prohibió la participación de los militares en los actos populares y, ya que no podía destruir al Comisariado, hizo cuanto pudo por burocratizarlo y sustituyó a numerosos comisarios de valor y capacidad probados en decenas de combates –la mayoría comunistas– por otros entre los que abundaban los ineptos y carentes de espíritu revolucionario. Su «apoliticismo» le impulsó a prohibir la propaganda dirigida a las filas enemigas. La poca que se hizo la realizó el PCE poco menos que conspirativamente, ante la oposición del ministro.

Su política militar se traducía, prácticamente, en el planteamiento sistemático a las fuerzas populares de objetivos limitados, en la falta de creación de reservas estratégicas suficientes y de enlace estratégico entre los diversos frentes, esto es, de cooperación operativa entre ellos. Así se desaprovecharon, por falta de su necesario desarrollo, éxitos iniciales importantes de las fuerzas republicanas, como el de Brunete, el de la toma de Quinto, Belchite y otros puntos, y el de Teruel.

Manifestación saliente de la política de Prieto fue, precisamente, la batalla de Teruel considerada en su conjunto en sus dos fases: la operación ya fue planteada con el objetivo [182] limitado de tomar la ciudad, pues se suponía que con ello quedaría frustrada la ofensiva del enemigo sobre Guadalajara. Preparado el ataque con perfecto secreto, las fuerzas republicanas tuvieron a su favor el importante factor de la sorpresa y arrebataron la iniciativa al enemigo. Después, el mando republicano renunció a ella al no proponerse otros objetivos, no explotó el gran éxito inicial logrado con la conquista de la ciudad y pasó

inmediatamente a la defensiva sobre unas posiciones a todas luces desventajosas.

La idea sistemática de Prieto de que las acciones del Ejército Popular sólo podían tener objetivo limitado tenía por consecuencia que no se preparasen reservas suficientes, ni se organizase la cooperación operativa de otros frentes. Indalecio Prieto, sin tomar en consideración que el enemigo, en cambio, concentraba importantes reservas sobre Teruel, tres veces dio por terminada la operación, tres veces sacó del frente las divisiones de maniobra y la aviación y otras tres tuvo que volverlas a emplear por partes en la batalla a causa de los ataques enemigos. Resultado de estas vacilaciones fue el desgaste extraordinario del Ejército de Maniobra y otras unidades y la falta absoluta de aprovechamiento del que también había sufrido el enemigo. Con esa acción vacilante, a pesar de que en el transcurso de la operación fueron empeñadas 18 divisiones, las fuerzas republicanas resultaron débiles frente a las enemigas, excepto al comienzo de la operación. La gran confusión que el mando franquista mostró en los comienzos de la acción en una serie de contraataques desacertados y mal organizados, facilitaba a las fuerzas de la República emprender acciones decisivas, pero la pasividad de su mando supremo salvó a los franquistas de un desastre, que tal hubiera podido ser esa batalla que duró dos meses y medio y que, por su intensidad y por los medios técnicos empleados, era la más importante de todas las libradas hasta entonces. Teruel fue abandonado por las unidades populares el 22 de febrero de 1938. La moral de los combatientes republicanos, que tanto había elevado la conquista de la ciudad, sufrió un rudo golpe.

La política militar de Prieto se tradujo en un desgaste tal de las mejores fuerzas del Ejército Popular que permitió al enemigo desarrollar con buen éxito una potente en Aragón durante el mes de marzo, mientras la aviación «legionaria» de Mussolini sometía a Barcelona a salvajes bombardeos. El embajador alemán cerca de Franco, Von Stohrer, decía a su Gobierno, en un telegrama fechado el 21 de marzo de 1938:

«... los resultados de los bombardeos aéreos que los italianos han realizado recientemente pueden calificarse de terribles... No hubo indicio del menor intento de apuntar a objetivos militares... Hasta ahora se han contado mil muertos, pero se su-

pone que se encontrarán muchos más entre las ruinas. Se calcula en 3.000 el número de heridos...»

Esos crímenes no movían a los Gobiernos de la No-Intervención a modificar su actitud respecto al fascismo. Benevolentemente habían observado la invasión de Austria por las fuerzas de Hitler el 11 de marzo de 1938 y la anexión de ese país por Alemania tres días después. Esos Gobiernos deseaban acelerar el fin de la contienda en España con la derrota de la República y para ello alentaban las campañas derrotistas, abiertas o encubiertas, la corriente de los capituladores. Indalecio Prieto actuó como paladín de ellos.

El hombre que en los días de mayor peligro para Madrid, en 1936, ocupando el puesto de ministro de Marina, no había vacilado en mostrarse partidario del abandono y entrega de la capital, ahora, en momentos también muy graves para la suerte de la República, desde su puesto de ministro de Defensa hizo al Consejo Supremo de Guerra la propuesta siguiente: Concentrar todas las fuerzas militares de la República en Cataluña y abandonar al enemigo no ya sólo Madrid, sino toda la zona Centro-Sur de la República, todo el resto del territorio español. Era un plan de verdadera capitulación.

Azaña mostró también su actitud entreguista en una reunión a la que asistieron los dirigentes de los partidos políticos, convocados por él. Pero José Díaz, que en representación del Partido Comunista asistía a la reunión, al contestar a Azaña subrayó con energía que las manifestaciones de éste eran impropias del alto cargo que ocupaba, pues trataba de [184] influir en los presentes en un sentido que no era precisamente el de defensa de la República. La actitud de José Díaz la apoyaron, más o menos explícitamente, todos los otros dirigentes políticos y así el plan derrotista Azaña-Prieto se vino abajo.

Para quebrantar los manejos de los capituladores, el Partido apeló principalmente a las masas. Y éstas respondieron al llamamiento del PCE y del PSU. El 16 de marzo de 1938, Barcelona, sede ya del Gobierno, fue testigo de una grandiosa manifestación que demostró la decisión del pueblo de seguir luchando hasta la victoria porque sabía que de ella dependía su libertad y su porvenir. Al mismo tiempo, llegaban al Gobierno millares y millares de cartas de combatientes que condenaban todo intento de compromiso o capitulación y pedían la realización de una política de guerra mucho mas firme.

Ante las maniobras de la capitulación se produjo un proceso de diferenciación en el seno de la CNT. Algunos dirigentes anarquistas entraron en el juego de los capituladores. Pero las masas de la CNT, y los dirigentes más ligados a la clase obrera, comprendieron la necesidad de unirse al PCE para frustrar los planes de quienes pretendían entregar la República.

El Partido, sobre la base de su programa antifascista, logró establecer, primero, un acuerdo de unidad de acción con la CNT y, un mes después, el esfuerzo del PCE y del PSU en pro de la unidad alcanzó otro éxito de importancia con la firma de un pacto de unidad de acción entre la CNT y la UGT de Cataluña en la que tenían los comunistas decisiva influencia.

Al manifiesto que el PCE publicó el 18 de marzo, se unieron los de la CNT y la UGT de ese mismo día. Todos ellos llamaban a la resistencia y a continuar la lucha sin desmayos.

El 28 de ese mes, expresando así, implícitamente, la disconformidad del Gobierno con el ministro de Defensa, el Presidente Negrín pronunció un discurso por radio contra los derrotistas y anunció el comienzo de la campaña de recluta de cien mil voluntarios.

Desde el frente, los combatientes exigían la realización [185] de una política de guerra enérgica y, como indispensable premisa para ello, la salida de Prieto del Ministerio de Defensa. Por voluntad de los combatientes y del pueblo en general, Negrín prescindió de Prieto en el Gobierno que el 8 de abril de 1938 reorganizó, asumiendo él la cartera de Defensa y heredando las secuelas de la obra negativa de Largo Caballero y de Prieto. La política de guerra de Prieto había facilitado un hecho de extraordinaria gravedad para la República: la llegada al Mar Mediterráneo de las fuerzas fascistas el 15 de abril de 1938.

En el nuevo Gobierno estaban representadas la UGT y la CNT, hecho que saludó el Partido como positivo para el refuerzo de la unidad. El PCE, para facilitar la solución de la crisis, accedió a retirar uno de sus ministros del Gobierno reiterando su disposición a realizar todos los sacrificios necesarios en aras de la unidad de las fuerzas democráticas y de la victoria.

El primer acto político importante del nuevo Gobierno fue la publicación, el 30 de abril de 1938, del documento donde formulaba su pro-

grama político en los famosos Trece Puntos de guerra. En ellos se establecían y concretaban los objetivos por los cuales se continuaba la lucha y sobre los cuales podía establecerse un principio de acuerdo con los que luchaban frente a la República.

El programa contenía los siguientes puntos: Mantenimiento de la independencia y la integridad de España y la liberación del territorio de la República de sus invasores; que la forma social y legal que habría de darse a la República después de dar fin a la guerra, sería determinada por la voluntad nacional, libremente expresada por medio de un plebiscito: respeto de las libertades nacionales de los pueblos de España; libertad personal y de conciencia y el libre ejercicio de las creencias religiosas; respeto a la propiedad legalmente adquirida, dentro de los límites impuestos por los supremos intereses nacionales; reforma agraria que diera la tierra a los que la trabajan; respeto a las propiedades de los extranjeros que no hubieran apoyado directamente a los rebeldes; adopción de una política exterior de paz y de apoyo a la Liga de las Naciones y a la seguridad colectiva, y la reclamación de un puesto para [186] España en el concierto de naciones, como una potencia mediterránea capaz de defenderse con sus propios medios; una amnistía general para todos los españoles que quisieran tomar parte en la liberación y en la reconstrucción de España.

El Buró Político hizo pública en una nota la aprobación del Partido a ese programa por estimar que respondía al carácter de la lucha que sostenía el pueblo español en defensa de la independencia de España y de la democracia y que constituía la base sobre la que debían unirse en aquel momento todas las fuerzas antifascistas del país.

Nadie tan interesado como el Partido Comunista, habida cuenta de su enorme contribución de sangre, en poner fin a la guerra. Pero poner fin a la guerra no de cualquier manera, sino garantizando al pueblo la vida y la libertad. Y en ese sentido los Trece Puntos del Gobierno Negrín, que el Partido apoyó sin ninguna reserva, significaban un ofrecimiento de paz y de entendimiento a los sublevados para terminar la guerra de una manera razonable, sin represalias, sin violencias.

El Comité Central del Partido ratificó esa aprobación en su Cuarto Pleno de guerra, que celebró en Madrid los días 23, 24 y 25 de mayo de 1938.

Constituyó ese Pleno un acto político de gran importancia trascendencia en la lucha antifascista del pueblo y del Partido, pues en él levantó el Partido la bandera de la Unión Nacional, para la salvación de España.

El informe que presentó al Pleno Dolores Ibárruri, exponía con toda claridad cuál era la verdadera situación. La llegada de las fuerzas franquistas e invasoras al mar y el consiguiente corte de las comunicaciones terrestres entre las dos zonas de España, creaba una situación de extrema gravedad.

La situación internacional también se hacía más desfavorable para la causa popular con la firma, el 16 de abril de 1938, del tratado anglo-italiano que contenía una cláusula en virtud de la cual a todo lo que se comprometía el Gobierno fascista de Italia, con relación a España, era a «retirar sus tropas y su material bélico después de haber terminado la guerra». Esa cláusula significaba que el Gobierno inglés proclamaba de antemano su aprobación a la derrota de la [187] República lograda por la descarada intervención de las tropas italianas. Mientras se elaboraban en Berlín y en Roma los planes militares contra la República, en Londres y en París se trenzaban las sogas que debían servir para ahogar a nuestro pueblo.

El arma para hacer frente a esa grave situación, para rechazar la acometida de los potentes enemigos del pueblo tenía que ser la que el pueblo había esgrimido para alcanzar todas sus anteriores victorias, también en muy difíciles circunstancias: el arma de la unidad.

Pero ante la cada vez más intensa invasión del país, el corte de su territorio en dos partes, la amenaza, más grave que nunca, que pesaba sobre la independencia nacional, el Comité Central del Partido declaraba en su informe:

«La unidad que hoy necesitamos, es una unidad nueva, más amplia, más sólida, más efectiva y eficaz que la que ha existido hasta el presente. Debe ser una unión nacional... debe permitirnos movilizar, organizar y arrastrar al combate contra los invasores a nuevas capas del pueblo, a los que viven en nuestra zona y no pertenecen a ningún partido y aquéllos que en la zona invadida han caído por la fuerza o engañados bajo la influencia de las organizaciones fascistas».

En el informe, que en nombre del Comité Central hacía, la camarada Dolores se dirigía a todos los españoles de uno y otro lado de las trincheras para decirles:

«A través de las barreras de odio y de sangre que la traición ha levantado entre las dos Españas, entre aquella que mira al porvenir, recogiendo todas las tradiciones gloriosas de nuestra historia, y la que mira al pasado para tratar de resucitar todo lo viejo y todo lo podrido, nosotros llamamos a todos los hombres que sienten el orgullo de ser españoles y les decimos: Son únicamente los españoles los que pueden resolver los litigios de España, los que tienen derecho a resolverlos».

El Comité Central opinaba que sobre la base de los Trece Puntos podían unirse los españoles de una y otra zona que [188] quisieran salvaguardar la independencia nacional y sus libertades.

El PCE salía al paso de los que pretendían ver una contradicción entre los Trece Puntos que el Partido defendía y sus principios políticos. El Comité Central recordaba que ya en su primer manifiesto de agosto de 1936 el PCE había proclamado:

«Contra los fautores de la guerra, unión nacional de todos los que quieren una España grande por su cultura, una España libre, una España de paz, de trabajo y de bienestar».

También recordaba el Partido a los que criticaban que los Trece Puntos incluyesen la amnistía total que, desde los primeros momentos de la lucha, los Gobiernos republicanos habían declarado que no habría represalias. El PCE había apoyado siempre esas declaraciones.

El Pleno, que en la historia de los del Partido podría designarse con el título de «Pleno de la Unión Nacional», dedicaba particular atención a la necesidad del refuerzo de la unidad de todos los pueblos de la República y especialmente de la de Cataluña con el resto de España. Después de la ruptura de las comunicaciones terrestres entre ambos, esto era más necesario que nunca.

Indalecio Prieto, que salió del Ministerio aireando la idea de la capitulación, empezó muy pronto sus ataques contra Negrín y otros socialistas contrarios a ella, y fue agrupando a su alrededor a todos los elementos disgregadores y derrotistas. Bajo la presión de Prieto y otros socialistas, y asimismo de la II Internacional, la Ejecutiva del PSOE

publicó una declaración que recogía algunos infundios anticomunistas. Sin atreverse a romper el Comité de Enlace, la Ejecutiva paralizaba de hecho su actividad.

El PCE hizo frente a tan compleja y difícil situación, apelando, una vez más, a las masas. Durante el resto del mes de junio el PCE y el PSU, y con ellos las otras organizaciones antifascistas, realizaron una campaña de movilización de las masas alrededor de la consigna de ayudar a Valencia. Y en los primeros días del mes de julio el Partido logró que se [189] celebrasen reuniones conjuntas de socialistas y comunistas en Guadalajara, Valencia, Albacete y otros puntos. En ellas se tomaron resoluciones de apoyo a la política de resistencia del Gobierno y en pro de la unidad obrera. También abundaban las resoluciones de la CNT en el mismo sentido. De este modo, iban formándose cada vez con mayor claridad dos corrientes: los partidarios de la resistencia, que justamente tenían en cuenta para preconizarla no sólo los factores interiores sino los exteriores, y los partidarios de la capitulación que querían poner fin a la guerra fuese como fuese. Entre los primeros, encabezados por el PCE, estaban el PSU de Cataluña, la JSU, parte del PSOE, de la UGT y de la CNT y representantes de los partidos republicanos.

La política de resistencia tuvo como primer resultado positivo la detención de la ofensiva fascista en Cataluña en las orillas de los ríos Segre y Ebro, donde se estabilizó el frente.

La salida al mar de los franquistas había dejado en Cataluña un importante núcleo de las fuerzas más combativas del Ejército republicano. Con ellas fue creado el famoso «Ejército del Ebro».

Los franquistas iniciaron a comienzos de junio una ofensiva sobre Levante. El 16 de junio entraron en Castellón. Tres días antes, el Gobierno francés había dado otra prueba de su enemistad a la República española con el cierre total de la frontera franco-española.

Cada vez más acuciados por sus valedores extranjeros, los franquistas reanudaron su ataque en Levante. El 14 de julio nueve divisiones enemigas se dirigieron contra Valencia y Sagunto y, simultáneamente, otras fuerzas fascistas iniciaron un ataque sobre Almadén. Pero, en esa segunda mitad de julio, cuando la situación en la zona Centro-Sur había llegado a un punto de máxima gravedad, las fuerzas republicanas bajo la dirección de los camaradas Modesto y Líster, secundados

por los comisarios políticos que, como los comunistas Santiago Álvarez, Luis Delage, Matas, Farré y otros realizaron un gran trabajo político, pasaron el Ebro entre Mequinenza y Amposta e iniciaron así la más dura y prolongada de las batallas de la guerra. [190]

En ella se cubrió de gloria el Ejército del Ebro, los efectivos del cual no llegaban a la décima parte de los del Ejército Popular. El retuvo durante 113 días a la fundamental masa de maniobra del Ejército enemigo, constituida por no menos de 13 divisiones, todos los tanques, la mayor parte de la artillería y la casi totalidad de la aviación. Más de 1.300 aviones fascistas extranjeros participaron en la batalla.

Entusiasmado el pueblo por el paso del Ebro realizado por su Ejército, por el Ejército Popular, al que los capituladores daban ya por no existente, manifestaba su alegría y su emoción en canciones que resonaban en los frentes y en la retaguardia:

*Hemos pasado el Ebro,
novia mía, mi bien amado,
los unos en las barcas
y otros a nado.
¡Ay amor mío!
En barcas y nadando
se pasó el río.*

Otra, refiriéndose a la participación italiana fascista, decía:

*En el Ebro se han hundido
las banderas italianas
y en los puentes sólo ondean
banderas republicanas.*

Al paso del Ebro van ligadas las más hondas emociones de los combatientes republicanos que aún hoy siguen recordando que

*El Ejército del Ebro
una noche el río pasó
y a las tropas invasoras
buena paliza les dio. [191]*

A mediados de agosto los capituladores hicieron un intento de derribar al Gobierno Negrín por medio de una conspiración que Negrín llamó «el complot de la charca». En él estaban complicados Besteiro y otros socialistas, grupos de republicanos burgueses (incluido el Presidente

de la República) nacionalistas catalanes y vascos y ciertos señores anarquistas.

Tomando como pretexto las incomprensiones de Negrín respecto a Cataluña, la Esquerra retiró del Gobierno a su ministro, a mediados de agosto de 1938. Los nacionalistas vascos, por solidaridad con los catalanes, retiraron también el suyo. Claro está que esa retirada, estaba motivada por el deseo de los elementos burgueses nacionalistas de romper las amarras con el Gobierno de la República, partidario de la resistencia para, en momentos favorables, plantear la rendición en forma de «paz separada».

La intervención del Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado permitió dar una solución a la crisis parcial sin que quedaran excluidos los representantes de Cataluña y Euzkadi. En el Gobierno entraron el camarada José Moix, del PSU, y Tomás Bilbao en representación del Partido Acción Nacionalista Vasca.

La victoria del Ebro tuvo también profundas repercusiones políticas en el campo rebelde: en el Ebro los franquistas perdían la flor de sus ejércitos. Se agudizaron considerablemente las contradicciones internas en el campo fascista entre los grupos que lo constituían. Se extendía entre ellos la idea de que no podían ganar la guerra.

Los hechos demostraban que, aplicando consecuentemente la política de resistencia, podían obtenerse resultados positivos.

Las consecuencias de Munich en España

Mientras continuaba la batalla del Ebro, la última de las grandes batallas de la guerra, se realizaba, a fines de septiembre de 1938, el vergonzoso acuerdo de Munich entre Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, en virtud del cual se desmembraba a Checoslovaquia y se la entregaba al fascismo [192] alemán. El hecho creaba una situación internacional profundamente distinta a la que hasta entonces existía.

La política de Munich significaba el apoyo descarado de los imperialistas ingleses y franceses a las agresiones de Hitler en Europa. Esta política tuvo la adhesión plena de los dirigentes de la II Internacional que se entregaron a una propaganda ignominiosa, intentando convencer a los pueblos de la necesidad de capitular ante el fascismo. Esa política tenía como objetivo impulsar a Hitler a la agresión contra la

Unión Soviética. Chamberlain y Daladier abrían a Hitler el camino de Praga con la idea de que ésta no sería más que la primera etapa de la marcha hacia Moscú.

La política muniquense no fue aplicada solamente respecto a Checoslovaquia. Los gobernantes anglo-franceses, sostenidos por los dirigentes de la II Internacional, la aplicaron también a la República española. A partir de Munich, Inglaterra y Francia no se limitaron a encubrir la intervención germano-italiana en España, sino que intervinieron ya en diversas formas directamente para romper la resistencia española y, sobre todo, en la de quebrantar y deshacer la unidad obrera y popular.

A fin de establecer las tareas que se desprendían de la nueva situación se reunieron en Barcelona, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, los miembros del Comité Central que se encontraban en Cataluña, en una Asamblea, a la que fueron invitados algunos militantes del Partido que ocupaban cargos militares o estatales importantes.

El mantenimiento y desarrollo de la resistencia ante la agravación de la situación internacional hacía necesario plantearse en primer término el problema de las relaciones de los españoles que combatían por la democracia con los españoles de la zona invadida. Los esfuerzos que hasta entonces se habían hecho para alentar y dar vigor a los numerosos elementos que en la zona facciosa querían, como los de la zona republicana, ver a España libre e independiente, eran escasos y excesivamente tímidos, a juicio del Partido.

El Partido propugnaba hacer cuanto fuera posible para organizar en la otra zona un movimiento popular nacional que fuese la continuación de la política democrática de [193] Unión Nacional de todos los españoles, enderezada a lograr lo que constituía el punto cardinal de la acción militar y política de la democracia española: la supervivencia de España como un país libre sobre una base democrática. El Partido pedía asimismo que, en aplicación del programa de los Trece Puntos, se garantizase a todos los ciudadanos la libertad de conciencia y la práctica del culto. El Partido decidió reforzar las relaciones con el Partido Socialista e intensificar su esfuerzo en pro de la unidad sindical.

La resolución de la Asamblea señalaba este punto esencial: La necesidad de continuar con la mayor energía la lucha contra el derrotismo y

contra toda tendencia a romper la resistencia del Ejército, lo que significaría la entrega del país a los invasores, la renuncia a la independencia y a la integridad territorial de España, la traición a la patria.

Esta cuestión cobraba una importancia decisiva: estimulados por la política muniquense, los elementos capituladores, que tanto daño habían causado ya a la causa republicana, intensificaban su actividad derrotista y disgregadora, tanto en la retaguardia como en los Estados Mayores de los Ejércitos. Así, después de Munich, empezaba a tomar cuerpo un bloque de fuerzas políticas heterogéneas y de elementos militares dispuestos, sirviendo consciente e inconscientemente los planes de Londres y de París, a impedir que continuara la resistencia y a provocar el derrumbamiento de la República.

Las consecuencias del oprobioso pacto de Munich se hicieron sentir muy pronto en los frentes de batalla de la República. Franco recibió, para organizar una poderosa contraofensiva en Cataluña, nueva y muy considerable ayuda de Italia y Alemania.

Entre tanto, en el campo republicano, la creciente actividad de los capituladores, concretamente en la zona Centro-Sur, se traducían en la pasividad casi absoluta de los otros frentes de combate, mientras en el del Ebro se multiplicaban los contraataques franquistas y se volcaba el grueso de las fuerzas enemigas.

Negrín realizaba una política de resistencia, pero sin la debida firmeza, haciendo concesiones a los enemigos de ésta, tolerando la escasa o nula actividad de los otros frentes, y las [194] actuaciones contra la realización de la política de reservas y fortificaciones. Todo ello se traducían en una falta de ayuda en todos los órdenes al Ejército del Ebro que, en aquellos momentos, resistía al esfuerzo principal del enemigo.

Durante los meses de septiembre, octubre y la primera quincena de noviembre, las unidades fascistas desarrollaron su contraofensiva, sufriendo en ella tan enormes pérdidas que si entonces los otros frentes hubieran actuado con energía podía haber cambiado totalmente la suerte de la guerra. Pero el enemigo acumulaba en el Ebro todas sus fuerzas y el Ejército del Ebro también experimentaba grandes pérdidas. Al fin, después de haber cumplido con creces el objetivo estratégico que le había sido asignado, con un material desgastado y falto de

proyectiles artilleros, hubo de retirarse a la otra orilla del río el 15 de noviembre de 1938.

El ministro de Defensa no supo aprovechar ni respaldar la acción militar, reforzando las unidades de Cataluña, profundamente desgastadas, con las reservas necesarias. El cierre hermético de la frontera franco-española contribuía a impedir el abastecimiento de las fuerzas populares. Estas no podían ya por ellas mismas ofrecer suficiente resistencia a la nueva ofensiva de las fuerzas franquistas e invasoras en Cataluña que comenzó el 23 de diciembre de 1938.

El día 25 de enero de 1939 los franquistas llegaron a los barrios extremos de Barcelona y el 26 entraron en la capital catalana.

En el Castillo de Figueras celebraron las Cortes de la República su última reunión en España. El Parlamento aprobó unánimemente el programa del Gobierno que se concretó en tres puntos. Estos eran: Independencia de España; autodeterminación libre del pueblo con ayuda de un plebiscito y exclusión de todas las medidas represivas después de terminada la contienda. Esos puntos fijaban los objetivos del pueblo en la nueva situación y a ellos supeditaba la República su resistencia ulterior.

En los primeros días de febrero el enemigo entró en la provincia de Gerona, el día 4 tomó esa ciudad y prosiguió su avance hacia la frontera. El Gobierno la pasó el día 9. El Ejército se retiró de Cataluña con perfecto orden y absoluta [195] disciplina. Y con él abandonaron la tierra española decenas de miles de ciudadanos que así atestiguaban de nuevo la repulsa al fascismo de la mayoría de los españoles.

La traición

La pérdida de Cataluña constituía un golpe durísimo para la República. Pero esa pérdida no significaba la imposibilidad de continuar la resistencia.

Desde la pérdida de Barcelona el Partido propuso insistentemente a Negrín el traslado de armas y pertrechos militares a la zona Central. El Presidente prometió realizarlo pero no lo hizo. Así, al retirarse a Francia la parte del Ejército que había combatido en Cataluña, el Gobierno francés se incautó de todo el material de guerra. Mas pese a ello y a que las autoridades francesas tampoco autorizaron el transporte de los

soldados a la zona Central y los encerró en campos de concentración, como si se tratase de enemigos, en esa zona existían fuerzas y medios suficientes para continuar la resistencia.

Bajo la autoridad del Gobierno quedaban aún diez provincias con unos diez millones de habitantes; muchas ciudades entre las que se contaba la capital del Estado; cuatro grandes puertos entre ellos el de Cartagena (la base naval más importante de España); un Ejército de unos 700.000 hombres y una escuadra que contaba todavía con tres cruceros, trece destructores, cinco torpederos, dos cañoneros y siete submarinos. Existía, sobre todo, un pueblo en el que, pese a la acción negativa del cansancio y a las enormes dificultades de la situación, aún no había sido quebrantada la voluntad de resistir y ésta podía ser reanimada. La resistencia era posible y su prolongación hubiera podido cambiar el final de la guerra dada la creciente tensión internacional existente en Europa. Cinco meses después de finalizar la resistencia española Hitler empezó la segunda guerra mundial.

Es indudable que el pueblo deseaba la paz, como la deseaban el Partido y todos los antifascistas. El Partido lo había declarado abiertamente y repetidas veces. ¿Pero cuál era la paz que el pueblo y los comunistas querían? No una paz por [196] medio de la rendición incondicional al franquismo que –como la realidad había de demostrarlo– sería para miles y miles de españoles «la paz de los sepulcros». Querían una paz que salvase tres cosas: la independencia del país, con la salida de él de todas las fuerzas extranjeras; la libertad interior para que el pueblo pudiera decidir acerca del régimen de gobernación de España; la seguridad de que no habría ninguna represalia, ninguna persecución después de terminar la guerra.

Ya desde bastante antes de la pérdida de Barcelona la situación en la zona Centro-Sur fue objeto de la preocupación de la Dirección del PCE. Muy particularmente fueron analizadas por el Buró Político las cuestiones de la unidad, el trabajo del Partido y la situación militar.

La inactividad militar de los otros frentes durante todo el período de la batalla del Ebro demostraba la influencia creciente del espíritu capitulador sobre algunos mandos importantes del Ejército en la zona Central; mostraba igualmente el trabajo sinuoso de los traidores. Incrustados algunos en los Estados Mayores habían impedido, con fútiles pretextos, que se realizasen operaciones como la de Motril; habían

conseguido que se suspendiese la ofensiva del Ejército de Extremadura y se paralizase la operación de Brunete del Ejército del Centro.

El Partido insistió inútilmente cerca de Negrín para que efectuase algunos cambios de mandos que aparecían como poco seguros y al mismo tiempo tomó medidas tendentes a levantar la moral del Ejército y de la población.

El trabajo del Partido se orientó en este período a lograr los siguientes objetivos: Preparar tanto en sentido técnico como político a los Ejércitos de la zona Centro-Sur por considerar inminente la ofensiva contra ellos del enemigo, Dar un impulso enérgico a la creación de las reservas, vencer la oposición que existía a la movilización para lograrlas. Trabajar con tesón por mejorar la unidad de las organizaciones del Frente Popular.

El Gobierno, sin el Presidente de la República, llegó a Madrid el 11 de febrero de 1939. Azaña se negó a ir a la zona Central contribuyendo con su actitud a las maniobras de los capituladores. [197]

El Partido logró reunir en todas las provincias a los Frentes Populares, aunque no movilizarlos a todos en sentido combativo, y celebró Conferencias Provinciales en Jaén, Toledo y Cuenca, ya antes de la llegada del Gobierno. En ellas se examinaron los problemas de la situación del Ejército, de la movilización, de la unidad, y se tomaron resoluciones tendentes a resolverlos, todas en relación con la política de resistencia.

La Conferencia Provincial de Madrid, se realizó del 8 al 11 de febrero de 1939.

En ella estuvieron representados por numerosos delegados el Ejército, las fábricas de guerra, el campo. Muchos de los delegados eran mujeres. El entusiasmo que reinó en la reunión subió de punto cuando se anunció la llegada del Gobierno a Madrid. Pero en la Conferencia, a diferencia de lo ocurrido con otros actos anteriores del Partido, escasearon las adhesiones de otros partidos y organizaciones, lo que era índice del desarrollo del anticomunismo que utilizaban los capituladores y traidores como cobertura de sus propósitos de rendición.

En la Conferencia intervino enérgicamente Dolores Ibárruri, en nombre del Comité Central, para denunciar a aquéllos que utilizando el Decreto del Gobierno sobre el estado de guerra, tomaban medidas

contra el pueblo y la resistencia. Tal hacía el coronel Casado que se dedicó a perseguir con la censura militar a «Mundo Obrero» al que llegó a suspender momentáneamente y a detener con falaces pretextos a decenas de comunistas que, más tarde, fueron entregados a Franco.

La Conferencia tomó la resolución de realizar una serie de medidas prácticas para desarrollar la línea trazada por el Partido en orden al fortalecimiento del Ejército y acordó, particularmente, pedir al ministro de Defensa la destitución inmediata de los mandos incapaces o enemigos del pueblo para poner al frente de las unidades y servicios importantes a hombres probados, entusiastas y dispuestos a luchar.

Repetidas veces insistió el Partido ante Negrín para que ordenase la realización de éstas y otras medidas que, a petición del propio Presidente, le presentó el Partido el 20 de febrero por escrito. El plan lo retuvo Negrín en sus manos, [198] diciendo, ante los apremios repetidos del Partido para que lo llevase a la práctica, que lo estaba estudiando, pero dando largas a su ejecución. Del Negrín partidario de la resistencia, en marzo de 1938 y período subsiguiente, al de este último período de la contienda mediaba una gran distancia. Aquél había mostrado confianza en el pueblo y en el triunfo y voluntad de conseguirlo, buscaba el apoyo de las masas y, por consiguiente, el del Partido. Este otro Negrín rehuía ese apoyo y se negaba a escuchar las propuestas comunistas. Negrín no se orientaba ya a continuar la lucha y dejaba las manos libres a los capituladores.

En este período, los capituladores y la Quinta Columna trabajaban ya descaradamente, la traición se palpaba por todas partes. A mediados de febrero se descubrió en la Zona de Levante y Cartagena un complot fascista en el que estaban comprometidos mandos del Regimiento Naval, del de Costas, de Asalto y de Carabineros. Negrín declaró que procedería sin contemplaciones contra los conjurados pero, en verdad, no fue tomada medida alguna contra ellos.

Los capituladores civiles y militares que ocupaban puestos de dirección del Estado y del Ejército, los trotskistas, los faístas y no pocos socialistas desarrollaban una intensa campaña de descrédito del Gobierno al que presentaban como único responsable de la pérdida de Cataluña, que ellos habían preparado con su actividad disgregadora.

La Quinta Columna tenía en ellos valiosos soportes y colaboradores. Blanco principal de sus ataques eran, naturalmente, los comunistas,

primeros forjadores del arma que posibilitaba la resistencia y la victoria popular.

La corriente antiunitaria y capituladora en el Partido Socialista a la que en uno u otro período de la guerra se incorporaron Largo Caballero, Prieto y otros dirigentes tuvo desde su origen el exponente más destacado y constante en Julián Besteiro, cuyas posiciones reformistas habían pesado sobre el Partido Socialista durante varios lustros. Besteiro negaba con tenacidad toda colaboración, no ya sólo a los Gobiernos del Frente Popular, sino hasta a la propia Comisión Ejecutiva de su Partido. En la reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista el 15 de noviembre [199] de 1938, Besteiro reconocía que «si los comunistas dejaban de intervenir, probablemente las posibilidades de continuar la guerra serían pequeñas». Pero, a juicio suyo, era mucho peor que el pueblo ganase la guerra porque entonces, decía, «España sería comunista». Él sólo veía salida a la situación en la intervención del extranjero, de Inglaterra, concretamente.

«No veo –explicaba Besteiro a sus compañeros– una solución a mi gusto, a menos que ocurran cosas que nos salven en el campo internacional».

Y para propiciar la buena voluntad del «campo británico», Julián Besteiro aconsejaba a sus colegas la «conveniencia de deslindar los campos», esto es, de romper con los comunistas, y de acabar con el Frente Popular, pues, agregaba textualmente:

«cuanto más se refuerce el mantenimiento del Frente Popular la opinión extranjera nos será más contraria... y es evidente que si se refuerza aquí el Frente Popular la opinión extraña pensará que avanza aquí el comunismo».

Estas manifestaciones antiunitarias y anticomunistas de Besteiro estaban ya inspiradas por el Gobierno inglés, que tan importante papel desempeñó en la creación de la Junta de capitulación presidida por Casado, y en la que Besteiro iba a ser la primera figura política. En el último periodo era notorio en Madrid el hecho de las estrechas relaciones del cónsul inglés con Besteiro y con Casado. En conversaciones que por entonces tuvo Casado con dirigentes del Partido y con miembros del Partido que ocupaban altos cargos militares, no ocultó el coronel la existencia de tales relaciones. Fueron los servicios del

imperialismo anglo-francés los que impulsaron la preparación y ejecución del complot contra la República.

El 27 de febrero de 1939 el Gobierno inglés comunicó oficialmente al Gobierno Negrín que ese mismo día se presentaría a la Cámara de los Comunes la resolución que reconocía al Gobierno de Franco y que retiraba la representación [200] diplomática inglesa cerca del Gobierno legítimo de España. Al reconocimiento del Gobierno inglés se sumó con el suyo el Gobierno francés. Estos hechos contribuyeron a debilitar la moral de muchos hombres políticos y militares y a facilitar la labor de los capituladores.

El Partido conocía que los manejos de los entreguistas continuaban y se reforzaban, y exigía del Jefe del Gobierno que tomase medidas que los atajasen con energía. Al fin, el día 2 de marzo de 1939, Negrín se decidió a dictar disposiciones para fortalecer al Ejército de la zona Centro-Sur y ponerlo en condiciones de aplicar la política de resistencia. Los conspiradores decidieron entonces pasar a la realización de sus planes contra la República.

La Flota había realizado el 3 de marzo un primer intento de hacerse a la mar que fue cortado por la acción de los comunistas. Al amparo de la actitud rebelde de la Flota, los fascistas de Cartagena, que habían logrado en los últimos tiempos hacerse fuertes en las unidades de la Base Naval, se sumaron a la actitud de la Flota contra el Gobierno y, prácticamente, se hicieron dueños de Cartagena. Inmediatamente dieron a la sublevación un carácter netamente fascista, entablaron comunicación con Franco, le pidieron refuerzos e izaron la bandera monárquica en la base. A continuación conminaron a la Flota a que saliera inmediatamente de Cartagena. Después de muchos conciliábulos de sus mandos, la Flota salió de Cartagena hacia Túnez el día 5 a las doce de la mañana, después de haber apresado a los comunistas de los barcos. Al mismo tiempo, en el Cuartel General del Grupo de Ejércitos de la zona Centro-Sur, empezaron a tomarse una serie de medidas de acuartelamiento y se hicieron preparativos que indicaban una actitud contraria al Gobierno. Todo ello lo dirigía el teniente coronel Garijo, uno de los jefes del Cuartel General, agente de Franco, por el que fue ascendido después de terminada la guerra. Repetidas veces el PCE había denunciado a este militar como sospechoso de servil al enemigo sin obtener que fuera separado del importante, puesto que ocupaba.

Dentro de Cartagena el PCE hizo frente a la sublevación fascista, que fue rápidamente aplastada por fuerzas leales al [201] Gobierno mandadas por comunistas. Pero en la noche del 5 de marzo de 1939 el coronel Casado se sublevó en Madrid contra el Gobierno, constituyendo una Junta encabezada por Besteiro y por él, titulada «Consejo de Defensa». Los sublevados contaban con que la presión de las tropas franquistas que sitiaban Madrid impediría a los comunistas, y en general a los mandos fieles a la República, sacar del frente las fuerzas necesarias para reducir la sublevación, como efectivamente sucedió. No obstante algunas de las unidades de Madrid mandadas por comunistas hicieron frente a los sublevados en defensa del Gobierno legítimo de España. Los hombres del «Consejo de Defensa» enviaron contra las fuerzas que permanecieron fieles a la República a otras fuerzas armadas que ellos habían conseguido arrastrar con calumnias contra los comunistas y el Gobierno y con promesas falsas de lograr una «paz honrosa»; no vacilaron en desguarnecer el frente y desencadenar una odiosa guerra civil a unos kilómetros de las trincheras enemigas.

Para atraer a algunos militares a la sublevación contra el Gobierno, Casado había aireado la «promesa» que, según sus amigos ingleses, había hecho Franco de conservar las graduaciones militares a los mandos profesionales republicanos a condición de una inmediata capitulación.

El pronunciamiento de Casado contra el Gobierno de Unión Nacional, con el apoyo de los provocadores trotskistas y faístas y de ciertos elementos socialistas y republicanos; la ruptura de la legalidad republicana; la formación de la Junta; la brutal persecución contra el PCE y los mejores luchadores del pueblo; la oleada de calumnias anticomunistas con las que Besteiro y Casado intentaban engañar al pueblo; todo ello, como la realidad mostró trágicamente, sólo perseguía el propósito de poner fin a la resistencia republicana como deseaban el fascismo invasor y la reacción imperialista anglofrancesa.

La «paz honrosa», de que hablaba en sus proclamas la Junta, era la paz de los cementerios, la paz de los fusilamientos y las ejecuciones. La Junta de Casado había roto la unidad del pueblo, la unidad del Ejército; había desencadenado una nueva guerra civil y decapitado al Ejército de sus mejores mandos, [202] llevando a la masa de los soldados a la confusión y la desmoralización.

Mientras Casado y Besteiro hablaban de obtener del enemigo fascista una paz sin represalias y sin persecuciones, eran ellos mismos los que ponían a los comunistas fuera de la ley, los que saqueaban las casas del Partido, detenían a sus militantes y enviaban ante Consejos de Guerra, creados por ellos, a los militares que eran culpables del «delito» de ser leales al régimen republicano.

El Partido había hecho cuanto le había sido posible para mantener la resistencia y la unidad, por evitar el estallido del complot cuyas mallas se habían tejido en las cancillerías anglo-francesas. El Partido, después de la creación de la Junta Casado-Besteiro, propuso a Negrín que se dirigiera a la Junta para llegar a un acuerdo y salvaguardar la unidad e impedir la catástrofe. La Junta rechazó la proposición de Negrín. Fuera ya de España el Gobierno de la República, el PCE propuso a la Junta cesar el combate, evitar el ulterior derramamiento de sangre, volver a realizar frente al enemigo una política de unidad. Dos veces hicieron esas proposiciones a la Junta los comunistas de Madrid.

De palabra aceptó Casado las propuestas del Partido pero sólo para ganar tiempo, acumular nuevas fuerzas y continuar la lucha y las persecuciones contra los comunistas y otros demócratas. Por orden de la Junta fueron fusilados los comunistas coronel Barceló y comisario Conesa, y muchos otros comunistas se vieron encerrados en las cárceles donde poco después los hicieron prisioneros los fascistas para fusilarlos seguidamente. Entre esos camaradas entregados por la Junta a los franquistas se hallaban Domingo Girón, Guillermo Ascanio, Etlvino Vega, Daniel Ortega, el doctor Bolívar y decenas de millares de combatientes de la República que vivieron el horror del puerto de Alicante y del campo de concentración de Albaterra.

La «paz honrosa» de Casado tuvo el desenlace lógico que los hombres de la Junta habían preparado artera y consecuentemente: la capitulación sin condiciones. «O nos salvamos todos o ninguno», había dicho al pueblo demagógicamente Casado. Pero Casado abandonó España en barco inglés, [203] después de entregar el pueblo al enemigo. A las once de la mañana del día 21 de marzo de 1939, las fuerzas fascistas, entre las que se encontraban dos divisiones italianas y unidades marroquíes y de la Legión, hicieron su entrada en Madrid. Toda España quedó rápidamente en manos del franquismo. En sus proclamas iniciales había afirmado el coronel Casado:

«El pueblo español no abandonará las armas mientras no tenga la garantía de una paz sin crímenes».

La historia empezó a decir, para continuar diciéndolo durante largos años, lo que significaba la paz «sin crímenes» con que la Junta ocultaba su traición al pueblo, la entrega de España al fascismo.

*

El pueblo español fue vencido. Pese a ello la guerra que durante cerca de tres años sostuvo contra el fascismo y la reacción en defensa de la independencia nacional, de la democracia y de la paz, ha tenido y tiene trascendencia y valor ejemplares e importancia revolucionaria, nacional e internacionalmente.

La derrota del pueblo fue debida a la acción conjunta de un complejo de factores externos e internos. Pero la historia de la guerra demuestra irrefutablemente que la causa principal, determinante, de la derrota de la democracia española fue la intervención armada de Alemania e Italia, intervención que no fue accidental ni esporádica, sino la realización de un plan preparado de largo tiempo con objeto de asegurarse la retaguardia española en la segunda guerra mundial que Hitler preparaba a toda marcha.

Sin esta participación decisiva de Hitler y Mussolini en la guerra de España, la sublevación militar fascista encabezada por Franco hubiera sido aplastada en los primeros días de la lucha. Pero el pueblo español luchaba no sólo contra la sublevación de la reacción española, sino contra los ejércitos mejor pertrechados y preparados de la Europa capitalista cuyas armas se probaban en España, en preparación de la segunda guerra mundial que estalló poco después de haber [204] sido aplastada la resistencia española. Y, a pesar de todo, y éste es el gran mérito del pueblo español y de sus heroicos combatientes, las fuerzas fascistas nacionales y extranjeras fueron frenadas en su avance durante casi tres años y hubieran podido ser derrotadas sin la criminal política del Gobierno francés presidido por un socialista, por León Blum, y sin la perfidia de los gobernantes ingleses que, una vez más, aparecieron como los enemigos del pueblo español, como los enemigos de la libertad y de la independencia de España.

Gracias a los aviones de transporte suministrados a los rebeldes por Hitler y Mussolini, una parte de las fuerzas sublevadas y, sobre todo,

las marroquíes y de la Legión pudieron ser llevadas con gran rapidez a la Península. Ellas permitieron a los rebeldes mantenerse las primeras semanas y dar tiempo a que la ayuda alemana e italiana en hombres y en material hiciera posible transformar el «pronunciamiento» militar fascista en guerra del fascismo internacional contra el pueblo español.

Después del triunfo popular en la batalla por Madrid, decía el embajador de Alemania cerca de Franco, en el primer despacho que envió a su Gobierno, el 24 de noviembre de 1936:

«La situación militar no es muy satisfactoria. De toda evidencia se subestiman las dificultades de la toma de Madrid... Hasta la fecha las operaciones las han realizado principalmente las fuerzas de choque marroquíes y los legionarios extranjeros».

Poco tiempo después, el 10 de diciembre de 1936, fue el nuevo encargado de Negocios de Alemania en la zona de Franco, general von Faupel, el que exponía a su Gobierno la duda de que Franco pudiera ganar la guerra. En su informe decía el general alemán:

«Franco me ha dado una explicación de la situación militar que ha durado hora y media y que se reduce a lo siguiente: tomaré Madrid y entonces toda España, incluso Cataluña, caerá en mis manos casi sin lucha. Esta apreciación es, a mi juicio, sencillamente frívola». [205]

Y Faupel agregaba que era necesario adoptar medidas que pusieran remedio a una situación en la que, decía,

«las perspectivas de éxito de los «rojos» son mayores que las de los nacionalistas y mejoran cada semana».

Para poner tal «remedio», Hitler y Mussolini redoblaron su intervención en España. Todavía a fines de 1938, en los tres últimos meses de ese año, consideraban los alemanes que la situación militar era favorable a la República. El 2 de octubre de 1938, decía el embajador alemán en un despacho oficial:

«Según los medios militares alemanes e italianos –y la opinión de los primeros en materias militares es para mí decisiva– no es de esperar que Franco gane la guerra por las armas en un porvenir más o menos próximo, a menos que Alemania e Italia

tomen, una vez más, la decisión de hacer en España nuevos y grandes sacrificios en material y en hombres».

El 22 de ese mes, al referirse al enorme pedido de material de guerra que había hecho Franco a Hitler para preparar la contraofensiva del Ebro, escribía en un memorándum el subsecretario de Estado alemán:

«¿Queremos tratar de ayudar a Franco hasta su victoria final? Entonces tendrá necesidad de una ayuda militar importante, superior, incluso, a la que ahora nos pide. ¿Se trata de mantener a Franco en igualdad de fuerzas con los rojos? En ese caso también será necesaria nuestra ayuda y el material que nos pide puede ser de utilidad. Si nuestra ayuda a Franco se va a limitar a la Legión Cóndor, no podrá pretender más que a un compromiso de cualquier clase con los rojos».

Evidente es que si ese mismo Ejército franquista, que sólo para mantenerse a la altura del de la República necesitaba una substancial ayuda germano-italiana, pudo [206] luego desarrollar la ofensiva en Cataluña fue por el apoyo decisivo de las fuerzas militares de las potencias fascistas, mientras el gobierno francés impedía con el cierre de la frontera que llegaran a los combatientes republicanos el material y las municiones necesarias. Alemania no sólo renovó todo el material de la Legión Cóndor (especialmente la artillería y la aviación) sino que, además, concedió a Franco todo lo que éste había pedido.

Los documentos de los archivos italianos aún no han sido publicados. Pero del volumen de la «ayuda» militar italiana permiten juzgar las notas de Ciano en su diario, del tenor de las siguientes, que corresponden ya al mes de enero de 1939:

«En España, avanzarnos a todo vapor. Gambara ha ejecutado una brillante maniobra, librándose de la amenaza en sus flancos y atacando los de los rojos». «15 de enero de 1939: Afortunadamente Gambara ha asumido el mando de todas las fuerzas españolas».

Descontada la jactancia que puede haber en esas declaraciones, ellas bastaban para probar la decisiva importancia que tuvo la participación de las fuerzas armadas italianas en la ofensiva franquista en Cataluña. El embajador alemán, telegrafaba a su Gobierno, el 19 de febrero de

1939, declarando que esa ofensiva se había realizado, merced a la «cobertura de la vanguardia italiana».

A esa doble causa externa ha de unirse, entre las más importantes que actuaron en la derrota de la democracia española, la de orden interno que ha quedado ya suficientemente resaltada: la falta de unidad obrera en grado suficiente para haber dado a la unidad popular y nacional la firmeza y la extensión necesaria, la insuficiente solidez de la unidad del Frente Popular para hacer frente y vencer a la poderosa coalición de los enemigos de la causa popular.

*

El Partido Comunista de España hizo todo lo que humana y políticamente era posible hacer durante toda la guerra por, lograr que ésta terminase con la victoria del pueblo. El es el [207] único partido político español que no tiene responsabilidad alguna en la pérdida de la guerra. Así lo han reconocido todos los que han juzgado esos acontecimientos con un mínimo de objetividad y sinceridad. Numerosas obras históricas y, entre ellas, no pocas debidas a plumas nada simpaticizantes con los comunistas, han resaltado la labor del Partido con respeto y hasta con admiración, más o menos explícita. «Sería completamente cierto decir que sin los comunistas, como factor unificador y dirigente, las fuerzas leales hubieran sido derrotadas mucho antes de 1939», escribe el historiador norteamericano Cattel en su obra «El Comunismo y la Guerra Civil Española». Y el inglés Brenan, en su libro «El laberinto español», juzga así la actuación de los comunistas:

«En ellos había un dinamismo que no poseía ningún otro partido de la España republicana. Con su disciplina, con su capacidad de organización, con su empuje... con su comprensión de la técnica contemporánea militar y política, ellos representaban algo nuevo en la Historia de España... Y con los medios relativamente débiles que tuvieron a su disposición, consiguieron éxitos muy grandes. Sacaron de la nada un gran Ejército y un Estado Mayor que ganaron grandes batallas. Su propaganda fue muy hábil. Durante dos años fueron el corazón y el espíritu de la resistencia antifranquista».

En la actividad del Partido Comunista hubo, no podía dejar de haberlos, errores e insuficiencias. Pero no eran de tal género y significación como para influir en el curso de la guerra y su desenlace. Los errores e

insuficiencias del Partido no tuvieron ninguna relación directa con las causas que determinaron la derrota.

Para el Partido Comunista no hubo más que una preocupación a lo largo de toda la guerra: orientar y encauzar las actividades de las masas a la defensa de la República, al logro de la victoria, manteniendo la unidad del Frente Popular, sin la cual era difícil la continuación de la resistencia. El Partido realizó un esfuerzo constante por consolidar y extender la [208] unidad de la clase obrera como cimiento de la unidad popular y nacional.

La política de unidad del Partido estuvo siempre dirigida a hacer que participaran en el Poder todos los partidos y organizaciones antifascistas del país.

Cuando, con ignorancia del carácter verdadero de la guerra y de la situación española, los anarquistas y algunos socialistas querían eliminar del Poder a los republicanos burgueses, el Partido Comunista los defendió, lo mismo que defendió a los campesinos españoles de quienes los atropellaban en nombre del «comunismo libertario». Cuando hubo quien se oponía al ingreso en el Gobierno de una representación de la CNT, fue el Partido el que solicitó ese ingreso y el que trabajó hasta conseguirlo. Cuando, repetidas veces, algunos dirigentes anarquistas se dirigieron a la Dirección del Partido Comunista, con propuestas contrarias a las buenas relaciones con el Partido Socialista, nuestro Partido las rechazó. Ningún otro Partido luchó como el Partido Comunista por que el Gobierno fuese la representación de todo el pueblo español. No fue el Partido, ciertamente, responsable ni de las insuficiencias de la unidad durante la guerra ni de la ruptura de aquella al final de la contienda. El Partido Comunista se mantuvo fiel a los compromisos contraídos, pero no supeditó su actividad a la pasividad comodona de los otros partidos ni hipotecó su independencia política. Fidelidad a sus aliados y a los compromisos contraídos y actividad política independiente: tales fueron los principios que presidieron el trabajo político del Partido, durante toda la guerra.

Por esa preocupación consecuente de no romper el Frente Popular, de no debilitar la unidad, el Partido Comunista no denunció, en ocasiones, suficientemente ante las masas populares las posiciones capituladoras y derrotistas de muchas gentes.

Fueron los comunistas los que en defensa del pueblo dieron las pruebas más grandes de abnegación y sacrificio. La inmensa mayoría de sus miembros combatió en los frentes. Para reforzar éstos, el Partido sacaba de todas las direcciones locales y provinciales a los camaradas más capaces, a los mejores organizadores y dejaba un poco en cuadro la organización del Partido en la retaguardia mientras otras fuerzas políticas hacían lo contrario: mantenían a sus hombres en la retaguardia en puestos de responsabilidad seguros, desde los que no pocos de ellos laboraron contra la resistencia. Esa subestimación del trabajo en la retaguardia fue un error del Partido Comunista, error heroico con el que, sin duda, se reforzó la lucha, pero que debilitaba al Partido excesivamente en la retaguardia donde se condensaban y tomaban forma las maniobras de capitulación, disimuladas con el antiproselitismo y anticomunismo, bien vistos y mejor apreciados en Embajadas y Consulados de países extranjeros, cuyos Gobiernos iban apretando el cerco de la No-Intervención para ahogar a la República.

El Partido Comunista exigió (y contribuyó poderosamente con su acción a lograrlo) que fueran establecidos en todo el país, bajo la autoridad del Gobierno legítimo, el orden y la legalidad republicana y luchó contra los ensayos de aplicación de teorías con los que algunos iban contribuyendo a agotar las fuerzas del pueblo y a dividirlo. Los comunistas trabajaron abnegadamente en la reconstrucción de la sociedad española sobre bases democráticas.

Fueron los comunistas los que levantaron y defendieron en primer lugar la bandera de la independencia nacional, de la unión de todos los españoles para salvarla, los primeros en luchar para salvaguardar todo lo que constituía el tesoro artístico y cultural del pueblo y de la patria. El Partido Comunista dio en la guerra el mentís más rotundo a las calumnias fascistas que siempre han pretendido negarle su carácter nacional, su auténtico patriotismo.

A pesar del tiempo transcurrido, cuando la guerra es ya un hecho histórico, el papel desempeñado por el Partido Comunista en la lucha contra la sublevación fascista y la invasión del fascismo extranjero, continúa siendo estimado y valorizado por el pueblo español en toda su profundidad y trascendencia.

Capítulo IV.

La dictadura franquista

El terror

Tras la derrota del pueblo en marzo de 1939, se instauró en España una dictadura fascista encabezada por el general Franco.

¿Cuál era el carácter de ese régimen? ¿Qué intereses servía?

Era el poder del capital financiero y de la aristocracia terrateniente, la dictadura terrorista y sangrienta de los grupos más reaccionarios de la gran burguesía y de los latifundistas, que para ejercer su dominación se apoyaban en el Ejército, la Iglesia y en la Falange, fuerza política esta última predominante en el llamado «Movimiento Nacional», donde se fundían, en abigarrada amalgama, todos los sectores de la reacción española. Utilizando el aparato estatal como un instrumento a su servicio, la oligarquía se sirvió de los fondos del tesoro público para sus negocios y desarrolló en grandes proporciones el capitalismo monopolista de Estado.

Las fuerzas oligárquicas, que para adueñarse del Poder habían recurrido a una sangrienta guerra, impusieron al país una feroz política de represión y persecución.

La dictadura franquista no dejó piedra sobre piedra de la obra de la República; abolió todas las conquistas políticas [212] y económicas alcanzadas por los trabajadores durante largos años de lucha; no toleró el más insignificante vestigio de instituciones democráticas; suprimió la Constitución de 1931 y el Parlamento, anuló las libertades autonómicas de Cataluña y Euzkadi y disolvió todos los partidos políticos y los sindicatos obreros de clase.

Una ola de sangriento terror —encarcelamientos, torturas, asesinatos, aplicación de la ley de «fugas»— se abatió sobre los españoles, produciendo centenares de millares de víctimas.

Las fuerzas represivas del Estado y las escuadras armadas de Falange llevaron el luto y el dolor a millares de familias españolas. No había justicia ni ley que amparase a los demócratas: en las cárceles se sucedían a diario las «sacas», que llevaban al paredón de las ejecuciones a centenares de personas.

Decenas de miles de combatientes del Ejército republicano fueron recluidos en campos de concentración y plazas de toros, hacinados

como el ganado, a la intemperie, sometidos a un trato inhumano, condenados al hambre y a la muerte.

El franquismo promulgó una serie de leyes punitivas, negación de todas las normas del derecho, que constituyen un auténtico Código de represión fascista.

Recordando su visita a España a los tres meses de finalizada la guerra, Ciano, Ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, escribió lo siguiente:

«Los fusilamientos son numerosísimos aún: sólo en Madrid hay de 200 a 250 al día, en Barcelona, 150, y 80 en Sevilla, ciudad que nunca estuvo en manos de los rojos...».

Durante su permanencia en España, Ciano comprobó que había 10.000 hombres condenados a muerte, esperando el momento de su ejecución.

La dictadura no sólo descargó sobre la clase obrera terribles golpes para exterminar físicamente a sus mejores hijos, la sometió, además, a la explotación más brutal y despiadada.

Los salarios fueron rebajados al nivel anterior a julio de [213] 1936, mientras la escasez de víveres, la especulación y el mercado negro habían hecho subir en tres y cuatro veces los precios de las subsistencias.

La moneda de la República fue suprimida, lo que colocó en una situación angustiosa a la población de la antigua zona republicana.

La exportación en gran escala de víveres y materias primas a los países del Eje —como pago de la deuda de guerra contraída por Franco— agravaba todavía más la miseria de los españoles.

En millones de hogares humildes reinaba el hambre: en 1930, el Servicio de Auxilio Social distribuía mensualmente 25 millones de raciones de sopa a personas carentes de todo ingreso y que acreditasen «buena conducta». España «era una inmensa cola a la puerta del cuartel, a la hora del rancho», decían los mismos falangistas.

En el campo, la represión alcanzó pavorosas proporciones. Las aldeas fueron testigos de crímenes y ferocidades sin nombre, cometidos contra campesinos y contra los combatientes del Ejército republicano obligados a retornar a sus pueblos de origen para ser «depurados».

Millares de hombres huyeron a las ciudades o se « echaron al monte » para salvar la vida.

La dictadura fascista liquidó la Reforma Agraria de la República. La contrarreforma franquista fue una de las páginas más sangrientas del furor vindicativo de las castas oligárquicas latifundistas. Los campesinos que habían recibido parcelas de tierra tuvieron que devolverlas a los terratenientes, pagando las rentas devengadas. Arrendatarios y aparceros fueron expulsados en masa o se les impuso el pago de rentas atrasadas hasta de tres y cinco años. El desahucio de los campesinos fue acompañado muchas veces de detenciones, despojos y fusilamientos.

La camarilla franquista se ensañó con los hombres de ciencia, universitarios, escritores y artistas progresivos. Muchos tuvieron que emigrar o perdieron sus medios de existencia, sus cargos profesionales, sus cátedras, siendo condenados prácticamente al ostracismo. Como estigma infamante del régimen franquista quedará para siempre el asesinato de [214] destacados intelectuales españoles, como Federico García Lorca. Leopoldo Alas, Juan Peset, Carrasco Formiguera, Rahola, y la responsabilidad de la muerte en el exilio de Antonio Machado y, más tarde, en la cárcel, la de Miguel Hernández.

El régimen franquista privó a las instituciones científicas de valiosas colaboraciones y asestó un golpe demoledor a los cuerpos docentes. La Iglesia pasó a dirigir la educación del país y se restablecieron todos los privilegios que disfrutaban las Congregaciones religiosas en materia de enseñanza antes de 1931.

Se estableció una doble censura eclesiástica y falangista que asfixiaba a la creación literaria y artística. Obras destacadas del acervo de la cultura española y universal fueron proscritas.

El repliegue

Cuando la traición de la Junta de Casado rompió resistencia republicana y las tropas franquistas ocuparon todo el territorio nacional, el Partido Comunista se vio acosado y perseguido por todas partes. Los franquistas querían borrar de la faz de la tierra a los comunistas. Entre los primeros camaradas que cayeron figuraban Cristóbal Valenzuela,

Cayetano Bolívar, Manuel Recatero, Matilde Landa, Aquilino Fernández y Manuel Navarro Ballesteros.

El Partido entraba en el período más duro y difícil de su vida. Centenares de sus militantes habían sido entregados por la Junta de Casado a la policía franquista. Millares de comunistas fueron detenidos por los franquistas y encerrados en cárceles y campos de concentración, de donde salieron, en su mayor parte, para ser ejecutados o enviados a cumplir, en los penales, largas condenas.

Una parte importante de los cuadros del Partido se encontraba en las unidades del Ejército de Cataluña, que había pasado la frontera al hacerse imposible la resistencia y que no había podido reintegrarse a la zona Centro-Sur de la República por impedirselo el Gobierno francés. De esta manera se encontraron en un exilio forzoso. [215]

La derrota de la República y la instauración del fascismo en España imponía la reorganización de todo el trabajo del Partido a tono con la situación creada. Los comunistas pasaban de la legalidad y la participación en el Poder a la más completa ilegalidad. De la guerra abierta contra la reacción española y la intervención extranjera, a la lucha clandestina contra la dictadura fascista. Había terminado un período de impetuoso auge revolucionario. Comenzaba un período de reacción fascista y de repliegue del movimiento obrero y democrático.

Cada trabajador, cada demócrata se preguntaba si en esa nueva situación era posible la lucha. El Partido respondió sin titubear afirmativamente: por duras que fueran las condiciones impuestas por el fascismo, la lucha era posible.

El Partido trató desde el primer momento de reconstituir la unidad de acción de la clase obrera y el Frente Popular, tanto entre las direcciones de las organizaciones y partidos democráticos como entre los trabajadores.

Frente a la acción del Partido por reagrupar a las fuerzas democráticas para la lucha contra la dictadura fascista, la mayoría de los dirigentes socialistas, cenetistas, republicanos y nacionalistas vascos y catalanes pensaban que bajo la dictadura fascista no era posible luchar; en consecuencia, preconizaban la pasividad y la espera, diciendo: «Tenemos fascismo para cien años». El daño causado al pueblo español por esas actitudes de pasividad ha sido muy grande.

El Partido se replegó en condiciones extraordinariamente difíciles y se preocupó de un modo especial de salvar el máximo de camaradas. Su primera tarea consistía en reorganizar sus filas en la clandestinidad y restablecer el contacto con las masas populares para estimular la resistencia de éstas. A ello dedicó el Partido todas sus energías y sus mejores hombres.

A pesar de las enormes dificultades con que debía enfrentarse, el Partido no dejó de actuar. El pueblo sintió siempre el aliento, el estímulo y la orientación de los comunistas para afrontar los angustiosos momentos que siguieron a la implantación del fascismo en España. Por eso se decía entre los trabajadores: «Al Partido no se le ve, pero se le siente».

La actividad de muchos comunistas estaba erizada de [216] peligros, porque eran conocidos por sus ideas en los lugares de residencia o de trabajo. Una gran parte de los efectivos del Partido se componía de comunistas ingresados durante la guerra y, sobre todo, en los frentes. Eran admirables por su combatividad y disciplina; y aunque en las condiciones de la guerra no habían podido adquirir una sólida formación teórica, después de la derrota de la República mostraron su fidelidad al Partido, su firmeza política e iniciativa revolucionaria. Una gran parte continuó la lucha en contacto con la dirección del Partido o por propia iniciativa, sin relación con los núcleos organizados.

La detención de centenares de miles de republicanos reunió en cárceles y campos de concentración a muchos comunistas, que inmediatamente se organizaron y comenzaron a realizar una labor de orientación y solidaridad entre los reclusos. Utilizando los procedimientos más originales y audaces, los comunistas presos establecieron contacto con los que se hallaban en la calle y les ayudaron a desarrollar e impulsar el trabajo del Partido.

Desde una cárcel de la capital, Domingo Girón, Eugenio Mesón, Daniel Ortega, Guillermo Ascanio y otros camaradas continuaron dirigiendo la actividad de los comunistas de Madrid, en relación con los camaradas José Cazorla y Enrique Sánchez, que hasta entonces habían escapado a sus perseguidores.

Todos estos camaradas fueron fusilados más tarde. Sus nombres se inscribieron en la lista de los héroes comunistas caídos en la lucha contra la dictadura franquista.

El centro, encabezado por Girón que mantenía contacto con otras cárceles madrileñas, se preocupaba principalmente de agrupar a los militantes dispersos, orientarlos políticamente, organizar la ayuda moral y material a los presos y perseguidos y estimular la oposición al régimen.

Existía también organización del Partido en Euzkadi, dirigida por el camarada Realinos, fusilado posteriormente, que desplegaba una intensa actividad; actuaban grupos de Partido en Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Navarra, Valencia y en numerosas ciudades y pueblos. En Cataluña, grupos del PSU mantenían también la organización. [217]

Retornaron al país centenares de dirigentes y militantes que entregaron todas sus energías a la obra difícil y anónima de fortalecer la organización clandestina del Partido y estimular la lucha contra la dictadura franquista. En los anales de la historia revolucionaria de nuestro país figurarán con letras de oro los nombres de Jesús Larrañaga, Isidoro Diéguez, Jaime Girabau, Manuel Asarta, Sádabal Jesús Carreras, Casto García Roza, Eladio Rodríguez, Francisco Barreiro, José Ros, Eduardo Sánchez Biedma (Torres), Agustín Zoroa, Lucas Nuño, José Gómez Gayoso, Antonio Seoane, Joaquín Puig Pidemunt, Soriano y tantos otros que, habiendo regresado a España desde la emigración, cayeron heroicamente en la lucha.

En sus intentos de aniquilar el Partido, la dictadura combinó los métodos del terror y de la represión con el empleo de la provocación policíaca; en esta labor la Gestapo alemana prestó una ayuda directa a la policía española.

Aprovechando la caída del Comité de la organización comunista de Madrid, en 1940, la policía se esforzó por introducir sus agentes en las filas del Partido, sirviéndose, entre otros, del provocador Quiñones, el cual entregó toda la organización del Partido que él conocía. La actividad de Quiñones causó gravísimo daño al Partido, que se vio obligado a realizar un gran esfuerzo para liquidar hasta el fin las consecuencias de esa provocación.

Una atención particular dedicó el Partido a la propaganda, realizando una labor sistemática de edición clandestina de documentos y de obras fundamentales de los clásicos del marxismo-leninismo. Esta propaganda era editada y difundida en condiciones difíciles y complicadas.

Fue publicado el órgano central «Mundo Obrero» en ediciones clandestinas a imprenta y a multicopista.

La tragedia del pueblo español tenía una prolongación dolorosa fuera de las fronteras del país. Cerca de medio millón de españoles había buscado refugio en Francia y África del Norte al cesar la resistencia republicana, mostrando de nuevo al mundo su repulsa al franquismo. Esos antifranquistas abandonaron la patria, por la que tan abnegadamente habían luchado, y marcharon a vivir en la emigración, llevando como [218] único bagaje su amor a España y a la libertad y su esperanza en el futuro libre y democrático de la patria.

Apoyado por esta emigración, que mantenía su confianza y su fe en la victoria de la democracia, el Partido organizó y estimuló grandes campañas de ayuda al pueblo español y de solidaridad con las víctimas del franquismo. Igualmente desarrolló una gran labor de propaganda política entre la emigración. En Méjico, Cuba, Uruguay, Chile y Argentina comenzaron a publicarse revistas y periódicos del Partido.

Pese a la dispersión de sus militantes, diseminados por todos los continentes, el Partido conservó su unidad política, orgánica e ideológica.

La política de unión nacional

A los 5 meses de ser derrotada la República española, comenzó la segunda guerra mundial.

La resistencia del pueblo español, según afirmaba en el Manifiesto del Primero de Mayo de 1939 la Internacional Comunista, había frenado por espacio de casi tres años la agresión fascista.

La guerra empezó siendo una guerra imperialista tanto por parte de Francia e Inglaterra, como de Alemania. Pero posteriormente fue modificándose su carácter. Este cambio estuvo originado, fundamentalmente, por la resistencia de los pueblos a la agresión hitleriana, por la entrada en la contienda de la Unión Soviética y la formación de la poderosa coalición antihitleriana integrada por la URSS, Inglaterra, los EE.UU. y otros países.

Desde el primer momento de la agresión hitleriana a la URSS, el pueblo español se sintió solidario con el país del socialismo. El franquismo quiso ahogar este sentimiento de solidaridad incrementando sus persecuciones contra los demócratas y, en primer término, contra

los comunistas. Muchos, camaradas fueron fusilados en aquellos días difíciles.

Unos meses más tarde el Partido sufrió una dolorosa pérdida: la muerte de su Secretario General, camarada José Díaz. [219] Por voluntad unánime del Partido fue designada para sustituirle la camarada Dolores Ibárruri.

Al socaire de una seudoneutralidad, primero, y de una llamada «no beligerancia activa», después, el Gobierno franquista prestaba la máxima ayuda a la máquina bélica hitleriana. La política de la dictadura amenazaba meter de lleno a España en la guerra al lado del Eje fascista; ponía en peligro los más sagrados intereses de la patria.

En los manifiestos del Comité Central de agosto de 1941 y de septiembre de 1942, el PCE llamaba a crear la Unión Nacional de todos los españoles, aunando los esfuerzos en torno a la cuestión decisiva del momento: impedir la entrada de España en la guerra y oponerse a la ayuda que la dictadura otorgaba a las potencias fascistas.

El Partido llamaba a los trabajadores y al pueblo a sabotear la producción destinada a Alemania, a protestar contra los envíos de víveres y productos a Hitler; realizó una campaña contra el reclutamiento de la División Azul, organizada por Franco e integrada en el Ejército alemán para la guerra contra la URSS. El Partido lanzó la consigna: «Ni un hombre, ni un arma, ni un grano de trigo para Hitler». Fue el único partido español que, en la tierra misma de la patria, orientó y movilizó al pueblo en la lucha contra la entrada de España en la guerra.

En el transcurso de la guerra contra el hitlerismo, el movimiento guerrillero desempeñó un papel muy importante como impulsor de la resistencia popular a la dictadura franquista. El movimiento guerrillero se había formado espontáneamente en diversas regiones de España, al ser éstas ocupadas por las tropas fascistas; lo integraron grupos de demócratas obligados a huir para salvarse de la muerte, y que no pudieron pasar a la zona republicana. Al producirse la derrota de la República, el movimiento guerrillero se vio nutrido con nuevos grupos de fugitivos.

El Partido apoyó con todas sus fuerzas al movimiento guerrillero, que mantenía encendido, en el suelo de España, el fuego sagrado de la

libertad y conservaba viva la esperanza de las masas en un futuro democrático. El trabajo de los comunistas daba un contenido político a la lucha de los [220] guerrilleros y contribuía a impedir que el aislamiento, la constante persecución, la vida azarosa de éstos en bosques y montañas, acorralados y perseguidos constantemente, introdujese entre ellos la desmoralización.

Como jefes, organizadores y combatientes del movimiento guerrillero, cientos de comunistas lucharon y cayeron cubiertos de imperecedera gloria. En esa desigual lucha, ofrendaron su vida los camaradas Ramón Vía, Manuel Ponte, Cristino García, Peregrín Pérez Galarza, José Isasa, José Antonio Yerandi, José Vitini, Manuel Castro Rodríguez, Antonio Medina, Felipe Ortuño, Segundo Vilaboy, José Mallo, Joaquín Almazán, Valentín Fernández, Ángel Carrero, Pedro Valverde, Numen Mestres y otros muchos, cuyo ejemplo heroico vivirá siempre en el corazón del pueblo.

Los guerrilleros eran la expresión más combativa de los sentimientos del pueblo. Amplias masas del país conservaban íntegro su odio al fascismo y eran contrarias a la entrada de España en la guerra. Pero el terror y las consecuencias de la derrota hacían muy difícil la exteriorización de sus sentimientos y de su protesta. La presencia de grupos guerrilleros en muchos lugares del país ejercía sobre el Gobierno una constante presión y, en no pequeña medida, la actividad guerrillera contribuyó a frenar los deseos de participar en la guerra de Franco y su camarilla.

Serrano Suñer reconoció, en el curso de una entrevista con Hitler a finales de 1940, las dificultades que para la entrada de España en la guerra representaba la existencia de grupos guerrilleros en el Norte del país y de «muchos elementos comunistas entre la población».

El movimiento guerrillero fue uno de los aspectos de la contribución de las fuerzas revolucionarias españolas a la guerra mundial contra el fascismo.

Si España no participó totalmente en la guerra al lado de Hitler no fue gracias a Franco, sino a pesar suyo. Y en el complejo de factores (económicos, estratégicos, políticos, externos e internos) que imposibilitaron a Franco llevar a España a una beligerancia abierta y total, la causa determinante fue la oposición del pueblo español y de distintas capas burguesas, manifestada de diferentes formas. [221]

Al propugnar la política de Unión Nacional, el Partido Comunista tenía en cuenta que la neutralidad de España no interesaba sólo a las izquierdas; interesaba a la inmensa mayoría del país, incluidos sectores conservadores y católicos, a militares y a importantes grupos capitalistas españoles ligados al capital anglo-americano.

La oposición de estos sectores de derecha a la entrada de España en la guerra agravó las contradicciones en el seno del equipo gobernante franquista y frenó la política belicista de Franco y de Falange.

En torno al objetivo concreto de preservar la neutralidad se operó prácticamente –sin establecerse ningún acuerdo– cierta convergencia de los esfuerzos de diversos sectores sociales y políticos del país, desde los de signo obrero hasta influyentes círculos burgueses conservadores.

La política de Unión Nacional tendía no sólo a impedir que Franco arrastrase al pueblo español a la trágica aventura de la guerra, sino a desbrozar el camino hacia el derrocamiento de la dictadura del general Franco y el restablecimiento de una situación democrática en España.

La política de Unión Nacional preconizada por el PCE se basaba en el hecho de que la gama de las fuerzas opuestas a la política franquista de apoyo al hitlerismo, era más amplia que la de las fuerzas que habían luchado por la República. Existía la posibilidad de un reagrupamiento de las fuerzas políticas que, poniendo fin a la división abierta por la guerra civil, incorporase a la acción contra la dictadura a sectores que antes la habían apoyado, pero que en 1942 se pronunciaban en favor de la coalición antihitleriana y de la neutralidad española.

El Partido era consciente de que esa evolución política sólo era una posibilidad; por convertirla en realidad luchó con todas sus fuerzas.

En el manifiesto de septiembre de 1942, el Comité Central del Partido Comunista decía:

«Los momentos trascendentes que vivimos obligan a deponer las diferencias, los odios y las pasiones que nos separaron hasta hoy, para colocar por encima de todo, el [222] interés supremo de España y salvar a nuestro pueblo de la guerra y de la muerte a las que Franco y Falange quieren lanzarle».

En su deseo de facilitar la constitución de la Unión Nacional, el Comité Central del PCE propuso, en el manifiesto citado, un programa

susceptible de ser aceptado por las fuerzas de izquierda y derecha, dispuestas a luchar contra el franquismo.

Un punto esencial de ese programa era crear un gobierno de Unidad Nacional que, una vez derrocada la dictadura y restablecidas las libertades políticas, llevara a cabo unas elecciones para que el pueblo, libre y democráticamente, decidiese el futuro régimen del país.

Una gran esperanza

A comienzos de 1943, la gran victoria soviética de Stalingrado fue el comienzo de un viraje radical en la guerra a favor de la URSS y fue para toda la humanidad progresiva la aurora de la victoria sobre el hitlerismo.

A partir de entonces se sucedieron las derrotas del Eje fascista. La perspectiva de una victoria del fascismo, con la que hasta entonces había contado el general Franco, se desvaneció.

El pueblo español confiaba en que la derrota mundial del fascismo significaría el fin de la dictadura. Esta gran esperanza determinó en España el despertar del movimiento antifranquista. En tales circunstancias, el deber de los partidos democráticos era alentar el renacimiento del espíritu de lucha, dar confianza al pueblo en sus fuerzas, combatir las tendencias a la pasividad y a la espera, surgidas bajo el influjo del terror fascista.

Para reforzar el trabajo del Partido volvieron al país, después de la ejecución del grupo de camaradas encabezado por Jesús Larrañaga, varios dirigentes del Partido, entre ellos Santiago Álvarez, miembro del Comité Central y Sebastián Zapirain, más tarde detenidos y condenados a largos años de cárcel. [223]

Los comunistas ayudaban a los obreros a formular y plantear sus reivindicaciones, a unirse y a actuar de diversas formas para defenderlas. Se consiguió así que bajo el clima favorable de las victorias Soviéticas en los frentes, y a despecho del terror, se iniciase en España el resurgir del movimiento obrero.

El Partido incrementó su labor también en las zonas agrarias de Galicia, Asturias, Andalucía y Levante, en las que había un fuerte movimiento guerrillero.

El Partido consiguió ampliar su propaganda clandestina. «Mundo Obrero» se editaba en Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias, a ciclostilo o a imprenta. Se publicaron también «Verdad» en Valencia, «Unidad» en Málaga, «El Obrero» en Canarias, «Nuestra Palabra» en Baleares, y otros periódicos.

Paralelamente, el Partido realizó tenaces esfuerzos en pro de la unidad antifranquista en el país, mediante la creación de Juntas de Unión Nacional para la lucha por el derrocamiento de la dictadura de Franco y Falange.

Finalmente, trabajó por rehacer la unidad de las fuerzas republicanas exiliadas; se dirigió en ese sentido al Dr. Negrín proponiéndole que reanudase la actividad del Gobierno republicano, a lo que éste se negó reiteradas veces.

En resumen, el Partido se esforzó por lograr que la situación favorable creada por el hundimiento de Hitler y la derrota del fascismo en el mundo fuera aprovechada por la democracia española para realizar una acción decidida contra la dictadura franquista, tanto en el interior como en el exterior. Y si esto no fue conseguido, en la medida necesaria, las responsabilidades no recaen sobre el Partido.

El principal factor que permitió a Franco mantenerse en el Poder fue la conducta de los Gobiernos de Inglaterra y EE.UU. En el curso de la guerra mundial esos Gobiernos realizaron una política de ayuda económica y política al franquismo; y cuando se acercó la «última hora» del hitlerismo, cuando en Francia, en Italia y en otros países surgieron poderosos movimientos populares y recibieron un fuerte impulso los Partidos Comunistas, que luchaban por una democratización radical de sus países respectivos, los imperialistas de Inglaterra y EE.UU. acentuaron la orientación a impedir [224] que en España triunfase la democracia y a conservar la dictadura de Franco como un reducto de la reacción en el occidente de Europa. Por su parte, Franco empezó a traspasar a los imperialistas norteamericanos, en el curso mismo de la guerra, la hipoteca hitleriana sobre España.

Esta actitud de Inglaterra y los EE.UU. y el temor de que en España se produjera un cambio democrático, determinaron que la gran burguesía española y otros sectores burgueses mantuviesen su apoyo a la dictadura franquista en un período gravísimo para ella.

Factor muy importante de la pervivencia del franquismo fue también la política de los principales dirigentes del Partido Socialista, de la CNT y de los partidos republicanos y nacionalistas vascos y catalanes en el exilio.

Cuando en España algunos socialistas y republicanos empezaban a colaborar con los comunistas en las Juntas de Unión Nacional, cuando incluso entre ciertos sectores burgueses comenzaba a abrirse paso la política de Unión Nacional, cuando un influyente sector católico –encabezado por un antiguo dirigente de la CEDA– daba su aprobación a los postulados de la política de Unión Nacional y aceptaba en lo esencial la solución política preconizada por el Partido en su manifiesto de septiembre de 1942, los citados dirigentes en el exilio proclamaron que la clave del problema español estaba no en España, sino en Londres y en Washington. En vez de orientarse a unir y movilizar a todas las fuerzas antifranquistas para la lucha común, se dedicaron a disputarse los favores del Foreign Office o del Departamento de Estado. Tal actitud equivalía a dejar en manos de los imperialistas la cuestión decisiva: liquidar o no a la dictadura del general Franco. Con semejante conducta, los mencionados dirigentes otorgaban a los Gobiernos de Londres y Washington algo así como una segunda hipoteca sobre España.

Mientras el PCE decía al pueblo que sólo con la acción y la lucha podría liberarse del yugo fascista y demostraba con su ejemplo que la lucha era posible, los dirigentes republicanos, socialistas y anarquistas repetían: «No hace falta hacer nada... no hay por qué arriesgarse ni gastar fuerzas... Franco caerá solo». El más activo propagandista de la [225] pasividad fue el dirigente socialista Prieto, que ya el 12 de octubre de 1943 había dicho en Méjico:

«Franco y su Falange se hundan por sí mismos... La caída ocurrirá sin nuestro esfuerzo».

Si el terror fascista era el gran freno que Franco manejaba para detener la lucha del pueblo, esa propaganda paralizadora actuaba, desde otra dirección, en el mismo sentido.

Los líderes del PSOE, de los partidos republicanos y de la CNT, que fomentaban esas corrientes de pasividad y rechazaban la unidad de las fuerzas antifranquistas, facilitaron objetivamente la política de los

imperialistas de Inglaterra y EE.UU. tendente a la conservación del fascismo en España.

Esa labor desmoralizadora se completó con una maniobra enfilada a paralizar el movimiento de Unión Nacional que estaba en marcha en diversas regiones del país. El ala derecha del Partido Socialista, dirigida por Prieto, con el apoyo de un sector republicano y de una parte de la CNT, constituyó en España con tal móvil, a finales de 1944, una llamada «Alianza de Fuerzas Democráticas».

Los comunistas, considerando que la Alianza podía significar cierto despertar de la actividad antifranquista de otros grupos, se dispusieron a hacer los máximos esfuerzos por agrupar en un solo frente a todas las fuerzas opuestas a la dictadura, por grandes que fuesen sus divergencias en otros terrenos. Con ese fin, a principios de 1946, el PCE ingresó en la Alianza, dando así una prueba más de su voluntad unitaria. Mas pese a sus esfuerzos resultó imposible convertir la Alianza en un órgano de unidad y de acción contra el franquismo. Quienes integraban la Alianza –con excepción de los comunistas– subordinaban más y más su conducta a los dictados de Londres y Washington.

De hecho, la Alianza estuvo desde su nacimiento mediatizada por las Embajadas anglosajonas en Madrid; en ella se infiltraron profundamente los servicios policíacos franquistas, lo que acabó de descomponerla y de inutilizarla como órgano político antifranquista. [226]

Los hechos brevemente señalados explican cómo, a pesar de los esfuerzos y sacrificios de los comunistas, la dictadura fascista logró en España mantenerse en el Poder en los momentos en que en Europa se hundían los regímenes de Hitler, Mussolini y sus cómplices.

En el curso de la aplicación de la política de Unión Nacional, el Partido Comunista tuvo que combatir, en su propio seno, ciertas tendencias oportunistas cuyo principal exponente fue Jesús Monzón, que durante un período estuvo al frente de la organización del Partido en Francia y que más tarde se trasladó a España.

En el plano nacional, el Partido Comunista se esforzaba por establecer un compromiso con sectores de la burguesía en la lucha contra el fascismo. En la realización de una política de ese género los peligros de caer en el oportunismo aumentan, por una razón obvia: los partidos políticos de la burguesía o los representantes de ésta cuando discuten

o conciertan un compromiso con el partido de la clase obrera intentan conseguir que éste hipoteque su independencia política, borre su fisonomía propia como partido marxista-leninista. Tales esfuerzos por parte de la burguesía –incluidos los sectores que aceptan colaborar con los comunistas– son lógicos: reflejan, en última instancia, su voluntad de privar al proletariado de su partido político propio.

Pero además, en los años 1943-1945, se daban ciertos rasgos en la situación internacional que podían facilitar la penetración de concepciones oportunistas. Existía una amplia coalición contra el fascismo en la que los comunistas estaban aliados con importantes fuerzas burguesas. Los ideólogos burgueses y reformistas realizaban una gran campaña, desvirtuando el verdadero carácter de esa alianza para convencer a los marxistas poco formados de que las diferencias entre la clase obrera y la burguesía, entre el socialismo y el capitalismo, ya no desempeñaban ningún papel, de que habían sido «superadas por la historia», &c.

Actuaban, pues, en diversos planos, fuertes presiones de la ideología burguesa. Estas presiones influyeron en la aparición de actitudes oportunistas entre algunos militantes del Partido, sobre todo entre los que actuaban en Francia en el [227] período de la segunda guerra mundial. La principal manifestación de oportunismo fue que, bajo la influencia de Jesús Monzón, en el movimiento de Unión Nacional existente entre la emigración española de Francia, la cara del Partido Comunista, su personalidad, su actividad independiente, quedasen casi anuladas. Dicho movimiento era una especie de «seudopartido» o «superpartido». El Partido Comunista, siendo la fuerza principal, se diluía en un conglomerado amorfo de grupitos y personajes que participaban en la Unión Nacional.

Hubo también otras manifestaciones de oportunismo entre los militantes del Partido a los que más arriba nos hemos referido: subestimaban las acciones reivindicativas de la clase obrera y de otras fuerzas populares, lo que equivalía a dejar libre curso a las tendencias de pasividad despreciando, en general, el papel de las masas como fuerza decisiva en la lucha contra el fascismo.

Se manifestaba igualmente la tendencia a disminuir el papel de las fuerzas obreras y democráticas en el movimiento de unidad, y a pre-

ocuparse, principalmente, de buscar colaboraciones con fuerzas de derecha, monárquicos, militares, &c.

El oportunismo en el terreno político se combinaba con el oportunismo en las cuestiones de organización. Este consistía en postergar a los militantes más firmes y de mayor conciencia de clase, en particular los de origen obrero, y en elevar en cambio a cargos responsables a camaradas de escasa formación y débiles vínculos con las masas trabajadoras; a los menos capaces de resistir a la influencia de las ideas burguesas y oportunistas.

En la lucha contra las tendencias oportunistas desempeñó un gran papel la Carta Abierta del Comité Central de enero de 1945. Todo el Partido, pese a las dificultades de la clandestinidad, discutió este documento y lo aprobó unánimemente. Incluso las organizaciones en las que se habían expresado corrientes oportunistas aprobaron la política del Partido sin reservas y corrigieron los errores en que habían incurrido.

Progresos unitarios

La segunda guerra mundial terminó con la capitulación de Alemania y el Japón en 1945.

La Unión Soviética llevó el peso fundamental de la sangrienta contienda. Ningún pueblo conoció padecimientos comparables a los del pueblo soviético ni sufrió tan terribles pérdidas y destrucciones. De la tremenda prueba de la guerra el régimen socialista salió más fuerte que antes. En la guerra como en la paz quedó demostrada la superioridad del régimen socialista sobre el capitalista.

La titánica lucha del pueblo y del ejército soviéticos salvó a la humanidad de caer bajo el yugo del fascismo y fue el factor decisivo, la clave de la victoria de las Naciones Unidas. El prestigio internacional de la URSS creció en gigantescas proporciones. Las victorias de la URSS contribuyeron a vigorizar las fuerzas democráticas y socialistas de todo el mundo y a debilitar el sistema capitalista mundial.

En 1943, había sido disuelta la Internacional Comunista, después de haber cumplido su gran misión histórica: contribuir a crear y forjar partidos verdaderamente marxistas-leninistas en casi todos los países de la tierra. El desarrollo y la madurez alcanzada por estos partidos

hacían innecesario el mantenimiento de un centro dirigente internacional.

La autoridad y la influencia de los Partidos Comunistas, que fueron un ejemplo de firmeza y de patriotismo al frente de la lucha de sus pueblos contra los invasores fascistas, crecieron considerablemente durante la segunda guerra mundial.

En la posguerra una serie de Estados de Europa (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría Polonia, Rumanía, Yugoslavia) y más tarde países de Asia como la inmensa China, Corea y Viet-Nam del Norte se desgajaron del sistema capitalista y, dirigidos por la clase obrera, aliada a los campesinos y otras capas populares, establecieron regímenes de democracia popular. El triunfo de la revolución popular en China fue el acontecimiento histórico más importante después de la Revolución Socialista de Octubre, en la marcha de los pueblos hacia el socialismo. Como consecuencia [229] de estos cambios trascendentales se constituyó el campo mundial del socialismo, que abarca a cerca de 1.000 millones de seres y ocupa la tercera parte del universo, y cuya influencia penetra en toda la vida contemporánea.

La correlación de fuerzas, en el plano internacional, entre el socialismo y el capitalismo cambió radicalmente en favor del primero.

Los resultados de la segunda guerra mundial aceleraron el hundimiento del sistema colonial del imperialismo. Numerosos países como la India, Indonesia, Birmania y otros conquistaron la independencia nacional.

La guerra acentuó asimismo la desigualdad del desarrollo económico de los diferentes Estados imperialistas. Aumentó en particular la potencia económica y militar de los Estados Unidos. Estos, convertidos en el centro económico y militar del mundo capitalista, iniciaron muy pronto una política enfilada a establecer su dominación sobre el mundo. Con ese fin se orientaron a romper la coalición antihitleriana forjada en el curso de la guerra y a crear una coalición militar agresiva dirigida contra la URSS y los demás países socialistas.

Gracias a la política de la URSS y a la presión de la opinión pública internacional, en la Conferencia de Potsdam en 1945, y en las Naciones Unidas en 1946 la dictadura de Franco fue condenada como un

régimen impuesto a España con la ayuda armada de las potencias fascistas y asociado a dichas potencias en el curso de la segunda guerra mundial. Pero los países imperialistas, y en particular los EE.UU., evitaron que esa condena moral se tradujese en medidas concretas, tales como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, y continuaron prestando al franquismo ayuda económica y política.

Al amparo de esta política de EE. UU. y de Inglaterra, se operó cierto reagrupamiento de las fuerzas reaccionarias españolas en torno a la dictadura de Franco. Ello se reflejó en la reorganización del Gobierno en el verano de 1945. La Iglesia desempeñó en este orden un papel muy importante: el dirigente de Acción Católica, Martín Artajo, fue nombrado ministro de Estado. Otros grupos reaccionarios se esforzaban, [230] entre tanto, en preparar una eventual solución de recambio, basada en la Monarquía, para el caso de que Franco no pudiera sostenerse en el Poder.

En diciembre de 1945 se celebró en Toulouse (Francia) un Pleno del PCE, el primero después de la guerra. El Pleno comprobó que la influencia y el prestigio del Partido habían aumentado considerablemente. Incluso gentes que no se distinguían por su simpatía hacia los comunistas, reconocían que, en España, mientras los otros partidos obreros y democráticos se habían disgregado, el PCE mantenía su organización clandestina y proseguía la lucha.

Fuera de España, el Partido Comunista había cumplido sus deberes internacionalistas y entregado una generosa contribución de sangre a la lucha general de los pueblos contra los agresores fascistas.

En Francia, nuestro Partido había sido el organizador de las unidades de guerrilleros españoles que tan gran papel desempeñaron, al lado del pueblo francés, en la lucha por liberar de invasores hitlerianos extensas regiones meridionales de ese país. Entre los camaradas que cayeron en esta lucha o víctimas del terror hitleriano figuran José Miret, Buitrago, Alfonso, Ríos, Barón. Muchos comunistas españoles —algunos de ellos fusilados o encarcelados posteriormente por Franco— recibieron altas condecoraciones del Gobierno francés por su contribución a la guerra contra el hitlerismo.

En la Unión Soviética, cientos de comunistas españoles combatieron en el frente y en la producción, al lado del heroico pueblo soviético. En los frentes de batalla de la guerra antihitleriana y en el movimiento

guerrillero cayeron heroicamente en tierra soviética numerosos comunistas españoles como Rubén Ruiz Ibárruri, Justo Rodríguez, José Fusimaña, Francisco Gullón, Santiago de Paúl Nelken.

Los comunistas españoles emigrados en otros países de Europa, África y América participaron en la lucha contra el hitlerismo.

En el informe presentado al Pleno de Toulouse, la camarada Dolores Ibárruri salía al paso de las ilusiones, alimentadas en amplios sectores, de que el régimen franquista se iba a hundir «automáticamente». Insistía en que, [231] para terminar con la dictadura, era necesario «el entendimiento patriótico de todas las fuerzas nacionales», la conjunción de los esfuerzos de todos los antifranquistas en la lucha contra la dictadura.

Los debates y resoluciones del Pleno de Toulouse tuvieron como eje la organización y desarrollo de las acciones y luchas de las masas en el interior del país. El Partido valoraba la solidaridad internacional con la democracia española, pero insistía en que lo decisivo para terminar con la dictadura era la lucha del pueblo.

Era necesario que el Partido estrechase, sobreponiéndose a las duras condiciones de clandestinidad, sus vínculos con las masas, para ayudar a éstas a defender sus intereses e imprimir a sus protestas y a sus acciones un carácter cada vez más combativo.

El Pleno aprobó un Programa en el que se definían los objetivos de la lucha contra la dictadura y las medidas necesarias para la democratización de España.

El Partido tomó posición contra las maniobras reaccionarias, apoyadas por ciertos grupos anarquistas, socialistas y republicanos, que tendían a restaurar la Monarquía en caso de hundimiento de la dictadura franquista.

Frente a esos intentos de buscar soluciones a espaldas del pueblo, el Pleno del Partido reiteró su propuesta de organizar una consulta verdaderamente democrática al pueblo, previa la eliminación del franquismo, para lo cual sugirió la constitución de un Gobierno de coalición nacional.

Los esfuerzos unitarios del Partido obtuvieron, después del Pleno de Toulouse, algunos resultados positivos. Como consecuencia del crecimiento de la influencia del PCE, del prestigio ganado en el plano

mundial por los Partidos Comunistas que participaban entonces en los Gobiernos de Francia, Italia, Bélgica y otros países, y también de la presión que ejercía la voluntad unitaria de las masas, en España y en la emigración, los partidos republicanos y el Partido Socialista comprendieron que era necesario establecer cierta forma de colaboración con el Partido Comunista.

En Méjico se había constituido en 1945, después de la dimisión de Negrín. un nuevo Gobierno republicano en el [232] exilio presidido por José Giral. A comienzos de 1946, éste propuso al PCE la participación en dicho Gobierno. El Partido aceptó y designó al camarada Santiago Carrillo como ministro del mismo. Desde esa fecha hasta el verano de 1947, el Partido participó, al lado de los partidos republicanos, del PSOE, de un grupo cenetista, de los partidos nacionalistas de Euzkadi y Cataluña, en los gobiernos republicanos presididos en el exilio por Giral y Llopis. La unidad plasmada en esos gobiernos representó una ayuda importante para el desarrollo de la acción del pueblo español contra el franquismo.

Gracias a las orientaciones dadas por el Pleno de Toulouse, el Partido consiguió mejorar su trabajo en España y reforzar su organización.

En varias zonas, la simpatía de las masas campesinas por la causa antifascista se traducía en solidaridad concreta hacia los grupos guerrilleros.

En diversas regiones industriales las acciones obreras fueron adquiriendo mayor empuje.

En los primeros meses de 1947 tuvieron lugar movimientos reivindicativos en varias empresas metalúrgicas de Madrid, en fábricas textiles de Cataluña, en Guipúzcoa y en otros lugares.

La agitación obrera era particularmente intensa en los grandes centros de la industria pesada de Vizcaya, donde se desarrollaron varias huelgas parciales y plantes. Los pacientes esfuerzos del Partido Comunista facilitaron la coincidencia del conjunto de las fuerzas antifranquistas de Euzkadi, gracias a la cual fue posible la huelga general del Primero de Mayo de 1947 en Bilbao.

En el manifiesto llamando a la huelga, el Partido decía:

«Nada podrá impedir que nuestra valiente clase obrera celebre este Primero de Mayo de 1947 como una jornada de intensifi-

cación de la unidad y de la lucha antifranquista... ¡Obreros! ¡Que nadie asista al trabajo ese día! Fábricas, minas y lugares de trabajo en general deben permanecer vacíos y silenciosos toda la jornada... En este Primero de Mayo, ni un solo obrero a trabajar.

Partido Comunista de Euzkadi». [233]

La huelga fue un éxito rotundo. En ella participaron más de 50.000 trabajadores. Fue la primera gran acción de masas del proletariado después de la implantación del fascismo en España.

La huelga de Bilbao confirmó las reiteradas declaraciones del Partido Comunista de que, pese al terror fascista, la clase obrera, el pueblo, podían luchar. La acción de los obreros vizcaínos, que se extendía a algunos sitios de Guipúzcoa y levantó el entusiasmo de los trabajadores y demócratas en toda España, tuvo un carácter esencialmente político y sembró el pánico en las esferas gobernantes. Era una prueba fehaciente de que por el camino de la unidad y de la lucha se podía acabar con la dictadura.

Cambio de táctica

A partir de 1947, el imperialismo yanqui emprendió abiertamente la «guerra fría» contra la URSS y las democracias populares. Sin ningún recato, tomó bajo su protección a las fuerzas reaccionarias y a los residuos fascistas en todo el mundo, singularmente en Alemania Occidental, asumiendo el papel de gendarme mundial frente a las fuerzas obreras y democráticas.

La bandera utilizada por los imperialistas en su ofensiva contra la independencia, la libertad y el progreso de los pueblos fue el anticomunismo. Desplegando en escala mundial una campaña calumniosa contra los comunistas, el imperialismo se esforzó en romper la unidad democrática forjada en el curso de la segunda guerra mundial. Bajo el influjo de los Estados Unidos, en 1947 las fuerzas reaccionarias y los socialdemócratas de Italia y de Francia eliminaron a los comunistas de los Gobiernos de esos países.

La «guerra fría» y el anticomunismo fueron para el franquismo una tabla de salvación. El imperialismo yanqui no sólo intensificó su ayuda a la dictadura, sino que acentuó su presión sobre diversas fuer-

zas del campo antifranquista para que rompiesen la unidad democrática plasmada en el Gobierno republicano en el exilio. [234]

Contra la unidad dirigieron sus golpes con especial celo los elementos más derechistas del PSOE y una fracción de la CNT. Esta fracción había surgido en el proceso de descomposición política e ideológica del anarcosindicalismo. La CNT se había dividido en una CNT «política» y otra que seguía pregonando los dogmas «apolíticos».

La primera, a pesar de que participó durante un período en el Gobierno republicano en el exilio, apoyó cada vez más abiertamente a la reacción monárquica. Algunos de los dirigentes de la CNT «política» (los Luque, Leiva y otros) ofrecieron su apoyo al pretendiente al trono. Se puso así de relieve, una vez más, que la ideología anarquista, por su misma raíz pequeño-burguesa, no sólo es incapaz de guiar a los trabajadores por una senda revolucionaria, sino que abona el terreno para toda suerte de degeneraciones políticas, como el citado «anarcomonarquismo».

La orientación reaccionaria de la CNT «política» ayudó en cierto modo a que la otra fracción pudiese conservar influencia entre una parte de los cenetistas de la emigración, pese a que «apoliticismo» se expresaba sobre todo en una política antiunitaria, en el anticomunismo y en el apoyo a las campañas antisoviéticas del imperialismo.

Mientras tanto, en el seno del Partido Socialista Prieto encabezaba la lucha por la liquidación del Gobierno republicano con los monárquicos. En el verano de 1947, con el apoyo que le daba la política de guerra fría del imperialismo, obtuvo que una Asamblea de Delegados del PSOE votase la retirada de éste del Gobierno republicano presidido a la sazón por el socialista Llopis, lo que equivalía a la liquidación del Gobierno republicano unitario. La asamblea decidió que el PSOE concertase un pacto con los monárquicos (política que fracasó a pesar de los «buenos deseos» de los socialistas).

Ante el III Congreso del PSOE en el exilio, Prieto definió la esencia de la política preconizada por él para acabar con la dictadura en los términos siguientes:

«Camino no hay otro... que el de servir los deseos de [235] las potencias occidentales reduciéndonos a lo que dichas potencias quieren concedernos».

La historia ha demostrado sobradamente que «lo que las potencias occidentales querían conceder», no era ni más ni menos que la continuación del régimen franquista.

Los resultados de la política del PSOE fueron romper la incipiente unidad lograda en torno al Gobierno republicano y debilitar en consecuencia la lucha antifranquista tanto en el país como en el plano internacional. Ello cerró la perspectiva alentadora abierta por la gran huelga de Bilbao, y en cambio facilitó los planes imperialistas de mantener a España bajo el yugo fascista y de utilizar su suelo como plaza de armas.

A la fase de lento y laborioso renacer del movimiento antifranquista, que se prolongó de 1943 a 1947, sucedió una fase de descenso entre finales de 1947 y 1950. Las causas principales de ese cambio fueron «la guerra fría» en el terreno internacional y la ruptura de la unidad democrática en el plano español.

El PCE tuvo que enfrentarse con nuevas dificultades. La política de los gobiernos imperialistas, del Vaticano, de la Internacional Socialista, se centraba en el anticomunismo, en su forma más desenfundada. En Francia, un Gobierno en el que participaban los socialistas tomó medidas represivas contra los comunistas españoles, que tan alta contribución de sangre habían entregado a la causa de la resistencia antihitleriana; «Mundo Obrero» fue prohibido, mientras seguían publicándose periódicos socialistas y cenetistas que dedicaban páginas enteras a difundir calumnias anticomunistas; numerosos militantes del PCE y del PSUC fueron detenidos y deportados por las autoridades francesas.

El PCE hizo frente a las nuevas dificultades que se interponían en su camino. Sobre la base de un profundo examen de la realidad nacional e internacional y de un análisis crítico y autocrítico de la política seguida hasta entonces, estableció un cambio de táctica que habría de permitirle obtener posteriores éxitos en la lucha, al frente de las masas, contra la dictadura franquista.

La necesidad del cambio de táctica estaba determinada, [236] en primer lugar, por los cambios que se habían operado en la situación. La actitud de las potencias imperialistas liquidaba por completo la posibilidad de que el régimen franquista desapareciese como consecuencia directa de la derrota del fascismo en la segunda guerra mundial. Si en

Italia y en Alemania el fascismo había sido eliminado en gran parte como consecuencia de factores exteriores, el pueblo español tenía que enfrentarse con la tarea de acabar con una dictadura fascista por la acción de factores interiores, por la lucha de las masas, lucha que aceleraría el quebrantamiento y descomposición del bloque gobernante.

A la luz de la nueva situación, el Partido llegó a la conclusión de que era necesario introducir un cambio en la táctica seguida hasta entonces, la cual se basaba en el criterio, común a todas las fuerzas democráticas, de una rápida caída de la dictadura como resultado de la derrota hitleriana, pero que no tenía suficientemente en cuenta la política imperialista.

En octubre de 1948 se celebró una reunión amplia de dirigentes y cuadros del PCE y del PSUC para examinar a fondo la cuestión decisiva de las ligazones del Partido con la clase obrera y revisar la táctica sindical del Partido.

A raíz de la implantación del fascismo, el Partido había aconsejado el trabajo en el seno de los sindicatos y organizaciones fascistas como uno de los medios para los comunistas de mantener contactos con las masas, a pesar de que en los primeros tiempos de la dictadura las posibilidades reales de aplicar esta orientación eran limitadísimas.

Más tarde, el Partido no luchó con la suficiente energía en pro de la táctica leninista de trabajar siempre allí donde están las masas, inclusive en los sindicatos reaccionarios; a partir de 1944, y con la perspectiva de un rápido hundimiento de la dictadura, había preconizado la creación de sindicatos clandestinos en vez de trabajar en los sindicatos verticales. Al examinarse en 1948 esta cuestión se comprobó que semejante orientación no había dado resultados positivos.

El Partido debía adoptar una táctica que le permitiese estrechar y multiplicar sus vínculos con la clase obrera en su conjunto, y no sólo con los grupos de veteranos obreros [237] revolucionarios que eran, por añadidura, los más castigados por la represión policíaca.

La clase obrera en 1948, ni por su composición, ni por su grado de conciencia, era la misma que la de 1936-1939. El Partido, las fuerzas de vanguardia en general, habían sido diezmadas por la guerra, el terror, la cárcel o la emigración. A las filas del proletariado se habían

incorporado una nueva generación obrera y grandes masas provenientes del campo.

En el seno de los sindicatos verticales creados por el Gobierno estaban afiliados forzosamente todos los obreros. La aversión de los trabajadores a estas organizaciones y sus protestas habían obligado al franquismo a realizar ciertas concesiones y se habían creado algunas posibilidades, si bien muy limitadas, para que los obreros pudiesen actuar dentro de esos sindicatos en defensa de sus reivindicaciones.

A la luz de un examen concreto de la realidad, el Partido llegó a la conclusión de que el deber de los comunistas era trabajar en el seno de los sindicatos verticales para ligarse allí a las masas; plantear en ellos las reivindicaciones de los obreros y unirles en la acción, lo que iría dándoles confianza en sus esfuerzos y elevando su conciencia política.

El Partido comenzó a combinar el trabajo ilegal con el aprovechamiento de las posibilidades legales, no sólo en los Sindicatos Verticales, sino en todas las organizaciones de masas existentes bajo la dictadura.

En el plano sindical y en todos los terrenos, el Partido se orientó a una táctica paciente de acumulación de fuerza. El Partido tenía que adoptar los métodos de trabajo y de lucha que mejor le permitiesen fundirse con las amplias masas, ayudar a éstas a ponerse en movimiento, a defender sus intereses, a enfrentarse con la dictadura en acciones modestas, parciales, limitadas, que después podrían convertirse en otras de mayor envergadura.

Para las tareas que surgían en la nueva situación, perdía su razón de ser la lucha guerrillera, que en épocas anteriores había sido una aportación heroica y valiosa a la causa antifascista. La dirección del Partido, de acuerdo con los jefes del movimiento guerrillero, decidió la disolución de dicho movimiento. [238]

La aprobación de la nueva táctica en 1948 inició un viraje en la vida del Partido; representó la superación de cierto subjetivismo que había existido anteriormente en la apreciación de algunas realidades del país, particularmente en la insuficiente apreciación de las consecuencias desmoralizadoras que la derrota había tenido en amplios sectores del pueblo, llevándoles a perder la confianza en sus fuerzas.

A partir de ese momento, el Partido progresó considerablemente en la elaboración de una táctica verdaderamente ajustada a la situación concreta existente en España. El cambio de táctica de 1948 significó asimismo un golpe muy serio a ciertas concepciones sectarias que habían dificultado la ligazón del Partido con las masas; el Partido consiguió que esa ligazón se elevase cualitativamente; a partir de entonces, y a pesar de la dictadura fascista, el Partido fue enraizándose más y más profundamente en las masas populares de nuestro país.

La aplicación de la nueva táctica permitió al PCE y al PSU mejorar su labor de orientación y educación política de la clase obrera e intervenir de un modo decisivo en la gestación de una fase de ascenso de las luchas obreras y populares, a través de una serie de pequeñas acciones y protestas contra el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Gracias a la nueva táctica sindical, en las elecciones de enlaces de octubre de 1950 fueron elegidos –sobre todo en Cataluña– muchos comunistas y otros obreros conscientes y combativos.

El primer fruto importante del cambio de táctica se cosechó en la primavera de 1951.

Nueva etapa

En la primavera de 1951 se produjo una intensificación de las luchas populares. El 1º de marzo comenzaba un boicot a los tranvías como protesta contra el aumento de Barcelona labor tenaz y paciente del PCE y del PSUC por elevar la conciencia de los trabajadores y, por organizarlos para la lucha contra la dictadura franquista comenzaba a dar sus frutos. [239]

Y si bien en la organización y desarrollo de la lucha participaron ampliamente los estudiantes, que expresaban con su protesta el descontento de la pequeña y media burguesía, el papel principal correspondió a los trabajadores, que dieron al boicot un carácter de protesta general contra la dictadura.

El Gobierno quiso ahogar en su origen este movimiento pacífico; la policía practicó numerosas detenciones. No obstante, el éxito del boicot fue total. La población de Barcelona se abstuvo unánimemente de utilizar los tranvías durante cinco días.

El 4 de marzo, en pleno auge de la lucha, el PSUC publicó un manifiesto llamando a los trabajadores a la huelga y a transformar el movimiento contra la subida de las tarifas de los tranvías en una gran acción contra el régimen franquista. El manifiesto planteaba las cuestiones más sentidas por los trabajadores: lucha contra la carestía de la vida y por la elevación de los salarios, contra el terror y contra la política de guerra de la dictadura.

Esta idea de huelga fue acogida y puesta en práctica por los trabajadores. El 6 de marzo, después de una reunión tempestuosa con los jefes fascistas de los sindicatos, los enlaces, entre los que había comunistas elegidos en las votaciones de octubre de 1950, decidieron, en unión de los obreros más consientes llamar a los trabajadores barceloneses a declarar la huelga general el 12 de marzo para protestar contra la carestía de la vida.

La huelga se inició en las fábricas textiles de Pueblo Nuevo y se extendió a toda Barcelona. Pararon los obreros de las industrias textil, metalúrgica, química, de la construcción y otras. Se sumaron a la huelga también los taxistas, los empleados de teléfonos y espectáculos públicos, la mayoría de los tranviarios, &c.

El pueblo de Barcelona salió a la calle y formó potentes manifestaciones que se dirigieron al Gobierno Civil y al Ayuntamiento protestando contra la carestía de la vida.

La huelga de Barcelona produjo en los medios gubernamentales pánico y desconcierto, que reflejó el ministro de Trabajo, el falangista Girón, en este comentario: [240]

«En 24 horas, la insensatez de ciertas gentes hubiera podido dar al traste con la obra levantada con tanto esfuerzo».

El Gobierno volcó sobre la capital catalana sus fuerzas represivas; Barcelona fue ocupada prácticamente por la Policía Armada y la Guardia Civil. La policía practicó detenciones en masa. Las tropas de la guarnición de la capital catalana fueron acuarteladas. El Gobierno envió al puerto de Barcelona cuatro buques de guerra.

La huelga general duró hasta el día 14, en que los obreros reanudaron el trabajo en la mayoría de las empresas y fábricas.

El Gobierno intentó tomar represalias contra los huelguistas, pero ante la actitud de los obreros que amenazaban con ir de nuevo a la huelga,

tuvo que desistir. Los trabajadores percibieron los salarios y sueldos de los días de huelga. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad. Los obreros volvieron al trabajo como vencedores. La huelga general había sido no sólo una protesta contra la vida cara, sino también una gran acción contra el régimen franquista, causante de la carestía, una acción que dio ánimo a millones de hombres y mujeres para incorporarse a la lucha contra el franquismo.

En los meses que siguieron a la huelga de Barcelona, fueron escenario de luchas y protestas obreras y populares Vizcaya, Álava, Navarra, Madrid, Guipúzcoa y diversos pueblos en distintas provincias. Las huelgas y manifestaciones de la primavera de 1951 afectaron a centros fundamentales de la industria y abarcaron a cientos de miles de trabajadores.

En las manifestaciones populares y movilizaciones de masas participaron, al lado de los obreros veteranos, los jóvenes trabajadores que no habían conocido los tiempos de la República, y los campesinos recientemente incorporados a la industria, así como miles de empleados y funcionarios, estudiantes e intelectuales. Amplios sectores de la pequeña burguesía y de la burguesía no monopolista expresaron sus simpatías al movimiento.

A las huelgas y protestas de 1951 siguió una acción represiva contra los comunistas. La policía detuvo y torturó salvajemente al dirigente comunista Gregorio López Raimundo y a 27 trabajadores más, la mayor parte militantes del Partido, acusados de ser organizadores del movimiento de Barcelona. El Gobierno pretendía aplicarles un castigo ejemplar y amedrentar a las fuerzas de la oposición antifranquista: pero fracasó ruidosamente en sus propósitos. La movilización del pueblo en defensa de los detenidos y la campaña internacional de solidaridad impidieron que el franquismo realizara sus criminales proyectos de condenar a muerte a estos patriotas.

El proceso contra Gregorio López Raimundo y sus compañeros demostró que el franquismo no estaba ya en condiciones de aplicar el terror con la misma intensidad que en épocas anteriores y que el pueblo español y la solidaridad internacional podían, con su movilización, detener la mano del verdugo.

La huelga general de Barcelona y las acciones desarrolladas en muchos otros lugares de España habían abierto una nueva etapa en la lucha del pueblo contra la dictadura franquista.

Esa etapa estaba determinada por un conjunto de cambios operados tanto en la situación económica del país, como en el aspecto político.

La política económica de la dictadura al servicio de la oligarquía financiera-terrateniente lesionaba a sectores cada vez más amplios de la población. Durante unos años, la aguda escasez reinante como resultado de la guerra civil y de la segunda guerra mundial había permitido a una parte de los pequeños y medios comerciantes, industriales y campesinos obtener pingües ganancias. Pero esta situación comenzó a cambiar y a medida que se fortalecían los grandes monopolios, y en particular el capitalismo monopolista de Estado, muchas empresas pequeñas y medias se vieron reducidas a una situación difícil.

La burguesía no monopolista empezó a sentir todo el rigor de la política económica de la dictadura.

La evolución económica se reflejó en la situación política. Se acentuó el aislamiento y la desintegración de Falange, que dejaba de ser la fuerza fundamental del conglomerado [242] franquista. De ella se separaban fuerzas políticas que en 1937 habían ingresado por decreto en sus filas, e incluso diversos elementos falangistas de la primera hora. Unos y otros se orientaban a realizar cierta actividad política al margen del «Movimiento Nacional».

Por su parte, la Iglesia no podía dejar de tener en cuenta el creciente descontento de las masas; si la jerarquía continuaba, en su conjunto, apoyando a la dictadura, algunas personalidades católicas, seglares y eclesiásticas, empezaban a diferenciarse del régimen adoptando ciertas actitudes críticas para conservar el ascendiente de la Iglesia sobre las masas católicas. Comenzaron a crear las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), que aparecían como un embrión de sindicatos de tipo democristiano, independientes del régimen. A través de sus órganos de prensa, como el semanario «Tú», criticaban diversos aspectos de la política social de la dictadura y adoptaban posturas «liberales». Con todo ello pretendían sentar las bases de un movimiento católico de oposición que pudiera reclamar el derecho a desempeñar un papel dirigente en la vida política española, en caso de bancarrota del franquismo, cuya posibilidad la Iglesia no excluía.

Además de estos cambios económicos y políticos estaba cambiando también la conciencia de la clase obrera, merced a su propia experiencia y a la labor infatigable de los comunistas. Las masas empezaban a hacer acto de presencia en la vida política española. En la primavera de 1951 se lanzaron a la calle para protestar contra la carestía, pero también contra el régimen de tiranía y terror.

Este era el factor fundamental que había roto la relativa estabilidad y provocado el comienzo de la crisis política de la dictadura.

El general Franco creyó poder zanjar la crisis política del régimen con algunos cambios ministeriales, introducidos en el verano de 1951. Dichos cambios reflejaron, en cierta forma, las modificaciones que se habían operado en la constelación de las fuerzas reaccionarias. Disminuyó el peso de la Falange en el Gobierno y, en cambio, fueron incorporados a él representantes de la derecha católica, del tradicionalismo y del campo monárquico alfonsino. Uno de los objetivos la reorganización ministerial era contener las corrientes opositoras en el seno de la burguesía, dando la sensación de que el régimen iba a «liberalizarse».

El Partido extrajo de la experiencia viva de las acciones populares de la primavera de 1951 las lecciones que podrían permitirle perfeccionar su actividad. Durante las huelgas y manifestaciones habían aparecido defectos del Partido que éste debía corregir. Al análisis autocrítico de tales defectos estuvieron dedicados, fundamentalmente, el informe de la camarada Dolores Ibárruri en la reunión de dirigentes del Partido, del 25 de octubre de 1951, y la Carta del Comité Central del PCE a sus organizaciones y militantes de julio de 1952.

Uno de los problemas importantes abordados fue el de la debilidad del trabajo del Partido en el campo. Las acciones de la primavera de 1951 habían demostrado la necesidad de incorporar a la lucha a los jornaleros agrícolas y a los campesinos pobres, aliados naturales de la clase obrera. Esto reclamaba de todos los comunistas un esfuerzo perramente para ayudar a las masas rurales a formular sus reivindicaciones y a defenderlas con energía.

El Partido criticó la tendencia al practicismo en el trabajo, la tendencia a subestimar la discusión política y el estudio del marxismo-leninismo dejándose absorber por las tareas prácticas. Los comunistas debían desarrollar mayor actividad en el frente ideológico para contrarrestar

los efectos de la propaganda del régimen franquista y del imperialismo, enfilada a destruir la conciencia de clase del proletariado. Era esencial también estimular la iniciativa política de los militantes y de las organizaciones del PCE.

En la nueva etapa de la lucha contra el franquismo, el Partido tenía que desprenderse de cuanto dificultase el reforzamiento de sus vínculos no sólo con la clase obrera y los campesinos, sino también con los núcleos sociales que manifestaban más o menos claramente su oposición al franquismo.

El Comité Central señalaba a los militantes la necesidad de conocer de una manera concreta los problemas que agobian a los trabajadores de la ciudad y del campo y de ligar esas cuestiones a la lucha contra la dictadura. [244]

Tales fueron los principales problemas que el C. C. planteó a los militantes del Partido a la luz de las grandes luchas de 1951.

Un pacto de guerra

El 26 de septiembre de 1953, el Gobierno del general Franco suscribió con el de los EE. UU. un pacto militar que hipotecaba la soberanía nacional e incorporaba España a los planes bélicos del imperialismo norteamericano. Este pacto fue precedido por el Concordato concertado un mes antes entre el Vaticano y el franquismo.

En el mundo se desarrollaba una gigantesca lucha de las fuerzas de la paz y de la guerra. La Unión Soviética y las democracias populares realizaban un gran esfuerzo para aliviar la tensión internacional; un movimiento de partidarios de la paz, sin precedentes por su amplitud, después de haber recogido millones de firmas contra la bomba atómica, abría campaña en pro de la solución negociada de los problemas litigiosos. Mientras tanto, los círculos agresivos del capital monopolista norteamericano, apoyándose en las fuerzas más reaccionarias de todo el mundo, procuraban agravar la tensión internacional, aceleraban la carrera armamentista y establecían en numerosos países bases militares destinadas a la agresión contra la URSS.

Entre los ayudantes de los belicosos imperialistas yanquis no podía faltar el general Franco.

El pacto yanqui-franquista era la culminación lógica de la política que los gobernantes estadounidenses habían emprendido ya en 1943, en plena guerra antihitleriana, política de sostén de la dictadura franquista a cambio de la complicidad de ésta para una profunda penetración económica y militar del imperialismo norteamericano en España.

El Comité Central del PCE y el Secretariado del PSUC condenaron en una declaración conjunta de octubre de 1953 este pacto de misión nacional y denunciaron los peligros que encerraba para nuestro país.

Frente a las falaces declaraciones franquistas, que [245] prometían con el pacto militar una benéfica «lluvia de dólares» sobre España, el PCE y el PSUC afirmaban que ese pacto sólo beneficiaría a los multimillonarios yanquis, a Franco y a los grandes oligarcas españoles, y que para el país no reportaría más que el aumento de la carestía, el descenso del valor adquisitivo de la peseta, el crecimiento de la inflación y los impuestos con todas sus consecuencias. El gobierno franquista entregaba a una potencia extranjera las llaves de las finanzas españolas con la llamada «cuenta de contrapartida».

Y con ser esto grave, no era lo peor. El pacto estipulaba el emplazamiento de bases de guerra aeronavales y la instalación de bases atómicas de Estados Unidos en el suelo español. En lo sucesivo, España podía verse arrastrada, de la noche a la mañana, a una guerra completamente ajena a sus intereses nacionales. España perdía por completo el control sobre su propia seguridad y hasta el derecho de decidir en cuestiones de vida o muerte para ella, como las de la paz o la guerra.

Ante estas gravísimas conculcaciones de la soberanía nacional el PCE y el PSUC llamaban al pueblo a la protesta y a la vigilancia, y frente a los planes agresivos de Franco y sus valedores levantaban la bandera del patriotismo y del internacionalismo, declarando firme y públicamente:

«El pueblo español no empuñará las armas contra la Unión Soviética ni contra ningún país pacífico».

La firma del pacto puso de relieve el error de la política de los dirigentes del Partido Socialista, de la CNT, de los partidos republicanos y nacionalistas, que durante muchos años habían sembrado falsas ilusiones acerca de la disposición de los gobernantes de los EE. UU. a ayudar a nuestro país a liberarse de la dictadura franquista. La realidad

vino a dar la razón a los comunistas, a sus constantes denuncias sobre los verdaderos propósitos antidemocráticos, imperialistas, de los gobernantes norteamericanos en lo que concernía a España.

Después de la firma del pacto, algunos dirigentes socialistas, anarquistas y republicanos, lejos de revisar sus erróneos conceptos, se entregaron a un pesimismo desmoralizador. Este fenómeno adquirió singular relieve en el movimiento [246] anarquista. Mientras trabajadores anarquistas se orientaban hacia el comunismo, algunos de sus dirigentes se abismaban en la más completa degeneración ideológica.

Los Leval y los García Pradas, los Abad de Santillán y los Barco, llegaron a afirmar que, en las circunstancias mundiales contemporáneas, la emancipación de la clase obrera era imposible. Según ellos, la posesión de la bomba atómica confería a los capitalistas tal superioridad que no quedaba los trabajadores otro camino que resignarse mansamente a ser explotados por la burguesía. Y afirmaban esto cuando la bomba atómica no era ya monopolio de los capitalistas, ni este arma ni ninguna otra eran capaces de contener la crisis del capitalismo, el desplome del sistema colonial del imperialismo, los avances de la Unión Soviética y del campo socialista, la elevación de la conciencia de la clase obrera de los países capitalistas. Estos «teóricos» anarquistas no veían otra salida para el pueblo español que mendigar por las cancillerías imperialistas una ayuda, que nunca llegaría, para conseguir la liberación de España.

Con tales argumentos, fiel trasunto de las teorías fatalistas de algunos sociólogos del imperialismo, esos líderes pasaban de hecho de la «prédica de la revolución social y del comunismo libertario» al «campo de la contrarrevolución» coincidiendo de lleno con el reformismo de los líderes socialistas de derecha, que tanto habían criticado en otras épocas.

Combatiendo en el dominio ideológico estas «teorías» de la impotencia y la derrota, el Partido se esforzaba en ayudar a los trabajadores anarquistas a encontrar el verdadero camino revolucionario. A esta tarea estuvieron consagrados diversos artículos sobre el anarquismo, escritos por la camarada Dolores Ibárruri, en los primeros meses de 1953.

Después de la conclusión del pacto, el franquismo confiaba que con la ayuda de los EE. UU. podría contener la protesta popular y neutralizar

a las fuerzas políticas que las grandes acciones de la primavera de 1951 habían puesto en movimiento.

Pero se equivocó; la lucha de clases adquirió mayor intensidad. Un número creciente de trabajadores se incorporaba a la acción reivindicativa, protestaba contra los abusos [247] y arbitrariedades de las empresas, exigía aumento de salarios. En toda España surgían conflictos laborales.

Apenas transcurridos dos meses desde la firma del pacto militar con los EE. UU., tres mil obreros de la «Euzkalduna» de Bilbao se declararon en huelga reivindicando un salario que les permitiese vivir sin realizar jornadas agotadoras. La huelga duró nueve días. Con los obreros de la «Euzkalduna» se solidarizaron total o parcialmente los de las factorías más importantes de Vizcaya. La población laboriosa de Bilbao expresó de las más diversas formas su simpatía a los huelguistas. El movimiento de solidaridad se extendió también a Tolosa, Azpeitia, Azcoitia y otras ciudades de Guipúzcoa.

La huelga de la «Euzkalduna» fue una gran lección de unidad y de solidaridad, pero su importancia no se limitó a esto. Ante el peligro de que la ola huelguística se extendiera, el Gobierno franquista revisó las reglamentaciones de trabajo, a lo que se había venido resistiendo de una manera sistemática, y otorgó un aumento de salarios del 10 al 15 por 100 en diversas industrias. Con ello se abrió una brecha en el bloqueo de los salarios.

Estimulados por la lucha de la clase obrera, sobre todo después de las acciones de 1951, los intelectuales y la juventud universitaria irrumpían también en la escena política, expresando de una manera más o menos explícita sus deseos de conquistar la libertad, de salvaguardar la independencia nacional y de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Entre los intelectuales españoles se había operado una profunda diferenciación: una minoría reducida de intelectuales reaccionarios y sin prestigio seguía defendiendo al régimen; el resto adoptaba diferentes posiciones políticas, que iban desde el liberalismo y el monarquismo hasta el reformismo socialdemócrata y el comunismo.

La penetración del marxismo en sectores de la nueva generación intelectual, crecida bajo el franquismo, era un hecho nuevo y de gran importancia en la vida política española.

En el campo de la poesía, de la prosa, del cine, de las artes plásticas, abundaban los intelectuales que hacían en sus obras valientes críticas del régimen, combatían la penetración del imperialismo norteamericano, ensalzaban la paz, [248] la libertad y el progreso. Los intelectuales avanzados y la juventud universitaria, que habían hecho acto de presencia en los momentos cruciales de la historia de España comenzaban a participar también ahora en la acción contra el régimen franquista. El Partido prestó a estas fuerzas la mayor atención.

En abril de 1954, el Comité Central del PCE publicó un «Mensaje a los intelectuales patriotas», en el que les alentaba a la lucha contra la dictadura y les invitaba al estudio del marxismo-leninismo.

El V Congreso

La necesidad de colocar el Partido a la altura de las exigencias políticas que presentaba la nueva etapa que había comenzado en el país y de reforzarle orgánicamente, aconsejaban la celebración de un Congreso.

El Pleno del Comité Central celebrado en España en marzo de 1936 había fijado la celebración del V Congreso para agosto de aquel mismo año, pero el estallido de la sublevación militar fascista, la guerra civil, la derrota de la República, los años de clandestinidad bajo la dictadura fascista, el exilio forzoso de muchos militantes y dirigentes del Partido, la guerra mundial, impidieron que se celebrase durante un largo período. La Dirección del PCE no quería hacer un Congreso de emigración. Sólo cuando pudo garantizar una amplia representación de las organizaciones del Partido en el interior de España, juzgó llegado el momento de convocar el Congreso.

Del 1 al 5 de noviembre de 1954 se reunió el V Congreso del Partido Comunista de España con representación de las organizaciones de Madrid, Cataluña, Euzkadi, Valencia, Asturias, Galicia, Andalucía, Extremadura y otras regiones, así como de las organizaciones del exilio. El rasgo característico del Congreso fue la unidad política de los

comunistas del interior y del exterior, la unidad monolítica de todo el Partido.

El Congreso analizó la situación económica y política de España y trazó la línea del Partido en la lucha contra la dictadura, por el restablecimiento de una situación democrática [249] en nuestro país, por el mejoramiento de la situación de las masas populares.

El V Congreso discutió y aprobó el nuevo Programa y los Estatutos del Partido. Sobre los proyectos de estos dos documentos fundamentales se había desarrollado en todas las organizaciones del PCE una amplia discusión que duró varios meses y reflejó el crecimiento ideológico y la unidad del Partido.

El Programa exponía los principales fenómenos económicos, sociales y políticos ocurridos en España después de la instauración del franquismo. Como consecuencia de la dominación del fascismo, al mismo tiempo que se conservaba la gran propiedad latifundista y otras supervivencias semif feudales se había desarrollado extraordinariamente el capital monopolista, en particular el capitalismo monopolista de Estado, que, en connivencia con la aristocracia latifundista, expoliaba rapazmente a la inmensa mayoría de la población. Con ello se revelaba más acusadamente el doble carácter antifeudal y antimonopolista de la revolución democrática española. De otro lado, la firma del pacto yanqui-franquista, que enajenaba la independencia y comprometía la seguridad del país, había reforzado el contenido antiimperialista de la lucha popular por la democracia, que tenía como uno de sus principales objetivos el restablecimiento de la plena soberanía nacional.

Al exponer las soluciones del Partido en orden a la lucha por la democracia, la independencia nacional y la paz, en el Programa se diferenciaban dos etapas. En la primera etapa propugnaba la creación de un amplio Frente Nacional Antifranquista, cuyos objetivos serían el derrocamiento de la dictadura y la formación de un Gobierno provisional revolucionario. Los puntos fundamentales de la plataforma política de ese Frente y de su Gobierno podían ser, a juicio del Partido, los siguientes: restablecimiento de las libertades democráticas; liberación de los presos antifranquistas y ayuda a la repatriación de los emigrados políticos; derogación del pacto militar yanqui-franquista; adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de las

masas populares y convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para que el pueblo decidiese democráticamente sobre la forma del régimen. [250]

Una vez derrocado el franquismo y restablecidas las libertades públicas, el Programa abogaba por el mantenimiento de la coalición nacional para el desarrollo de la democracia, destacando una cuestión fundamental: la abolición de todas las supervivencias feudales en el campo a través de una profunda reforma agraria. El Programa se pronunciaba asimismo por la adopción de medidas para limitar el poder de los monopolios que atenazaban la economía nacional. La realización de estas reformas contribuiría a abrir ancho cauce al desarrollo de las fuerzas productivas y a sacar a España del marasmo en que se encontraba.

Para los obreros destacaba tres demandas esenciales; el salario mínimo vital con escala móvil; la aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual» y el seguro de paro. También proponía el Programa medidas para la elevación del nivel de vida de los jornaleros agrícolas y campesinos pobres, así como para la defensa de los intereses de la pequeña y media burguesía rural y urbana frente a la oligarquía financiera terrateniente.

El Programa proponía diversas medidas y reformas en el dominio de la instrucción pública. Abogaba por un vasto plan de construcción de escuelas para resolver el problema de la enseñanza y proponía, igualmente, fomentar y proteger la cultura, la ciencia y el arte.

Al fijar la posición del Partido en cuanto a las relaciones del Estado con la Iglesia, el Programa preconizaba la libertad de cultos y conciencia y la separación de la Iglesia y del Estado; «mas teniendo en cuenta los sentimientos religiosos de una gran parte de la población – agregaba– el Estado deberá subvenir las necesidades del culto».

La propuesta de subvenir las necesidades del culto rompía con el anticlericalismo algarero y demagógico que, aparte de herir los sentimientos de muchos católicos, sólo servía para desviar a las masas populares de las tareas vitales que planteaba la lucha por la democracia.

Con esa propuesta, el Partido no hacía la más mínima concesión ideológica, pero rechazaba todo intento de mantener divididos a los españoles en creyentes y no creyentes, cuando unos y otros tienen los

mismos intereses y objetivos en la [251] lucha por la democracia y el bienestar del pueblo. Con su actitud ante el problema religioso, el Partido favorecía el entendimiento con las masas católicas para acabar con el enemigo común, la dictadura franquista, y contribuía a la estrecha unión de las masas obreras y campesinas, de la mayoría del pueblo, independientemente de las convicciones religiosas y filosóficas, para desarrollar la democracia e incluso para avanzar después hacia el socialismo.

El V Congreso aprobó los nuevos Estatutos del Partido. Los anteriores no llenaban ya las exigencias que presentaba al PCE la lucha contra el franquismo y habían caído en desuso.

Los Estatutos daban a los militantes y a todos los trabajadores revolucionarios una idea clara de cómo era y funcionaba el Partido. «El principio que rige la organización del Partido –decían– es el centralismo democrático», que presupone el carácter electivo de todos los organismos de dirección del Partido, de abajo arriba; la obligación de los organismos dirigentes del Partido de dar cuenta periódicamente de su gestión ante las organizaciones correspondientes del Partido, la observancia de la disciplina del Partido y la subordinación de la minoría a la mayoría, la obligatoriedad de los acuerdos de los organismos superiores para los inferiores y, junto a la más elevada democracia interna y la más amplia libertad de discusión que lleva aparejada la lucha de opiniones, la más rotunda negativa a la existencia de fracciones. Los Estatutos proclamaban también el principio de la dirección colectiva.

El Congreso eligió un nuevo Comité Central del Partido en el que figuraban, al lado de veteranos y probados dirigentes, las fuerzas nuevas que se habían ido desarrollando en el largo período transcurrido desde que, en 1937, había sido elegido el anterior Comité Central. El nuevo Comité Central nombró el Buró Político y eligió a la camarada Dolores Ibárruri para el puesto de Secretario General del Partido.

El V Congreso pertrechó política e ideológicamente al Partido para la nueva etapa de la lucha antifranquista. [252]

Una victoria de la clase obrera

Después del V Congreso, el Partido desarrolló una gran actividad para dar a conocer su nuevo Programa a las masas populares. Algunas de sus reivindicaciones, tales como el salario mínimo vital con escala móvil por una jornada efectiva de ocho horas; el principio de a trabajo igual, salario igual; el seguro de paro y otras, encontraron inmediato eco entre la clase obrera.

Ante la incesante subida de los precios, se extendía entre los trabajadores la exigencia de un aumento general de salarios y sueldos que aminorase su miseria.

Con el fin de acallar el descontento de las masas populares y de calmar el ambiente protestatario que cundía entre los obreros, los jefes sindicales decidieron convocar para junio de 1955 el «III Congreso Nacional de Trabajadores». Con este nuevo alarde demagógico, esperaban también recuperar su antigua influencia política y mantenerse como la fuerza fundamental del régimen franquista.

Pero la lucha de las masas trabajadoras impidió que tanto la preparación del «Congreso» como éste mismo discurrieran por los cauces que querían los jefes de los sindicatos verticales.

Las asambleas de enlaces sindicales de Lérida, Guipúzcoa, Sevilla, León, Burgos y otras provincias decidieron pedir un salario mínimo vital con escala móvil. En el mismo sentido se pronunciaron los «congresos regionales» de Barcelona, Vizcaya, Oviedo, Sevilla, Burgos, Valencia y otros.

El estado de ánimo de la clase obrera, reflejado en los debates y conclusiones de las asambleas de enlaces sindicales y de los «congresos regionales», presionó sobre el «III Congreso Nacional de Trabajadores», y éste aprobó, entre otros acuerdos, las tres reivindicaciones que figuraban en el Programa del Partido Comunista: un salario mínimo vital con escala móvil por una jornada efectiva de ocho horas de trabajo; a trabajo igual, salario igual y el seguro de paro.

Este hecho era una prueba de la fuerza de los trabajadores y, al mismo tiempo, demostraba que en el seno de los sindicatos verticales se iniciaban ciertos cambios. Muchos enlaces [253] eran obreros conscientes, defensores de los intereses de su clase. Por otro lado, no pocos vocales, jurados de empresa, presidentes de secciones sociales e in-

cluso algunos funcionarios sindicales, influidos por la situación política del país, la acción de los obreros y la descomposición de Falange, evolucionaban hacia una actitud de comprensión de los intereses de los trabajadores y de hostilidad a la política de la dictadura franquista. La lucha de clases penetraba y se desplegaba dentro de esos mismos sindicatos.

La orientación del Partido respecto al trabajo en los sindicatos verticales era la de ayudar a los obreros a ganar en ellos posiciones y desarrollar un movimiento de Oposición Obrera para la defensa de los intereses de los trabajadores. Esta Oposición lucharía, además, para transformarlos en auténticos sindicatos obreros.

El Partido, fiel a la trayectoria seguida desde su fundación, tendía a la unidad sindical; trataba de lograr que, una vez liquidada la dictadura, la clase obrera española contase con una central sindical única, destruyendo la antigua división sindical que tanto había perjudicado al movimiento obrero en épocas anteriores.

Después de la celebración del «III Congreso Nacional de Trabajadores», el Gobierno y los jefes sindicales pretendieron enterrar sus acuerdos y resoluciones, favorables a los obreros. El Partido denunció esta maniobra de la dictadura y dio a conocer ampliamente la aprobación en dicho Congreso de las tres reivindicaciones. En el llamamiento de octubre de 1955 explicó la importancia de que estas reivindicaciones hubiesen adquirido, al ser aprobadas, el carácter de una plataforma legal y común a todos los trabajadores de España.

Las tres reivindicaciones se convirtieron en bandera de combate de los trabajadores, que utilizaban las más variadas formas para luchar por ellas.

En febrero de 1956, el PCE volvió a dirigir un llamamiento a los trabajadores aconsejándoles prepararse a utilizar la huelga general si el Gobierno no otorgaba un aumento de salarios.

La idea de la huelga fue tomando cuerpo y extendiéndose por el país. Ante el temor de que se repitieran las [254] manifestaciones y protestas de 1951, el Gobierno decretó en marzo de 1956 un aumento de salarios de un 16 % prometiendo otro del 6% para el otoño. Estas decisiones no daban satisfacción a los trabajadores. El 9 de abril, los obreros de Pamplona se declararon en huelga exigiendo un salario

mínimo de 75 pesetas. La huelga se generalizó en la capital navarra y se corrió a varios pueblos de la provincia y después a Guipúzcoa, Barcelona y Valencia, abarcando a 140.000 obreros. El movimiento huelguístico tuvo repercusiones en otras provincias.

En el verano de 1956 cobraron una amplitud inusitada las acciones reivindicativas, lo que obligó al Gobierno a encargar a los sindicatos verticales una encuesta sobre el «problema salarial». Muchas secciones sindicales respondieron planteando la necesidad de establecer el salario mínimo vital.

Al mismo tiempo, una gran parte de los trabajadores católicos participaba en la protesta. El ambiente que se respiraba en fábricas y talleres llegó a preocupar profundamente a la Iglesia; en una declaración hecha pública el 15 de agosto, los arzobispos españoles reconocían que los obreros vivían en la mayor indignación y que tenían derecho a un salario más elevado.

El 1º de octubre de 1956, el Partido dirigió a los trabajadores un tercer llamamiento sobre el problema de los salarios. En él se decía que los comunistas no eran partidarios de la huelga por la huelga, pero que cuando los trabajadores veían cerrados todos los cauces para realizar sus aspiraciones, la huelga era legítima y necesaria.

Haciendo eco al llamamiento del Partido se levantaba por todo el país una marejada de acciones reivindicativas, de protestas, de reclamaciones, de recogida de firmas, a la que los sindicatos no podían substraerse.

Ante esta presión incontenible, el Gobierno franquista tuvo que retroceder; a finales de octubre de 1956 decretó un nuevo aumento de salarios, no del 6% como había anunciado, sino muy superior.

Esto representó una gran victoria de los trabajadores que reflejaba los progresos realizados por la clase obrera desde 1951. Su significado era tanto mayor por cuanto había sido lograda bajo la dictadura fascista. «La lucha de las masas [255] lo decide todo», había dicho reiteradamente el Partido. Los hechos vinieron a confirmarlo.

La atención que el Partido prestó a la lucha por el aumento de los salarios tuvo gran importancia para organizar a la clase obrera, unirla y elevar su conciencia política.

La política de Reconciliación Nacional

A principios de febrero de 1956 empezó a circular por Madrid un **manifiesto** firmado por universitarios y conocidos intelectuales que solicitaban la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, con el fin de crear una organización estudiantil liberada de la tutela de Falange.

A las provocaciones y amenazas con que ésta acogió el manifiesto respondieron los universitarios con huelgas y manifestaciones. Los días 8 y 9 de febrero cerca de dos mil jóvenes recorrieron las calles de la capital al grito de: «¡Abajo el SEU! ¡Abajo Falange! ¡Queremos un Congreso democrático!». Falange trató inútilmente de llevar la lucha al terreno de la violencia armada.

Los sucesos de febrero de 1956 pusieron de relieve que la crisis política del régimen, iniciada en 1951, entraba en una fase más aguda y abierta. El proceso de disgregación que venía destruyendo a Falange había llegado, en lo fundamental, a su culminación. Falange había dejado de existir como Partido político dirigente: era un cadáver en pie. Paralelamente comenzaba el proceso de formación de nuevos partidos burgueses. El rasgo más característico de aquellos acontecimientos fue que, al lado de un movimiento estudiantil impregnado de rebeldía, hacía acto de presencia públicamente una oposición liberal burguesa. La aparición de estas fuerzas políticas antifranquistas de nuevo cuño, dentro de España, era un hecho de importancia, un cambio sustancial en toda la situación.

La nueva oposición antifranquista, aunque incipiente todavía, iría tomando formas de expresión cada vez más precisas y cristalizando en diversas corrientes políticas, entre las que se distinguirían, bien pronto, dos predominantes: una [256] corriente liberal, que abarcaba diversos matices que iban desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo progresista de una parte de la juventud intelectual; y otra que pudiera llamarse de la Democracia Cristiana, la más importante por la previsible vastedad de su base social. En su ala derecha estaban los hombres y grupos que creían servir mejor a las clases dominantes con un deslindamiento, aunque fuera tardío, de las posiciones políticas de la Iglesia respecto a las de la dictadura, y que se inclinaban claramente a la restauración monárquica. En el centro, se situaban fuerzas más afines a los grupos liberales y adictas a las formas parlamentarias,

que se declaraban accidentalistas en cuanto a los problemas institucionales. Y a la izquierda se iba desarrollando un movimiento nuevo en la trayectoria del catolicismo español, un movimiento progresista que se esforzaba en comprender y defender las aspiraciones de las masas trabajadoras.

Al mismo tiempo, intensificaban su actividad los monárquicos que aspiraban a impedir cambios democráticos profundos en el país, a fin de garantizar a la oligarquía monopolista el disfrute de las riquezas amasadas en los años de fascismo.

De esta suerte, España asistía nuevamente a un proceso de reagrupación de las fuerzas políticas en el campo burgués, reflejo del aumento de la presión de las masas trabajadoras y de la agudización de las contradicciones de clase. Este reagrupamiento, que se operaba al margen del régimen y frente a él, constituía una de las manifestaciones externas inequívocas de la descomposición política del franquismo. Con la dictadura discrepaban fuerzas sociales que antaño habían integrado el campo franquista o se habían mantenido en actitud expectante. Una parte de los hombres que dirigían las nuevas formaciones políticas procedían de Falange o de distintos sectores del llamado «Movimiento Nacional».

Esto significaba que una nueva línea divisoria deslindaba los campos: ya no era la de la guerra civil, la divisoria entre «nacionales» y «rojos» o entre «vencedores» y «vencidos»; era la que había trazado la dictadura franquista durante diecisiete años de dominación, en el curso de los cuales la [257] mayoría de los españoles que habían combatido al lado de Franco sufrieron también, en mayor o menor grado, del despotismo de la oligarquía monopolista y terrateniente. En esos años, la contradicción entre la oligarquía y el resto de la sociedad había ido acentuándose hasta colocarse en primer plano: en función de ella fueron enfrentándose con la dictadura capas sociales que un día la apoyaron.

Analizando este cambio, el Partido llegó a la conclusión de que maduraba la posibilidad de un entendimiento para la lucha contra la dictadura entre fuerzas que veinte años antes habían combatido en campos opuestos. La posibilidad de suprimir la dictadura sin pasar por una nueva guerra civil se convertía en algo hacedero.

Estas conclusiones llevaron al Partido a formular la política de Reconciliación Nacional, expuesta en la declaración del Comité Central de junio de 1956, en vísperas del XX aniversario del comienzo de la guerra civil.

La política de Reconciliación Nacional representaba una propuesta de compromiso entre la clase obrera y otras clases y sectores sociales, a fin de sustituir la dictadura franquista por un régimen de libertades cívicas sin abrir un nuevo período de luchas sangrientas y guerras intestinas.

Una condición imprescindible para este compromiso era cancelar las responsabilidades de la guerra civil y las derivadas de ella en ambos campos.

La declaración decía:

«El Partido Comunista representa sin duda a la parte del pueblo que más ha sufrido en estos veinte años; a la clase obrera, los jornaleros agrícolas, los campesinos pobres, la intelectualidad avanzada. Si de hacer el capítulo de agravios y duelos se tratase, nadie lo tendría mayor que el nuestro... Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se establezca en España... Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad». [258]

Así pues, lo que daba sentido a la política de Reconciliación Nacional, era, en primer lugar, el hecho de que la lucha de clases en nuestro país había entrado en una etapa en la que pasaba a primer plano la contradicción que enfrenta a diversas clases de la sociedad –desde el proletariado hasta la burguesía nacional– con la oligarquía monopolista, que tenía en la dictadura del general Franco su instrumento de opresión; en segundo lugar, el que España había sido teatro de una dolorosa y larga guerra civil cuyas consecuencias, había que liquidar.

Con la política de Reconciliación Nacional, el Partido Comunista presentaba a todo el país una propuesta de poner punto final a la dolorosa sucesión de guerras intestinas, pronunciamientos y violencias sangrientas que estremecieron el último siglo y medio de la historia de

España. Para lograrlo era fundamental forjar la unidad de las masas populares frente a la oligarquía monopolista, de manera que ésta no pudiera jamás recurrir a la violencia ni enfrentar de nuevo a una parte del pueblo contra otra.

El XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y la Conferencia de Moscú

En febrero de 1956 se reunió el XX Congreso del PCUS que ha sido uno de los acontecimientos sobresalientes de la historia del movimiento comunista internacional. Sus conclusiones representaron una aportación creadora al acervo teórico del marxismo. Reflejaban la nueva situación creada en el mundo como consecuencia de los grandes cambios operados a favor del socialismo y, sobre todo, de la formación, después, de la segunda guerra mundial, del poderoso sistema de Estados socialistas.

El XX Congreso declaró que en nuestros días la guerra no es fatalmente inevitable. La existencia del poderoso campo socialista, su colaboración con otros Estados antiimperialistas para la defensa de la paz y la lucha de las masas populares con el mismo objetivo habían modificado la [259] correlación de fuerzas en favor de la paz. A despecho de que el imperialismo subsistía y de que llevaba en sí la tendencia a la agresión, la guerra mundial podía ser conjurada si las fuerzas interesadas en ello luchaban con energía.

El XX Congreso del PCUS subrayó la importancia que en la nueva situación internacional tenía el principio de la coexistencia pacífica. El socialismo no necesita «exportar la revolución» ni recurrir a la guerra para triunfar. En la competencia pacífica entre el mundo socialista y el capitalista saldrá triunfante el primero.

El XX Congreso desarrolló también las ideas de Lenin sobre la variedad de formas de paso al socialismo según las particularidades de cada país. El Congreso centró la atención en el problema del paso pacífico al socialismo. Antes, cuando el capitalismo constituía un sistema mundial único, la posibilidad de tránsito pacífico al socialismo era remotísima. En cambio, en la actualidad existe y se fortalece el campo mundial del socialismo, el movimiento obrero y comunista se ha robustecido en todo el mundo, la perspectiva de agrupar a la gran ma-

yoría de la población contra el poder de los monopolios es perfectamente viable; como consecuencia de estos factores, en una serie de países se puede crear tal superioridad de las fuerzas del progreso sobre las de la reacción, que impida a estas últimas recurrir a la violencia para mantener su poder y abra una vía pacífica y parlamentaria al socialismo sin insurrección armada ni guerra civil.

El XX Congreso del PCUS condenó el culto a la personalidad ajeno a la ideología marxista que ha rechazado siempre todo intento de contraponer el héroe individual a las masas populares, auténticas creadoras de la historia. El Congreso declaró que el culto a la personalidad de Stalin había menoscabado el papel del Partido y de las masas populares, había limitado la democracia interna y la dirección colectiva en el Partido, dando lugar a graves infracciones de la legalidad socialista.

En torno a los problemas planteados por el XX Congreso del PCUS se abrió en el movimiento comunista y obrero internacional, una amplia discusión. Los oportunistas y revisionistas intentaron utilizar las tesis del Congreso y su audaz [260] autocrítica del culto a la personalidad para atacar a la unidad del campo socialista y de los partidos comunistas, a la URSS y al PCUS, a los principios mismos del marxismo-leninismo.

El fracaso de estos ataques y de la campaña anticomunista desencadenada por el imperialismo se pusieron de relieve en la Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros, reunidos en Moscú en noviembre de 1957, y en la que participó, al lado de las delegaciones de otros 63 partidos hermanos, una del Partido Comunista de España. La Conferencia adoptó y desarrolló las tesis básicas del XX Congreso del PCUS.

En el Manifiesto de la Paz, firmado por todas las delegaciones asistentes, se decía que la lucha contra el peligro de guerra era la tarea primordial de todos los partidos comunistas.

En una declaración suscrita por los 12 Partidos Comunistas y Obreros de los países socialistas (cuyo contenido fue aprobado posteriormente por los otros partidos) quedaron definidas las posiciones programáticas esenciales, comunes al conjunto de los partidos comunistas.

La Conferencia indicó que el contenido fundamental de nuestra época es el paso del capitalismo al socialismo, iniciado cuarenta años atrás por la gran Revolución Socialista de Octubre.

Subrayó también que el revisionismo –cuya raíz es siempre la influencia o la presión de la burguesía– constituía el peligro principal para el movimiento obrero y comunista.

Junto con todos los partidos comunistas, el PCE aprobó las tesis del XX Congreso del PCUS y la declaración de la Conferencia de Moscú. El Partido tomó posición contra el revisionismo en todos los problemas palpitantes planteados en el mundo después del XX Congreso: defendió la unidad del campo socialista y del movimiento comunista internacional sobre la base del marxismo-leninismo, se alzó contra la especulación escandalosa que el imperialismo intentó hacer de los sucesos contrarrevolucionarios de Hungría y condenó las [261] posiciones antimarxistas adoptadas en el Congreso de Ljubliana por la Liga de los Comunistas de Yugoslavia.

De las duras pruebas a que fueron sometidos en ese período, los partidos comunistas salieron más fuertes, más unidos entre sí.

El XX Congreso enriqueció a los partidos comunistas política e ideológicamente, les ayudó a restablecer los principios leninistas de organización y dirección.

El pleno de agosto

En agosto de 1956, el C.C. del PCE celebró una reunión plenaria de singular importancia, en la que dedicó mucha atención al problema del sectarismo y de la vulneración de los métodos leninistas de dirección y funcionamiento del Partido. Sobre este punto presentó un informe el camarada Santiago Carrillo.

No era casual que este problema tuviese que ser colocado, una vez más, sobre el tapete.

Si el sectarismo había sido un obstáculo que el Partido hubo de combatir de manera casi permanente a lo largo de su historia, en momentos en que necesitaba movilizar y unir la más amplia gama de fuerzas políticas y sociales para lograr la desaparición de la dictadura su eliminación era una imperiosa necesidad.

Nuestro Partido hizo un esfuerzo para descubrir las causas de la vivacidad del sectarismo en su seno. A su juicio, éstas dimanaban tanto de las características de la estructura económico-social del país, como de ciertas particularidades del desarrollo histórico del Partido.

El hecho de que en España no se hubiera llevado a cabo la revolución democrático-burguesa dio por resultado una extraordinaria tensión en la lucha de clases y en el área de la acción política que las castas dominantes marcaron con el hierro del fanatismo y de la intransigencia. Ello impregnó de sectarismo la vida política y social, fenómeno éste al que el Partido no podía ser impermeable.

De otro lado, facilitó la floración del sectarismo en el [262] PCE el pobre desarrollo teórico del movimiento obrero español, que los comunistas heredaron y han ido venciendo a través de un proceso complejo y difícil.

El Partido había logrado serios éxitos en la lucha contra el sectarismo y su línea venía caracterizándose por la amplitud y la flexibilidad; ejemplos de ello habían sido su política de unidad obrera y Frente Popular, su lucha por la Unión Nacional y, finalmente, su política de Reconciliación Nacional. El viraje de 1948 había significado, asimismo, un golpe al sectarismo en el dominio de la táctica.

Sin embargo, en el funcionamiento interno del Partido persistían concepciones y métodos sectarios que entorpecían la aplicación audaz y consecuente de la amplia línea política del Partido y el propio desarrollo de éste. El origen de tales concepciones y métodos debía buscarse en algunas particularidades históricas del desarrollo del PCE. Las tres cuartas partes de su existencia habían transcurrido en la ilegalidad. La lucha clandestina le impuso serias restricciones de la democracia interna, que fácilmente derivaban en excesos de centralismo y prácticas autoritarias. El período de la guerra civil tampoco fue favorable al desarrollo de métodos más democráticos: la propia naturaleza de las tareas con que hubo de enfrentarse el Partido y su dedicación total a la lucha armada contra el fascismo, dejaron su sello en el estilo de trabajo y hasta en ciertas formas de dirección.

La necesidad de acabar con estas concepciones y métodos sectarios se hizo sentir con particular fuerza a partir de 1951, cuando en la lucha antifranquista se abrió una nueva etapa que presentaba grandes exigencias al Partido. Ese año Dolores Ibárruri abordó esta cuestión en su

«Informe ante un grupo de militantes y de cuadros del Partido». En 1952, el Comité Central, en su «Carta a las organizaciones y militantes», insistió en la necesidad de poner fin a los métodos de «orden y mando». Un paso muy importante hacia la corrección de los defectos señalados fue dado en el V Congreso, que aprobó los nuevos Estatutos del Partido.

Sin embargo, tampoco después del Congreso logró el Partido restablecer plenamente en su vida interna los principios del centralismo democrático de crítica y de autocrítica, [263] de dirección colectiva, &c. Se hizo evidente la contradicción entre los acuerdos del Congreso y los métodos antileninistas que continuaban aplicándose. La profunda autocrítica del XX Congreso del PCUS sobre el culto a la personalidad de Stalin y sus perniciosas consecuencias ayudó de manera decisiva a los comunistas españoles a corregir los errores señalados. El PCE comprobó que el culto a la personalidad había tenido también repercusiones negativas en su seno, dificultando la extirpación de los métodos sectarios de dirección; que sin eliminar el culto a la personalidad no era posible restablecer plenamente los principios leninistas de organización del Partido. En efecto, el culto a la personalidad, la exageración del papel de los dirigentes se traducían en la exageración de sus atribuciones; ello conducía a suplantar la dirección colectiva por la unipersonal, lo que originaba a menudo serias deficiencias en el trabajo e innecesarias limitaciones de la democracia interna, coartaba la crítica vivificadora de los militantes e introducía elementos de dogmatismo en el Partido precisamente en un período de grandes cambios, que exigía de él un esfuerzo teórico creador para no quedar a la cola de los acontecimientos.

El Pleno de agosto adoptó una resolución aprobando el informe de Dolores Ibárruri sobre los cambios en la táctica del Partido y la política de Reconciliación Nacional; restableció en la plenitud de sus funciones al Comité Central y reforzó la Dirección del Partido. Después del Pleno la dirección colectiva fue erigida en principio inamovible, se reavivó la crítica y la discusión en los organismos de dirección y de base, se reforzó la democracia interna en la medida que lo permiten las condiciones limitativas de la clandestinidad y se abrió cauce propicio a la aplicación de métodos más acordes con los principios leninistas.

La reunión plenaria del Comité Central fue la culminación, en lo fundamental, de un largo y serio esfuerzo para vencer el sectarismo en el dominio de la táctica y de los métodos de trabajo y restablecer los principios leninistas de dirección.

La Jornada de Reconciliación Nacional

El año 1957 fue inaugurado con un nuevo boicot del pueblo de Barcelona al transporte urbano, como protesta por el aumento de las tarifas. La iniciativa de la acción correspondió a los comunistas catalanes y encontró eco favorable en otras fuerzas políticas. Junto a los llamamientos del PSU de Cataluña invitando al boicot, corrieron las octavillas de nacionalistas de izquierda y derecha, de cristianos progresistas, liberales, cenetistas y otros grupos políticos.

El boicot de Barcelona tuvo gran resonancia en toda España. La organización madrileña del Partido, recogiendo la simpatía que despertó aquella acción, llamó a realizar otra semejante en la capital de España. Los días 7 y 8 de febrero hubo boicot al transporte de Madrid; y el hecho de que se hiciera sin que previamente hubieran subido las tarifas subrayó su abierto carácter político antifranquista.

Si las manifestaciones estudiantiles de 1956 habían provocado la caída de dos ministros y descubierto la descomposición total de Falange, las acciones de Barcelona, Madrid y otros lugares en 1957 tuvieron ya como consecuencia una crisis total de Gobierno. En esta crisis, Falange fue sustituida, en gran parte, dentro del Gobierno por militares incondicionales del dictador y por hombres de la secta políticoreligiosa Opus Dei, cuya ideología se desarrolla en la línea del pensamiento contrarrevolucionario tradicional.

En sus notas del 9 de febrero y del 2 de marzo de 1957 el Partido Comunista llamó la atención sobre el hecho de que la crisis política de la dictadura sólo podría resolverse con el alejamiento de Franco del Poder y respondió a la gran cuestión planteada ante las fuerzas políticas y sociales de España: ¿En qué dirección deberían producirse los cambios que el país reclamaba?

El Partido Comunista adelantó la idea de que una solución transitoria para reemplazar a la dictadura con el apoyo de ministros sectores del país –incluido el del propio Partido–, podría ser un Gobierno com-

puesto por elementos liberales de diverso matiz, que fuese una amplia y efectiva amnistía, iniciase el restablecimiento de las libertades públicas, se [265] preocupase del mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de las masas y preparase una consulta al pueblo.

Como había advertido el PCE, el nuevo Gobierno no alivió la situación de las masas ni pudo detener su acción. Los boicots de Barcelona y Madrid tuvieron repercusiones inmediatas en Sevilla, Valladolid, Alcoy y otros lugares. En marzo se produjo una huelga de los mineros asturianos, que empezó en el pozo «María Luisa», en Ciaño de Langreo, y fue secundada en seguida en el Fondón, La Nueva y otras minas del Valle del Nalón, mostrando el renacer de la conciencia política del proletariado asturiano y la combatividad de sus mujeres, que, animando a los mineros en su lucha, recorrieron la zona recabando solidaridad para ellos.

El descontento contra la política de la dictadura se acentuaba también en el campo. En los Congresos regionales y especialmente en la VI Asamblea Nacional de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, celebrada por entonces, se aprobaron reivindicaciones que reflejaban la oposición de los campesinos a la política agraria de la dictadura.

Ganaba en dinamismo la acción estudiantil, muy intensa durante los boicots de Barcelona y Madrid. Particular resonancia tuvo la celebración en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, el 24 de febrero, en presencia de los propios policías llegados para impedirlo, del «Primer Congreso Libre de Estudiantes» en el que se aprobaron conclusiones de abierta factura antifranquista. El Gobierno extremó la represión contra la Universidad: tan sólo en Barcelona fueron sancionados o detenidos por aquellos días más de trescientos estudiantes. La acción represiva del Gobierno suscitó la protesta de intelectuales españoles de gran prestigio, que firmaron un escrito solicitando la anulación de las sanciones impuestas a los estudiantes.

En septiembre de 1957 se reunió el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista. Su decisión más importante fue la de proponer la realización de una Jornada de Reconciliación Nacional.

La tendencia de las últimas luchas a generalizarse, a extenderse de una a otra localidad y de una región a otra, había llevado a millones de españoles a esta reflexión: «¡Si [266] esto se hiciese en escala nacional!» Recogiendo esta idea colectiva de las masas, el Partido elaboró

la propuesta de celebrar una Jornada de Reconciliación Nacional contra la carestía de la vida, contra la política económica de la dictadura, por la amnistía para los presos y emigrados políticos y por las libertades cívicas.

El informe presentado al Pleno por el camarada Simón Sánchez Montero, del Buró Político, explicaba el carácter de la Jornada. El Partido la concebía como la culminación de una serie de pequeñas y grandes acciones, como la obra de miles de organizadores y agitadores de todas las clases sociales, de todas las ideologías y partidos antifranquistas; como la coincidencia de católicos, monárquicos, liberales, republicanos, nacionalistas, socialistas, cenetistas y comunistas. Dada la imposibilidad de manifestarse en España por medio del sufragio ciudadano, la Jornada podría ser, en el concepto del Partido, un plebiscito nacional, una advertencia pacífica a quienes se obstinaban en hacer oídos sordos al malestar de la nación.

Poco después del Pleno tuvieron lugar las elecciones sindicales; el PCE había llamado a los obreros a considerarlas «como una verdadera lucha, presentándose a ellas unidos en cada empresa o lugar de trabajo, con sus propios candidatos». Este llamamiento fue secundado en muchas partes. Las elecciones sindicales se transformaron en una lucha política contra la dictadura. Su resultado permitió destacar a centenares de dirigentes obreros, elegidos entre los más combativos y fieles a su clase.

La idea de celebrar una Jornada de Reconciliación Nacional adquirió pronto amplia difusión. Para contrarrestar sus efectos, a comienzos de 1958 el Gobierno de Franco recurrió a la aparatosa y torpe escenificación de un «complot comunista»: fueron detenidos cerca de un centenar de jóvenes obreros, estudiantes y empleados con el pretexto de que habían asistido al VI Festival Mundial de la Juventud. De ellos quedaron en prisión 44, acusados de propugnar la Jornada de Reconciliación Nacional.

Este nuevo atropello de la dictadura aumentó la irritación [267] que suscitaban las crecientes dificultades económicas y el desasosiego provocado por la guerra de Ifni.

En los momentos en que las acciones colonialistas de la dictadura de Franco en África se traducían en una nueva efusión de sangre marroquí y española y creaban el peligro de una guerra entre Marruecos y

España se reunieron las delegaciones del Partido Comunista Marroquí y del Partido Comunista de España para reafirmar en una declaración común la amistad de ambos pueblos.

Nuestro Partido proclamó que los intereses de los dos países exigían aplicar de manera consecuente la declaración hispano-marroquí del 7 de abril de 1956, por la que el Gobierno de España se había comprometido a «respetar la unidad territorial del Imperio jerifiano».

Al influjo de las tensiones económicas y políticas en presencia, comenzó de nuevo a electrizarse la atmósfera social española. Los llamamientos del Partido a preparar la Jornada caían en terreno abonado. A principios de marzo de 1958 fueron a la huelga en Asturias 30.000 mineros, solicitando mejoras de salario. La conducta brutal de las autoridades, que respondieron a las justas demandas obreras con el «lock-out» y l encarcelamiento de numerosos enlaces y trabajadores, sólo sirvió para echar leña al fuego. Iniciada en el Valle del Nalón, la huelga se extendió rápidamente a La Camocha, saltó al Valle del Caudal, donde afectó a varias minas, y llegó incluso a la cuenca minera de León.

La huelga minera agitó a todo el país. Respondiendo a un llamamiento del Partido Socialista Unificado de Cataluña, se lanzaron a la lucha los metalúrgicos y obreros textiles de Barcelona, en un movimiento de solidaridad en el que también hicieron acto de presencia los estudiantes. Bien pronto, la ola de huelgas alcanzó a Guipúzcoa. En Valencia se registraron acciones de protesta en varias empresas importantes.

Estas poderosas acciones eran ya el comienzo de la Jornada de Reconciliación Nacional, y la señal para extenderla a toda España. El Partido, de acuerdo con los grupos le la oposición que accedieron a participar en la Jornada, fijó paralizar el día 5 de mayo.

En unos días los comunistas y otros antifranquistas [268] regaron virtualmente el país de millones de octavillas, que llegaron a ciudades y pueblos donde hasta entonces no había penetrado la propaganda escrita del Partido y de la oposición antifranquista. La movilización política de las masas fue extraordinaria.

El día 5 de mayo hubo huelgas parciales o completas en diversas empresas de la construcción de Madrid y otras ciudades; boicot a los transportes urbanos en la capital y en otros puntos; abstención de

comprar ese día en casi toda España; huelgas de los obreros agrícolas en numerosos pueblos andaluces y extremeños. La participación de extensas masas campesinas, en zonas donde el peso del proletariado agrícola era muy considerable, fue uno de los aspectos más importantes de la Jornada.

Mediante toda esta múltiple gama de acciones pacíficas, ese día expresaron su aversión a la dictadura franquista millones de hombres y mujeres de la ciudad y del campo.

El Gobierno franquista empleó contra la Jornada todo su aparato represivo. El Ejército fue movilizado con la excusa de un desfile militar el 4 de mayo; las grandes ciudades fueron ocupadas militarmente. La VI Flota estadounidense se situó en los principales puertos españoles del Mediterráneo, como respaldando a la dictadura con su presencia. Durante las huelgas de Asturias, Barcelona y Guipúzcoa y en vísperas del 5 de mayo fueron detenidos millares de enlaces sindicales y de simples trabajadores; entre ellos cayeron en manos de la policía dirigentes comunistas como Miguel Núñez, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña, José María Laso y otros. Además de estos golpes policíacos, la dictadura desató una histórica campaña de prensa y radio para falsear el carácter pacífico de la acción, llegando hasta la más burda falsificación de documentos y periódicos del Partido Comunista.

El principal objetivo de esta operación era intimidar a las fuerzas conservadoras y liberales de la oposición a fin de dejar aislado al Partido Comunista. Pero fue la dictadura quien resultó aislada: Franco no logró sacar a la calle contra la Jornada a ningún sector de la población, a ninguna fuerza política. Y por el contrario, junto a los comunistas [269] participaron en la Jornada grupos de socialistas, republicanos, confederales y miembros de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), si bien las direcciones nacionales del PSOE y de los partidos republicanos, de la CNT y de la democracia cristiana se negaron a tomar posición en pro de la Jornada, con lo que la restaron posibilidades de éxito.

No obstante, como dijo el Buró Político del PCE en su declaración del 20 de mayo de 1958, la Jornada y las acciones que la prepararon fueron el primer movimiento político organizado, de carácter nacional, contra el franquismo.

La Jornada permitió a millones de españoles conocer la política de Reconciliación Nacional del Partido Comunista y expresarle su adhesión. La forma en que se desarrolló la Jornada hizo patente la sinceridad del Partido al proponer el desplazamiento de la dictadura por una vía pacífica.

La Jornada de Reconciliación Nacional impulsó las corrientes unitarias en el campo antifranquista y ayudó a las masas populares, encabezadas por el Partido Comunista, a pasar a la ofensiva en el terreno político contra la dictadura franquista.

La Huelga Nacional Pacífica

A comienzos de 1959 nuevamente salieron a la superficie síntomas delatores de la gravedad alcanzada por la crisis política de la dictadura. La situación de las masas empeoró como consecuencia del aumento de la carestía, la inestabilidad económica minó la confianza en el régimen incluso de ciertos sectores de la oligarquía. Un escandaloso asunto de exportación de divisas, en el que estaban implicados directamente altas personalidades del régimen, puso de relieve la corrupción e insolvencia del Estado franquista.

Si todas estas pruebas de la corrupción y la incurria del régimen soliviantaban a la opinión, no la indignaba menos su inhumana actitud hacia los presos y exiliados políticos. La campaña en pro de la amnistía cobraba cada vez mayor amplitud.

A la tragedia de hombres que llevaban 10, 15 y hasta 20 [270] años en los presidios por delitos de opinión derivados de la guerra civil; al drama de los millares y millares de exiliados forzosos, se unían los casos de trabajadores, estudiantes intelectuales encarcelados, en fechas recientes, por su participación en el movimiento opositor.

Las esposas y familiares de los encarcelados consiguieron en un plazo breve recoger millares y millares de firmas de españoles de todas las clases sociales e ideas políticas solicitando la libertad de los presos antifranquistas; entre esos españoles figuraban no pocos párrocos, alcaldes, industriales, &c.

A las reiteradas declaraciones de Franco negando la existencia de presos políticos en España, replicaban valerosamente las esposas de éstos organizando delegaciones que visitaban a las jerarquías eclesiásticas y

civiles, llegando hasta los ministros y el Presidente de las Cortes para recabar la amnistía.

En ayuda de los presos y de sus familiares reverdecían las viejas tradiciones solidarias de la clase obrera española. En las fábricas y en las barriadas populares tomaba cuerpo y extensión un emocionante movimiento de asistencia fraternal; en muchos casos, los obreros dedicaban una parte de sus menguados ingresos para asegurar a la familia del compañero encarcelado el pago del salario.

También comenzó a avivarse el disgusto y la protesta de la abogacía española contra los procedimientos arbitrarios y antijurídicos aplicados por la dictadura a sus adversarios políticos. No pocos Colegios de Abogados se pronunciaron por la supresión de las jurisdicciones especiales y por la anulación de las leyes terroristas promulgadas por el franquismo.

La manifestación más elocuente de la amplitud nacional que alcanzaba el movimiento en pro de la amnistía era la actitud adoptada por las más altas personalidades de la cultura española. En diversas y significativas ocasiones, elevaron su voz en defensa de las víctimas de la represión fascista. En el verano de 1959, reiteraron su petición al ministro de Justicia en una carta de la que son las siguientes palabras: [271]

«Los obstáculos que impiden la reconciliación de los españoles deben ser eliminados. Nosotros pensamos que un paso muy necesario y eficaz en este camino, sería la amnistía general para todos los presos políticos y exiliados».

En los primeros meses de 1959 hizo su aparición pública Unión Española, partido político de signo monárquico. Ello mostraba que ciertos grupos de la oligarquía financiera empezaban a distanciarse del régimen franquista.

Unión Española lanzó un llamamiento a las fuerzas de la oposición burguesa y al Partido Socialista, invitándoles a apoyar la fórmula monárquica. Surgía el peligro de que se creara un bloque para negociar con Franco una salida antipopular, antidemocrática, que diera paso a una dictadura monárquica de los banqueros y de los latifundistas, del alto clero y de los generales.

El Partido Comunista estimaba que, frente a esa falsa solución al problema español, era preciso ofrecer a las masas otra en consonancia con sus intereses, una solución democrática, realista y que permitiese, al mismo tiempo, concentrar todas las energías en la lucha contra el enemigo principal: la dictadura franquista.

El Partido apeló nuevamente a las masas en las que ya germinaba, bajo los efectos de las dificultades económicas y de la corrupción reinante, la idea de ir a una gran acción nacional en la primavera de 1959. Teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones comunistas en varias ciudades, la Dirección del Partido resolvió llamar a una Huelga Nacional Pacífica. No se le ocultaban las dificultades que una empresa de esta talla entrañaba bajo una dictadura fascista, pero consideraba que la huelga era posible en centros importantes del país, dada la favorable atmósfera reinante entre las masas.

El período de preparación de la huelga, que se extendió de febrero a junio de 1959, no fue sólo un período de lucha por movilizar y organizar a las masas en torno a la bandera de la Huelga Nacional Pacífica; fue además, una batalla por los aliados, que el Partido libró sin un minuto de reposo y plenamente consciente de que el problema de la unidad no podía resolverse desligado del problema de la lucha. La simpatía con [272] que las masas acogieron la iniciativa del Partido, el enorme ambiente de huelga que se creó en el país, colocó a los distintos grupos de la oposición ante la disyuntiva de sumarse a la acción o quedar al margen de un movimiento en el que el PCE aparecía como único iniciador y organizador.

A la huelga del 18 de junio llamaron, junto con el PCE y con el PSUC, la Acción Democrática, Frente de Liberación Popular, organizaciones del interior del Partido Socialista. Agrupación Socialista Universitaria, Comités de Coordinación Universitaria de Madrid y Barcelona, Movimiento Socialista Catalán, Partido Demócrata Cristiano de Cataluña, Movimiento Obrero Católico Catalán, Comité Regional de la CNT de Cataluña en el Exilio, Nueva República, Esquerra de Cataluña, Front Nacional Catalá, Unión Democrática Montañesa (democristianos, comunistas y F.L.P.) y Frente Revolucionario Canario (comunistas, socialistas, democristianos, republicanos, obreros católicos y «Libertad para España»).

Era la primera vez que diversas fuerzas de la oposición llegaban a una coincidencia para convocar una acción de masas contra la dictadura franquista. Sin embargo, esa coincidencia no se plasmó ni en un documento conjunto ni en la creación de un órgano unitario entre las fuerzas citadas, lo que restó eficacia a la convergencia de objetivos.

El esfuerzo del Partido en la difusión de la propaganda de la huelga, fue enorme. Tan sólo en Madrid difundió un millón de octavillas. En Barcelona el PSUC repartió en un mes 600.000 hojas volantes. Con los comunistas colaboraron, demostrando particular entusiasmo, el Frente de Liberación Popular y los estudiantes socialistas. Durante varias semanas, tuvo lugar una campaña política impresionante por su amplitud e intensidad.

La Huelga Nacional Pacífica fue una importante acción de masas contra la dictadura, si bien no tuvo la extensión que las simpatías que suscitó hacía presumible.

El hecho más resonante fue el paro en masa de los trabajadores del campo en Andalucía y Extremadura, y muy particularmente en Córdoba, Sevilla, Jaén y Badajoz. Era la primera vez que los obreros agrícolas participaban tan ampliamente en una huelga política; que ella se produjese, además, [273] bajo la dictadura fascista del general Franco revelaba el alto nivel de conciencia adquirido por las masas del campo.

En la preparación de la huelga, la policía practicó numerosas detenciones: en Madrid, unas quinientas personas, entre las que figuraban el dirigente comunista Simón Sánchez Montero, miembro del Buró Político, Luis Lobato y otros camaradas, así como el dirigente del F.L.P., Julio Cerón Ayuso; en Cataluña más de un centenar de demócratas; en Valencia fue detenido un grupo de antifranquistas.

El Buró Político del Partido hizo una declaración sobre la huelga, exponiendo el enorme alcance político de ésta y explicando por qué no había adquirido mayores proporciones.

A juicio del Partido, los sectores de vanguardia de la clase obrera industrial y agrícola estaban decididos a ir a la huelga, como demostró la participación en masa de los jornaleros. Lo que faltó para un mayor éxito de la huelga no fue conciencia, sino organización.

El Partido subrayaba que lo decisivo es que:

«la unidad se organice en cada lugar concreto, en la acción diaria en defensa de las reivindicaciones económicas y políticas, bajo las formas y con los nombres más asequibles».

Otra de las razones que frenó la extensión de la huelga fue cierta concepción defensiva, muy extendida entre los obreros, consistente en acudir a los lugares de trabajo y, una vez allí, ver cómo concertarse y decidir la huelga.

Influyeron de manera negativa en el desarrollo de la huelga los predicadores de la pasividad, especialmente la Comisión Ejecutiva del PSOE, residente en Toulouse, que aconsejó a los trabajadores, en declaraciones ampliamente difundidas por los radios de los países capitalistas, abstenerse de ir a la Huelga Nacional.

Uno de los resultados más notables de esta acción fue la popularización de la consigna de Huelga Nacional Pacífica, frente a las consignas monárquicas de restauración o de complots militares de espaldas a las masas. Muchos españoles se convencieron de que la Huelga Nacional Pacífica podría [274] abrir una salida pacífica y democrática en la presente coyuntura.

No obstante sus fallos, la movilización del 18 de junio y de los meses que le precedieron fue un gran paso adelante estableció un clima de mayor confianza entre las fuerzas de la oposición. La clase obrera, los sectores más activos y conscientes de la oposición, pese a las detenciones, salieron fortalecidos y enriquecidos con una gran experiencia.

El VI Congreso

Del 28 al 31 de enero de 1960 se reunió el VI Congreso del PCE, con asistencia de delegados del interior y de la emigración.

El Congreso se reunió en una situación internacional sensiblemente distinta a la que existía en el anterior. 1959 había sido el año inicial de un gran viraje en las relaciones internacionales; el retroceso de la guerra fría, el aminoramiento de la tensión y los progresos de la coexistencia pacífica entre el sistema socialista y el sistema capitalista eran los rasgos característicos del viraje. Diversos acontecimientos, y singularmente el viaje a EE.UU. del primer secretario del PCUS y jefe del Gobierno de la URSS, camarada N.S. Jruschov, habían puesto de relieve la evolución operada.

La propuesta de desarme presentada por el Gobierno soviético ante la Asamblea General de la ONU, conmovió a la opinión mundial, estimulando las corrientes en pro del desarme y de la paz. A comienzos de 1960, la URSS dio una nueva prueba de su voluntad de paz al reducir en un tercio sus efectivos militares.

Al presentar su proyecto de desarme total y general, la URSS no expresaba un simple deseo; reflejaba con ella una posibilidad concreta, real, derivada de la nueva situación que se estaba gestando en el mundo.

Desde que la URSS, en octubre de 1957, lanzó el primer satélite artificial de la Tierra, su superioridad en ramas decisivas de la ciencia, de la técnica, de la industria y de la economía en general, ha ido afirmándose de un modo cada [275] vez más patente. El primer país del socialismo ha abierto la era de la conquista del cosmos por el hombre.

Los éxitos de la URSS en el terreno de los cohetes cósmicos y en otras ramas han sido la expresión concentrada del impetuoso avance de las fuerzas productivas de la sociedad soviética, la cual ha entrado en la fase de la construcción del comunismo.

En todos los países del campo socialista, la economía se ha desarrollado a ritmo incomparablemente superior al de los países capitalistas. En 1958 y 1959, China dio grandes saltos adelante en la edificación del socialismo.

La superioridad del socialismo sobre el capitalismo ha elevado el poder de atracción del socialismo sobre las masas trabajadoras y la población de los países capitalistas. Los progresos del socialismo en todos los ámbitos han asestado un golpe al anticomunismo.

En 1959 el movimiento de liberación de los pueblos subyugados alcanzó nuevos éxitos. África era teatro de una gran lucha anticolonialista. El movimiento liberador y democrático cobraba nuevo ímpetu en América Latina; a las puertas mismas de Estados Unidos, Cuba realizaba una revolución agraria, antifeudal y antimperialista.

La potencia alcanzada en todos los órdenes por la URSS y por los demás Estados del sistema socialista mundial –potencia que está totalmente al servicio de la causa de la paz– y el grado de desarrollo de la ciencia y de la técnica contemporáneas, imponen la necesidad de

asentar las relaciones entre los países con diferentes sistemas sociales sobre el principio de la coexistencia pacífica.

Algunos políticos burgueses de EE.UU., Inglaterra, Francia y otros países han empezado a comprender la necesidad de tener en cuenta las nuevas realidades de la situación mundial. Otros, como Adenauer y Franco han seguido colocando minas en el camino de la paz, tratando de hacer del occidente de Europa un foco agresivo, una fortaleza de la reacción.

Las perspectivas alentadoras de paz mundial abiertas ante la humanidad por las iniciativas y los éxitos del campo socialista fueron examinadas en una Conferencia celebrada en [276] Roma en Noviembre de 1959, y en la que tomaron parte los representantes de 17 partidos comunistas de los países capitalistas de Europa, entre los que figuraba el Partido Comunista de España.

En el llamamiento dirigido a los trabajadores y demócratas europeos, la Conferencia insistía en que la eliminación para siempre de la guerra es hoy un objetivo accesible para los pueblos, si bien ello exige que las masas intensifiquen su lucha por aislar y maniatar a los más peligrosos enemigos de la coexistencia pacífica.

Sintetizando la experiencia de diversos partidos comunistas, la Conferencia subrayó la existencia de posibilidades cada vez mayores para la lucha por la democratización de los países, resaltando que uno de los objetivos esenciales de esa lucha tiene que ser la limitación del poder de los monopolios capitalistas. «La marcha hacia el socialismo –afirmaba en su llamamiento– se inscribe en una perspectiva de desarrollo democrático».

La Conferencia llamó a la unidad de todas las fuerzas obreras y democráticas en la lucha por la paz, por la defensa de los intereses de los trabajadores, por el progreso y la renovación de la democracia.

La Conferencia de Roma consideró que uno de los deberes de las fuerzas obreras y democráticas era incrementar su solidaridad con la lucha del pueblo español y llamó a intensificar la acción internacional en pro de la amnistía para los presos antifranquistas.

«La causa de los pueblos de España y de Portugal así como la del pueblo de Grecia, decía el llamamiento de los 17 partidos, es la causa común de todos los hombres libres».

También en la situación interior de España se habían producido cambios sensibles.

La crisis cíclica del capitalismo, iniciada en el mundo en los años 1957-1958, adquirió en nuestro país mayor agudeza que en otras partes. Todas las consecuencias nefastas de la política económica que había venido practicando la dictadura durante veinte años en beneficio de la oligarquía [277] se exacerbaban entonces. El mercado interno se contrajo aún más, las reservas de divisas se agotaron, la desconfianza en el régimen provocó la huida de capitales y el retraimiento de las inversiones. Al borde del colapso económico, el Gobierno franquista concertó en Washington, el 17 de julio de 1959, los convenios de estabilización, aceptando todas las condiciones licitadas por los monopolios internacionales. El plan de estabilización, que comenzó a ser aplicado inmediatamente, comportó el ingreso de España en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) y la probable perspectiva de integración en el Mercado Común. Mediante este plan, el capital monopolista pretendía echar sobre los hombros del pueblo las consecuencias del caos económico que ese mismo capital había provocado e impedir que la bancarrota virtual de la política económica de la dictadura desembocara en una quiebra declarada.

En el curso de pocos meses, dicho plan había lesionado gravemente a todas las capas de la población, descontando a los grupos oligárquicos que eran sus promotores. Habían sido suprimidas las horas «extra», las primas y los pluses para la mayoría de los obreros, lo que implicaba un descenso de los salarios del 40 al 50 por 100. Decenas de miles de trabajadores, sobre todo los «eventuales», habían sido despedidos; la amenaza del paro se generalizaba. La situación de una parte de la burguesía no monopolista se hacía cada vez más difícil.

A las calamidades económicas se unían los fenómenos de descomposición aguda de la dictadura. Ya no se trataba sólo de que la Falange y el mismo «Movimiento», de hecho, habían dejado de existir. La descomposición afectaba ahora a los órganos vitales del Estado.

En el Ejército empezaban a aparecer síntomas de descontento. El mismo fenómeno, más acentuado aún por razones de su mayor contacto con el pueblo, se daba entre las fuerzas de orden público.

En la Magistratura y en los Colegios de Abogados el descontento tomaba a veces formas abiertas, dando lugar incluso a acciones colecti-

vas de cese del trabajo por parte de los magistrados, como había ocurrido en Sevilla. La [278] aparición en un Estado fascista de hechos de esta índole –insólitos en cualquier país capitalista– atestiguaba el grado de descomposición del régimen encabezado por el general Franco.

Frente al debilitamiento de la dictadura destacaba el incremento del movimiento de masas y el creciente influjo de la política de Reconciliación Nacional. Los progresos unitarios, logrados durante la preparación de la huelga nacional de junio de 1959, se habían consolidado, y en cierto modo ampliado, en el período ulterior.

Tales eran los principales rasgos de la situación al reunirse el VI Congreso. Ellos atestiguaban la existencia de condiciones incuestionablemente más favorables para la lucha contra la dictadura.

El VI Congreso ratificó la política de Reconciliación Nacional; sus decisiones tendieron a desarrollarla en las nuevas condiciones, a convertirla en patrimonio de las masas, en el arma capaz de llevar al pueblo a la victoria sobre el fascismo.

En el informe del C.C., presentado por el camarada Santiago Carrillo, se abordaba la siguiente cuestión. ¿Cómo puede la dictadura en una situación económica tan desastrosa y en un estado tan avanzado de descomposición interna, mantenerse aún en el Poder?

El Congreso dio respuesta a esta pregunta: Si la dictadura subsistía no era sólo por las asistencias externas ni tampoco por su fuerza propia. La razón radicaba principalmente en que no existía un acuerdo entre las fuerzas de oposición para una acción conjunta capaz de desplazar a Franco del Poder. Las vacilaciones, la pasividad de una gran parte de las fuerzas de la oposición burguesa y del PSOE, su negativa a entenderse con los comunistas: he ahí lo que retrasaba la liberación de España.

El Congreso consideró, pues, que era preciso centrar la actividad del Partido en dos direcciones fundamentales, muy ligadas entre sí: la intensificación de sus esfuerzos en pro de la unidad y la elevación a un nivel superior de la lucha de las masas.

El Congreso dirigió una carta a todas las fuerzas de la oposición insistiendo en la propuesta que ya había formulado en julio de 1959 de celebrar una Conferencia de «mesa [279] redonda» para contrastar las

opiniones y determinar los puntos en que la coincidencia era posible. La carta precisaba la plataforma que podría servir de base a un acuerdo de todas las fuerzas de oposición, y cuyos puntos eran:

- 1) Lucha unida contra la dictadura hasta conseguir su derrocamiento por la huelga nacional pacífica.
- 2) Restablecimiento de las libertades democráticas sin discriminación.
- 3) Amnistía para los presos y exiliados políticos, extensiva todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil en limbo campos contendientes. Abolición de la pena de muerte.
- 4) Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- 5) Política exterior favorable a la coexistencia pacífica.
- 6) Elecciones constituyentes que permitan al pueblo escoger democráticamente el régimen de su preferencia.

El Partido Comunista no hacía cuestión cerrada de estos puntos: declaraba estar dispuesto a examinar otras sugerencias,

El Congreso advirtió claramente que una persistente negativa del PSOE y de la oposición burguesa a actuar contra la dictadura se traduciría en la reducción de la influencia de dichas fuerzas a la hora de determinar los futuros destinos de España.

Ante la extrema agudización de la situación económica, el Congreso destacó, como la tarea más urgente del Partido, la de volcar, en la lucha contra el plan de estabilización, las energías de la clase obrera y de todas las capas dañadas por la oligarquía.

Esta tarea tenía una importancia decisiva por cuanto significaba defender los intereses vitales de los obreros, de los campesinos, de las capas medias, de la burguesía no monopolista. Tenía además un alcance nacional, pues oponerse al plan de estabilización y a la «integración europea» de España, representaba luchar contra la colonización del país por los monopolios extranjeros, contra la ruina de su industria, contra la despoblación de extensas zonas rurales, por evitar un desastre económico sin precedentes.

El VI Congreso llamó a los comunistas a marchar, a través de múltiples acciones parciales de los obreros y de otros [280] sectores, hacia la preparación de un gran movimiento nacional de protesta, de una gran huelga nacional. Si ésta se llevaba efectivamente a cabo con la

simpatía y el apoyo de las masas con la benevolencia o neutralidad de una parte del aparato represivo, la dictadura no podría sostenerse y se vendría abajo.

El Congreso reelaboró el Programa del Partido. Los cambios producidos en la situación exterior y nacional, los progresos del movimiento comunista internacional en la aplicación de los principios marxistas-leninistas a las condiciones contemporáneas y el subsiguiente estudio por el Partido de los problemas fundamentales de la revolución española, determinaron la introducción de substanciales modificaciones en el Programa.

En el curso del año 1959, las organizaciones del Partido habían discutido los cambios a introducir en el Programa sobre la base del documento del C.C. «Balance de 20 años de la dictadura franquista». Los debates y decisiones del VI Congreso sobre este punto fueron la culminación y el resultado de ese estudio.

El programa aprobado por el VI Congreso abarca, además de las medidas inmediatas para el derrocamiento del franquismo, una parte relativa a los objetivos del Partido en el período democrático ulterior, y otra a sus objetivos finales, es decir, al paso de España al socialismo.

La primera comprende un conjunto de medidas encaminadas a consolidar y desarrollar la democracia en los diversos ámbitos de la sociedad española sin romper los moldes de la estructura burguesa.

La principal reforma de estructura que el Programa preconiza es la reforma agraria tendente a suprimir las supervivencias feudales en el campo español. En esta cuestión, el VI Congreso ratificó la posición elaborada por el C.C. en septiembre de 1957 sobre la base de un informe del camarada Juan Gómez. La lucha por la reforma agraria no se podía llevar a cabo en este período sin tener en cuenta una serie de condiciones peculiares como las siguientes: fusión de la aristocracia terrateniente absentista y del capital monopolista; profunda penetración de éste en la agricultura en detrimento, no sólo de los braceros y campesinos pobres, sino de los campesinos ricos y medios, incluso de ciertos sectores [281] de terratenientes; extraordinaria amplitud, a consecuencia de los factores citados más arriba, de la oposición anti-franquista, en el campo. Estos hechos llevaron al PCE a modificar ciertos aspectos de su posición anterior en cuanto a las formas de efectuar la reforma agraria. En el Programa aprobado por el VI Con-

greso se propone que los latifundios de la aristocracia absentista sean expropiados con indemnización y entregados a los campesinos y jornaleros; de la expropiación quedarían exentos los propietarios que llevan personal y racionalmente la explotación de sus fincas, cualquiera que sea la extensión de estas. Estas propuestas tienden esencialmente a propiciar la creación en el campo de una amplia coincidencia de intereses, a fin de centrar la lucha contra la dictadura franquista, contra la aristocracia absentista y el capital monopolista, y a facilitar así que España emprenda cuanto antes, y con un mínimo de conmociones, el camino de su efectiva democratización.

El Programa incluye asimismo otras reformas de estructura tendentes a limitar el poder de los grandes monopolios en la industria y en la vida económica y política en general.

La parte del Programa referente al paso al socialismo contribuye a disipar equívocos y falsificaciones y a despejar el camino a las alianzas con otras fuerzas en la lucha por la democracia y el progreso.

El Programa traza las grandes líneas del avance hacia el socialismo en una perspectiva de desarrollo democrático: la gran mayoría del país, interesada en el triunfo del socialismo, con la clase obrera a la cabeza, podrá utilizar el Parlamento con el apoyo de un fuerte movimiento de masas, para transformar el carácter de los órganos del Poder, convirtiéndolos en instrumentos que actúen al servicio del pueblo y de la causa socialista. De esa misma forma, se podrá llevar a efecto la socialización de los principales medios de producción.

El paso a formas cooperativas socialistas en el campo se realizará de un modo gradual y sobre la base de la libre voluntad de los campesinos. La integración en una economía socialista de las empresas de la pequeña burguesía y de la burguesía no monopolista, se efectuará de una forma [282] progresiva y teniendo en cuenta los intereses de dichos sectores sociales.

En esa perspectiva, la clase obrera podrá ejercer el Poder y construir el socialismo sobre la base de una democracia parlamentaria con pluralidad de partidos políticos. El Partido Comunista desempeñará el papel dirigente en el avance hacia el socialismo en alianza con otros partidos.

El Programa proclama el propósito de los comunistas de hacer cuanto esté de su parte para que España vaya al socialismo por esa vía parlamentaria y pacífica. Ciertamente, ello no depende sólo de la voluntad de la clase obrera; depende de que las fuerzas reaccionarias se vean imposibilitadas de recurrir a la violencia, de que un poderoso frente de las fuerzas progresivas sea capaz de aislar y maniatar a quienes intentasen utilizar la violencia contra la voluntad de la mayoría del país.

El VI Congreso abordó ampliamente los problemas de organización del Partido.

La inmensa atracción que el socialismo ejerce hoy permite, y a la vez reclama, que los partidos comunistas, en los países capitalistas, sean grandes partidos de masas, que agrupen en sus filas no sólo a una vanguardia reducida, sino a extensos sectores de la clase obrera, los campesinos, la intelectualidad, la juventud trabajadora y estudiantil y otras capas; partidos capaces de desplegar su actividad y su influencia sobre el conjunto de la sociedad.

El Partido Comunista de España, reducido a la clandestinidad por la dictadura fascista, ¿podía o no plantearse la tarea de convertirse en un Partido de masas? El VI Congreso respondió afirmativamente. Incluso en las condiciones de la clandestinidad, era necesario formar un partido de masas, de decenas de miles de militantes. Tal era el contenido del viraje que el VI Congreso consideraba necesario dar en el terreno de la organización.

Esta posición era producto del análisis de las condiciones políticas generales y del desarrollo interno del Partido.

La extrema descomposición de la dictadura de un lado, y de otro el movimiento de masas, creaban en España una situación original. La dictadura fascista era [283] considerablemente más débil que en años anteriores. Los comunistas habían adquirido más experiencia de trabajo clandestino, lo que les permitía desplegar mayor actividad entre las masas.

Desde el punto de vista del desarrollo interno del Partido, éste había logrado, sobre todo desde 1956, grandes éxitos en la lucha contra el sectarismo y el dogmatismo. Este era otro factor esencial que le permitía abordar con garantías de éxito la tarea de convertirse en un Partido de masas.

La necesidad de este viraje en la organización del Partido era planteada además por las propias masas, ya que, sobre todo después de la huelga de junio de 1959, los nuevos militantes habían afluído al Partido por decenas, por centenares, por grupos enteros. La tarea de organización esencial planteada por el VI Congreso, fue crear comités del Partido en todos los lugares, empresas, centros docentes, aldeas, barriadas, &c., comités que debían ser el alma y la osamenta del Partido. Y en torno a esos comités, decenas, cientos, miles de comunistas debían organizarse utilizando formas variadas.

El Congreso decidió introducir ciertas modificaciones en los Estatutos del Partido para facilitar su transformación en un Partido de decenas de miles de militantes.

El VI Congreso eligió el C.C. del Partido. Este, en su primera reunión plenaria, eligió los otros órganos dirigentes con la siguiente composición:

Comité Ejecutivo: Santiago Álvarez, Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Manuel Delicado, Ignacio Gallego, Juan Gómez, Dolores Ibárruri, Enrique Líster, Ramón Mendezona, Antonio Mije, José Moix, Simón Sánchez Montero, Federico Sánchez. Como miembros suplentes: Gregorio López Raimundo y Francisco Romero Marín.

Presidente del Partido: Dolores Ibárruri.

Secretario General: Santiago Carrillo.

Para el Secretariado fueron elegidos: Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Ignacio Gallego, Antonio Mije y Eduardo García.

El VI Congreso, por su composición misma, por sus debates, fue un testimonio vivo de la profunda renovación que el Partido había experimentado; demostró que éste había sabido vencer la inclinación sectaria –inevitablemente [284] acusada en un largo período de ilegalidad– a encerrarse en sí mismo, limitándose a organizar a los camaradas más firmes y probados. El Partido se había abierto a las nuevas generaciones; había promovido centenares de nuevos cuadros, había combinado armoniosamente, en sus órganos responsables, las fuerzas veteranas y las fuerzas jóvenes, fundidas en una idéntica entrega a la causa de la clase obrera y del pueblo.

La historia continúa...

En las páginas anteriores hemos resumido a grandes trazos la historia del Partido Comunista de España; sólo se trata de un cuadro inacabado, del largo y difícil camino de lucha recorrido por el Partido, junto con la clase obrera y el pueblo español, durante los últimos cuarenta años.

La historia del Partido es la historia de los afanes e ideales; de la acción abnegada y consciente de centenares de millares de españoles, de hombres y mujeres, de héroes famosos o anónimos.

Aprendiendo en las victorias y en los reveses, los trabajadores españoles han ido forjando su Partido, el Partido Comunista.

El Partido ha tenido que luchar en las más diversas situaciones: en la profunda clandestinidad y en la acción abierta al frente de impetuosos movimientos de masas, en la lucha armada y en la labor parlamentaria, desafiando las torturas policíacas y compartiendo las responsabilidades de la gobernación del país.

Condenado a la ilegalidad durante la dictadura de Primo de Rivera y falto todavía de madurez teórica y de experiencia política, el Partido Comunista se aisló de las masas y ofreció fácil blanco a los ataques del enemigo que le golpeó implacablemente y le impidió desempeñar el papel político que por su lucha heroica contra el régimen monárquico le correspondía.

El desarrollo del Partido Comunista demuestra que éste sólo puede crecer y fortalecerse mediante un esfuerzo permanente para rechazar cualquier intento de infiltración oportunista y vencer al sectarismo. Cuando en 1932, con la renovación de su núcleo dirigente, el Partido inició el «gran viraje», rompiendo con el sectarismo y el oportunismo y situándose clara y decididamente sobre posiciones marxistas justas, los resultados fueron realmente asombrosos. El Partido creció numéricamente y su influencia se extendió entre vastos sectores obreros y campesinos, entre empleados y artesanos, estudiantes e intelectuales y entre los mismos trabajadores socialistas y anarquistas, que empezaron a ver en él una seria fuerza revolucionaria.

Este viraje permitió al Partido influir poderosamente en la marcha de los acontecimientos. Su actuación fue el alma de la unidad obrera en la lucha armada de octubre de 1934 para frenar el avance del fas-

cismo, la fuerza impulsora fundamental del Frente Popular, triunfador en las elecciones de 1936 y artífice, más tarde, de la gloriosa gesta del pueblo en la guerra contra la agresión fascista.

Toda la historia del Partido Comunista es la historia de la lucha por la unidad de la clase obrera y de las masas populares. Gracias a sus esfuerzos y a su sentido de la responsabilidad revolucionaria, fue posible la fusión en el Partido Socialista Unificado de Cataluña de cuatro partidos obreros, sobre la base del marxismo-leninismo; la fusión de la Juventud Socialista y de la Juventud Comunista; la incorporación de la Confederación General del Trabajo Unitaria a la Unión General de Trabajadores; la constitución de un Comité de Enlace entre la UGT y la CNT; y, por primera vez en el movimiento comunista, la formación de Gobiernos de Frente Popular con la participación del PCE al lado del PSOE, de la CNT y de fuerzas burguesas, Gobiernos que llevaron a cabo, en el curso de la guerra, la revolución democrática, por la que tanto habían luchado las masas populares de nuestro país.

El Partido Comunista ha laborado a lo largo de toda su trayectoria por la alianza de los obreros y los campesinos, en los que ve una de las fuerzas fundamentales de la revolución española. Muchos partidos han prometido dar tierra [286] a los campesinos, pero sólo los comunistas han realizado una verdadera reforma agraria.

El Partido Comunista ha sido también un defensor consecuente de las libertades nacionales de los pueblos de España, lo que facilitó la participación de Cataluña y Euzkadi en la lucha común contra la sublevación militar fascista.

De sus cuarenta años de existencia, el Partido Comunista ha pasado más de treinta en la clandestinidad. Bajo la dictadura fascista ha sido el más perseguido, el que ha pagado un tributo más alto de sangre. Estos años erizados de dificultades y de peligros han puesto a prueba el acero del Partido. Gracias a los principios leninistas de organización, el Partido Comunista de España ha podido continuar la lucha en la más dura clandestinidad y seguir siendo el destacamento de vanguardia de la clase obrera y de las fuerzas progresivas.

Varias veces anunció el general Franco que había «acabado con el comunismo», confundiendo sus deseos con la realidad; pero otras tantas quedó demostrado que el Partido Comunista es indestructible.

Su existencia es una necesidad histórica, como lo es la de la clase obrera, espina dorsal de la sociedad contemporánea.

La raíz de la fuerza del Partido está en el marxismo-leninismo, la teoría científica que le permite comprender las necesidades del desarrollo histórico de nuestro país e imprimir una certera dirección a la lucha de las masas obreras y populares.

La fidelidad al marxismo-leninismo ha sido una constante de nuestro Partido, esa fidelidad no significa repetición de fórmulas hechas, sino aplicación creadora de sus principios a las realidades de España. En la lucha contra todo género de desviaciones se ha forjado la unidad indestructible del Partido.

Desde que en 1920 nació el Partido, el mundo se ha transformado y la vida misma ha demostrado la verdad universal del marxismo-leninismo. Los progresos realizados por la Unión Soviética y los demás países socialistas han ayudado a millones de gentes a comprender mejor la razón de los ideales por los que lucha el Partido Comunista de España. La defensa de la Unión Soviética y del sistema socialista en su conjunto es un deber y una necesidad para la clase obrera y las fuerzas [287] progresivas españolas, cuyo porvenir está vinculado a la consolidación del socialismo en el mundo.

El internacionalismo proletario realza el patriotismo de los comunistas. Mientras las clases oligárquicas, carentes de apoyo en el pueblo, abren la puerta del país a la colonización extranjera, la clase obrera se destaca cada vez más como el abanderado de la lucha por la independencia y la soberanía nacionales. Como representación genuina de la clase obrera, el Partido Comunista es un partido profundamente nacional.

En la lucha contra la dictadura franquista, el pueblo ha tenido ocasión de comprobar a todos los partidos que actuaban en España y de sacar las conclusiones pertinentes. El apoyo creciente que presta al Partido Comunista, la simpatía y respaldo que éste halla entre los sectores más diversos y amplios de la población de nuestro país dicen con elocuencia de qué lado se inclina la voluntad popular.

El Partido Comunista de España se ha esforzado siempre por unir en una aspiración patriótica y transformadora a las fuerzas progresivas de la sociedad española, a fin de impulsar y desarrollar en beneficio de

todo el pueblo la industria, la agricultura y las grandes riquezas de nuestro país; a fin también de fomentar la cultura, la ciencia y el arte, renovando las mejores tradiciones humanísticas españolas. En esta obra que entrañará el impetuoso renacer de la patria sobre la base de una política de paz y de convivencia, el Partido Comunista está dispuesto a marchar junto a todas las fuerzas políticas interesadas en asegurar a España un desarrollo pacífico y progresista que coloque a nuestro país no a remolque ni en dependencia de nadie, sino al nivel de los países más avanzados.

La historia continúa. El Partido Comunista, apoyándose en las masas, fundido con ellas, marcha bajo las banderas del marxismo-leninismo hacia el futuro. Su victoria será la victoria del pueblo, la victoria de España, la victoria de la democracia, de la paz y del socialismo.

